

de mo cra cia

El malestar en Costa Rica:
¿alertas desde la cultura
democrática?

El malestar en Costa Rica:
¿alertas desde la cultura
democrática?

321.8 Sandoval Cordero, Mauricio, comp.
M-246m El malestar en Costa Rica : ¿alertas desde la cultura democrática? / Mauricio Sandoval Cordero, Cathalina García Santamaría y Mariela Castro Ávila, compiladores. -- San José, Costa Rica : Tribunal Supremo de Elecciones. Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2025.
220 páginas

ISBN 978-9930-521-84-7

1. Democracia. 2. Debilitamiento de la democracia. 3. Cultura política. 4. Participación política. 5. Políticas públicas. 6. Educación cívica. I. García Santamaría, Cathalina, comp. II. Castro Ávila, Mariela, comp. III. Título.

CDOC-IFED

DOI 10.35242/TSE_2024_3

Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED)

Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica

Apartado: 2163-1000, San José | Web: <https://www.tse.go.cr/>

Primera edición, 2025

Consejo Editorial

Hugo Picado León (director)

Ileana Aguilar Olivares (editora)

Mariela Castro Ávila

Rocío Montero Solano

Compilación

Mauricio Sandoval Cordero

Cathalina García Santamaría

Mariela Castro Ávila

Corrección de texto

Johanna Barrientos Fallas

Diseño y diagramación

Diana Castro Brenes

Esta publicación es producto del proyecto sobre cultura política costarricense, desarrollado conjuntamente por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Costa Rica.



El malestar en Costa Rica: ¿alertas desde la cultura democrática? de los compiladores Mauricio Sandoval Cordero, Cathalina García Santamaría y Mariela Castro Ávila se encuentra bajo una licencia [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Para consultas ifed@tse.go.cr

Tabla de contenidos

PRESENTACIÓN	1
---------------------	---

PRÓLOGO	3
----------------	---

SECCIÓN 1. FUENTES DEL MALESTAR Y SATISFACCIÓN DEMOCRÁTICA

Capítulo I. Evaluación retrospectiva de la economía y su relación con la satisfacción con la democracia en Costa Rica

<i>Ronald Alfaro Redondo</i>	9
------------------------------	---

Capítulo II. El malestar racional: calidad de las políticas públicas y satisfacción con la democracia

<i>Adrián Pignataro López</i>	23
-------------------------------	----

Capítulo III. Los malestares en la cultura política desde la perspectiva de la comunicación

<i>Larissa Tristán Jiménez, Carlos Brenes Peralta y Carolina Carazo Barrantes</i>	41
---	----

SECCIÓN 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL

Capítulo I. Formas de participación política

<i>Marco Vinicio Fournier Facio</i>	58
-------------------------------------	----

Capítulo II. ¿Qué significa la participación política para los y las costarricenses? Acercamiento a las fracturas y posibilidades de participación

<i>Sharon Camacho Sánchez</i>	74
-------------------------------	----

Capítulo III. La participación política contenciosa en la democracia costarricense	
<i>Elías Chavarría Mora</i>	90

Capítulo IV. Violencia y participación electoral	
<i>Suráyabi Ramírez Varas y Alejandro Abarca Garro</i>	108

Capítulo V. Cinco elecciones municipales: ¿construimos una cultura política democrática orientada a lo local?	
<i>Eugenia Aguirre Raftacco, Mario Cortés Vásquez y Carolina Ovares Sánchez</i>	126

SECCIÓN 3. CULTURA POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Capítulo I. Conectadas y apáticas: las nuevas generaciones y su cultura política en Costa Rica	
<i>Cathalina García Santamaría e Ilka Treminio Sánchez</i>	153

Capítulo II. La educación y el desarrollo de la cultura política costarricense	
<i>María Amalia Amador Fournier y Ana Catalina Benavides Fonseca</i>	182

Capítulo III. La relación entre educación y participación política en Costa Rica	
<i>Juan Manuel Muñoz Portillo</i>	195

SOBRE LAS AUTORÍAS	222
---------------------------	------------

Presentación

En los últimos años, diversos estudios comparados de opinión pública, a nivel internacional, han evidenciado una tendencia a la baja en relación con el apoyo y satisfacción con la democracia en la región latinoamericana. Datos de Latinobarómetro (LB), por ejemplo, indicaban que en 2010 el apoyo a la democracia se situaba en 63%, cifra que bajó a 49% en 2020 y se ubicó en 48% en el último informe del año 2023.

De manera similar, la más reciente encuesta de LAPOP muestra que el apoyo público a la democracia y las actitudes que conducen a una democracia estable en América Latina y el Caribe son hoy menores que hace dos décadas. De acuerdo con su último informe publicado en 2023, menos de la mitad de las personas están satisfechas con la democracia en 18 de los 23 países estudiados (Lupu *et al.*, 2023, p. 28).

El apoyo a la democracia ha disminuido en la mayoría de los países a lo largo de la serie temporal del Barómetro de las Américas. Las actitudes consistentes con una democracia estable disminuyeron alrededor del año 2014, justo antes de una caída significativa en el apoyo a la democracia. Al mismo tiempo, se registró un aumento en actitudes que ponen en riesgo la democracia. (Lupu *et al.*, 2023, p. 23)

Costa Rica, una de las democracias más longevas de América Latina, no está exenta de estas tendencias de deterioro en sus indicadores de apoyo y satisfacción con la democracia. En efecto, de acuerdo con Latinobarómetro, el país presenta en los últimos años una pérdida importante en sus niveles de apoyo a la democracia al pasar de 67% en 2020 a un 56% en 2023. No obstante estos datos, un 72% opina que la democracia, aun con sus problemas, es la mejor forma de gobierno, comportamiento indicativo de que lo que existe es una insatisfacción con los resultados del ejercicio democrático. En efecto, los niveles de satisfacción con la democracia distan mucho de las cifras referidas a su apoyo: los datos de LB indican un 43% de satisfacción en la medición de 2023.

Estos resultados nos hablan de una crisis de confianza en el sistema, así como de la expectativa ciudadana de contar con una democracia eficiente que asegure igualdad ante la ley, una justa distribución de la riqueza y que brinde garantías sociales a la población. De acuerdo con el último informe de LAPOP, que también identifica un deterioro en los niveles de satisfacción con la democracia:

... la satisfacción de los ciudadanos con la forma en que la democracia funciona cayó hace una década y todavía no se ha recuperado. En conjunto, estos resultados hablan de una lenta crisis de la confianza en la democracia. Para resolver esta crisis, junto con el apoyo a los países para que sigan un camino conducente a un bienestar económico, las autoridades deben fortalecer las instituciones democráticas en las que sus líderes actúen con integridad y, a su vez, se ganen la confianza del público. (Lupu *et al.*, 2023, p. 24)

Con el objetivo de comprender los factores de la cultura política costarricense que inciden en ese comportamiento decreciente de apoyo y satisfacción con la democracia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones decidimos indagar, desde los espacios educativos y de socialización política, cómo vive la ciudadanía los valores y principios democráticos, la participación política, el ejercicio de sus derechos y el conocimiento de la institucionalidad pública. Para ello se diseñó un proyecto de investigación que se ejecutó durante 2023, y cuyos resultados se presentan en esta publicación.

Esta obra identifica, a partir de los hallazgos de la investigación, las opiniones, creencias y valores que tienen las personas costarricenses sobre el funcionamiento de la democracia. Revisa sus actitudes y valoraciones respecto de elementos del sistema político, el ejercicio del poder, las formas de representación y el desempeño institucional. Los artículos desarrollados abordan, así, las diferentes perspectivas de análisis que nos brindan indicios para comprender las demandas de la ciudadanía y su impacto en la valoración democrática.

Agradecemos al equipo de trabajo que hizo posible la investigación y la publicación de sus resultados, así como a los autores y autoras que aportaron sus análisis en los diferentes artículos. Aspiramos a que su lectura brinde luces para entender y atender los retos democráticos que enfrenta Costa Rica en la actualidad.

Hugo Picado León
Director general
IFED

Karla Salazar Sánchez
Directora
FLACSO Costa Rica

Prólogo

Hugo Picado León
Ilka Treminio Sánchez

Escribir un libro académico acerca de la actualidad constituye un riesgo. El período que transcurre entre el momento en que se redacta el texto y el de su lectura es prolongado, pero mientras tanto la vida política no se detiene.

(Adam Przeworski, “La crisis de la democracia”, 2022)

Si bien los desafíos a las democracias tienden a ser más globales, cada contexto tiene sus particularidades. Entre los factores contextuales de una sociedad es menester prestar atención a la cultura política. La cultura política es dinámica, pero sus transformaciones son lentas: a diferencia de la característica volatilidad de las actitudes políticas, la cultura política es un fenómeno que varía con pesadez y parsimonia. La institucionalidad democrática costarricense ha mostrado una resiliencia inusual desde hace tres cuartos de siglo sobre la base de una cultura política que le sostiene.

En la última década, hemos sido testigos de un notorio estancamiento global de la democracia y procesos de reversión hacia el autoritarismo. Frente a este deterioro, surge la urgente tarea de examinar periódicamente los vínculos entre la sociedad y sus instituciones a través de las diferentes dimensiones que conforman la cultura política. Esto nos permite observar las transformaciones y ofrecer refuerzos para mantener la vitalidad del régimen democrático en tiempos de crisis y degradación política.

La presente obra consta de un conjunto de textos que exploran rasgos de la cultura política de la sociedad costarricense en la actualidad y de la desafección manifestada desde diferentes sectores de la población hacia la democracia. Los análisis se basan en los datos recopilados tanto por medio de encuesta como por grupos focales con diversos públicos en todo el territorio nacional, en el marco del proyecto de opinión pública denominado Fuentes del Malestar, desarrollado durante el año 2023 por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones (IFED-TSE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Costa Rica.

El objetivo es ofrecer una mirada académica sobre las actitudes, los valores y las percepciones ciudadanas acerca de la democracia para contribuir, así, a detectar las causas más profundas del descontento ciudadano, seguir el pulso a la valoración de la ciudadanía respecto de vivir en democracia e identificar tendencias útiles para la toma de decisiones.

La apatía, la insatisfacción y la violencia política son indicadores del malestar con la democracia, que surgen en gran parte cuando esta se reduce a ser un fin en sí misma, en lugar de un medio para ampliar las oportunidades para toda la ciudadanía. Cuando la democracia deja de proporcionar bienes y servicios que mejoren el bienestar, se arriesga a perder su legitimidad ciudadana. En las investigaciones que se presentan en este libro, se destaca el importante papel que juega la educación en la formación de una cultura cívica.

A pesar de la resiliencia de la legitimidad democrática en Costa Rica, se observan desgastes que amenazan su sostenibilidad, por ello se requieren respuestas institucionales que procuren el bienestar de la sociedad con equidad, justicia y prontitud, que son fundamentales para cualquier democracia.

Los estudios incluidos en este volumen se distinguen por sus hallazgos sugerentes y la rigurosidad metodológica en el análisis de los datos. Con la participación de autores de diversas disciplinas, como ciencia política, sociología, estadística, economía y comunicación, se ofrece un análisis sobre las raíces del malestar ciudadano y la cultura política costarricense contemporánea.

El libro consta de once capítulos que han sido organizados en tres secciones. La primera aborda las fuentes del malestar en la cultura política costarricense y la satisfacción democrática. En ella se encuentran tres textos, el primero, escrito por Ronal Alfaro y titulado “Evaluación retrospectiva de la economía y su relación con la satisfacción con la democracia en Costa Rica”, analiza los factores que influyen en que la población tenga una alta valoración del desempeño de la democracia, pero una menor satisfacción con su funcionamiento en la práctica.

El segundo artículo, “El malestar racional: calidad de las políticas públicas y satisfacción con la democracia”, escrito por Adrián Pignataro, investiga cómo se relaciona la valoración de las políticas públicas con los niveles de satisfacción con la democracia. En el texto, el autor expone que el malestar ciudadano hacia la democracia se orienta a sus resultados y no a sus procedimientos.

El tercer texto es escrito por Larissa Tristán, Carlos Brenes y Carolina Carazo. Se titula “Los malestares en la cultura política desde la perspectiva de la comunicación”, y en este sus autores examinan la relación entre el ecosistema de medios de comunicación, incluidas las redes sociales, y la cultura política costarricense contemporánea. Parten de la premisa de que la democracia debe estar asentada sobre fuertes cimientos de comunicación e información para el desarrollo de una ciudadanía informada y crítica. No obstante, señalan que hay brechas y desigualdades digitales que limitan el acceso, además de una marcada desconfianza de la ciudadanía hacia los medios de comunicación tradicionales, lo que desvía la acción de informarse hacia perfiles de creadores de contenido particulares que pueden no cumplir con criterios mínimos de rigurosidad periodística.

La segunda sección incluye cinco textos sobre participación política. “Formas de participación política”, elaborado por Marco Fournier, analiza la baja disposición de la ciudadanía costarricense a participar en determinados contextos. El estudio encuentra una asociación significativa de este fenómeno con las personas que están desempleadas o que realizan trabajo no remunerado, así como con quienes peor califican la calidad de los servicios públicos y las personas que más baja valoración otorgan a la situación económica del país. Estos hallazgos sugieren que la baja disposición a participar se concentra en mayor medida entre quienes más directamente sufren las consecuencias de la desigualdad.

El artículo “¿Qué significa la participación política para los y las costarricenses? Acercamiento a las fracturas y posibilidades de participación”, de Sharon Camacho, presenta un resumen de las discusiones sobre participación política recogidas en los grupos focales “malestares sociales y democracia”, analiza las narrativas vinculadas a la participación política en Costa Rica y las asocia con las principales conclusiones sobre el descontento político, los vínculos y el distanciamiento con la política.

El siguiente texto es “La participación política contenciosa en la democracia costarricense”, elaborado por Elías Chavarría. El autor estudia los determinantes de la participación política en actividades como manifestaciones y bloqueos en 2023. Al respecto, señala que el nivel educativo y la confianza en la efectividad de la manifestación y el bloqueo de calles incrementan la disposición de las personas a la participación contenciosa en el caso analizado.

Los autores Suráyabi Ramírez y Alejandro Abarca escriben “Violencia y participación electoral”, artículo que consiste en una aproximación a la relación entre la violencia y la participación política. Sugieren que un aumento en los crímenes violentos en un cantón específico puede correlacionarse con una reducción en la probabilidad de votar de sus habitantes. Si bien la correlación no implica causalidad, el artículo plantea que las políticas de seguridad tienen un impacto significativo en los procesos democráticos y la participación ciudadana en la elección de gobiernos nacionales. Sus hallazgos subrayan la importancia de abordar la violencia criminal como un componente de la salud democrática de una nación y enfatizan la necesidad de políticas que aborden tanto la seguridad ciudadana como la participación política para promover sociedades más seguras y democráticas.

La sección concluye con el texto “Cinco elecciones municipales: ¿construimos una cultura política democrática orientada a lo local?” elaborado por Eugenia Aguirre, Mario Cortés y Carolina Ovares. El texto se pregunta si tras dos décadas de realizar elecciones municipales realmente avanzamos en la construcción de una cultura política orientada a lo local. Para responder esa interrogante, los autores realizan un recorrido histórico sobre el estado de la descentralización en el país y las reformas electorales al régimen municipal. A través del análisis de los datos exploran cómo los gobiernos locales se mantienen con niveles bajos de recursos respecto al resto de la Administración pública, pese al aumento paulatino de funciones y responsabilidades administrativas. Esto genera una brecha en el cumplimiento de la promesa democrática por las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos locales para asegurar la entrega de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. Este fenómeno tiene posibles afectaciones en la consolidación de una cultura política democrática local que se traduzca en más apoyo al sistema municipal y la integración de los procesos políticos.

La tercera sección reúne tres capítulos sobre cultura política y educación. En el primero, titulado “Conectadas y apáticas: las nuevas generaciones y su cultura política en Costa Rica”, las autoras Cathalina García e Ilka Treminio estudian la cultura política de las generaciones jóvenes con especial atención en las *centennials* y *millennials*, las cuales muestran menores niveles de compromiso con la democracia y se abstienen, en mayor proporción, de votar en las elecciones. El artículo también examina la transición hacia la digitalización en la que se evidenció una gran heterogeneidad dentro del segmento joven, determinada por la geografía y, principalmente, la educación que sobresale como el factor más explicativo de la cultura cívica. En prácticamente la totalidad de los modelos estadísticos construidos, la baja educación es la variable que determina la pérdida de las actitudes que constituyen la cultura política democrática.

En “La educación y el desarrollo de la cultura política costarricense”, Amalia Amador y Catalina Benavides exploran la relación entre la educación y el desarrollo de la cultura política, a través de los grupos focales “malestares sociales y democracia”. En su estudio exponen que en las nuevas generaciones se identifican actitudes como la apatía, la falta de sentido de comunidad y pertenencia y una desconexión entre la vida cotidiana y los intereses colectivos.

Por último, Juan Manuel Muñoz escribe “La relación entre educación y participación política en Costa Rica”. El autor analiza la relación entre educación, medida como niveles educativos completados, y la participación política, usando los datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023 de IFED y FLACSO. Concluye que más escolaridad se asocia con participación en política tanto electoral como otras manifestaciones, lo cual podría deberse a los efectos directos e indirectos de la educación. La investigación reflexiona sobre la importancia de la educación para la calidad de la democracia y cómo ambos aspectos se relacionan con el desarrollo humano.

El IFED y FLACSO pretenden que este libro constituya un aporte a la reflexión sobre la condición actual del sistema político costarricense a partir del análisis de la cultura política y las causas del malestar expresado por diversos sectores de la población. Una cultura política que interactúa con elementos económicos y tecnológicos, que reacciona frente a las políticas públicas y sus resultados, que permea las actitudes y la participación política y que requiere una base educativa amplia para combatir las asimetrías, la apatía y la violencia. Podemos suponer que muchas de las tendencias descritas en estos artículos son comunes a las que enfrentan las demás democracias del planeta.

SECCIÓN 1.

FUENTES DEL MALESTAR Y SATISFACCIÓN DEMOCRÁTICA

Capítulo I. **Evaluación retrospectiva de la economía y su relación con la satisfacción con la democracia en Costa Rica**

Ronald Alfaro Redondo

Introducción

Un amplio respaldo popular es una condición indispensable para la sobrevivencia de la democracia. Como ha sido planteado por la literatura especializada, la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones políticas no pueden ocurrir si la democracia carece de legitimidad popular o si es percibida como peor que otras alternativas antidemocráticas (Linz y Stepan, 1996; Rose *et al.*, 1998 y Diamond, 1999). En la versión clásica de los estudios del apoyo a la democracia se consideran dos dimensiones claves: la legitimidad del régimen y el respaldo derivado de su desempeño o funcionamiento.

El apoyo popular a la democracia asociado con su desempeño se refiere a la forma en que la ciudadanía evalúa el funcionamiento de sus instituciones políticas. Es ampliamente conocido que un buen desempeño aumenta la legitimidad del régimen político, mientras que un mal funcionamiento provoca que las personas expresen sus niveles de insatisfacción (Linde y Ekman, 2003). En la práctica, el respaldo de la ciudadanía a la democracia es determinado por la efectividad de sus instituciones para brindar bienes y servicios a la población.

En virtud de la relevancia de la creencia de la ciudadanía en sus instituciones políticas, este capítulo profundiza en la evaluación de la población costarricense acerca del desempeño de la democracia. Los resultados más relevantes confirman una amplia y sólida creencia de las personas entrevistadas en la institucionalidad democrática. No obstante, cuando se aborda la satisfacción de estas personas con su funcionamiento en la práctica, el respaldo se reduce a niveles intermedios.

El presente capítulo se divide en cinco secciones además de esta introducción. En el primer apartado se aportan las bases teóricas de los estudios sobre satisfacción con la democracia. La segunda sección contempla indicadores relacionados con la evaluación ciudadana sobre la capacidad de la democracia en lo que respecta a la prestación de servicios. La tercera profundiza en la identificación de los determinantes de la satisfacción con la democracia. La cuarta aporta los resultados de los modelos explicativos y la quinta sección resume las principales conclusiones del capítulo.

1. Literatura existente sobre este tema

En la literatura especializada existe un amplio consenso respecto de la idea de que una democracia estable requiere una ciudadanía que crea en sus principios y valores. De igual manera, se cree que para que una nueva democracia se considere consolidada necesita, al menos, que una mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas compartan tal creencia (Linde y Ekman, 2003).

Los teóricos sobre esta materia han planteado que la consolidación de las democracias no puede ocurrir si el régimen democrático carece de apoyo popular, conocido como legitimidad, o si la democracia es vista como más imperfecta que sus alternativas (Linz y Stepan, 1996 y Diamond, 1999). Juan Linz y Alfred Stepan (1996) denominan este fenómeno como la consolidación "actitudinal" de la democracia, es decir, el apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía. De este modo, la democracia puede disfrutar una fuerte legitimidad cuando solo una pequeña minoría respalda alternativas no democráticas y la mayoría de las personas cree que la democracia es mejor que otras formas de gobierno.

Asimismo, los investigadores en esta materia continúan debatiendo sobre la naturaleza del concepto mismo de satisfacción con la democracia. Las tendencias, niveles y dinámicas de la satisfacción con la democracia aún provocan controversia, y se ha advertido de la posibilidad de que las conclusiones derivadas de sus análisis sean erróneas (Valgarðsson y Devine, 2022). Por ejemplo, Canache, Mondak y Seligson (2001) plantean que el ítem de satisfacción con la democracia mide múltiples dimensiones de apoyo político y que varía tanto entre individuos como entre naciones, un factor que

limita la capacidad de los analistas para derivar inferencias significativas del estudio de este ítem.

También se han advertido desafíos metodológicos en estos análisis. A pesar de un vasto uso académico y público, aún persiste una considerable ambigüedad sobre la validez de las medidas de apoyo político y legitimidad, incluida la satisfacción con la democracia y su consistencia entre encuestas. Una cantidad de trabajos empíricos y contribuciones se basa en medidas de satisfacción con la democracia, ya sea como variables explicativas o de resultado. Un análisis reciente muestra que si bien las tendencias y las diferencias entre países en materia de satisfacción con la democracia son en gran medida similares, los niveles varían sustancialmente entre encuestas y estudios de opinión, y tanto las tendencias como los niveles varían significativamente en varios países estudiados (Valgarðsson y Devine, 2022).

Más allá de plantear el debate teórico y los desafíos metodológicos en esta materia, es importante discutir de antemano: ¿Qué nos aportan los ítems de satisfacción con la democracia y qué no nos dicen esos ítems sobre las actitudes cívicas hacia la democracia? Las respuestas a tales preguntas permiten, principalmente, comprender cómo la ciudadanía percibe su sistema político. En otras palabras, las investigaciones sobre este tema ofrecen una base para inferir apoyo a valores democráticos: las personas pueden ser firmes creyentes en la democracia liberal y, sin embargo, sentirse insatisfechas con el desempeño de dichas instituciones en la práctica o, por el contrario, estar satisfechas con las instituciones bajo las cuales se rigen, aunque tales instituciones se queden cortas en estándares democráticos ampliamente aceptados (Foa *et al.*, 2020). En síntesis, el concepto de satisfacción con la democracia nos da una idea de si el sistema responde a los ojos de sus ciudadanos (Morlino, 2011).

Dicho esto, resulta de gran valor saber cómo, por qué y bajo qué circunstancias la ciudadanía mantiene o, en su defecto, está perdiendo la fe en la capacidad de la democracia para cumplir con sus expectativas. Este tema es importante, pues estudios previos evidencian que las personas que están insatisfechas con la democracia son más proclives a apoyar a partidos políticos populistas que tienden a transgredir las normas democráticas liberales (Pew Research Center, 2018).

En otras latitudes se ha planteado que si bien el apoyo a los valores democráticos sigue siendo alto y estable, la insatisfacción política se está extendiendo (Weßels, 2015). Esto quiere decir que los desafíos más apremiantes que enfrentan las democracias hoy en día están relacionados con su desempeño. En estas circunstancias, factores como recesiones económicas, la reacción ante medidas impopulares de austeridad fiscal y reformas tributarias pueden

afectar o modificar la percepción de la ciudadanía. Este documento indaga en qué medida es posible generalizar estos hallazgos previos en Costa Rica.

Autores como Clarke *et al.* (1993) plantean que el crecimiento económico tiene un efecto positivo en la satisfacción con la democracia, porque los ciudadanos se benefician de la mejora de la economía y la prosperidad. De este modo, resultados desfavorables en el plano económico tienen el potencial de disminuir la satisfacción de las personas con sus vidas y afectar negativamente sus evaluaciones de las autoridades políticas en el poder, lo que disminuye la satisfacción de la población.

Respecto de las explicaciones sobre las tendencias en la satisfacción con la democracia, las personas expertas a menudo se han referido a las teorías del apoyo político desde la perspectiva de la oferta, la cual considera que los ciudadanos son capaces de expresar evaluaciones positivas o negativas, dependiendo de si el sistema logra ciertos resultados políticos deseados. Por lo tanto, la ciudadanía debe expresar un juicio basado en sus preferencias, lo que a su vez plantea la cuestión de qué piensa realmente la gente cuando evalúa cómo funciona el régimen político y sus instituciones en cada país. Se argumenta que los ciudadanos se vuelven más críticos hacia el sistema político a medida que la economía se deteriora. De hecho, el concepto de democracia va de la mano de mejores niveles de vida y riqueza (Thomassen, 1995).

En el estudio de esta dimensión del apoyo político, una idea central que se ha arraigado es que la satisfacción de los ciudadanos con la forma en que funcionan las democracias se ve fuertemente afectada por su percepción de la favorabilidad de los resultados económicos (Magalhães, 2016). Este hallazgo se ha replicado en muchos estudios basados en encuestas hasta el día de hoy, resistiendo múltiples controles estadísticos y pruebas en muchas regiones diferentes del mundo (Armingeon y Guthmann, 2014; Bratton, Mattes y Gyimah-Boadi, 2005; Chu *et al.*, 2008; Gunther, Montero y Torcal, 2007 y Lagos, 2003).

Distintos estudios revelan que las evaluaciones de los encuestados sobre la economía y la democracia están fuertemente relacionadas con los niveles de satisfacción. Esto demuestra que el efecto de los desempeños democráticos y económicos objetivos sobre la satisfacción está mediado por las evaluaciones que la gente hace de ellos (Christmann, 2018).

Una buena percepción del sistema político también se ve afectada por las dificultades de las autoridades de gobierno al afrontar escollos y desafíos económicos. En momentos en que los gobiernos se enfrentan a restricciones económicas tales como déficits presupuestarios o una deuda pública creciente, pierden su capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía en la medida en que también necesitan responder a sus acreedores locales e internacionales (Armingeon y Baccaro, 2012 y Schäfer y Streeck, 2013). Como señala Waldron-Moore (1999, p. 38):

generalmente se acepta que las evaluaciones económicas afectan las percepciones políticas. Los defensores del comportamiento racional argumentan que los individuos evalúan sus circunstancias pasadas, actuales y futuras y calculan qué sirve a sus mejores intereses... Los individuos pueden preferir y apoyar la democracia porque satisface sus mejores intereses.

Además, una amplia variedad de estudios empíricos sostiene que la satisfacción con la democracia fluctúa según indicadores, como la inflación, el desempleo, la deuda pública y el crecimiento de la economía. En este sentido, no todas las condiciones económicas pueden tener el mismo efecto sobre la satisfacción con la democracia, tanto en signo como en magnitud (Quaranta y Martini, 2016). Por ejemplo, se considera que una crisis económica afecta el comportamiento de los votantes y castiga a los *incumbents*¹ en las elecciones (Lewis-Beck y Stegmaier, 2000). Luego, en tiempos difíciles, las protestas y el extremismo pueden aumentar y, en consecuencia, amenazar la consolidación y supervivencia del régimen o favorecer el cambio de régimen (Przeworski *et al.*, 2000). De hecho, la demanda de cambio político puede aumentar durante períodos de dificultades económicas e insatisfacción ciudadana (Morlino y Tarchi, 1996).

Como se discutirá más adelante, en este trabajo el desempeño económico tiene un papel explicativo importante y esto es relevante incluso cuando se controlan varias características del contexto político, así como atributos sociodemográficos. De forma similar a otros contextos, el impacto del desempeño económico, evaluado de manera retrospectiva, es mayor que el de otros predictores institucionales sociopolíticos.

2. Metodología

El capítulo combina herramientas descriptivas y modelos econométricos para el análisis de los factores asociados con la satisfacción de la democracia. Las técnicas descriptivas permiten mostrar las frecuencias de las principales variables estudiadas. También se reportan valores absolutos y valores relativos (promedios) de los indicadores. El análisis descriptivo se complementa con análisis inferencial mediante dos modelos de regresión lineal que permiten discriminar los efectos de variables sociodemográficas con variables políticas.

La variable dependiente en los modelos es un *índice de satisfacción con la democracia* que varía entre 0 y 100 puntos, en el que los valores mayores indican mayor satisfacción. Se utilizan dos modelos. El primero es un análisis con factores sociodemográficos, los cuales contemplan aspectos como el género, la edad, el nivel educativo, la satisfacción con la vida, el ingreso

¹ El término *incumbents* se refiere a las personas que, al momento de una elección, aspiran a mantenerse en el cargo de elección popular al que fueron electos en comicios previos.

económico y la religión de las personas. Este modelo indaga en qué medida este conjunto (limitado) de características individuales y factores personales influye en la satisfacción con el sistema político.

El segundo modelo utilizado incluye, además de los factores sociodemográficos, una serie de elementos de naturaleza política y desempeño de la economía, entre los que se encuentran: si las personas han colaborado en la solución de problemas comunales, el grado de interés en la política y si las personas votan. El supuesto detrás de este segundo modelo es que un modelo que combina explicaciones sociodemográficas, políticas y de naturaleza económica aporta mejores explicaciones que uno que no contemple todos estos factores de manera simultánea.

Para comprender mejor los resultados de estos modelos se aportan gráficos en los que se muestran los efectos de la percepción de la situación de la economía personal y nacional. Estos gráficos presentan el grado de satisfacción con la democracia en diferentes niveles de evaluación de la economía. Como se verá en el tercer apartado, el principal hallazgo de estos ejercicios plantea que una mejor opinión de la economía influye positivamente en la evaluación del desempeño de la democracia.

3. Satisfacción con la democracia se ubica en valores intermedios

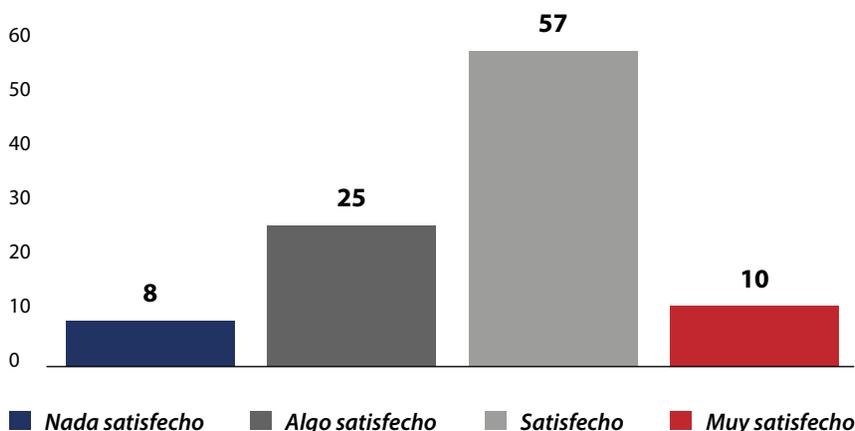
Un primer factor importante para estudiar son los niveles de satisfacción de la población con la democracia. Una interrogante que surge es ¿cuáles son los niveles de satisfacción de sus pobladores con la democracia? Los datos disponibles indican niveles intermedios de satisfacción con la democracia² de las y los costarricenses.

En 2023, el porcentaje de costarricenses satisfechos con la democracia fue del 56% (figura 1), correspondiente a quienes indican estar satisfechos o muy satisfechos. Estos porcentajes son similares a los reportados por otros estudios recientes sobre esta materia (Lupu *et al.*, 2023). Al reagrupar las respuestas en dos categorías (satisfacción versus insatisfacción), dos de cada tres personas reportan estar satisfechas o muy satisfechas (67%) y el 33% restante se declara algo o nada satisfecho.

² La variable satisfacción con la democracia (dem4) se recodificó de la siguiente manera: 0 para las personas que señalan estar muy insatisfechas con la democracia y 100 para quienes indican estar muy satisfechas con la democracia. Los puntajes intermedios se refieren a opiniones como algo satisfechos o satisfechos.

Figura 1

Satisfacción de las personas con la democracia en Costa Rica, 2023



Nota. Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

Desde el punto de vista de las características demográficas de la población y los niveles de satisfacción con la democracia, existen diferencias. Para analizar estas diferencias se divide a la población en cuatro grupos usando dos variables claves en el estudio: la importancia atribuida de vivir en democracia y la satisfacción con el régimen.

Tabla 1

Categorías de análisis de satisfacción e importancia atribuida a la democracia

Nivel de satisfacción con la democracia	Importancia de vivir en democracia	
	Bajo	Alto
Muy satisfecho	Satisfechos pero desinteresados	Demócratas convencidos
Nada satisfecho	Apáticos y descontentos	Insatisfechos interesados

Nota. Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

Un sector importante de las personas entrevistadas registra valores intermedios en ambas dimensiones, es decir, se trata de una ciudadanía medianamente satisfecha y que atribuye mediana importancia al hecho de vivir en democracia. Por ejemplo, quienes residen en Heredia y Guanacaste y los hombres se encuentran en esta dimensión. También se ubican en esta

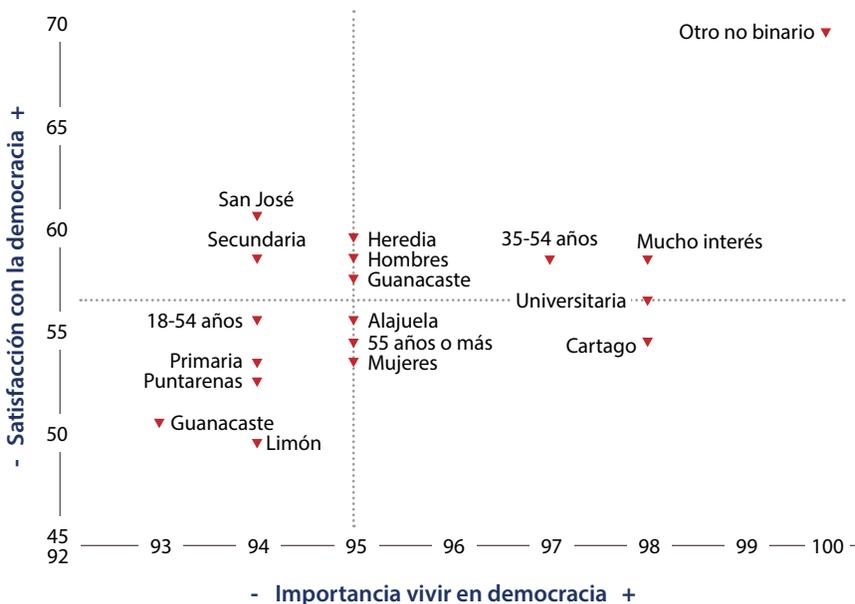
condición los que residen en Alajuela, las personas de 55 años o más y las mujeres, aunque estos tres grupos reportan menores niveles de satisfacción que los mencionados anteriormente.

Por otro lado, en el cuadrante denominado como *demócratas convencidos*, quienes indican alta satisfacción y le atribuyen mayor importancia a vivir en democracia, se ubican personas de 35 a 54 años, personas con educación universitaria y los que mencionan tener mucho interés en la política.

Por su parte, las personas clasificadas como *satisfechas pero desinteresadas* son las que residen, principalmente, en la provincia de San José y las que poseen educación secundaria. A su vez, el cuadrante más poblado es el denominado *apáticos y desinteresados* en el que aparecen personas jóvenes (18-34 años), con educación primaria, quienes residen en Limón y Puntarenas y quienes indican tener ningún interés en la política. Este último grupo constituye uno de los principales desafíos de la democracia costarricense, fundamentalmente, porque en un escenario de descrédito de la política, reducción de la participación electoral, debilitamiento de los partidos políticos y erosión de la legitimidad institucional, podríamos estar en presencia de importantes segmentos de la población que se “retiran” de la política.

Figura 2

Importancia de vivir en democracia y satisfacción con el régimen según características demográficas



Nota. Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

4. Modelos explicativos para entender la satisfacción con la democracia

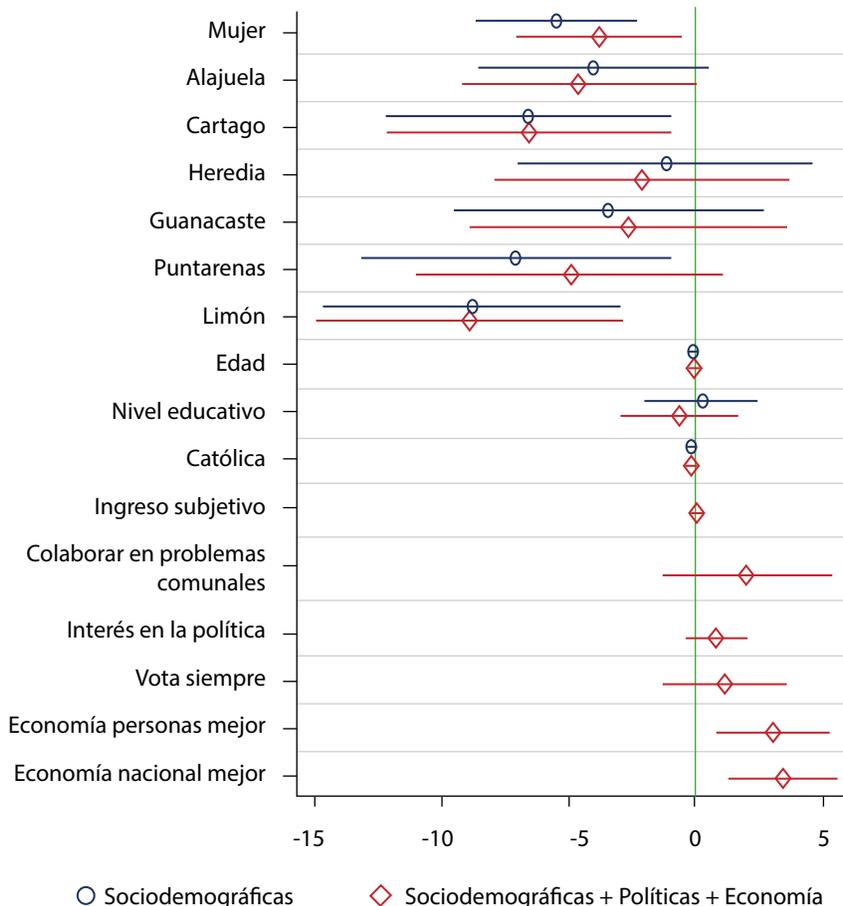
El análisis descriptivo mencionado anteriormente da indicios preliminares de diferencias en materia de satisfacción con la democracia entre grupos poblacionales. No obstante, la identificación de estas diferencias no constituye, por sí sola, evidencia conclusiva para entender qué factores explican la satisfacción estudiada.

Este apartado del capítulo tiene como objetivo examinar los determinantes de la satisfacción de los costarricenses con la democracia. Para estos efectos, se construyó un modelo de regresión lineal con el propósito de identificar qué factores inciden en dicha satisfacción. La variable dependiente es la variable de satisfacción con la democracia (0 muy insatisfechos, 100 muy satisfechos).

El modelo incluye aspectos sociodemográficos, políticos y otros de percepción de la economía. En lo que respecta a los primeros, únicamente dos variables sobresalen por tener efectos significativos. La primera es el género de la persona entrevistada: las mujeres poseen una menor satisfacción con la democracia en comparación con los hombres (figura 3). El segundo factor es el de diferencias territoriales, aunque no todas son significativas. Concretamente, en provincias como Cartago y Limón, los niveles de insatisfacción son mayores en comparación con los registrados en San José (categoría base). Otros factores como la educación, la edad o el nivel de riqueza del hogar, así como la aprobación del gobierno, el interés en la política y la participación electoral no tienen efectos significativos en la satisfacción de las personas entrevistadas con la democracia.

Figura 3

Modelos explicativos de la satisfacción con la democracia

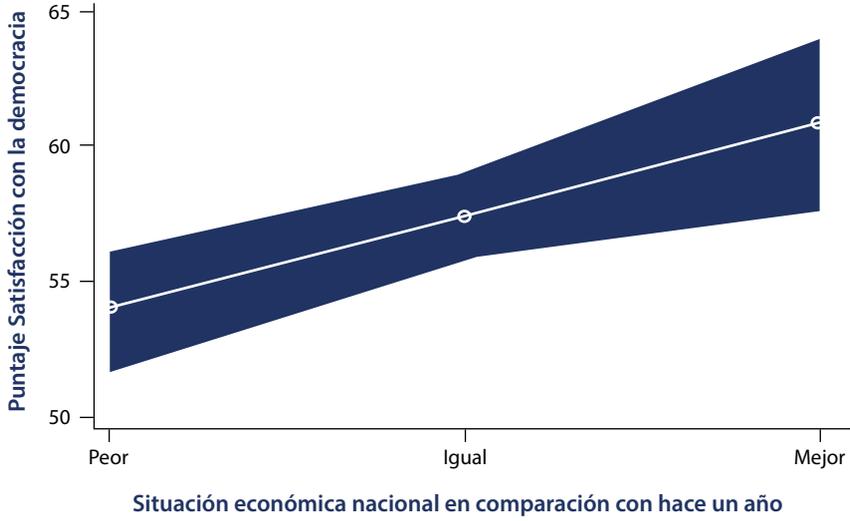


Nota. Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

Por otra parte, entre las variables de índole política y económica, hay dos de ellas relevantes para este análisis, ambas de efectos positivos. Puntualmente, aquellas personas que califican su economía personal y nacional en mejores condiciones que hace un año son quienes registran una mayor satisfacción con la democracia. En lo que respecta a estas dos variables, entre las personas que opinan que su situación económica personal o nacional es peor en comparación con los 12 meses anteriores, el nivel de satisfacción es de 53 y 54 puntos, respectivamente. Ese puntaje aumenta a 56 y 57 puntos cuando las personas perciben que las dos dimensiones de la economía se mantienen igual que hace un año. Los puntajes de satisfacción aumentan a 60 y 61 puntos entre quienes consideran que su condición económica ha mejorado (figuras 4 y 5).

Figura 4

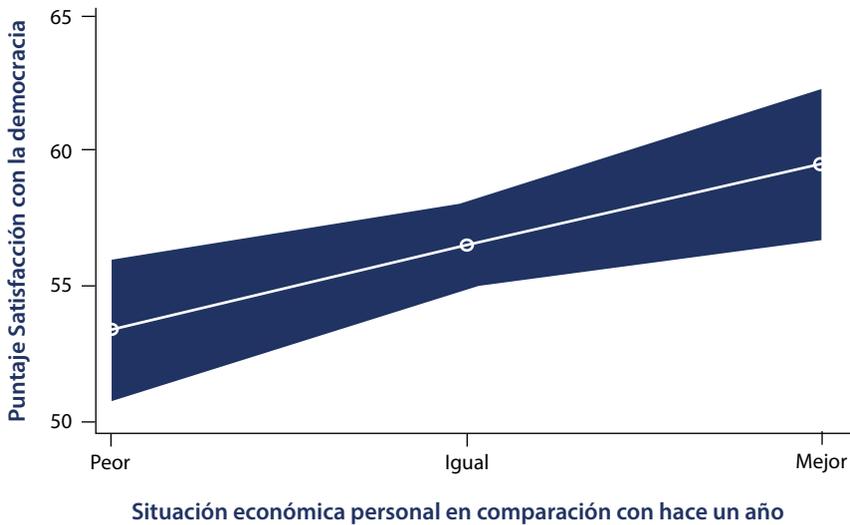
Relación entre la satisfacción con la democracia y percepción de la situación económica nacional



Nota. Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

Figura 5

Relación entre la satisfacción con la democracia y percepción de la situación económica personal



Nota. Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

5. Reflexiones finales

Distintos estudios recientes confirman la existencia de una sólida creencia de la población costarricense en la democracia (véanse Barómetro de las Américas y Latinobarómetro). Además, índices internacionales reportan una fuerte estabilidad política en Costa Rica en comparación con el resto de naciones regionales y mundiales. En buena teoría, la combinación de resultados favorables en estos estudios comparativos constituye una buena noticia para la supervivencia de la democracia. Sin embargo, la debilidad de la democracia costarricense es de otra índole y naturaleza.

Como se mencionó, la amplia base de creyentes en la democracia y sus instituciones es un resultado positivo y propio de un régimen político estable y consolidado. No obstante, esta buena condición de respaldo popular contrasta con niveles intermedios de satisfacción con el sistema político. Al examinar los niveles de satisfacción con el desempeño de la democracia, sus valores son intermedios: 56 puntos en una escala 0-100. En otras palabras, la ciudadanía costarricense está compuesta por fieles creyentes en la democracia, pero insatisfechos con su funcionamiento.

Los diversos análisis de los niveles de satisfacción en los distintos grupos de la población no hallaron grandes diferencias en ese respaldo en temas como nivel educativo, edad, ingresos percibidos y región de residencia. Esto apunta a que se trata de una insatisfacción bastante generalizada. Se encontraron ligeras diferencias entre hombres y mujeres, donde los primeros exhiben mayor satisfacción con la democracia.

Finalmente, en análisis más sofisticados sobre cuáles son los determinantes de la satisfacción con la democracia, los factores más relevantes son de índole económica: la evaluación retrospectiva de la economía, pues cuanto mejor se perciba la economía personal y nacional en comparación con un año atrás, mayor es la satisfacción con la democracia. En virtud de ello, cuando la economía se deteriora, sus efectos no solo son macroeconómicos, sino que también se dan fuertes repercusiones políticas. De igual manera, si la recuperación económica es frágil, la satisfacción de las personas con la democracia no repunta con igual fuerza o intensidad.

6. Referencias

- Armingeon, K. y Baccaro, L. (2012). The sorrows of young euro: the sovereign debt crises of Ireland and Southern Europe. En N. Bermeo y J. Pontusson (Eds.), *Coping with crisis: government reactions to the great recession* (pp. 162-197). Russell Sage Foundation.
- Armingeon, K. y Guthmann, K. (2014). Democracy in crisis? The declining support for national democracy in european countries, 2007-2011. *European Journal of Political Research*, 53, 423-42.

- Bratton M., Mattes, R. y Gyimah-Boadi, E. (2005). *Public opinion, democracy, and market reform in Africa*. Cambridge University Press.
- Canache, D., Mondak, J. y Seligson, M. (2001). Meaning and measurement in cross-national research on satisfaction with democracy. *Public Opinion Quarterly*, 65(4), 506-528. <https://doi.org/10.1086/323576>
- Christmann, P. (2018). Economic performance, quality of democracy and satisfaction with democracy. *Electoral Studies*, 53, 79-89.
- Chu, Yun-Han, Bratton, M., Tessler, M., Lagos, M. y Shastri, S. (2008). Public opinion and democratic legitimacy. *Journal of Democracy*, 19(2), 74-87.
- Clarke, H., Dutt, N. y Kornberg, A. (1993). The political economy of attitudes toward polity and society in Western European democracies. *The Journal of Politics*, 55(4), 998-1021.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Foa, R. S., Klassen, A., Slade, M., Rand, A. y Williams, R. (2020). *The global satisfaction with democracy report 2020*. Centre for the Future of Democracy.
- Gunther, R., Montero, J. R. y Torcal, M. (2007). Democracy and intermediation: some attitudinal and behavioral dimensions. En R. Gunther, J. R. Montero y P. Hans-Juergen (Eds.), *Democracy, intermediation, and voting on four continents* (pp. 29-74). Oxford University Press.
- Lagos, M. (2003). Support for and satisfaction with democracy. *International Journal of Public Opinion Research*, 15, 471-87.
- Linde, J. y Ekman, J. (2003). Satisfaction with democracy: a note on a frequently used indicator in comparative politics. *European Journal of Political Research*, 42(3), 391-408.
- Linz, J. y Stepan, A. (1996). *Problems of transition and consolidation: southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Johns Hopkins University Press
- Lupu, N., Rodríguez, M., Wilson, C. y Zechmeister, E. (Eds.). (2023). *Pulso de la democracia*. LAPOP.
- Magalhães, P. C. (2016). Economic evaluations, procedural fairness, and satisfaction with democracy. *Political Research Quarterly*, 69(3), 522-534. <https://doi.org/10.1177/1065912916652238>
- Pew Research Center. (2019). *Many across the globe are dissatisfied with how democracy is working*.
- Quaranta, M. y Martini, S. (2016). Does the economy really matter for satisfaction with democracy? Longitudinal and cross-country evidence from the European Union. *Electoral Studies*, 42, 164-174.

Rose, R., Mishler, W., Haerpfer, C. y Mishler, W. (1998). *Democracy and its alternatives: understanding post-communist societies*. John Hopkins University Press.

Schäfer, A. y Streeck, W. (Eds.). (2013). *Politics in the age of austerity*. Polity Press.

Valgarðsson, V. O. y Devine, D. (2022). What satisfaction with democracy? A global analysis of "satisfaction with democracy" measures. *Political Research Quarterly*, 75(3), 576-590. <https://doi.org/10.1177/10659129211009605>

Waldron-Moore, P. (1999). Eastern Europe at the crossroads of democratic transition: evaluating support for democratic institutions, satisfaction with democratic government, and consolidation of democratic regimes. *Comparative Political Studies*, 32(1), 32-62.

Weßels, B. (2015). Political culture, political satisfaction and the rollback of democracy. *Global Policy*, 6, 93-105.

Capítulo II. El malestar racional: calidad de las políticas públicas y satisfacción con la democracia

Adrián Pignataro López

Introducción

“Empeora drama de pacientes en listas de espera” (Ávalos, 2023). “Deterioro tiene a puente en transitada vía bajo riesgo alto de colapso” (Rojas, 2023). “Escuelas y colegios con pésima infraestructura” (Cordero, 2018). “Un total de 47.736 personas reciben agua contaminada con coliformes fecales en el país” (Pomerada, 2021). Estos titulares forman parte de un universo de notas periodísticas sobre deficiencias en la provisión de políticas públicas en Costa Rica. Si bien es cierto que la muestra responde a un sesgo de selección (la calidad de los servicios, cuando existe, no es noticiosa), la base de datos de acciones colectivas, que elabora el Instituto de Investigaciones Sociales (2023), registra desde 2013 hasta 2023 un total de 775 protestas en defensa del acceso, calidad y costo de servicios públicos, incluyendo infraestructura pública. Por lo tanto, la ineffectividad del sistema político para suministrar, en múltiples ocasiones, bienes públicos fundamentales es una realidad que se vive.

A su vez, se ha registrado en Costa Rica una disminución en la satisfacción con la forma en que funciona la democracia (Pignataro *et al.*, 2021). Esta menor satisfacción con la democracia contrasta con el alto apoyo a la

democracia, como sistema político, superior al apoyo en los otros países latinoamericanos (excepto Uruguay), aunque con una ligera reducción en el tiempo (Lupu *et al.*, 2023).

Es bien conocido que en Costa Rica las elecciones transcurren pacíficamente cada cuatro años, con respeto a los derechos políticos y civiles y con gobernantes que aceptan la derrota. Entonces, si la democracia funciona bien, ¿por qué las personas la evalúan mal? ¿Será que la satisfacción con la democracia depende más de los resultados que de los procedimientos institucionales? ¿Son las deficiencias del Estado, en su rol de provisión y distribución de bienes públicos, fuentes de este malestar democrático?

El capítulo examina estas preguntas que, en términos empíricos, se entienden como la búsqueda de una correlación entre la evaluación de políticas públicas (educación, salud, seguridad, bonos sociales y otras) y la satisfacción con la democracia. En el análisis utilizo la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano*, realizada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica de Costa Rica. La encuesta se aplicó por teléfono, del 2 al 11 de mayo de 2023, a una muestra de 1001 personas seleccionadas al azar, lo cual permite realizar inferencias de la población de Costa Rica. De encontrarse una asociación, se podría concluir que la opinión pública actúa de forma racional: cuando la ciudadanía no recibe los resultados que espera, se enoja con el régimen político responsable de proveerlos -en el caso de Costa Rica, la democracia-.

1. Perspectivas teóricas sobre la satisfacción con la democracia

En la literatura sobre respaldo político abundan términos que no resultan fáciles de diferenciar (apoyo, confianza, aprobación, etc.) y sus definiciones dependen de abordajes teóricos y personas autoras específicas. Una parte de la literatura, sin embargo, coincide al identificar dos dimensiones del apoyo a la democracia: una intrínseca y otra instrumental. La primera ve a la democracia como un bien en sí mismo, mientras que la segunda se refiere a los resultados del régimen político.

Textos clásicos del siglo XX establecían esta distinción bajo diversas etiquetas conceptuales. Lipset (1987) habla de legitimidad y eficacia como fuentes de la estabilidad democrática. La legitimidad denota “la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas son las más apropiadas para la sociedad” (p. 67); es decir, la democracia como un régimen político preferible; mientras que la eficacia es “el grado en que el sistema satisface las funciones básicas de gobierno” (p. 67). Ambas dimensiones permiten construir una tipología de sistemas políticos en cuatro

categorías, en la cual la combinación de legítimos, pero ineficaces, identifica a muchas democracias contemporáneas. En este tipo las personas respaldan la democracia como sistema político, aunque esta no satisface sus necesidades y expectativas.

En Easton (2006) se encuentra un binomio similar. Por un lado, propone el concepto de apoyo difuso como el que “continúa independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema” (p. 171), o sea, la legitimidad más allá de la eficacia. Por el otro, el apoyo específico “refleja la satisfacción que siente un miembro cuando advierte que sus demandas fueron atendidas” (p. 172). Asimismo, Linz (2021) define legitimidad de la democracia como la creencia de que el régimen es “el menos malo de todas las formas de gobierno” (p. 76), eficacia como la capacidad del régimen para encontrar soluciones a los problemas y efectividad como la puesta en práctica de las medidas políticas. Las tres actitudes refuerzan la estabilidad del sistema político, aunque no de forma independiente, pues la legitimidad inicial garantiza ciertos niveles de percepción de eficacia y eficiencia.

Investigaciones posteriores avanzaron en la conceptualización y la medición de legitimidad/apoyo difuso y eficacia/apoyo específico. Seligson y Muller (1987) establecieron una escala de apoyo difuso basada en siete indicadores: percepción de la garantía de un juicio justo, respeto por las instituciones políticas, protección de los derechos básicos, orgullo de vivir en el sistema político, apoyo al sistema político, creencia de que el sistema político es el mejor posible y percepción de una adecuada representación. Seligson (2002) reformula el constructo de apoyo político dejando por fuera dos de los siete indicadores (los dos últimos que se enumeraron) y lo aplica en Costa Rica por medio de encuestas. La idea teórica fundamental de Seligson es que en democracia existe un “depósito de legitimidad” (*reservoir of legitimacy*) que permite afrontar crisis económicas -como la que Costa Rica experimentó en los años ochenta- sin comprometer la estabilidad democrática. Puede notarse que estas mediciones, aunque basadas en los conceptos de legitimidad y apoyo difuso, incluyen también mediciones de eficacia, en tanto la protección de derechos y la garantía de un juicio justo se refieren a cómo funciona la democracia. En esta misma línea, Norris (1999) propone un índice multidimensional de apoyo político, el cual considera tanto el respaldo al sistema como la satisfacción con su funcionamiento, por lo que se diluyen ambas dimensiones.

Otros, en cambio, enfatizan la diferencia entre apoyo de la democracia y la satisfacción con su funcionamiento, puesto que existen personas convencidas de que la democracia es un sistema político comparativamente preferible a las dictaduras (preferencia por principios), pero también personas que favorecen la democracia porque genera una mejor redistribución material, garantiza el

acceso a bienes públicos y resuelve pacíficamente los conflictos (preferencia por resultados) (Linde y Ekman, 2003).

La relativa independencia entre legitimidad y eficacia justificaría la creencia de que una dictadura, si bien restringe derechos y libertades, es capaz de generar buenos resultados. No obstante, la evidencia empírica es débil al respecto (Gerring, *et al.*, 2022). Por ejemplo, se ha argumentado que las democracias, a diferencia de las dictaduras, previenen las hambrunas gracias a la oposición política que castiga la negligencia y a la prensa que circula información preventiva antes de que la hambruna ocurra (Sen, 1999). También se ha demostrado no solo que las dictaduras no producen mayor crecimiento económico (Przeworski, *et al.*, 2000), sino, además, que las democracias generan 20% más de crecimiento del PIB per cápita (Acemoglu *et al.*, 2019). Esto no evita, sin embargo, que algunas personas busquen en el falso ídolo del autoritarismo las respuestas que no encuentran en la democracia.

El concepto de satisfacción con la democracia, por lo tanto, apunta a medir cómo funciona la democracia, no cuánto se cree en ella (Linde y Ekman, 2003). Aunque existen advertencias y críticas sobre la validez del indicador de satisfacción con la democracia (Canache *et al.*, 2001 y Valgardsson y Devine, 2022), se aprecia su relevancia para distinguir los juicios evaluativos sobre resultados de las creencias afectivas (Quaranta y Martini, 2017). Esta separación permitiría entender por qué en Costa Rica el apoyo al sistema político es más estable y positivo que la satisfacción con el funcionamiento del sistema.

Una de las principales fuentes de satisfacción es la economía. Bajo la misma premisa del voto económico -según la cual el buen rendimiento económico se relaciona con mayor aprobación gubernamental y con mejores perspectivas electorales para el partido en el gobierno (Lewis-Beck y Stegmaier, 2013)-, un mejor desempeño económico se traduce en mayor satisfacción con el funcionamiento de la democracia (p. ej., Christmann y Torcal, 2017; Clarke *et al.*, 1993 y Quaranta y Martini, 2017).

Más allá de la economía, otros trabajos sostienen que la protección social es una fuente de satisfacción con la democracia (Lühiste, 2014). Se argumenta que, dado el crecimiento de las clases medias, suben las expectativas y los públicos demandan una serie de resultados no solo económicos; es decir, se eleva “el piso de la expectativa social, potenciando nuevas demandas que van más allá del reclamo por trabajo o superación de la pobreza” (Del Campo *et al.*, 2017, p. 171). Las personas esperan también servicios públicos de calidad en salud, educación, transporte, seguridad y más.

Costa Rica es un caso apropiado para probar este vínculo entre percepción de la calidad de las políticas públicas y la satisfacción con el funcionamiento de

la democracia. Por un lado, en el periodo de 1950 a 1980 Costa Rica construyó un régimen de bienestar exitoso y excepcional en América Latina, en el cual se amplió la clase media y el empleo formal, a través de un aumento del gasto social enfocado en salud, educación y asistencia social (sobre todo pensiones), fundamentalmente sostenido por impuestos a los salarios (Martínez y Sánchez-Ancochea, 2017). Las políticas públicas resultaron de calidad superior a la media regional gracias a la combinación de la alternancia democrática de partidos en el gobierno, con la delegación de funciones técnicas en las instituciones autónomas (Lehoucq, 2010).

Por el otro, la ciudadanía presenta vastas expectativas sobre la intervención estatal. Por ejemplo, la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* (IFED y FLACSO Costa Rica) revela que 97% de las personas están de acuerdo con que el Estado debe garantizar el acceso gratuito a la salud y educación pública, 77% que el Estado debe ser el principal responsable de reducir la diferencia entre ricos y pobres y 60% que los servicios esenciales (agua, luz, gas e Internet) deben ser siempre propiedad del Estado.

Sin embargo, las políticas reformistas de la década de 1980 inauguraron un nuevo modelo de desarrollo orientado hacia una menor intervención estatal en la economía (Hidalgo, 2002). Más recientemente, a partir del gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) y continuando con Rodrigo Chaves (2022-2026), las políticas de austeridad fiscal han implicado recortes en la inversión social, en perjuicio de la educación, la protección social y la salud (Bermúdez, 2023 y Programa Estado de la Nación, 2023).

Hipotetizo que las deficiencias en las políticas públicas estatales se manifiestan en menores niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Mientras que la democracia, como sistema, encuentra respaldo; las respuestas de la democracia, en forma de políticas públicas, acumulan críticas. En las siguientes secciones, examino empíricamente la relación entre políticas públicas y satisfacción con la democracia, no desde un enfoque longitudinal (cambios a través de los años), sino a partir de uno transversal (un momento específico): cómo la percepción de la calidad de políticas públicas se relaciona con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Costa Rica en 2023.

2. Indicadores de respaldo democrático

Como se señaló, en Costa Rica es más agudo el declive en la satisfacción con el funcionamiento de la democracia que en el apoyo a la democracia como sistema. Desde la teoría, son dos conceptos distintos, referidos a resultados y principios, respectivamente. Procedo a examinar cómo se manifiestan en la opinión pública, según la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023 (IFED y FLACSO Costa Rica). A la pregunta “¿qué tan importante es para

usted vivir en un país democrático?”, donde las respuestas se brindaron en una escala desde 1 (nada importante) hasta 7 (muy importante), 85% respondió con 7 en la escala, es decir, casi la totalidad de las personas consideran muy importante vivir en un país democrático; solamente 1% respondió nada importante. Según esta medición, hay un respaldo casi unánime a la democracia desde la visión intrínseca, como régimen preferible a la dictadura.

Por el contrario, ante la pregunta “en general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que funciona la democracia costarricense?”, la encuesta encuentra que 10% está muy satisfecho(a), 57% satisfecho(a), 25% insatisfecho(a) y 8% muy insatisfecho(a). Aunque las escalas de medición son distintas, es alarmante que el porcentaje de personas muy satisfechas con la democracia sea menor en 75 puntos porcentuales que el porcentaje de quienes consideran que la democracia es muy importante en la misma medición.

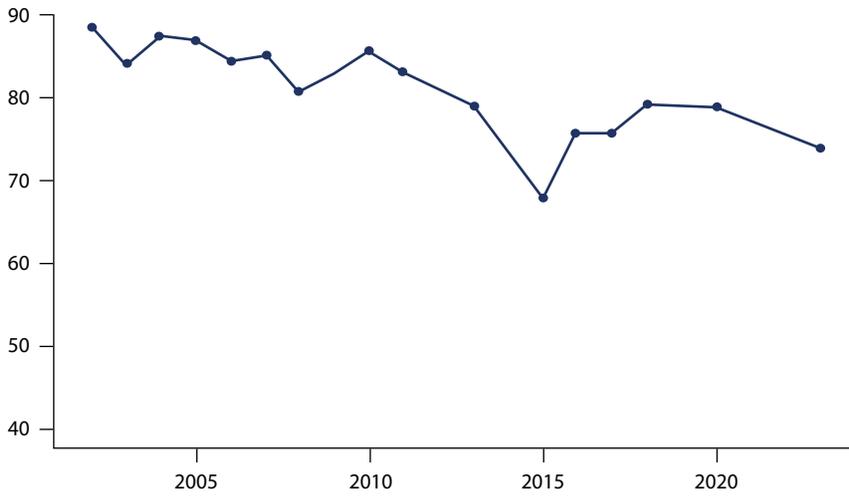
En el tiempo, el apoyo a la democracia ha permanecido alto, aunque hay variaciones entre años y mediciones (Programa Estado de la Nación, 2023, pp. 270-271). Por ejemplo, en el Latinobarómetro de 2023, 72% de las personas costarricenses están de acuerdo o muy de acuerdo con la frase: “La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. Como se muestra en la figura 1 (panel A), este porcentaje de apoyo a la democracia ha estado por encima de 70% en casi todas las mediciones de esta organización (excepto 2015, con 68%), aunque el nivel de apoyo ha descendido desde 2013, pues antes superaba el 80%. En cambio, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (suma de porcentajes de personas satisfechas y muy satisfechas) oscila más, como evidencian los datos del Barómetro de las Américas (figura 1, panel B), con un declive desde 2016, pero con un repunte en 2023 (encuesta del IFED y FLACSO Costa Rica). Estas variaciones se pueden explicar porque el indicador captura también la aprobación hacia el trabajo del gobierno (Canache *et al.*, 2001). Así, el alto nivel de aprobación al Gobierno de Rodrigo Chaves en su primer año (Díaz, 2024) podría explicar la mayor satisfacción con la democracia en 2023.

Figura 1

Actitudes hacia la democracia en Costa Rica

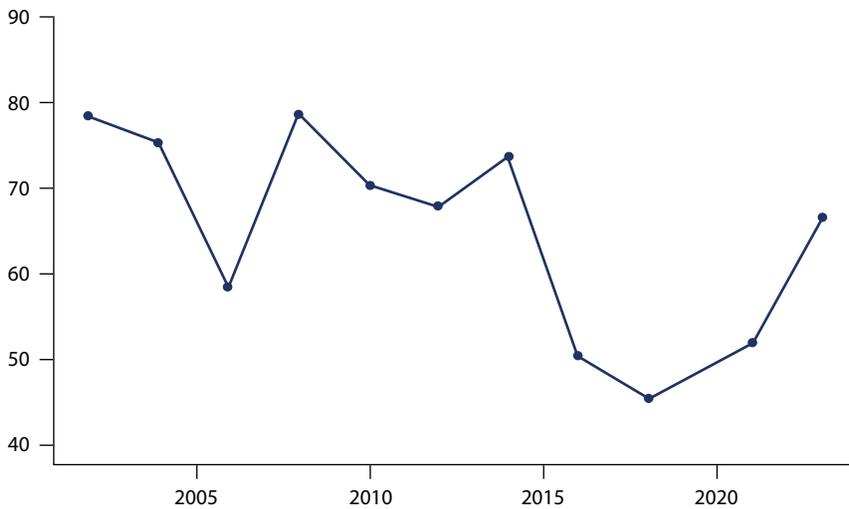
A. Apoyo a la democracia

% de acuerdo y muy de acuerdo con la frase "La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno"



B. Satisfacción con el funcionamiento de la democracia

% satisfecho (a) y muy satisfecho (a)



Nota. Elaboración con datos del Latinobarómetro (2023), del Barómetro de las Américas (Lupu et al., 2023) y de la Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

3. Políticas públicas y satisfacción con la democracia

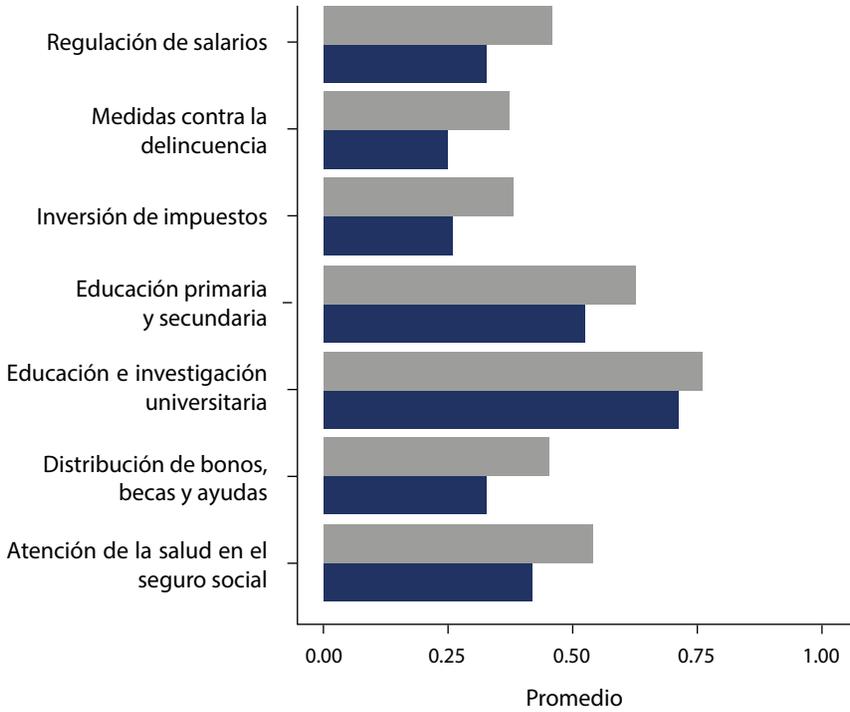
A diferencia del relativamente estable y alto apoyo a la democracia como sistema, la satisfacción con la democracia en Costa Rica presenta una variabilidad en el tiempo y entre personas más intrigante. La explicación que propongo proviene de la calidad de las políticas públicas. Cuando las personas perciben que las políticas públicas son de mayor calidad, consideran el funcionamiento de la democracia más satisfactorio. Esta relación parte de una visión colectivista o igualitaria de la democracia y del rol del Estado entre la opinión pública en la cual sus resultados, no solo los procedimientos, importan (ver Thomassen, 2007).

El primer paso analítico consiste en comparar la percepción de la calidad de las políticas públicas según el grado de satisfacción con la democracia. Para ello considero siete áreas de política pública: la educación que se da en escuelas y colegios públicos; la atención de la salud que dan en el seguro social; la educación e investigación que realizan las universidades públicas; las medidas que toma el Gobierno contra la delincuencia; la forma en que se distribuyen los bonos, becas y otras ayudas del Estado; y la forma en que se invierten los impuestos. Las personas encuestadas calificaron la calidad de cada una como muy mala, mala, regular, buena y muy buena; transformo esta calificación en una escala de 0 (muy mala) a 1 (muy buena), por lo que un mayor puntaje implica una percepción de mayor calidad. Los promedios de valoración se calculan entre personas satisfechas y muy satisfechas con el funcionamiento de la democracia versus personas insatisfechas y muy insatisfechas con esta.

La figura 2 muestra que, para las siete políticas públicas, la valoración es más positiva entre las personas satisfechas y muy satisfechas con la democracia. Aunque la percepción de calidad es variable (en los extremos, muy positiva para las universidades públicas y muy negativa para las medidas contra la delincuencia y la inversión de los impuestos), en las siete comparaciones hay brechas en la dirección esperada: cuando se perciben mejores resultados, las personas están más satisfechas con la democracia.

Figura 2

Percepción de políticas públicas según satisfacción con la democracia



■ Satisfecho(a) y muy satisfecho(a) con el funcionamiento de la democracia

■ Insatisfecho(a) y muy insatisfecho(a) con el funcionamiento de la democracia

Nota. Elaboración con datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano*, 2023.

Las diferencias entre los promedios son sugestivas, pero no conclusivas, ya que estas comparaciones no consideran factores explicativos alternativos de la satisfacción con la democracia. Por ello es preferible utilizar modelos de regresión en un segundo paso. Con la satisfacción con la democracia dividida en dos categorías -insatisfecho(a) y muy insatisfecho(a) versus satisfecho(a) y muy satisfecho(a)- la regresión logística es apropiada.

El modelo de regresión, además de incluir las valoraciones de las políticas públicas, considera la explicación económica, según la cual una mejor percepción de la economía se manifiesta en mayor satisfacción con la democracia. Incluyo tanto la valoración de la situación económica personal en el último año (mejor = 1, igual = 0.5, peor = 0), como la valoración de la situación económica nacional en el último año (mejor = 1, igual = 0.5, peor = 0). Tomo en cuenta, también, las características sociodemográficas de las personas, ya que

los grupos que tienden a estar más excluidos de políticas estatales o reciben servicios de menor calidad (mujeres, personas de menores recursos, habitantes de provincias costeras) posiblemente manifestarían menor satisfacción con la democracia. Las variables sociodemográficas son: sexo (mujer = 1, hombre = 0); edad (en años cumplidos); grado de escolaridad (primaria o sin estudios, secundaria y universitaria); nivel de ingresos (no le alcanza para pagar ningún gasto, le alcanza para pagar sus gastos básicos, le alcanza para pagar gastos básicos y otros gastos, le alcanza para pagar todos sus gastos y ahorrar); condición laboral (persona desempleada o trabajadora no remunerada = 1, otros casos = 0); y provincia de residencia (costera = 1, central = 0).

Tabla 1

Modelos de regresión logística para predecir la satisfacción con la democracia en Costa Rica, 2023

Variable	Modelo 1			Modelo 2		
	Coef.	Error estándar	Sig.	Coef.	Error estándar	Sig.
Intercepto	-1.91	0.54	<0.001	-2.15	0.56	<0.001
Educación primaria y secundaria	0.96	0.32	0.003	1.00	0.32	0.002
Atención de la salud en el seguro social	0.59	0.28	0.032	0.54	0.28	0.052
Regulación de salarios	0.97	0.32	0.002	0.98	0.32	0.002
Educación e investigación universitaria	0.23	0.40	0.569	0.27	0.40	0.503
Medidas contra la delincuencia	0.80	0.33	0.014	0.83	0.33	0.012
Distribución de bonos, becas y ayudas	0.50	0.29	0.082	0.48	0.29	0.100
Inversión de impuestos	0.89	0.35	0.010	0.88	0.35	0.012
Situación económica personal	0.31	0.24	0.186	0.34	0.24	0.156
Situación económica nacional	0.70	0.23	0.003	0.69	0.23	0.003
Mujer	-0.15	0.19	0.415	-0.15	0.19	0.422
Edad	0.00	0.01	0.945	0.00	0.01	0.901

▼ Continuación

Variable	Modelo 1			Modelo 2		
	Coef.	Error estándar	Sig.	Coef.	Error estándar	Sig.
Escolaridad secundaria	0.38	0.23	0.105	0.40	0.23	0.089
Escolaridad universitaria	0.15	0.26	0.572	0.12	0.26	0.637
Nivel de ingreso: le alcanza gastos básicos	0.02	0.24	0.950	0.00	0.24	0.986
Nivel de ingreso: le alcanza gastos básicos y otros	0.31	0.29	0.294	0.30	0.30	0.318
Nivel de ingreso: le alcanza y ahorra	-0.07	0.33	0.835	-0.04	0.33	0.904
Desempleado(a) o no remunerado(a)	-0.24	0.22	0.277	-0.19	0.22	0.383
Provincia costera	-0.08	0.19	0.658	-0.02	0.19	0.902
Interés en la política				0.14	0.25	0.571
Vota siempre				0.13	0.20	0.498
Observaciones	795	790				

Nota. Coef. (coeficiente), Sig. (significancia estadística).

El primer modelo (tabla 1) encuentra que cinco de las siete políticas públicas están positivamente asociadas -y con significancia estadística- con una mayor satisfacción con la democracia, en específico, educación primaria y secundaria, atención de la salud en el seguro social, regulación de salarios, medidas contra la delincuencia e inversión de impuestos. Esto quiere decir que cuanto mejor se valoren estas cinco políticas públicas, mayor es la probabilidad de que las personas estén satisfechas con la democracia. La relación mantiene su significancia estadística incluso al considerar los efectos de la percepción de la economía según las perspectivas personal y nacional (solamente la segunda está significativamente asociada con la satisfacción con la democracia) y las variables sociodemográficas (ninguna es estadísticamente significativa).

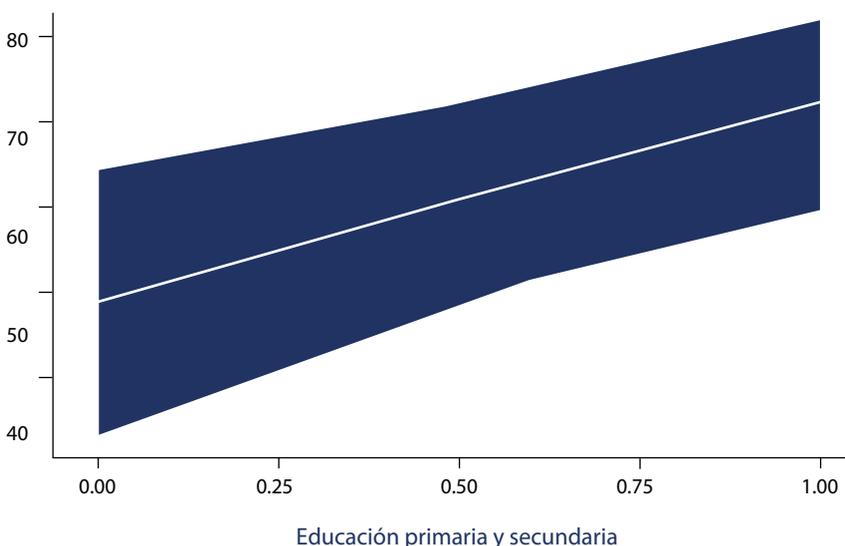
Como se vio, la teoría asume que la satisfacción con la democracia es instrumental y no basada en principios. Por lo tanto, se esperaría que ciertas actitudes políticas no estén asociadas con satisfacción. Para ello, pruebo un modelo 2 que añade una medida de interés en la política (escala de 0 a 1) y una variable indicadora sobre la frecuencia con que votan las personas en elecciones nacionales (siempre = 1, a veces o nunca = 0). Ninguna de estas dos variables está relacionada con la satisfacción. En este segundo modelo,

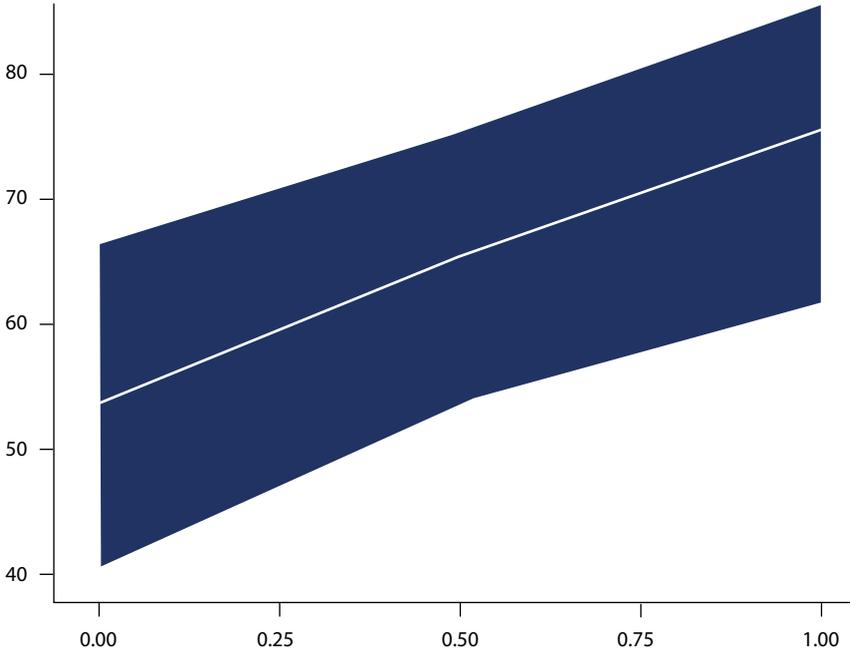
sin embargo, la atención de la salud en el seguro social pierde su significancia estadística. En conclusión, no se encuentra evidencia de que la satisfacción con la democracia dependa de actitudes y comportamientos hacia el sistema político en general; más bien, los datos apuntan a que la satisfacción proviene de las respuestas del sistema, materializadas como políticas públicas.

¿Cuál es el efecto de las valoraciones de las políticas públicas sobre la satisfacción con la democracia? Con base en el modelo 2 se estima el incremento en la probabilidad de estar satisfecho(a) o muy satisfecho(a) con la democracia al mejorar la calificación de cada política pública del valor más bajo al más alto. Se encuentra que, para educación primaria y secundaria, el efecto sobre la satisfacción con la democracia es de 23 puntos porcentuales; es decir, al cambiar la valoración de la educación primaria y secundaria del mínimo al máximo, la probabilidad de estar satisfecho(a) o muy satisfecho(a) con la democracia aumenta 23 puntos porcentuales. Para la regulación de salarios, el efecto es de 22 puntos porcentuales; para la distribución de impuestos, de 20 puntos porcentuales; y para las medidas contra la delincuencia, de 18 puntos porcentuales. En las tres restantes (atención de la salud, universidades y bonos, becas y ayudas), el efecto es inferior a 15 puntos porcentuales. La figura 3 ilustra los efectos marginales (p. ej., con las demás variables constantes en sus medias) de las cuatro políticas públicas con efectos significativos en el modelo 2.

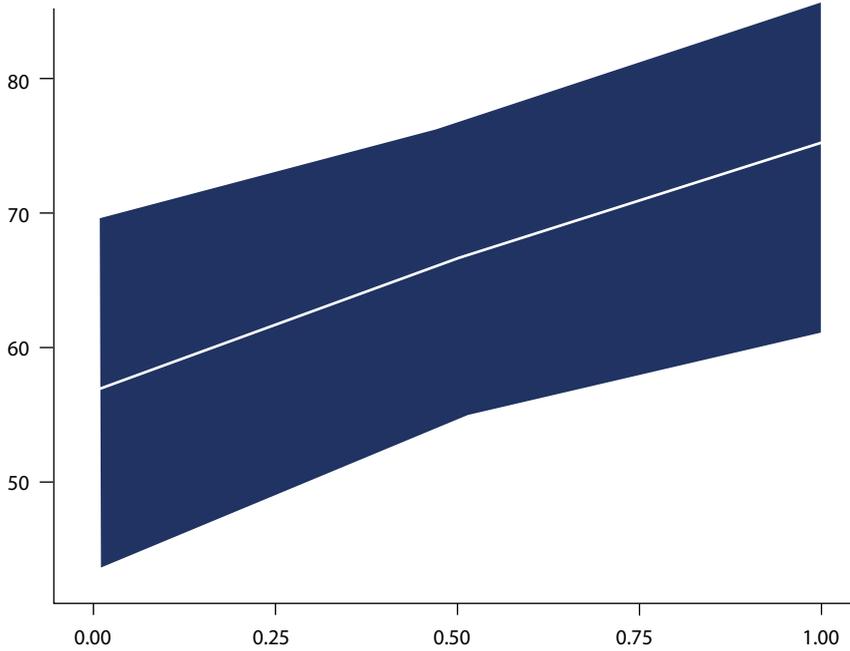
Figura 3

Efectos marginales (a partir del modelo 2) sobre la probabilidad de estar satisfecho(a) y muy satisfecho(a) con la democracia (las áreas azules representan los intervalos de confianza al 95%)

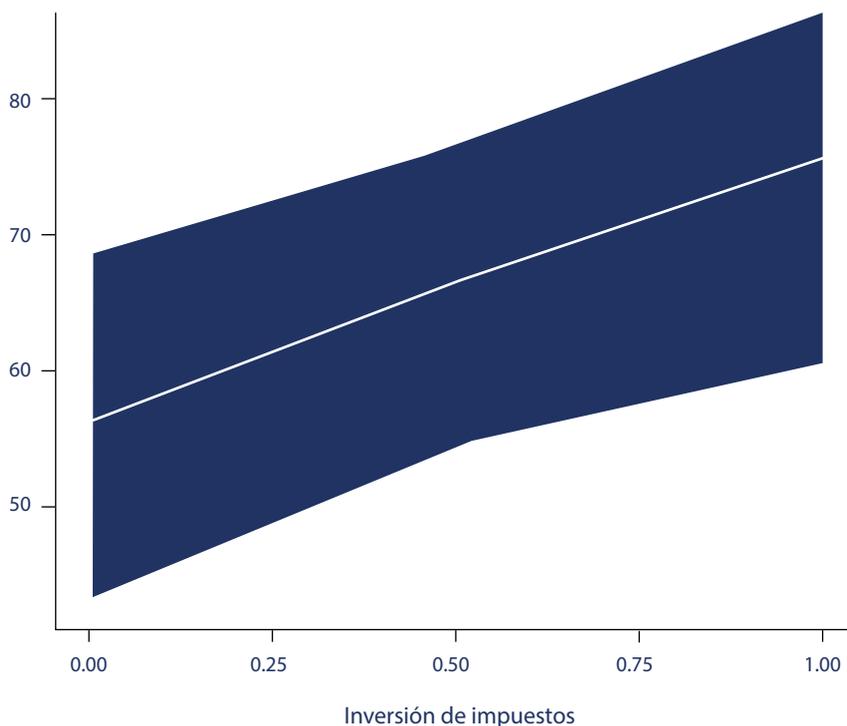




Regulación de salarios



Medidas contra la delincuencia



4. Conclusiones

La ciudadanía en Costa Rica acumula malestar con la política (Raventós *et al.*, 2012). Sin embargo, los estudios de opinión muestran que la democracia, como conjunto de instituciones y normas que organizan las relaciones de poder en la sociedad, es respaldada por la mayoría. También es cierto que para muchas personas las respuestas que obtienen del sistema democrático no son satisfactorias. Es decir, hay malestar hacia la democracia en cuanto a sus resultados.

El análisis empírico con los datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023* (IFED y FLACSO Costa Rica) confirma que la satisfacción con la democracia es mayor cuanto mejor las personas evalúan las políticas públicas que reciben; en particular, la educación primaria y secundaria, la regulación de los salarios, las medidas de seguridad contra la delincuencia y la inversión de los impuestos.

Las implicaciones de estos hallazgos son varias. Primero, desde el punto de vista teórico se respaldan las corrientes que ven la satisfacción de la democracia como un indicador válido y explicativo de la eficacia o el apoyo específico de un régimen (Linde y Ekman, 2003 y Quaranta y Martini, 2017). Cuando la satisfacción se refiere a cómo funciona la democracia, y no a si es

normativamente preferible frente a una dictadura, constituye un concepto útil para entender el respaldo de la ciudadanía a la democracia desde una perspectiva instrumental.

Segundo, puesto que en Costa Rica la satisfacción con la democracia se asocia con resultados y no solo con procedimientos, se puede argumentar que hay una expectativa resultadista o maximalista de la democracia (no obstante, puede verse una conclusión opuesta en Barrueto y Navia, 2013). Para la opinión pública la satisfacción con la democracia va más allá de la elección de representantes. La historia institucional y las actitudes prevalentemente prointervención del Estado podrían explicar esta asociación entre democracia y bienestar.

El enfoque minimalista, por el contrario, mantiene que la democracia se define como un régimen de gobernanza caracterizado por la competición en elecciones, el marco liberal de derechos y libertades y el control ciudadano de representantes, no como un conjunto de resultados ideales (Przeworski, 2010 y Schmitter y Karl, 1991). Desde esta perspectiva, resulta injusto exigirle a la democracia buenos rendimientos económicos (alto crecimiento, baja inflación), sociales (reducción de la pobreza) y ambientales (controles a las emisiones de carbono), pues la democracia solo ofrece reglas para la alternancia pacífica de representantes, no “buenas políticas”. Con todas sus ventajas, la democracia no logra solucionar los actuales escollos públicos (polarización política, desigualdad, cambio climático) que son consecuencias del comportamiento humano y de la acción colectiva (Ansell, 2023).

Sin embargo, mientras la opinión pública identifique a la democracia como la responsable de atender sus necesidades, la satisfacción reflejará el nivel de cumplimiento de las expectativas, o bien, el grado de decepción. Hay, de esta forma, un malestar racional que proviene de la insatisfacción con las respuestas estatales. No equivale a un sentimiento irracional por el cual la ciudadanía se siente atraída por un líder fuerte o autoritario. Es el simple hecho de que las personas esperan más y reciben menos.

5. Referencias

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. y Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47-100.

Ansell, B. (2023). *Why politics fails*. Public Affairs.

Ávalos Rodríguez, Á. (21 de mayo de 2023). Empeora drama de pacientes en listas de espera. *La Nación*. <https://www.nacion.com/el-pais/salud/empeora-drama-de-pacientes-en-listas-de-espera/TDONXQVFQ5DOVASERJXUMYAGJ4/story/>

Barrueto, F. y Navia, P. (2013). Tipologías de democracia representativa en América Latina. *Política y gobierno*, 20(2), 265-307.

- Bermúdez Vives, M. (6 de diciembre de 2023). Costa Rica tocó fondo en la inversión social en el 2023. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-toco-fondo-en-la-inversion-social-en-el-2023/>
- Canache, D., Mondak, J. J. y Seligson, M. A. (2001). Meaning and measurement in cross-national research on satisfaction with democracy. *The Public Opinion Quarterly*, 65(4), 506-528.
- Christmann, P. y Torcal, M. (2017). The political and economic causes of satisfaction with democracy in Spain-a twofold panel study. *West European Politics*, 40(6), 1241-1266.
- Clarke, H. D., Dutt, N. y Kornberg, A. (1993). The political economy of attitudes toward polity and society in western european democracies. *The Journal of Politics*, 55(4), 998-1021.
- Cordero Parra, M. (2 de octubre de 2018,). Escuelas y colegios con pésima infraestructura pese a disponer de €150 mil millones. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/escuelas-y-colegios-con-pesima-infraestructura-pese-a-disponer-de-%C2%A2150-mil-millones/>
- Del Campo, E., Güemes, M. C. y Paramio, L. (2017). "I can't get no satisfaction". Servicios públicos, democracia y clases medias en América Latina. *América Latina Hoy*, 77, 161-187.
- Díaz González, J. A. (2024). Factores determinantes en el respaldo a Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica) durante su primer año de mandato. *Revista Rupturas*, 14(1), 31-52.
- Easton, D. (2006). *Esquema para el análisis político*. Amorrortu. (Original publicado en 1965).
- Gerring, J., Knutsen, C. H. y Berge, J. (2022). Does democracy matter? *Annual Review of Political Science*, 25, 357-375.
- Hidalgo Capitán, A. L. (2003). *Costa Rica en evolución. Política económica, desarrollo y cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense (1980-2002)*. Editorial UCR y Universidad de Huelva Publicaciones.
- Instituto de Investigaciones Sociales (2023). *Protestas. Base de datos de acciones colectivas* [archivo Excel]. Universidad de Costa Rica. <https://protestas.iis.ucr.ac.cr/>
- Lehoucq, F. (2010). Political competition, constitutional arrangements, and the quality of public policies in Costa Rica. *Latin American Politics and Society*, 52(4), 53-77.
- Lewis-Beck, M. S. y Stegmaier, M. (2013). The VP-function revisited: a survey of the literature on vote and popularity functions after over 40 years. *Public Choice*, 157, 367-385.
- Linde, J. y Ekman, J. (2003). Satisfaction with democracy: a note on a frequently used indicator in comparative politics. *European Journal of Political Research*, 42(3), 391-408.
- Linz, J. J. (2021). *La quiebra de las democracias*. Alianza editorial. (Original publicado en 1987).

- Lipset, S. M. (1987). *El hombre político. Las bases sociales de la política*. Tecnos. (Original publicado en 1959).
- Lühiste, K. (2014). Social protection and satisfaction with democracy: a multi-level analysis. *Political Studies*, 62(4), 784-803.
- Lupu, N., Rodríguez, M., Wilson, C. J. y Zechmeister, E. J. (Eds.). (2023). *Pulse of democracy*. LAPOP.
- Martínez Franzoni, J. y Sánchez-Ancochea, D. (2013). Can Latin American production regimes complement universalistic welfare regimes?: implications from the Costa Rican case. *Latin American Research Review*, 48(2), 148-173.
- Norris, P. (Ed.) (1999). *Critical citizens. Global support for democratic governance*. Oxford University Press.
- Pignataro, A., Treminio, I. y Chavarría Mora, E. (2021). Democracia, apoyo ciudadano y nuevas generaciones frente al retroceso democrático en Centroamérica. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 47, 1-30.
- Pomerada García, F. (30 de abril de 2021). Un total de 47.736 personas reciben agua contaminada con coliformes fecales en el país, informa el AyA. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/un-total-de-47-736-personas-reciben-agua-contaminada-con-coliformes-fecales-en-el-pais-informa-el-aya/>
- Programa Estado de la Nación (2023). *Informe estado de la nación*. Programa Estado de la Nación.
- Przeworski, A. (2010). *Democracy and the limits of self-government*. Cambridge University Press.
- Przeworski, A., Álvarez, M. E., Cheibub, J. A. y Limongi, F. (2000). *Democracy and development. Political institutions and well-being in the world, 1950-1990*. Cambridge University Press.
- Quaranta, M. y Martini, S. (2017). Easy come, easy go? Economic performance and satisfaction with democracy in southern Europe in the last three decades. *Social Indicators Research*, 131, 659-680.
- Raventós Vorst, C., Fournier Facio, M. V., Fernández Montero, D. y Alfaro Redondo, R. (2012). *Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política*. Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
- Rojas, P. (14 de octubre de 2023). Deterioro tiene a puente en transitada vía bajo riesgo alto de colapso. *CRHoy*. <https://www.crhoy.com/nacionales/deterioro-tiene-a-puente-en-transitada-via-bajo-riesgo-alto/>
- Schmitter, P. C. y Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88.

- Seligson, M. A. (2002). Trouble in paradise? The erosion of system support in Costa Rica, 1978-1999. *Latin American Research Review*, 37(1), 160-185.
- Seligson, M. A. y Muller, E. N. (1987). Democratic stability and economic crisis: Costa Rica, 1978-1983. *International Studies Quarterly*, 31(3), 301-326.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Anchor Books.
- Thomassen, J. (2007). Democratic values. En R. J. Dalton y H. D. Klingemann (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Behavior* (pp. 418-434). Oxford University Press.
- Valgardsson, V. O. y Devine, D. (2022). What satisfaction with democracy? A global analysis of "satisfaction with democracy" measures. *Political Research Quarterly*, 75(3), 576-590.

Capítulo III. Los malestares en la cultura política desde la perspectiva de la comunicación

Larissa Tristán Jiménez
Carlos Brenes Peralta
Carolina Carazo Barrantes

Introducción y definición de cultura política

La metáfora que describe las elecciones nacionales como una “gran fiesta democrática” ha alimentado la narrativa sobre la nación imaginada costarricense. Sin embargo, el aumento del abstencionismo -que alcanzó el 40,65% en las elecciones presidenciales de 2022¹- sugiere que el festejo no es compartido por toda la ciudadanía, al tiempo que refleja cambios en la cultura política nacional.

La cultura política se define como “... el conjunto de prácticas simbólicas populares y de valores patrios nacionales insertos en los procesos de legitimación del poder, que se aprenden, se hacen propios y se interiorizan al participar en la fiesta y en el proceso electoral” (Fumero, 2000, p. 42). Si bien la cultura política se consolida en el proceso electoral, no se limita a esta coyuntura, sino que también se va construyendo, renovando y negociando en el marco de épocas de “normalidad política”. Elementos como el conocimiento

¹ Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

político que las personas tienen sobre las instituciones, las fuerzas políticas y los derechos y deberes, tanto individuales como colectivos, constituyen la cultura política de una sociedad, la cual, además, no es homogénea, sino que atraviesa transformaciones a raíz de los cambios tecnológicos, culturales y económicos (Fumero, 2000, p. 43).

Esa esencia cambiante de la cultura política también incide en su abordaje. Al inicio se estudiaba en asociación con los valores, actitudes y creencias de la ciudadanía. Posteriormente, se analizaba el impacto de la globalización económica y, en la actualidad, la tendencia es explorar cómo la reconfiguración de la democracia representativa y el surgimiento de la comunicación digital permean la cultura política (Barandiaran, Unceta y Peña, 2020).

Precisamente, la reconfiguración de las democracias ha llevado a suponer que estamos ante una *neo-ciudadanía* (Cherniavsky, 2017) y una *nueva cultura política* que se distingue por la no identificación de los votantes con un partido político en particular, el surgimiento de nuevas formaciones lideradas por figuras atípicas y un desinterés por la política como consecuencia del “incumplimiento de los axiomas en los que se fundamentaba la confianza en los sistemas democráticos representativos” (Barandiaran *et al.*, 2020, p. 262). Podría decirse, entonces, que los malestares sociales surgen precisamente cuando los gobiernos no logran cumplir con esos axiomas de la democracia. Por tanto, el ejercicio de identificar y analizar esos malestares sociales podría dar indicios sobre cómo se configura la cultura política nacional.

En este capítulo se analiza la relación entre el ecosistema de medios de comunicación, incluyendo redes sociales, los malestares sociales y la cultura política costarricense contemporánea. Se parte de la premisa de que la democracia solo puede serlo si está asentada sobre fuertes cimientos de comunicación e información: una democracia robusta pasa por una ciudadanía informada y una ciudadanía que participa en la vida en democracia. Por eso, este capítulo se detiene a analizar diferentes aristas de este fenómeno: acceso, consumo, credibilidad y desórdenes comunicativos (discursos de odio y desinformación).

1. Metodología

Los hallazgos que se discuten se derivan, por una parte, de los 19 grupos focales (GF) realizados con poblaciones de todo el país entre agosto y septiembre de 2023 y, por otra parte, de dos grupos focales adicionales que se realizaron en noviembre de 2023, durante los cuales se discutieron las temáticas relacionadas con este capítulo. En estos dos grupos participaron 7 personas de la Gran Área Metropolitana (GAM) en uno, y 8 personas que viven fuera de la GAM, en el otro. Los grupos de discusión fueron analizados mediante las siguientes categorías: acceso, consumo, credibilidad de

los medios de comunicación, malestares sociales y discurso de odio y desinformación.

2. Principales malestares sociales

En lo relativo a los “malestares sociales”, las personas participantes identificaron 10 problemáticas: seguridad, empleo, institucionalidad, educación, economía, corrupción, desigualdad, desinformación, discursos de odio y otros. No hay diferencia en función de los perfiles de las personas participantes, es decir, los malestares fueron identificados de forma similar por las personas jóvenes, adultas y docentes. Tampoco fue posible identificar variaciones por lugar de residencia (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*). La mención de estos fenómenos va en la misma línea de lo reportado por la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), publicada en septiembre de 2023, según la cual para las personas participantes los principales problemas del país son: la inseguridad y delincuencia (27,8%), corrupción (15,9%), desempleo (13,2%) y la situación económica (12,8%) (Alfaro *et al.*, 2023).

La percepción de las problemáticas de la inseguridad y la violencia está atravesada por los medios de comunicación, pero también respaldada por las cifras oficiales, según las cuales el 2023 fue uno de los años más violentos en la historia del país. El desempleo, por su parte, es un problema que estaría más atravesado por la experiencia personal, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes o mujeres. Por ejemplo, las personas jóvenes aseguran experimentar la paradoja de la experiencia, es decir, para contratarles les piden haber tenido trabajos previos, a los cuales no han podido acceder por su corta edad o “porque les falta experiencia”; también se argumenta que los derechos laborales se vuelven “una moneda de cambio” o un elemento negociable para poder acceder a un puesto de trabajo (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*):

He escuchado una y dos mil veces de mis amigos que dicen: “es que no me quieren contratar porque no tengo experiencia”, pero ¿cómo va a tener experiencia si nunca ha trabajado? Entonces, ¡qué punto más complicado! (GF Huetar Norte, personas jóvenes)

El desempleo se ve como un factor que causaría la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un aspecto interesante -y estrechamente vinculado con la cultura política- es que para las personas participantes la falta de empleo y el acceso a educación de calidad son dos factores que inciden en el desarrollo y la movilidad ascendente. En concreto se argumenta: “el empleo, junto con la educación... se encuentran en la base del desarrollo social y de la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas” (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*).

3. Acceso: más que solo la tecnología y la conexión

En el marco de estos malestares sociales, en la era digital, un importante reto (entre muchos otros) para la participación política efectiva es el acceso. El acceso se relaciona con lo que conocemos como brecha digital, pero lo trasciende y, más bien, lo correcto es hablar de “desigualdades digitales” (Helsper, 2021). La autora propone que, al estudiar el acceso, la brecha y las desigualdades digitales se analicen en tres niveles: 1) el acceso a la infraestructura y la tecnología, incluyendo la calidad de este acceso; 2) habilidades para el uso de Internet y tipos de actividades y usos digitales y 3) los impactos (*outcomes*) positivos y negativos de los usos de las tecnologías digitales en las vidas de las personas.

En Costa Rica, el primer nivel no presenta enormes brechas. En un país de 5 millones de habitantes, en el año 2022 el servicio de acceso a Internet (fijo y móvil) era de 6 107 615. Las suscripciones totales de acceso a Internet móvil por cada 100 habitantes eran del 96% (Superintendencia de Telecomunicaciones [SUTEL], 2022). No obstante, en el país sí se han detectado dos brechas adicionales: 1) la primera por razón de edad, ya que después de los 55 años disminuye el uso de las plataformas digitales, especialmente las que suelen ser más populares como Facebook y WhatsApp y 2) por nivel educativo, ya que el uso de plataformas también decrece según el nivel de escolaridad (Brenes, Siles y Tristán, 2023).

Esto quedó evidenciado en dos de los grupos focales conformados por adultos y docentes de todo el país, porque todas las personas participantes afirmaron tener buen acceso a internet. No obstante, una persona recordó que no necesariamente es la realidad de toda la población:

Dada la importancia que hoy día tiene el acceso a internet, pienso que debería de ser más asequible, ¿verdad? Hay personas que tienen que escoger entre pagar el internet o pagar otros gastos de la casa. Yo trabajo en comunidades de la zona bananera y también de la zona indígena y ahí es donde uno ve que tienen que elegir, porque no les alcanza: si comer o pagar el Internet, si llevar la clase o no; o tienen que caminar 2 horas o más para conectarse en algún lugar. (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes)

En relación con el segundo y tercer nivel de desigualdades digitales que menciona Helsper (2021), las personas participantes en los grupos focales reconocen que si bien todas las personas tienen el mismo derecho de participar, en la práctica, muchos factores influyen en que algunas saquen mayor provecho de ese derecho que otras. En este sentido, consideran que el acceso a Internet ya no es un gusto, sino que se ha convertido en una necesidad; se requiere acceso para el estudio y también para el trabajo y la participación política.

Una persona afirmó que el Internet “ha revolucionado la forma de hacer política o la forma de llegar al ciudadano” (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes). Otra recalcó que permite tener más información y más rápidamente al alcance y una tercera recordó que gracias a las redes sociales la ciudadanía votante “tiene la oportunidad de conocer de manera directa el pensamiento de los candidatos y del equipo de trabajo que está con ellos” (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes).

Cuando de acceso se trata, el plano personal de cada ciudadano y ciudadana no fue el único mencionado por las personas en los grupos focales; también se mencionó el acceso desigual a los medios de comunicación y a la pauta publicitaria, así como la necesidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asuma la responsabilidad de promover una pauta equitativa entre todos los partidos políticos (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*). Debe recordarse que Costa Rica y Honduras son los únicos países en América Latina donde los medios de comunicación no dan espacios gratuitos a todos los partidos políticos por igual para anunciarse por medio de “franjas electorales” (Pomareda, 2022).

4. Falta de confianza y crisis de credibilidad de los medios

Las personas participantes en los grupos focales son enfáticas al afirmar que el consumo de medios informativos tradicionales ha disminuido, principalmente entre las personas más jóvenes (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*). Por su parte, las personas consultadas que viven fuera de la GAM argumentan que los medios tradicionales suelen privilegiar los contenidos “vallecentralistas” y no se incluyen informaciones sobre sus regiones, por eso prefieren medios televisivos de corte comunitario como canal 8 o canal 36. Al respecto señalan:

Medios grandes, ok, hablamos de canal seis, canal siete, el canal 13, medios populares, antes decíamos que para saber si se está diciendo la verdad había que ver canal siete o canal seis, porque ellos eran los medios de comunicación. Ahora uno dice, ya no puedo ver las noticias porque no sabemos si se está informando la verdad. (GF Huetar Norte, jóvenes)

Indican que los medios tradicionales no les generan confianza e incluso señalan que están atravesando una crisis de credibilidad, pues consideran que, en lugar de informar a la ciudadanía, los contenidos reflejan los intereses económicos, indican que cada medio “vende lo que quiere” -o políticos- como “dejar mal al presidente”. Por otro lado, también apuntan que la comunicación del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles ha contribuido con el desprestigio de los medios de comunicación, como puede verse en el siguiente extracto:

Yo creo que en este Gobierno, principalmente, ha habido mucha habilidad para desprestigiar a los medios, especialmente por el dicho este de la “prensa canalla” que se acuñó y que todo el mundo lo repite ha ayudado mucho a que los medios no tengan credibilidad. (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes)

Asimismo, asocian la tensión entre los medios y el Ejecutivo como un rasgo del corte populista que le atribuyen al discurso de Chaves Robles:

Pues entonces sí tiene razón el compañero, los medios de comunicación están bastante desprestigiados en este país y creo que sucede en todos los países donde existen gobiernos de corte populista, porque de eso se encargan los que dirigen el Estado, de desprestigiar a todo aquel medio, a toda aquella persona, que se oponga y que de alguna manera pretenda desenmascarar o dar conocer lo que está mal. (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes)

Estos resultados de los grupos focales en cuanto a la temática de credibilidad y confianza en los medios de comunicación no representan algo nuevo. Se trata de un fenómeno que ya ha sido estudiado y documentado por la academia (Mayoral, Parratt y Morata, 2019). En Costa Rica, una encuesta del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI, 2023) de la Universidad de Costa Rica apunta que, en general, la ciudadanía no confía en el trabajo de los medios de comunicación y no está de acuerdo con que siempre digan la verdad. Los resultados de la encuesta también parecen indicar que las personas dudan sobre los verdaderos intereses de los medios a la hora de informar (un 73% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que los medios solamente responden a intereses de los dueños) (p. 11). La encuesta también preguntó a las personas el nombre del medio de comunicación costarricense al que le atribuyen más credibilidad. La respuesta con mayor porcentaje fue el 20% que afirmó que ningún medio tiene credibilidad actualmente.

En este contexto en el que, por un lado, la credibilidad y la confianza de los medios tradicionales ha caído y en el que, por otro lado, la oferta y fácil acceso a nuevas fuentes de información se ha disparado, no extraña encontrar un ecosistema mediático y digital muy diverso, pero también muy fragmentado.

5. Consumo de medios tradicionales y redes sociales para informarse

La oferta informativa y noticiosa presente en la ecología mediática y digital actual genera oportunidades sin precedentes para que las personas decidan por sí mismas cuáles tecnologías, fuentes, enfoques informativos y temáticas quieren consumir para informarse, confirmar o reforzar sus opiniones y evaluaciones sobre lo que acontece en el país.

Los resultados de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023 (IFED y FLACSO Costa Rica) señalan que las y los costarricenses prefieren

informarse mediante la televisión, seguido en segundo lugar por las redes sociales. Este hallazgo es consistente con la evidencia aportada, tanto por estudios internacionales recientes (por ejemplo, Pew Research Center, 2023) como por encuestas nacionales que han empleado muestras representativas (ver Alfaro *et al.*, 2018).

Por su parte, en el caso de WhatsApp, es interesante observar cómo las personas consultadas en 19 de los grupos focales indican que es la tecnología que más utilizan para la comunicación -lo cual coincide con los datos de otros estudios (por ejemplo, Brenes *et al.*, 2023 y Latinobarómetro, 2018)-. Sin embargo, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos mediante grupos focales sugieren que las personas no toman en cuenta WhatsApp como una tecnología para enterarse sobre noticias e información relevante. Estos hallazgos son contrarios al estudio de Brenes *et al.* (2019), quienes encontraron que WhatsApp no solo es una tecnología importante para la comunicación, sino que es la principal plataforma que utilizan las personas para informarse sobre diferentes tipos de noticias, inclusive por encima de la televisión y las redes sociales.

Aun cuando la televisión es el medio de preferencia para consumir información y, en el caso de WhatsApp, los resultados de este y otros estudios introducen un debate en el contexto nacional sobre la prevalencia de los usos informativos de esta tecnología, es bastante claro que, como lo ha venido señalando la literatura internacional y nacional, las redes sociales son plataformas digitales de gran relevancia cotidiana para la generación de oferta y la expresión de demanda por noticias e información.

El resto de este apartado se dedicará al consumo informativo mediante redes sociales por varios motivos. Primero, además de los datos previamente mencionados sobre la popularidad de las redes sociales para usos informativos, desde hace varios años la oferta noticiosa de los medios de comunicación -sean televisivos, prensa escrita o digital- está también presente en las redes sociales (ver Brenes *et al.*, 2019). Segundo, estas plataformas ofrecen una dieta informativa más diversa, la cual incluye medios alternativos, las páginas de fuentes oficiales estatales u organizacionales, aquellas de actores políticos, de personas expertas, líderes de opinión, grupos organizados para informarse sobre temas de interés, así como la oportunidad de conocer lo que otros ciudadanos y ciudadanas consumen y piensan. Tercero, relacionado con lo anterior, las redes sociales han retado el rol de los medios de comunicación como *gatekeepers* de la información. Actualmente, el acceso a la información no es estrictamente mediatizado como en el pasado, sino que las personas poseen mayor agencia para buscar, seleccionar y consumir contenidos informativos acorde a sus preferencias y necesidades personales.

En esta línea, los resultados de las consultas por medio de los 19 grupos focales evidencian que las personas prefieren informarse por medio de las

redes sociales, ya que pueden elegir y dosificar de cierta forma la información que quieren consumir y profundizar en un tema de su interés. No resulta sorprendente, por tanto, que la mayoría de las personas consultadas, independientemente de su edad, cuentan con redes sociales y las frecuentan para consultar información de diferente tipo. Ahora bien, sí señalan algunas diferencias en las preferencias de una u otra red social. Por ejemplo, Instagram y TikTok son utilizadas principalmente por personas jóvenes, mientras que Facebook es preferido por personas de un grupo etario mayor. A pesar de las diferencias en las características propias de cada red social, los hallazgos que se presentan a continuación, sobre las fuentes informativas y noticiosas que consumen las personas, permiten hipotetizar que diferentes grupos sociodemográficos pueden acceder de manera similar a las fuentes que buscan en tanto muchas de estas, por ejemplo los medios de comunicación, están presentes en varias redes sociales.

A dos grupos focales conformados por adultos y docentes que residen dentro o fuera del Valle Central se les preguntó sobre las principales fuentes de noticias e informaciones que utilizan en redes sociales para informarse. Las personas participantes reconocen que hay un vasto menú de fuentes en redes sociales y, por tanto, deben recurrir a diversos heurísticos para seleccionar los contenidos por consumir. Por ejemplo, pueden elegir fuentes cuyo enfoque temático es compatible con sus preferencias actitudinales. Otro heurístico es seleccionar fuentes que tratan temas de importancia personal para ellos y ellas. Por su parte, todas las personas participantes coinciden en que es indispensable confiar en las fuentes que consultan en el sentido de que ofrecen informaciones valoradas como veraces. Una “búsqueda de la verdad” es experimentada por las personas como un reto cotidiano que deben enfrentar ante la creciente, saturada y diversa calidad de informaciones que se pueden encontrar en las redes sociales.

Andar buscando la verdad. A veces uno se confunde porque uno no sabe quién realmente dice la verdad en estos casos, porque como se tiran tanto. Bueno, hay muchos periódicos, pero también personas que generan contenido, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque, este, hay unos que lo dicen con buen contexto y hay otros que no. Entonces, hay que tener mucho discernimiento en cuanto a eso. (GF Valle Central, personas adultas y docentes)

Al indagar específicamente sobre las fuentes informativas de preferencia en redes sociales, ambos grupos focales reportaron consumir medios tradicionales (televisión y prensa escrita) vía sus páginas en redes. De igual manera, también atienden a medios digitales que han surgido en los últimos años (por ejemplo, CRHoy, Delfino). Estos hallazgos son iguales a los reportados por Brenes *et al.* (2019) mediante una encuesta con una muestra representativa. En su mayoría, las personas participantes consumen medios de comunicación costarricenses y, en menor medida, medios internacionales para informarse sobre noticias de otros países. En el contexto geográfico

nacional, las personas de las regiones fuera de la GAM recriminan a los medios tradicionales por favorecer un enfoque plenamente vallecentralista y, por el contrario, dejan de lado a las comunidades. No obstante, el surgimiento de medios televisivos nuevos (por ejemplo, canales 8 o 36), los cuales tienen un enfoque más popular y comunal, resulta más atractivo para las poblaciones de las regiones.

Otro hallazgo por mencionar es que algunas personas están motivadas a consumir diversas fuentes noticiosas, que varían en su tratamiento de un tema o asunto, con el fin de conocer y contrastar diferentes perspectivas y, de esta manera, sentir que están mejor informadas. Además, aunque se frecuentan múltiples medios noticiosos, se observa una preferencia por aquellos de consumo gratuito, aun cuando algunas personas también consumen ciertas fuentes de pago por suscripción digital. Adicionalmente, junto a las páginas de medios, varias personas son habituales consumidoras de noticias e informaciones que publican periodistas específicos en sus perfiles públicos.

Ahora bien, el Internet y las redes sociales permiten a las personas no depender exclusivamente de las informaciones que les hacen llegar los medios de comunicación y periodistas. Los datos cuantitativos mostraron un interés por informarse directamente mediante las publicaciones que hacen instituciones públicas, organizaciones y actores políticos (p. ej. ministerios, presidente de la república, diputados y diputadas) en sus páginas y perfiles en las redes.

Tomo como fuentes de noticias a nivel político los sitios de algunos diputados, con quienes siento afinidad política. Entonces, lo que publican ahí a veces son opiniones, a veces son criterios sobre un proyecto de ley que se está discutiendo que es de interés para la ciudadanía y ese tipo de cosas. Yo creo que aportan también información en las redes sociales que tal vez antes no era tan sencillo de acceder, cuando una era sesgada solamente hacia un medio noticioso consolidado. (GF Valle Central, personas adultas y docentes)

Las dietas informativas de las audiencias en redes sociales pueden basarse no solo en el consumo de fuentes periodísticas u oficiales. En los dos grupos focales, ciertas personas mostraron atracción por páginas que podrían tipificarse de infoentretenimiento. Estas incluyen creadores de contenido que no son periodistas o personas expertas en una temática. Usualmente, ocultan su identidad real detrás de un personaje y persiguen agendas ideológicas, políticas y económicas particulares, las cuales orientan la manera como se produce y disemina información -no siempre veraz- sobre actores políticos y sociales, el Estado o medios de comunicación.

El consumo de redes sociales no puede desligarse de la problemática de acceso descrita en el primer apartado (Metodología) de este capítulo, porque si bien el aumento en el uso de las redes sociales hace que la información circule en abundancia, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder

a estas y, aunque tengan los dispositivos necesarios, no todas las personas cuentan con la alfabetización tecnológica necesaria para hacer un uso eficiente de esas herramientas (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* y grupos focales sobre *Malestares sociales y democracia*). Una persona joven del área Chorotega dio un ejemplo contundente de su localidad:

...la accesibilidad a lo que son las tecnologías, porque en Martina, y vuelvo a Martina porque es donde vivo y es la realidad que conozco, no hay internet. Hay personas que no tienen tele. Entonces, ¿cómo acceden a las noticias? ¿Cómo acceden a lo que está sucediendo? (GF Chorotega, jóvenes)

Esto cobra aún mayor importancia cuando se analiza a la luz del creciente uso de redes sociales por parte de los partidos políticos. Según el Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* y grupos focales sobre *Malestares sociales y democracia*:

...el cambio de paradigma con respecto a los medios de comunicación y su alcance ha sido leído de forma correcta por los partidos políticos, quienes hacen uso de las redes sociales cada vez de manera más frecuente con la intencionalidad de mantener mayor cercanía con el electorado, principalmente con las personas jóvenes. Este hecho fue evidenciado durante la elección presidencial anterior, donde las redes sociales y la realización de estrategias como memes se vio incrementada, dando mucha visibilización a los partidos. Es decir, ya no son suficientes los campos pagados en grandes medios de comunicación, sino que las agrupaciones se ven obligadas a generar un intercambio con la población por medio de redes sociales. Los medios virtuales permiten de cierta forma, realizar control político y promover una ciudadanía activa.

Por otra parte, el estudio cualitativo evidenció la importancia de la comunicación interpersonal y la pertenencia a grupos como otra forma para acceder a fuentes informativas de utilidad y valor. Según varias de las personas consultadas, cuando quieren informarse sobre determinadas temáticas o coyunturas, se comunican con personas conocidas y amistades que son fuentes expertas. A su vez, es común que ciertas personas usuarias de redes sociales consulten información concreta en grupos integrados por individuos que comparten temas de interés.

Finalmente, se exploraron los tipos de noticias e informaciones que consumen los dos grupos focales de personas adultas y docentes. Se reportaron preferencias por noticias que abordan temáticas importantes para las personas consultadas y que afectan sus vidas. Así, por ejemplo, consumen con frecuencia contenidos informativos sobre educación, salud, derechos laborales, medio ambiente y cambio climático, seguridad, economía, corrupción y desempleo.

6. Desórdenes informativos: desinformación y discurso de odio

Aunque, como se vio en el apartado 5, las personas que participaron en los grupos de discusión prefieren informarse a través de las redes sociales, siguiendo los perfiles de *influencers* o mediante la suscripción a medios digitales específicos, también reconocen cierta toxicidad en estas plataformas, sobre todo en las secciones de comentarios. Desde su punto de vista, esto impide que se puedan entablar discusiones constructivas. Por otra parte, también argumentan que la facilidad con la que se pueden crear, difundir y consumir contenidos digitales ha favorecido la propagación de las noticias falsas.

Resulta llamativo que para las personas consultadas la desinformación más que un concepto es un estado o una condición a la que se llega como consecuencia de las noticias falsas. Es decir, la desinformación es el resultado de la exposición a las *fake news* o a la posverdad. Argumentan que son parte de la cotidianidad, por tanto, todas afirman haber recibido o leído algún contenido en apariencia falso.

Desde su punto de vista, dicha ubicuidad tendría, también, consecuencias a nivel motivacional en el tanto que la desinformación puede incidir en la toma de decisiones de la ciudadanía. Al respecto, señalan: “En ese sentido, la desinformación y las *fake news* son igualmente peligrosas porque ayudan a la gente a tomar decisiones equivocadas” (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes).

Para algunas personas, un ejemplo de lo anterior fueron las vallas distribuidas por todo el país durante la campaña electoral de 2022 en las que aparecían Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves. A pesar de que Cisneros era candidata a diputada únicamente por la provincia de San José, estas vallas fueron colocadas en todas las provincias del territorio nacional.

Al hablar de desinformación, las personas participantes en los grupos focales no se limitaron a asociar la problemática con las noticias falsas, sino que también discutieron sobre el fenómeno de los troles y el pago por opiniones en redes sociales. En las discusiones, había claridad en que tanto los contenidos desinformativos como este tipo de participación en redes sociales (a través de granjas de troles y de opiniones pagadas) tienen impacto en el debate público y, por tanto, en la democracia al profundizar la desconfianza en las instituciones y en el sistema político (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*):

Creo que, en cuanto al sistema democrático, eso no ayuda en nada y creo que también por eso se han diluido un tanto las campañas políticas. Ya uno no sabe si está

discutiendo con una persona real o con bots en una red social, sobre una temática, sobre una problemática. Entonces, creo que al final de cuentas es una problemática que afecta a la democracia, al sistema político, a los procesos electorales, a la educación cívica, a la educación en términos generales... (GF docentes)

Todos los grupos de discusión concuerdan en que el combate a la desinformación es un enorme reto que si bien debe ser asumido desde diferentes frentes, la mejor forma de hacerlo es a través del sistema educativo formal y no formal promoviendo espacios para posicionar la discusión sobre noticias falsas y compartir al menos nociones básicas sobre el conocimiento y manejo de información por medio de redes sociales.

Las personas docentes y adultas coinciden en que se debe procurar un acompañamiento para adolescentes y jóvenes, con el objetivo de que puedan construir un pensamiento crítico y discernir entre la gran cantidad de información a la que tienen acceso (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*): "Creando personas críticas vamos a romper un poco esa línea informativa. Por ejemplo, algo que al menos nosotros promovemos mucho es el contrastar perspectivas, porque a veces creo que caemos en el error de creer que hay verdades absolutas" (GF docentes).

Otro mecanismo interesante propuesto desde el grupo focal de personas adultas en la región Pacífico Central tiene que ver con acercar las instituciones públicas a las comunidades, principalmente las instituciones que tienen dentro de sus mandatos velar por el cumplimiento de derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*).

Por otro lado, en la misma línea de los llamados desórdenes informativos, el discurso de odio es entendido por las personas participantes como aquellos mensajes que incitan a la violencia -tanto física como emocional- en contra de un grupo específico, con el fin de deshumanizarlo, y coinciden en que las mujeres y las minorías étnicas son los grupos que más experimentan discursos de odio o interacciones violentas.

La percepción de las personas participantes coincide con los datos del *III Informe sobre los discursos de odio y de la discriminación*², publicado en junio de 2023. Durante el periodo de análisis del informe, fue posible identificar 1,4 millones de mensajes y conversaciones en redes sociales de Costa Rica que transmitían discursos de odio o discriminación. Esto implica

² El informe es elaborado por la empresa Coes y la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica con el apoyo del Observatorio de los Discursos de Odio y de la Discriminación del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica.

un aumento del 50% con respecto al análisis efectuado en 2022, cuando se identificaron 937 mil mensajes con estas características.

Para las personas participantes, especialmente las que se dedican a la docencia, la prevalencia del discurso de odio en redes sociales es asociado con el *bullying* que ven en las aulas, e indican que el anonimato de las redes sociales favorece la propagación de este tipo de expresiones, tal y como puede verse en el siguiente extracto: “Yo me pregunto, ¿si lo estuvieran viendo a la cara, dirían lo mismo o simplemente se están protegiendo detrás de una pantalla?” (GF fuera del Valle Central, personas adultas y docentes).

Otro efecto que detectan en asociación con el discurso de odio es la autocensura, pues argumentan haber recibido ataques por expresar su punto de vista y opiniones en redes sociales, lo cual los ha llevado a inhibirse o limitar lo que comentan en dichas plataformas.

7. Reflexiones finales

Todavía queda la idea, en el imaginario colectivo costarricense, de que las elecciones presidenciales son como una fiesta que refleja la fortaleza del sistema democrático. Si se toman en cuenta otros aspectos, como quiénes participan o se excluyen del festejo, las campañas electorales también permiten explorar los cambios experimentados por el sistema y por la cultura política. Este capítulo ofrece una posible respuesta a la pregunta sobre qué caracteriza a la cultura política nacional actualmente.

En primer término, los resultados sugieren que persiste una “visión positiva de la democracia costarricense”, pero también que esta coexiste con críticas y con la rememoración de la “fiesta democrática de antaño” (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* y grupos focales sobre *Malestares sociales y democracia*). Estas críticas, categorizadas como “malestares sociales”, generan desmotivación entre las personas participantes. Asimismo, sus respuestas sugieren que el descontento externado es producto de un incumplimiento de la clase política por garantizar los “axiomas de la democracia”, lo anterior en tanto que se cuestiona la habilidad de los gobernantes por garantizar el trabajo, la educación o la seguridad ciudadana. Este “desencantamiento ciudadano” es una señal de alerta, pues el incumplimiento de los axiomas democráticos va en detrimento de la confianza en la democracia representativa (Barandiaran *et al.*, 2020). Del mismo modo, existe evidencia de que el desarrollo económico favorece la supervivencia de las democracias (Inglehart y Welzel, 2002). Por tanto, se requieren mayores esfuerzos para enfrentar la crisis económica actual.

El estudio de estos “malestares sociales” en asociación con la cultura política también es relevante porque hay evidencia de que esta desilusión genera “sociedades exasperadas” (Innerarity, 2017), en las cuales el miedo, el

enojo, la desesperación y la vulnerabilidad facilitan la adhesión a discursos antidemocráticos y fomentan la propagación de los discursos de odio y de las interacciones violentas en redes sociales, tal y como fue descrito por las personas participantes.

La frustración que proviene de la imposibilidad de satisfacer los derechos básicos es un fenómeno que tiene profundas consecuencias en la conformación de la cultura política; no solo porque incide en la posibilidad de que cada persona goce de una vida digna, sino también por su costo psicosocial. Al respecto, Sadin (2020) argumenta que, después del giro neoliberal de los años 80, se ha dado una “ruptura del pacto de confianza” favorecedora del “advenimiento de subjetividades revanchistas” que buscan construir un relato a partir de distorsiones informativas como los discursos de odio o las *fake news*. Con respecto a este tema, los hallazgos sugieren que hay una “normalización” de las noticias falsas, en tanto las personas participantes afirman que su aparición es algo cotidiano. Para efectos de la construcción de cultura política, la omnipresencia atribuida a la desinformación podría tener consecuencias en la cultura política porque impide la construcción de una narrativa común que nos cohesione a nivel social, fenómeno que ya había sido advertido en estudios anteriores (ver Siles, Tristán y Carazo, 2021).

En segundo término, fue posible identificar una gran desconfianza hacia los medios de comunicación. Lo anterior sugiere una ruptura del llamado “contrato pragmático fiduciario” el cual se basa en la confianza que las audiencias depositan en los medios y en función de la cual le atribuyen veracidad al discurso periodístico, aun sabiendo que su objetividad no es absoluta, sino una propuesta de lectura (Rodrigo, 2005, p. 61). Como consecuencia de esta fractura, las personas participantes eligen informarse a través de perfiles de redes sociales de creadores de contenido que no siempre cumplen con los criterios de rigurosidad periodística. Por tanto, el conocimiento político -pilar de la cultura política- se obtiene a partir de una multiplicidad de fuentes que no siempre emiten contenidos verificados. En este contexto la difusión de la desinformación es mayor, lo cual amerita incentivar la adquisición de competencias y herramientas de alfabetización mediática y digital que le permita a la ciudadanía distinguir la legitimidad de los contenidos que consume.

Un tercer elemento tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, el cual parece debilitado por la autocensura en redes sociales ante el temor de ser objeto de discursos de odio o, precisamente, por haber recibido ataques con anterioridad. Si entendemos los discursos de odio como discursos sociales que reflejan un contexto particular -caracterizado por el auge del populismo autoritario, la ruptura de un pacto de confianza y la crisis económica-, es posible argumentar que las interacciones violentas no empiezan ni terminan en las

redes sociales, sino que reflejan un contexto en el cual el ataque ha sustituido al diálogo, tal y como argumentan quienes participaron en el estudio.

Desde su punto de vista, los problemas del país son consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo económico y de la incapacidad de la clase política de idear y aplicar mejores políticas públicas. Por tanto, se percibe una desconexión entre la legitimidad de las instituciones democráticas y sus posibilidades para gestionar esos fenómenos. En el marco de la reconfiguración democrática, subsanar esa desconexión debería ser una tarea prioritaria dada la importancia que tiene la legitimidad en la construcción de la cultura política democrática.

8. Referencias

Alfaro Redondo, R., Alpízar Rodríguez, F., Cascante Matamoros, M. J., Brenes Peralta, C., Sáenz, J. y Martínez, G. (2018). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en noviembre de 2018*. Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR).

Alfaro Redondo, R., Camacho Sánchez, S., Chacón Mendoza, D., Ruiz Tijerino, F. y Aguilar Villamariona, J. (2023). *Informe de resultados de la encuesta de opinión pública realizada en noviembre de 2023*. Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR).

Barandiaran, X., Unceta, A. y Peña, S. (2020). Comunicación política en tiempos de nueva cultura política. *Icono 14*, 18(1), 256-282.

Brenes Peralta, C., Pérez Sánchez, R. y Siles González, I. (2019). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica: audiencias noticiosas de medios digitales: redes sociales, WhatsApp y noticias falsas*. Centro de Investigación y Estudios Políticos, Centro de Investigación en Comunicación e Instituto de Investigaciones Psicológicas (CIEP, CICOM, IIP/UCR).

Brenes Peralta, C., Siles González, I. y Tristán Jiménez, L. (2023). *Nuestras Apps de cada día: Informe sobre el uso de plataformas digitales en Costa Rica*. Centro de Investigación en Comunicación (CICOM/UCR).

Cherniavsky, E. (2017). *Neocitizenship: political culture after democracy*. NYU Press.

Corporación Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. Banco de datos en línea. www.latinobarometro.org

Fumero Vargas, P. (2000). Cultura política y fiesta electoral en Costa Rica a inicios del siglo XX. *Revista de Ciencias Sociales*, 89, 41-57.

Helsper, E. (2021). *The digital disconnect: the social causes and consequences of digital inequalities*. SAGE.

Mayoral, J., Parratt, S. y Morata, M. (2019). Desinformación, manipulación y credibilidad periodísticas: una perspectiva histórica. *Historia y Comunicación Social*, 24(2), 395-409.

Pew Research Center for the People and the Press. (2023). *News platform fact sheet*. <https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/news-platform-fact-sheet>

Pomareda García, F. (2 de febrero de 2022). Elecciones 2022: solo en Costa Rica y Honduras los medios no dan espacios por igual a todos los partidos políticos mediante "franjas electorales". *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/solo-en-costa-rica-y-honduras-los-medios-no-dan-espacios-por-igual-a-todos-los-partidos-politicos-mediante-franjas-electorales/>

Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI). (2023). *Encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación* (Resumen ejecutivo de resultados). Universidad de Costa Rica. <https://proledi.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2023/10/Informe-Encuesta-de-Libertad-de-Expresio%CC%81n-en-Costa-Rica-2023.pdf>

Rodrigo Alsina, M. (2005). *La construcción de la noticia*. Paidós.

Siles, I., Tristán Jiménez, L. y Carazo, C. (2021). *Verdad en extinción: miradas interdisciplinarias a la desinformación en Costa Rica*. Centro de Investigación en Comunicación (CICOM/UCR).

Simone, R. (2016). *El hada democrática. Por qué la democracia fracasa*. Taurus.

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). (2023). *Estadísticas del sector de telecomunicaciones*. Superintendencia de Telecomunicaciones. https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informe_estadisticas_del_sector_de_telecomunicaciones_costa_rica_2022.pdf

SECCIÓN 2.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL

Capítulo I. Formas de participación política

Marco Vinicio Fournier Facio

Introducción

A partir de los grandes movimientos de protesta de los años sesenta, que culminan con las jornadas de mayo de 1968 en París, se inicia un cuestionamiento a la democracia tradicional representativa, y se profundiza un análisis sobre formas de participación política más activas y directas bajo el concepto de *democracia participativa* (Aguilar, 2017; Gonzaga, 2020 y Máiz, 2004). Esta propuesta cuestionaba el rol asignado a las y los ciudadanos en la democracia representativa, en donde tradicionalmente tenían un papel muy pasivo, limitado generalmente a ejercer el voto en cada elección, que delegaba la toma de decisiones en las personas que los representaban (Fals, 1986).

Por el contrario, la idea de la democracia participativa:

busca recuperar el poder (de las y los ciudadanos) como constituyentes primarios de la sociedad civil sin formar partidos políticos a la manera tradicional; tiende a generar instancias de coordinación e intercambio desde las bases, y no comandos centrales ni jefaturas superiores; la pertenencia de los miembros es espontánea y sin credenciales. (Aguilar, 2017, p. 11)

La democracia participativa "... significa mutuo respeto, tolerancia, entendimiento, pluralismo, comunicación e identidad de propósitos, aun con las diferencias implícitas por la experiencia vital en los individuos en cuanto tales" (Fals, 1986, pp. 10-11). En estas condiciones de mayor participación, las y los ciudadanos tienen un peso mayor en el proceso de deliberación de iniciativas y pueden ejercer una mayor presión en las personas tomadoras de decisiones. Pero, para lograr estos efectos, es necesaria la ampliación de espacios de participación para actores más débiles a nivel social, político o económico (Gonzaga, 2020), entre los cuales sobresalen las opciones de denuncia a través de la Defensoría de los Habitantes, la Sala IV o espacios de comunicación y divulgación, en donde las redes sociales han asumido un papel muy importante. Del mismo modo, además de las posibilidades de denuncia directa, deben garantizarse, también, condiciones básicas para posibilitar el derecho a manifestarse y a participar en acciones de protesta.

Una consecuencia muy importante de este enfoque que busca potenciar una mayor participación política consiste en un efecto pedagógico, "cualificando la participación para que los actores perfeccionen sus capacidades de juicio" (Gonzaga, 2020, p. 159). Un ejemplo muy importante de este efecto positivo de reforzamiento de las capacidades de juicio se evidencia claramente en la relación inversa entre niveles de participación y autoritarismo, pues resulta evidente que cuanto más participa la persona en actividades políticas, sobre todo a nivel de denuncia, manifestación y protesta, menor es su adhesión a tendencias antidemocráticas y autoritarias (Fournier, 2023 y Godás, 2003).

1. Percepción, participación y disposición a participar

Desde 2002, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ha implementado la *Encuesta nacional de cultura política y participación ciudadana*, mediante un estudio cada cuatro años, luego de cada elección nacional (Raventós *et al.*, 2005; Ramírez *et al.*, 2010; Raventós *et al.*, 2012; Pignataro y Cascante, 2017 y Alfaro *et al.*, 2021). A partir del estudio de las elecciones de 2006, se introdujo una pregunta que indaga sobre la percepción de efectividad de 10 diferentes formas de participación política, y se pregunta acerca de si la persona entrevistada ha realizado cada una de esas 10 acciones en el pasado, así como la disposición para hacerlo de nuevo en el futuro. La pregunta se plantea tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Muestra de pregunta sobre percepción de efectividad en 10 formas de participación política

B. (Y LUEGO PREGUNTE PARA LA MISMA ACTIVIDAD) En los últimos diez años, usted se ha....LEER ALTERNATIVAS. En caso de que diga que Sí, ¿lo volvería a hacer? En caso de que diga que no: ¿estaría dispuesto a hacerlo o nunca lo haría en ninguna circunstancia?

Actividad - ROTAR	A. Qué tanto sirve? 5: Mucho 1: Nada	¿En los últimos 10 años usted lo ha hecho? 1. Sí 2. No 99. NS/NR	B. POSIBILIDAD DE HACERLO				N S/ N R
			Sí lo ha hecho		NO lo ha hecho		
			No lo volvería hacer	Lo volvería hacer	Estaría dispuesto a hacerlo	Nunca lo haría en ninguna circunstancia	
1 Reunirse con un candidato a puesto electoral			1	2	3	4	99
2 Ayudar en la campaña de un candidato a puesto electoral			1	2	3	4	99
3 Firmar una carta a políticos planteando el problema			1	2	3	4	99
4 Bloquear carreteras en protesta			1	2	3	4	99
5 Llamar a los medios de comunicación para quejarse			1	2	3	4	99
6 Presentar un recurso ante la Sala IV			1	2	3	4	99
7 Denunciar ante la Defensoría de los Habitantes			1	2	3	4	99
8 Reunirse con una autoridad del Gobierno			1	2	3	4	99
9 Participar en manifestaciones			1	2	3	4	99
10 Expresar su opinión en redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter			1	2	3	4	99

El ítem 10 se introdujo por primera vez para el estudio de las elecciones de 2014 y se ha mantenido hasta el presente. Además, la encuesta que se analiza en el presente libro (*Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano 2023*) también incluyó esta pregunta. Un análisis factorial de los 10 ítems ha evidenciado una estructura de 3 grandes dimensiones, según se detalla en la tabla 1.

Tabla 1*Estructura factorial de las acciones de participación política (n = 1001)*

Acción de participación política	Factor		
	Comunicación política	Denuncia	Manifestación social
Reunirse con un candidato a puesto electoral	0.801	0.027	0.163
Ayudar en la campaña de un candidato a puesto electoral	0.711	0.010	0.151
Firmar una carta a políticos planteando el problema	0.614	0.325	-0.023
Bloquear carreteras en protesta	0.084	0.107	0.825
Llamar a los medios de comunicación para quejarse	0.166	0.536	0.355
Presentar un recurso ante la Sala IV	0.147	0.752	0.013
Denunciar ante la Defensoría de los Habitantes	0.067	0.760	0.138
Reunirse con una autoridad del Gobierno	0.541	0.290	0.165
Participar en manifestaciones	0.156	0.107	0.831
Expresar su opinión en redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter	0.234	0.316	0.356

Nota. Elaboración a partir de datos de la *Encuesta sobre fuentes de malestar ciudadano, 2023*.

De modo que se identifica una primera dimensión relacionada con 4 formas de comunicación política, centrada en la interacción de las y los ciudadanos con sus representantes, por lo que esta dimensión se refiere más al concepto de democracia representativa. Las acciones de este factor son las siguientes:

1. Reunirse con un candidato a un puesto electoral.
2. Ayudar en la campaña de un candidato a un puesto electoral.
3. Firmar una carta a políticos planteando un problema.
4. Reunirse con una autoridad del gobierno.

Un segundo factor agrupa acciones relacionadas con opciones de denuncia por parte de la ciudadanía. Los ítems de esta dimensión son los siguientes: 1) Llamar a los medios de comunicación para quejarse, 2) Presentar un recurso ante la Sala IV y 3) Denunciar ante la Defensoría de los Habitantes. Finalmente,

el tercer factor se relaciona con acciones de protesta y manifestación pública, con los siguientes ítems: 1) Bloquear carreteras en protesta, 2) Participar en manifestaciones y 3) Expresar su opinión en redes sociales como Facebook, TikTok o Twitter.

Todos los resultados que se presentan a continuación se basan en análisis realizados para cada uno de los tres factores. Concretamente, interesa estudiar el comportamiento de los 10 ítems a través del tiempo, así como la creación de un perfil de las personas según su disposición o no a participar en cada acción en el futuro.

Para calcular el nivel de cada factor, se confeccionó un indicador para cada dimensión, en donde se combinan los ítems respectivos y el resultado de la suma se convierte a una escala de 0 a 100, en donde 0 significa el nivel más bajo en la dimensión y 100 el más alto. Este procedimiento se realizó tanto para el nivel de efectividad como para la participación en el pasado y la disposición a hacerlo en el futuro, y el mismo cálculo se realiza para las 5 encuestas analizadas en el apartado 2.

2. Las formas de participación a través del tiempo

La pregunta acerca de las formas de participación política se ha utilizado en los últimos 17 años en las 5 últimas elecciones. Siendo así, interesa, primero, realizar un análisis acerca del comportamiento de esta pregunta a través del tiempo. La tabla 2 muestra los resultados de las tres dimensiones de participación a lo largo de los 5 estudios.

Tabla 2

Niveles de participación según año de medición

Dimensión	Percepción y participación	Año				
		2006	2010	2014	2018	2023
Comunicación política	Nivel de efectividad percibida	52,2	52,0	47,4	47,5	47,8
	Ha participado	15,2	27,3	19,5	21,2	25,9
	Disposición a participar	51,7	48,5	57,9	62,0	56,6
Denuncia	Nivel de efectividad percibida	71,1	71,0	68,3	65,4	62,8
	Ha participado	6,0	10,3	7,9	11,2	14,9
	Disposición a participar	72,9	70,9	75,5	72,1	66,0

▼ Continuación

Dimensión	Percepción y participación	Año				
		2006	2010	2014	2018	2023
Manifestación social	Nivel de efectividad percibida	25,6	38,8	33,0	37,0	38,3
	Ha participado	6,8	13,5	12,1	19,5	22,7
	Disposición a participar	23,4	30,2	32,1	37,8	38,4

Nota. Encuesta nacional de cultura política y participación ciudadana, 2006, 2010, 2014, 2018 (UCR y TSE) y Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

Para las dos primeras dimensiones se observa una disminución paulatina de la percepción de la efectividad de las acciones correspondientes, de modo que pareciera existir una situación de desgaste en las actividades evaluadas, posiblemente debido a pocas o negativas consecuencias de cada acción, lo cual hace que cada vez se perciban como menos efectivas. Esta situación de desgaste en la percepción de efectividad provoca, a su vez, una disminución paulatina de la disposición a participar en el futuro. En ambos casos, el nivel más bajo corresponde a la encuesta que se analiza en este libro, cuyos datos fueron obtenidos en 2023.

El resultado es diferente para las acciones de manifestación política, en donde la tendencia es muy diferente a la observada para las primeras dos dimensiones. En este caso, la efectividad percibida de las acciones de manifestación y protesta tiene un repunte importante luego de la elección de 2010, pero vuelve a reducirse para las elecciones de 2014, para luego volver a incrementarse en 2018 y alcanzar el nivel de 2010 en la encuesta de 2023.

A pesar de lo anterior, los resultados sugieren que el nivel de participación real en lo que va del siglo ha tendido a aumentar paulatinamente en las tres dimensiones evaluadas. Por último, la disposición a participar en el futuro muestra una tendencia a reducirse a través del tiempo en las dos primeras dimensiones, actitud posiblemente muy relacionada con la percepción de efectividad ya comentada.

Esta posible relación entre percepción de efectividad y disposición a participar en el futuro se comprueba también para el caso de la dimensión de manifestación social, en donde se observa un incremento paulatino y sistemático de la percepción de efectividad y la resultante disposición a participar a través del tiempo. Sin embargo, el promedio de esta dimensión resulta todavía bastante bajo en la población, pues alcanza apenas poco más de una tercera parte en la escala de 0 a 100.

3. Perfil de las personas poco dispuestas a participar

Los niveles de disposición a participar tienden a bajar sistemáticamente en las dos primeras dimensiones. En la tercera, aunque existe un efecto inverso hacia el aumento a través del tiempo, no alcanza valores significativos y continúa mostrando un promedio relativamente bajo.

Bajo estas circunstancias, interesa, entonces, analizar el perfil de las personas con baja disposición en las tres dimensiones, con el fin de comprender con un poco más de profundidad qué factores, además de la percepción de poca efectividad, podrían estar asociados con la baja participación política.

Para cada una de las tres dimensiones se ha implementado una comparación de promedios o un análisis de correlación con los siguientes grupos de variables presentes en el cuestionario de la encuesta:

1. características sociodemográficas,
2. percepción de la situación nacional,
3. actitudes hacia la política y el sistema democrático,
4. medios de comunicación,
5. papel del Estado y
6. participación electoral.

En todos los casos se reportan aquellas tendencias que resultan estadísticamente significativas con un nivel máximo de error de 0,05.

3.1 Participación en acciones de comunicación política

Tabla 3

Factores asociados a una baja disposición a participar en actividades de comunicación política (n = 1001)

Dimensión	Variable	Dirección
Sociodemográfica	Región de planificación	No existe relación significativa
	Sexo	Existe menor disposición entre las mujeres
	Edad	A mayor edad menor disposición
	Nivel de actividad	Existe menor disposición entre las personas sin trabajo remunerado, desempleadas o pensionadas

▼ Continuación

Dimensión	Variable	Dirección
Sociodemográfica	Relación laboral	Existe menor disposición entre las personas trabajadoras independientes
	Nivel educativo	A menor nivel educativo menor disposición
Percepción de la situación nacional	Situación económica	Existe menor disposición entre las personas con una percepción negativa
	Áreas de mayor prioridad de inversión estatal	No existe relación significativa
	Áreas de mayor corrupción	Existe menor disposición entre las personas que perciben mayor corrupción en la educación
	Principal problema del país	Existe menor disposición entre las personas que identifican la corrupción como el principal problema
Actitudes hacia la política y el sistema democrático	Interés por la política	A menor interés por la política menor disposición
	Percepción del voto	No existe relación significativa
	Importancia de vivir en un país democrático	A menor importancia asignada menor disposición
	Satisfacción con la forma en que funciona la democracia	A menor satisfacción menor disposición
	Participación en actividades comunales	A menor participación menor disposición
Medios de comunicación	Medio principal para informarse sobre lo que sucede en el país	Existe menor disposición entre las personas que se informan principalmente por familiares, amistades o compañeros de trabajo
	¿Dónde suele expresar sus opiniones sobre los problemas del país?	Existe menor disposición entre las personas que no suelen expresar sus opiniones
Papel del Estado	El Estado debe regular a las empresas privadas	No existe relación significativa
	El Estado debería hacer consultas populares sobre temas importantes para el país	No existe relación significativa
	Percepción de la calidad de los servicios públicos	Existe menor disposición entre las personas con una peor percepción de los servicios

▼ Continuación

Dimensión	Variable	Dirección
Participación electoral	Disposición a votar en elecciones municipales	Existe menor disposición a participar entre las personas que no piensan votar
	Participación en elecciones anteriores	Existe menor disposición a participar entre las personas con mayor abstencionismo

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

En el caso de la dimensión de comunicación política, los resultados muestran una tendencia mayor entre las mujeres hacia bajos niveles de disposición a participar en las acciones de esta dimensión. Del mismo modo, también se observa una menor tendencia a la acción conforme aumenta la edad de la persona entrevistada. Dentro del grupo de variables sociodemográficas, también se identifican niveles bajos de participación entre las personas sin trabajo remunerado, desempleadas o pensionadas. Del mismo modo, la disposición es baja entre quienes trabajan de forma independiente. Por último, a menor nivel educativo, menor será la disposición a participar en las acciones de comunicación política.

En la dimensión sobre percepción de la situación nacional, los datos muestran una menor disposición entre las personas con una percepción negativa sobre la situación económica del país. Del mismo modo, la tendencia a la acción política en esta dimensión se reduce conforme se percibe mayor corrupción en el sector de la educación. Así mismo, la disposición es inferior entre las personas que identifican la corrupción como el principal problema del país.

En lo que respecta a las variables de control asociadas con las actitudes hacia la política y el sistema democrático, es posible identificar una menor disposición entre aquellas personas con menor interés por la política, las que otorgan menor importancia al hecho de vivir en un país democrático, menor satisfacción con la forma en que funciona nuestro sistema político y las personas que menos han trabajado en el pasado en la solución de problemas de su comunidad.

En cuanto a la relación con los medios de información, se observa que existe una menor disposición hacia las actividades de comunicación política entre las personas que tienden a informarse sobre lo que sucede en el país a través de familiares, amistades o compañeros de trabajo. También, se observa el mismo nivel bajo entre las personas entrevistadas que no acostumbran expresar sus opiniones en ningún espacio público.

En la dimensión sobre el papel asignado al Estado, se observa una tendencia a menor disposición conforme peor es la percepción de la calidad de los servicios públicos. Por último, la disposición a votar en las próximas elecciones

municipales tiende a reducirse conforme baja, también, la disposición a participar en actividades de comunicación política. Así mismo, existe menor disposición a participar entre las personas que en el pasado han votado menos.

3.2 Participación en acciones de denuncia

Tabla 4

Factores asociados a una baja disposición a participar en actividades de denuncia (n = 1001)

Dimensión	Variable	Dirección
Sociodemográfica	Región de planificación	Existe menor disposición en las regiones Chorotega, Brunca o Huetar Atlántica
	Sexo	No existe relación significativa
	Edad	A mayor edad menor disposición
	Nivel de actividad	No existe relación significativa
	Relación laboral	No existe relación significativa
	Nivel educativo	A menor nivel educativo menor disposición
Percepción de la situación nacional	Situación económica	No existe relación significativa
	Áreas de mayor prioridad de inversión estatal	Existe menor disposición entre las personas que asignan mayor prioridad a carreteras y transporte público
	Áreas de mayor corrupción	Existe menor disposición entre las personas que perciben mayor corrupción en el área de protección del ambiente
Actitudes hacia la política y el sistema democrático	Principal problema del país	Existe menor disposición entre las personas que identifican la corrupción como el principal problema
	Interés por la política	A menor interés por la política menor disposición
	Percepción del voto	No existe relación significativa
	Importancia de vivir en un país democrático	A menor importancia asignada menor disposición
	Satisfacción con la forma en que funciona la democracia	No existe relación significativa

▼ Continuación

Dimensión	Variable	Dirección
Actitudes hacia la política y el sistema democrático	Participación en actividades comunales	A menor participación menor disposición
Medios de comunicación	Medio principal para informarse sobre lo que sucede en el país	No existe relación significativa
	¿Dónde suele expresar sus opiniones sobre los problemas del país?	Existe menor disposición entre las personas que no suelen expresar sus opiniones
Papel del Estado	El Estado debe regular a las empresas privadas	No existe relación significativa
	El Estado debería hacer consultas populares sobre temas importantes para el país	Existe menor disposición entre las personas que están en desacuerdo con este papel del Estado
	Percepción de la calidad de los servicios públicos	No existe relación significativa
Participación electoral	Disposición a votar en elecciones municipales	Existe menor disposición a participar entre las personas que no piensan votar
	Participación en elecciones anteriores	Existe menor disposición a participar entre las personas con mayor abstencionismo

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

En lo que respecta a las acciones asociadas con procesos de denuncia, se observa una mayor proporción de personas poco dispuestas a participar en las regiones Chorotega, Brunca y Huetar Atlántica. Por otra parte, la disposición baja conforme aumenta la edad de la persona entrevistada y menor es su nivel educativo.

Del mismo modo, la disposición se reduce entre las personas que asignan mayor prioridad de inversión estatal a carreteras y transporte público y entre quienes perciben mayor corrupción en el área de protección del ambiente. También se observa una menor disposición a participar en acciones de denuncia entre las personas que identifican la corrupción como el principal problema del país.

La disposición a participar disminuye conforme baja el interés por la política y menor importancia se le asigna al hecho de vivir en un país democrático.

Igualmente, existe menor tendencia a participar en el futuro en acciones de denuncia entre las personas que menos han colaborado en su comunidad en la solución de problemas.

Por otra parte, se evidencia una menor disposición entre las personas que no acostumbran a expresar sus opiniones en público. También, la disposición a participar en acciones de denuncia se reduce entre quienes dan poca importancia a la necesidad de que el Estado realice consultas populares sobre temas importantes para el país. Por último, las personas menos dispuestas a participar también mostraron menos disposición a votar en las elecciones municipales de 2024 y, por otra parte, han tendido a votar menos en el pasado en elecciones nacionales.

3.3 Participación en acciones de manifestación política

Tabla 5

Factores asociados a una baja disposición a participar en actividades de manifestación política (n = 1001)

Dimensión	Variable	Dirección
Sociodemográfica	Región de planificación	No existe relación significativa
	Sexo	No existe relación significativa
	Edad	A mayor edad menor disposición
	Nivel de actividad	Existe menor disposición entre las personas sin trabajo remunerado o pensionadas
	Relación laboral	No existe relación significativa
Percepción de la situación nacional	Nivel educativo	A menor nivel educativo menor disposición
	Situación económica	No existe relación significativa
	Áreas de mayor prioridad de inversión estatal	Existe menor disposición entre las personas que asignan mayor prioridad a carreteras y transporte público
	Áreas de mayor corrupción	No existe relación significativa
	Principal problema del país	Existe menor disposición entre las personas que identifican la inseguridad o la desigualdad como el principal problema

▼ Continuación

Dimensión	Variable	Dirección
Actitudes hacia la política y el sistema democrático	Interés por la política	A menor interés por la política menor disposición
	Percepción del voto	No existe relación significativa
	Importancia de vivir en un país democrático	No existe relación significativa
	Satisfacción con la forma en que funciona la democracia	No existe relación significativa
Medios de comunicación	Participación en actividades comunales	No existe relación significativa
	Medio principal para informarse sobre lo que sucede en el país	Existe menor disposición entre las personas que se informan principalmente por familiares, amistades o compañeros de trabajo
Papel del Estado	¿Dónde suele expresar sus opiniones sobre los problemas del país?	Existe menor disposición entre las personas que no acostumbran a expresar sus opiniones
	El Estado debe regular a las empresas privadas	Existe menor disposición entre las personas que están en desacuerdo con este papel de Estado
	El Estado debería hacer consultas populares sobre temas importantes para el país	No existe relación significativa
Participación electoral	Percepción de la calidad de los servicios públicos	No existe relación significativa
	Disposición a votar en elecciones municipales	Existe menor disposición a participar entre las personas que no piensan votar
	Participación en elecciones anteriores	No existe relación significativa

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

La disposición a participar en actividades de manifestación política no muestra diferencias significativas según región de planificación y sexo. Pero la tendencia a pretender participar en el futuro se reduce conforme aumenta la edad de las personas entrevistadas. Del mismo modo, existe menor disposición entre las personas sin trabajo remunerado y entre las personas pensionadas. También, se observa que a menor nivel educativo menor será la disposición.

Por otra parte, existe una menor disposición entre las personas que asignan mayor prioridad de inversión estatal a carreteras y transporte público, así como entre aquellas que identifican la inseguridad o la desigualdad social como los principales problemas del país. Del mismo modo, la disposición a participar en acciones de manifestación política disminuye conforme baja el grado de interés que la persona entrevistada muestra por la política. También se observa una menor disposición entre las personas que se informan de lo que sucede en el país a través de familiares, amistades o compañeros de trabajo; y una disposición inferior entre quienes no acostumbran expresar sus opiniones en público.

La disposición a participar en acciones de manifestación política tiende a reducirse entre aquellas personas que se muestran en desacuerdo con que el Estado deba regular a las empresas privadas. Por último, la disposición tiende a ser inferior entre aquellas personas que no pensaban votar en las elecciones municipales de 2024.

4. Conclusiones

El análisis histórico de las formas de participación política muestra un proceso de debilitamiento de la percepción de efectividad de las acciones de comunicación política y de denuncia. Este descenso en la apreciación de los posibles resultados de la participación se asocia con una paulatina tendencia a la reducción de la disposición a participar en el futuro en este tipo de actividades.

Por otra parte, aunque la disposición a participar en actividades de manifestación política tiende a aumentar a través del tiempo, los niveles son bastante más bajos que los observados para las primeras dos dimensiones. Esta situación de debilitamiento de la participación política apunta claramente hacia un desgaste y una limitación de la democracia participativa. Pero el análisis de los datos sugiere que este debilitamiento se asocia, también, con una menor participación electoral, limitando, entonces, del mismo modo, la dinámica de la democracia representativa, que se refleja en la última elección en el nivel más alto de abstencionismo desde 1948 (Tribunal Supremo de Elecciones [TSE], 2023).

A través de los 5 estudios analizados, la baja en la disposición a participar sigue un patrón parecido a la percepción de la efectividad de cada acción, lo cual sugiere que la baja participación en el futuro podría estar asociada a la sensación de que las acciones políticas no logran producir el impacto deseado en las políticas nacionales y en la toma de decisiones y las acciones directas de las personas que ocupan puestos de representación. De hecho, por ejemplo, puede observarse que la disposición es más reducida entre las personas con menor satisfacción sobre la forma en que funciona la democracia en nuestro

país, las que muestran menor interés por la política y las que consideran que la corrupción es el principal problema del país.

Por otra parte, es importante observar que la baja disposición a participar se concentra en mayor medida entre personas sin trabajo remunerado o desempleadas, entre aquellas que peor califican la calidad de los servicios públicos y las que peor opinión tienen de la situación económica del país. Los anteriores datos sugieren que la baja disposición se concentra en mayor medida entre aquellas personas que más directamente han sufrido las consecuencias de la creciente desigualdad social en el país (Programa Estado de la Nación, 2023).

Este debilitamiento de la democracia costarricense es particularmente preocupante cuando se observa el crecimiento de las actitudes antidemocráticas y autoritarias, crecimiento que, precisamente, se concentra en mayor medida entre las personas con mayor decepción acerca del rendimiento de los últimos gobiernos y que a su vez han sufrido más directamente las consecuencias del aumento de la brecha social (Fournier, 2023).

5. Referencias

- Aguilar, H. (2017). Participatory and deliberative democracy: from equality norms to argumentative rationalities. In H. Knappe, *Doing democracy differently: political practices and transnational civil society* (1st ed., pp. 45-76). Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.2307/j.ctvbkk41f.8>
- Aguilar Marmolejo, M. T. (1995). Democracia participativa. En A. M. Fernández Poncela (Comp.), *Participación política: las mujeres en México al final del milenio* (1.ª ed., pp. 175-178). El Colegio de México. <https://doi.org/10.2307/j.ctvhn0cft.16>
- Alfaro, R. (Ed.) (2021). *Participación y política electoral: nuevas miradas a las elecciones 2018 en Costa Rica*. Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
- Fals Borda, O. (1986). Reflexiones sobre democracia y participación. *Revista Mexicana de Sociología*, 48(3), 7-14. <https://doi.org/10.2307/3540442>
- Fournier, M. (1 y 2 de setiembre de 2023). *El autoritarismo en Costa Rica* [Ponencia]. III Congreso Regional de Psicología, Liberia, Costa Rica.
- Godàs, X. (2003). Democracia participativa en las organizaciones y los límites del asamblearismo. *Mientras Tanto*, 87, 73-83. <http://www.jstor.org/stable/27820685>
- Gonzaga Martin, D. G. y Marques Ferreira, M. A. (2020). Democracia participativa y control social en las políticas públicas. En J. B. Torruella, S. Martins y C. P. Nebot (Coords.), *¿Una nueva democracia para el siglo XXI?* (pp. 157-170). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm01b0.13>

- Máiz, R. (2004). Modelos normativos de democracia. *Revista Mexicana de Sociología*, 66, 25-47. <https://doi.org/10.2307/3541441>
- Pignataro, A. y Cascante, M. (2017). *Los electorados de la democracia costarricense: percepciones ciudadanas y participación en torno a las elecciones nacionales de 2014*. Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
- Programa Estado de la Nación (2023). *Informe 29 del Estado de la Nación*. Programa Estado de la Nación.
- Ramírez, O. (Ed.) (2010). *Comportamiento del electorado costarricense. Elecciones del 2006*. Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Raventós, C., Fournier, M., Fernández, D. y Alfaro, R. (2012). *Salida, voz y lealtad. Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política*. Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Raventós, C., Fournier, M., Ramírez, O., Gutiérrez, A. L. y García, R. (2005). *Abstencionistas en Costa Rica: ¿Quiénes son y por qué no votan?* Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE). (12 de diciembre de 2023). *Estadísticas del sufragio 1953-2022*. Base de datos en línea. https://www.tse.go.cr/estadisticas_elecciones.htm
- Ziccardi, A. (2004). Ciudades y gobiernos locales: globalización, pobreza y democracia participativa. *Revista Mexicana de Sociología*, 66, 181-196. <https://doi.org/10.2307/3541449>

Capítulo II. **¿Qué significa la participación política para los y las costarricenses?**

Acercamiento a las fracturas y posibilidades de participación

Sharon Camacho Sánchez

Introducción

La participación política y las razones por las que las personas se involucran en asuntos públicos son temas que han sido ampliamente estudiados a través del tiempo por la ciencia política y disciplinas afines. El interés por su estudio no muestra un declive en tanto la dinámica política ha venido cambiando; más bien, las variaciones en las tendencias de participación y los efectos en diferentes ámbitos son asuntos que plantean nuevas interrogantes para ser estudiadas. Uno de los aspectos que más llama la atención es la tendencia a la baja en el involucramiento de las personas en los asuntos políticos en las democracias consolidadas (Alfaro, 2019 y Mair, 2013).

En Costa Rica la reducción de la participación electoral se manifestó en las urnas en las últimas elecciones nacionales en las que se superó el promedio de abstencionismo registrado previamente con un 43,2% en segunda ronda (Alfaro, 2019 y 2021 y Tribunal Supremo de Elecciones [TSE], 2022). Por su parte, en lo que se conoce como otras formas de activismo político tales como grupos y asociaciones comunitarias, más bien se registra mayor involucramiento (Pignataro y Cascante, 2017 y Guzmán, 2021).

El Barómetro de las Américas 2021 de LAPOP (Lupu, *et al.*, 2021) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP, 2019) han afirmado que el voto en el país cuenta con un amplio respaldo de la identidad cívica, y la creencia en la democracia se mantiene fuerte; es decir, se respalda el sistema democrático. Sin embargo, los datos sobre participación política muestran que las personas cada vez se involucran menos en actividades político-partidarias y electorales.

De manera que este capítulo proporciona un marco general de análisis sobre la participación política en Costa Rica y luego se centra en la interpretación de las narrativas sobre los vínculos y malestares relacionados con el involucramiento de la ciudadanía en asuntos políticos de acuerdo con los resultados de los grupos focales (GF) desarrollados en el marco de la investigación “Malestares sociales y democracia” realizada por el Instituto de Formación en Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

La información de los grupos focales responde a personas entre 18 y 65 años de todas las regiones del país con al menos secundaria incompleta, y de docentes del sistema educativo público de primaria y secundaria que imparten las asignaturas de Estudios Sociales y Educación Cívica. El perfil de las personas participantes también está relacionado con el involucramiento en la organización comunitaria.

El capítulo presenta un resumen de las discusiones sobre participación política desde diferentes perspectivas; en la sección uno, referida a la discusión teórica sobre participación política, se analizan las narrativas asociadas a la participación política en Costa Rica; posteriormente, se relacionan las narrativas vinculadas a la participación política con las principales conclusiones sobre el descontento político, los vínculos y las distancias con la política. Se finaliza con una discusión y conclusión sobre los retos y posibilidades en el estudio de la participación política en Costa Rica.

1. Un marco general sobre la participación política

La participación política es un fenómeno complejo que se intenta explicar por diferentes factores que involucran múltiples dimensiones respecto al comportamiento del ser humano. Para estructurar los elementos y formas que intervienen más o menos en la participación política se han creado tipologías o categorías de participación, así como perfiles de comportamiento. Esto porque en efecto, no todas las personas se involucran de la misma manera, con la misma intensidad o son afines a ciertas actividades, por lo que es preciso hacer diferenciaciones.

Para considerar que una persona participa o no en política la literatura toma en cuenta principalmente acciones y los objetivos de esas acciones. Delfino, Zubieta y Muratori (2013) hacen un esfuerzo de síntesis sobre los diferentes

supuestos que abarca este fenómeno. Según Delfino *et al.* (2013), los estudios clásicos como los de Barnes y Kaase, Booth y Seligson, Nelson, Verba y Nie han elaborado sus teorías a partir de seis puntos:“(a) formas activas versus pasivas, (b) conductas agresivas versus no agresivas, (c) objetos estructurales versus no estructurales, (d) objetivos gubernamentales versus no gubernamentales, (e) acciones dirigidas versus voluntarias y (f) resultados previstos versus no esperados” (Delfino *et al.*, 2013, p. 304).

Una serie de atribuciones han sido consideradas en respuesta, aporte o crítica a estos clásicos. Por ejemplo, Sabucedo (1996) en Delfino *et al.* (2013) afirma que la participación política ocurre a partir de acciones intencionales, que pueden ser legales o no, llevadas a cabo por grupos de personas o de forma individual para apoyar o cuestionar lo político (toma de decisiones, autoridades y estructuras). Para este autor, ni las acciones comunitarias, ni las intenciones o consecuencias de las acciones pueden considerarse participación política. Mientras que otros como Van Deth (2001) proponen una definición más amplia en la cual se toma como participación las actividades que las personas realizan con el objetivo de influenciar las decisiones políticas.

A su vez, Verba, Schlozman y Brady (1995) argumentan que la participación en una democracia es una forma y oportunidad para los y las ciudadanas de comunicación vertical con los funcionarios de gobierno. Con un enfoque similar, Norris (2001) sitúa la participación política como toda actividad con el fin de influir en el gobierno o el proceso político, en la sociedad civil o con el objetivo de alterar tendencias sistemáticas de comportamiento social. Por otro lado, de acuerdo con Delfino *et al.* (2013) el fenómeno de la participación política no se puede observar desde una perspectiva unidimensional, más bien, se debe estudiar como un modelo compuesto por cuatro factores: (a) actividades de campañas políticas, (b) actividad comunitaria, (c) contactos con la administración y (d) voto (Verba y Nie, 1972 en Delfino *et al.* 2013).

Las explicaciones sobre las formas y razones por las que las personas se involucran en política están en función de las teorías sobre participación. Verba, Schlozman y Brady (1995) ofrecen una de las elaboraciones más aceptadas y valoradas en la literatura (Tintaya y Cueto, 2021 y Nieto y Somuano, 2020). Estos autores se concentran en conocer las motivaciones, capacidades y la movilización a la que están expuestas las personas para involucrarse en política y evaluar su participación. La evaluación del desempeño del gobierno y ciertos grupos sociales (Campbell, 2006 en Nieto y Somuano, 2020) son un aspecto importante en esta definición. Por último, se encuentra lo relacionado con los sentimientos de alienación o desafección que provocan indiferencia hacia el sistema político según lo propuesto por Di Palma en 1970 y Dalton en el 2008 (citados por Nieto y Somuano, 2020).

Las medidas de motivación; medidas sociocognitivas, como conocimiento, interés y eficacia política; actitudinales como confianza y cinismo político;

así como emocionales, han sido utilizadas para modelar la participación. No obstante, de manera general la participación política ha sido estudiada desde dos perspectivas, la denominada participación política convencional y la no convencional. La convencional está más asociada a la participación electoral, mientras que actividades como firmar peticiones, participar en manifestaciones sociales o boicots son comunes dentro de la categoría de participación no convencional (Delfino y Zubieta, 2010).

Además, se ha hecho la distinción en cuanto a la dimensión de participación comunitaria; en esta se hace referencia a otros tipos de participación que no están estrictamente relacionados con política partidista (Nieto y Somuano, 2021). Se entiende la participación comunitaria como actividades que se realizan con el fin de incidir sobre la sociedad y que no están directamente relacionadas con el poder o los partidos políticos (Nieto y Somuano, 2021).

Los mismos factores y mecanismos explicativos de la participación (motivos, capacidades y movilización, e insatisfacción e indiferencia) han derivado en tipologías de participación ciudadana. Nieto y Somuano (2021) distinguen en la población mexicana cuatro tipos de perfiles a partir de estos factores: convencional, apático, apolítico e hiperactivo. Los resultados evidencian interacciones entre la participación política y comunitaria, de manera que una de las conclusiones a las que llegan los autores es que, en términos de involucramiento ciudadano, las personas pueden diferir sus patrones de participación, por lo que es importante no asumir que la falta de participación política responde a apatía por parte de la población.

En esta misma línea, pero enfocándose solo en la participación no convencional, existe evidencia de que las personas pueden vincularse en asuntos políticos de diferentes maneras a partir de dimensiones que toman formas individual, colectiva y online. Pueden estar asociadas a los requerimientos de acciones conjuntas, es decir, que requieren de otras personas como en el caso de la colectiva; y la individual que, por el contrario, no requiere de la participación de otros y otras (Bianchini y Navia, 2018).

Por último, un aspecto importante para identificar conductas de participación política está mediado por el factor partidario. Por ejemplo, Vergara y Hevia (2012) dividen las acciones realizadas por las personas entre aquellas que consideran como generales y las que están relacionadas con lo partidario, es decir, se considera que existen nuevas dinámicas en el comportamiento político y electoral que merecen observarse por separado (Vergara y Hevia 2012).

2. Contexto de la participación política en Costa Rica

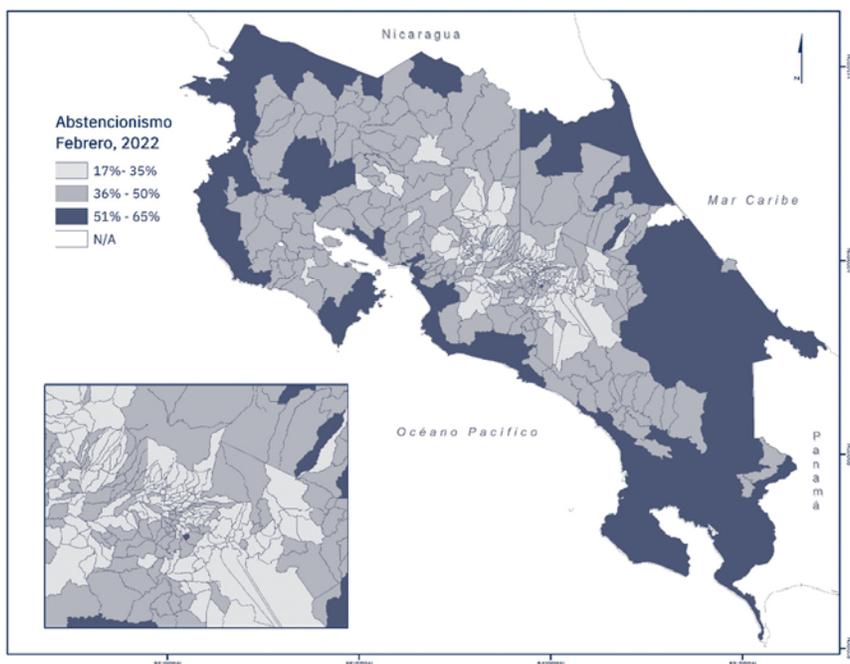
La elección nacional de 2022 registró el mayor porcentaje de abstención de las últimas elecciones con un 43,2% (TSE, 2022). Desde 1998 el país registraba

porcentajes cercanos al 30% de abstencionismo; en el 2006 alcanzó el 34,8%, en 2010 y 2014 volvió a porcentajes cercanos al 30% y para el 2018 presentó un 34,3% (TSE, s. f.). Además de la disminución de los porcentajes de participación electoral (Alfaro, 2019 y 2021), los y las costarricenses también han reducido su involucramiento en otras formas de participación política (Pignataro y Cascante, 2017 y Guzmán, 2021).

Los patrones de distribución geográfica de los votos en las últimas tres elecciones han tendido a estar cada vez más localizados (Camacho, 2022) y la primera ronda del 2022 tuvo una concentración de abstencionismo en las zonas periféricas, costeras y fronterizas del país, según se muestra en la figura 1. Es en estas zonas donde se puede observar que, en general, más de la mitad de las personas que podían votar no lo hicieron. Mientras que conforme se acorta la distancia hacia el centro del país, la participación aumenta.

Figura 1

Mapa de la distribución geográfica del abstencionismo en Costa Rica, febrero de 2022



Nota. Elaboración con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 2022.

N/A se refiere al distrito Reventazón debido a que no se tiene el dato del TSE.

Por otra parte, de acuerdo con Guzmán (2021) la participación política en el país muestra una variación a la baja con respecto al año 2015, principalmente

aquellas formas de tipo institucional. Sin embargo, las variables que se refieren a uso y denuncia vía redes sociales y a la participación comunitaria registran aumentos considerables. Es importante destacar que según el análisis de Guzmán (2021), la población que reporta tener una alta participación comunal y opiniones muy favorables sobre las normas de convivencia social es el grupo de mayor tamaño en Costa Rica¹. Además, estas personas tienen una percepción positiva alta sobre la incidencia directa y reportan haber participado por las vías institucionales en un promedio alto (Guzmán, 2021, p. 81).

De acuerdo con el mismo trabajo, las personas consideradas apáticas son el segundo grupo más grande. Estas afirman tener una percepción negativa sobre los mecanismos de participación en general y se involucran poco en los diferentes mecanismos observados; mientras que, quienes reportan una opinión positiva sobre los mecanismos de participación, pero no se involucran de manera efectiva en estos, son el tercer grupo en tamaño (Guzmán, 2021). Por su parte, los dos grupos restantes (los menos comunes) son aquellos que afirman participar más; el grupo activista que tiene una valoración positiva y se involucra en todas las formas mencionadas (institucional, comunitaria y en redes) registra una importante participación en activismo partidario, pero a diferencia de los líderes, su involucramiento en protesta es más bajo.

Por su parte, la edad indica que en Costa Rica las personas jóvenes están relacionadas con un perfil de personas positivas, activistas y líderes, es decir, tienen mejores percepciones sobre la participación ciudadana y se involucran más. En cuanto a escolaridad, aquellos y aquellas con grados académicos universitarios se ubican más como activistas o líderes, en contraste con los de menor escolaridad que se pueden caracterizar por el perfil de los parroquiales y apáticos.

3. Participar e involucrarse políticamente: narrativas asociadas a la participación política según los relatos de las personas participantes en los grupos focales

Es consistente la relación que existe entre la posibilidad de elegir de forma libre a quienes toman decisiones y lo que se concibe como participación política en Costa Rica. Esta concepción tiene un eje fundamental en la percepción sobre el sistema político y la democracia costarricense; según las respuestas en los grupos focales, estos conceptos pueden ser inclusive intercambiables.

A pesar de las transformaciones que ha venido experimentando el sistema de partidos y la disminución de los porcentajes de participación electoral,

¹ El grupo al que el autor denomina 'parroquiales' (Guzmán, 2021).

este trabajo identifica que el valor simbólico que tiene la posibilidad de votar continúa articulando las opiniones respecto al involucramiento político de los y las ciudadanas. Un esquema mental en términos de lo que es la formación de la opinión pública (Monzón, 2001) está permeado por el consenso colectivo y muy arraigado de una participación formal asociada a los partidos políticos (Vergara y Hevia, 2012 y Nieto y Somuano, 2021). Más allá de si las personas la consideran efectiva o si la practican.

En todas las regiones del país donde se consultó sobre la concepción de democracia, se encuentran relatos asociados a la relación entre la nación, el voto y la participación política como elementos principales de la vida democrática costarricense:

Yo aquí vivo en democracia. Yo digo con respeto lo que yo pienso respecto a lo que mi compañero piensa, aunque no lo comparta. Nosotros cada uno tenemos libre albedrío de decidir a favor de la nación. Podemos, cada quien, tener libertad de decidir por quién se vota. Tengo la libertad de trasladarme a cualquier punto de este país sin que nadie me diga que no puedo viajar. (GF Huetar Atlántica, personas adultas)

Vivir en democracia es, siento que también es poder tener voz y voto. (GF Huetar Atlántica, personas adultas y jóvenes)

La democracia garantiza, o por lo menos debe garantizar, el respeto a los derechos de las personas. La libertad, la participación, el respeto al disenso, también. Todos esos derechos que nosotros tenemos. (GF docentes)

Si para comprender la participación política es necesario observar los incentivos, recursos y la movilización de las personas (Verba, Schlozman y Brady, 1995), es importante destacar la nostalgia que se guarda sobre lo que fueron los procesos electorales en el pasado: “la fiesta electoral”. El significado del sufragio en la cultura política está asociado a las actividades alrededor de la campaña electoral y día de la elección, es decir, en estrecha relación con los partidos políticos. Con la erosión de las bases territoriales y las lealtades hacia los partidos, estas actividades son cada vez menos frecuentes y se percibe un impacto en la motivación para involucrarse en el mismo proceso.

Por tanto, la asociación del voto como elemento que articula la percepción sobre la participación política también está cargada de estos elementos que tienen que ver con la campaña electoral y la propaganda. El vínculo entre lo que se concibe como participar y el idealismo de la democracia permea principalmente la visión de lo que fue, lo que debería ser o lo que se necesita en términos de definir la participación política. No obstante, se identifica en las narrativas de las personas concepciones críticas respecto a la idea de votar y el sistema de representación democrática. La principal razón que motiva esta elaboración es la percepción sobre las limitaciones de las personas para

acceder a espacios participativos en los que sean realmente tomadas en cuenta. Por ejemplo:

El problema está en que cuando ese mismo discurso invisibiliza los problemas que tenemos a lo interno de nuestro país, entonces nos aferramos tanto a esa idea de democracia. Creo que lo mencionaba el compañero una democracia estrictamente asociada al voto, ¿verdad? Y seguimos reproduciendo esta democracia estrictamente [representativa], seguimos reproduciendo esta democracia estrictamente asociada a las instituciones, aun sabiendo que en pleno siglo 21 la democracia exige que nosotros y nosotras nos involucremos no solo desde el voto, sino desde otros espacios que no están, podríamos llamarlo institucionalizados. (GF docentes)

Vivir en democracia se resume en dos conceptos: en participación y en representación. Son los espacios que se les abre a la ciudadanía para que puedan participar activamente en la toma de decisiones. Y en el caso nuestro, en particular aquí en Costa Rica, de ser representados a través de otras personas, a las cuales nosotros elegimos libremente. (GF docentes)

Creo que aquí en Costa Rica el problema de la democracia es que no es una democracia participativa, sino, como dicen en términos muy teórico, una democracia representativa, una democracia que no ha terminado y creando una casta de mandarines, de burócratas políticos que son los que saben el teje y maneje de todas las instituciones y es de lo que ha alejado a la gente de poder asumir esas responsabilidades políticas que tienen todos los ciudadanos. (GF docentes)

Por otra parte, si se trata de las primeras impresiones sobre lo que para las personas significa participar, se observa una elaboración a partir de objetivos gubernamentales, acciones dirigidas y, de alguna manera, resultados previsibles (Delfino *et al.*, 2013). En este sentido, además del voto como primer elemento por destacar también existe una noción de mecanismos formales que forman parte de la misma estructura institucional del sistema democrático. Se identificaron otras formas de participación como la pertenencia a partidos políticos o la influencia a través de mecanismos como el referendo, el plebiscito o la audiencia pública.

Es evidente que la noción y conceptualización de la participación política tiene una complejidad a la hora de adentrarse en las concepciones de las personas en su cotidianidad. Por lo que una visión unidimensional del mismo fenómeno dificulta su comprensión y reduce las posibilidades de lo que se estaría analizando como parte del involucramiento de las personas en la dinámica política actual. De acuerdo con Verba y Nie (1972) y Delfino (2013) es necesario observar las actividades de campañas políticas, la actividad comunitaria, los contactos con la administración y el voto cuando se trata de participación política.

En la discusión anterior se presentó la noción de las campañas políticas y el voto; sin embargo, los grupos focales identificaron otras formas de participación

que fueron consideradas por la ciudadanía como más cercanas. Lo que puede establecer una relación estrecha con las críticas sobre la concepción de la participación formal desde un marco concentrado en la acción de y para los partidos políticos (Bianchini y Navia, 2018 y Nieto y Somuano, 2021). En este caso, las formas más próximas de participación política están definidas por los intercambios de las personas en las comunidades para articular o solucionar situaciones cotidianas; dinámica que involucra de forma directa espacios de mediación, intercambio y toma de decisiones.

Las personas pueden vincularse en asuntos políticos desde diferentes lugares y de forma individual, colectiva o digital más allá de lo institucional y partidario (Bianchini y Navia, 2018). Asunto que fue destacado en las narrativas de las personas participantes de los grupos focales a través de la importancia que se les asigna a las actividades para influir en los procesos políticos de sus comunidades y las posibilidades de incidir sobre la sociedad más allá del poder político tradicional, tal y como lo afirman Norris (2001) y Nieto y Somuano (2021).

Asociaciones de desarrollo comunal, prestar el espacio de la casa para discutir problemas que afectan a la comunidad; participación en espacios deportivos, culturales, patronatos escolares, juntas administrativas de educación o salud fueron mencionados de importancia para el impacto social por la construcción de diálogo y toma de decisiones a partir del consenso. Estas experiencias coinciden en la discusión sobre las posibilidades de considerar o no como participación política este tipo de actividades.

Si bien Nieto y Somuano (2021) llegan a conclusiones sobre las distinciones en los patrones de participación política a partir de observaciones empíricas, los resultados de los grupos focales evidencian que las personas mantienen una percepción de mayor efectividad en el desarrollo social de sus comunidades y las oportunidades que esto significa en la lucha por los retos que enfrentan en sus territorios. Y que lo relacionado con la participación institucional o convencional, que se encuentra muy impregnada en el imaginario cívico e ideal de la democracia costarricense, no son mecanismos que estén asegurando la representación y participación efectiva; así como beneficios en sus vidas. Un claro ejemplo es la siguiente observación:

Yo haría referencia a un nivel más básico, en que coincido con lo de la participación en partidos políticos, en estructuras partidarias. Pero, también, hay una más básica, que es la organización comunal, grupo de iglesias, equipos de fútbol, grupos culturales. Desde ahí ya vamos enseñando cómo hay estructuras que pueden influir y cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Esto es algo más básico, que no es como decirlo, tan formal, pero que orienta a las personas en la participación, y a creer cómo ellos pueden cambiar sin esperar, como decían los compañeros, que todo lo resuelva el Estado. (GF docentes)

Estas actitudes respecto de actividades comunitarias, en términos de cercanía y de percepción de eficiencia, coinciden con la investigación de Guzmán (2021) cuya principal conclusión es que este tipo de participación está teniendo un aumento considerable respecto a otras formas de participación formal. Ello también se relaciona con la percepción positiva sobre la posibilidad de incidir directamente en la vida política.

Por otra parte, algunos trabajos se han acercado a la política local y han mencionado la ruptura en los vínculos políticos y de las estructuras partidarias en las comunidades, a la vez que han coincidido en el peso que tiene la articulación de las redes comunitarias en la vida política de estas. Sobre todo, rescatan la necesidad de desarrollar trabajos con una perspectiva cualitativa para comprender mejor estos procesos (Beltrán, 2021 y Camacho, 2021). Los liderazgos comunales son un punto en común entre los trabajos citados y los resultados de los grupos focales que se estudian en este capítulo, se lee este rol en el desarrollo y empoderamiento de las comunidades como formas de participación acertada. Por ejemplo:

Sí, porque hay personas que hasta ni siquiera tienen bachillerato y son buenos, ni son buenos líderes y tienen buenos pensamientos a nivel comunal y no necesitan tampoco una educación y ser un máster o una licenciatura en algo para saber algo que es beneficioso para la comunidad o a nivel cantonal o a nivel provincial. (GF GAM, personas adultas)

Entonces, es accionar ya no es esperar y así, ver las problemáticas verdad y si tenemos que quejarnos, quejarnos y luego accionar. Ese cambio que buscamos tiene que ser desde adentro, y si queremos un cambio que si queremos que sea un país lo más independiente posible, tiene que ser personas que queremos desde abajo, no personas que nacen en cuna de oro. (GF Liberia, personas jóvenes)

El distanciamiento que se ha observado en la población costarricense, principalmente en las provincias periféricas del país, tiene un punto central en la percepción de la desigualdad y el abandono (Camacho, 2021). Ello produce una sensación de desconocimiento de las problemáticas y necesidades de las comunidades e interfiere en la percepción sobre la participación política. De acuerdo con las entrevistas a los grupos focales, se evidenció la dificultad que tienen las personas para ubicar factores que motiven a la participación, principalmente desde el campo institucional, más bien, se remite primordialmente a los intereses individuales y barriales.

4. Participación política: el descontento, los vínculos y las distancias

La participación convencional y no convencional guarda estrecha relación con las simpatías y filiaciones partidarias debido a que los partidos políticos actúan como movilizadores del activismo (Pignataro y Cascante, 2018).

No obstante, como se ha discutido en este capítulo, existen otras formas de involucramiento que tienen que ver más con la política local.

Los relatos de las personas respecto a los impactos positivos que tienen las actividades culturales, deportivas y educativas en sus comunidades y su incidencia política es consecuente. Para estos grupos, las redes de personas con características distintas articulan la comunidad y permiten el desarrollo social; no obstante, también identifican como uno de los principales retos o desafíos lo que denominan pérdida de una identidad asociada al espacio en el que habitan. Por ejemplo:

Tener la posibilidad de ver que tu comunidad se está organizando y poder ser parte de ello. Yo creo que enriquece mucho el proceso, por ejemplo, de vivir en una ciudad donde no hay conexión comunitaria, no hay identidad comunitaria y donde más bien cada vez te sentís más ajeno a la sociedad a la que se supone formas parte. (GF docentes)

Hay una afectación en la identidad como país. Como país y local. También mi casa, donde vivo, no hay esa identidad. ¿Entonces que lo piensan? Que como una bola de nieve, que inicialmente en las familias y a través de las generaciones se propiciaba esa identidad. Pero que ahora ya no es algo que se viva como antes. Hablan del abstencionismo y que al final es una minoría la que está eligiendo y que ahora mucho de lo que sucede, según dijeron, es que la gente estudia para ganar dinero y que nuevamente entonces hoy es el sistema económico el que está mandando. (GF Brunca, personas adultas)

Se puede observar, en primer lugar, la importancia que existe en las narrativas sobre el lugar, la comunidad, la identidad nacional y luego sobre este tema como un reto importante para la participación de las personas en asuntos políticos. El desgaste en el sentido de pertenencia a un sitio en una escala local y un descontento cada vez más evidente sobre las instituciones y la política en general, a escala nacional, es crucial para comprender los vínculos y distancia a los que usualmente se refieren los análisis sobre participación política.

Las respuestas de los grupos focales reflejan una interacción de lo local con lo nacional en cuanto a los elementos que estructuran el descontento de la población y esto en relación con las posibilidades de involucramiento político. Territorialidades más o menos fuertes se perciben como un factor importante para conocerse como vecinos y vecinas, así como conocer las necesidades y oportunidades de los territorios. A la vez, asociada a una escala nacional, no se puede obviar la percepción de la desigualdad, de abandono y la lejanía del Estado y de las instituciones.

Por tanto, si las posibilidades y motivaciones para involucrarse en asuntos políticos son elementos centrales en el análisis de la participación, lo anterior tiene impacto en la posibilidad de involucrarse en política formal, así como

ayudar a comprender las opiniones sobre la efectividad de la participación comunitaria. Una política descontextualizada de las realidades de las personas y las comunidades es una de las opiniones que más se repite en las respuestas de los grupos focales; así como la desconexión entre poderes de la república. Por ejemplo:

Tiene que haber un trabajo conjunto: ejecutivo y legislativo, ¿verdad? y el pueblo asumir su rol primordial en la sociedad, no solo como crítico, sino también como aquel que exige y propone. Porque creo que hay organizaciones que proponen respuestas a las problemáticas, pero que nunca son escuchadas, o que son ignoradas por el simple hecho de que no responden a intereses del Ejecutivo y el Legislativo. (GF docentes)

Desesperanza ¿para qué me voy a preocupar yo cuando no tengo que comer, cuando no sé si voy a poder ir a la escuela o al colegio? Esa es la principal afectación que, desde mi perspectiva, tenemos con la democracia. (GF docentes)

Sobre las principales preocupaciones de las personas consultadas, sobresalen problemas de tipo local. Al ser una discusión concentrada en las dinámicas de las comunidades, se trata de otra escala geográfica en donde las imágenes de las situaciones cotidianas que se vienen a la mente de las personas responden a este espacio concreto (su comunidad o barrio). Las respuestas concentran problemáticas de tipo estructural como el acceso a oportunidades de estudio y empleo.

En este sentido, la complejidad del descontento se refiere a la realidad cotidiana de las personas en las comunidades. Sus percepciones se basan en los problemas estructurales que enfrenta el país en la actualidad, sostienen una percepción de la realidad sociopolítica que permea las opiniones sobre el estado de la democracia y la participación. Todo esto en un contexto de promesas electorales no cumplidas, deseos de cambio no efectuados en las últimas elecciones presidenciales y el aumento del abstencionismo.

Lo anterior se consolida en manifestaciones de la desigualdad territorial y desconocimiento de las realidades de las comunidades que evidencian el sentimiento de abandono y lejanía del Estado. Existe una clara identificación de la distribución desigual de recursos entre el centro y las periferias, así como de las necesidades de las personas en los diferentes contextos. Por ejemplo:

No hay universidades públicas, no hay universidades privadas en la zona donde si ella quiere estudiar, en la universidad, donde yo estudié, tiene que ir a San José a estudiar. (GF Huetar Norte, personas jóvenes)

Ahora es requisito, tras requisito, más otro requisito. O cuando hay oportunidades, es en tiempos en que uno tiene que trabajar. Entonces, las oportunidades que hay de noche, cuando hay hijos, pues ya se pierden. Entonces, creo que el tema de la educación ha ido decayendo. (GF GAM, personas jóvenes)

Viéndolo desde el punto de vista de la región en donde estoy ahorita, es impresionante cómo se escucha acá hablar a la gente del abandono estatal, cómo se escucha hablar, por ejemplo, expresiones como “¡ah! Ya viene el día negro, ahora sí va a venir el gobierno, ahora sí vienen todos para acá, ¿verdad? a celebrar y luego se van”. Creo que la gente tiene muy claro que están abandonados y que debido a eso, pues, toman otras opciones que se ven mucho acá en la zona. (GF docentes)

De acuerdo con el informe sobre las entrevistas a grupos focales, la grieta de la distancia de lo político pasa también por un sentimiento de exclusión de los espacios de participación a diversas escalas de ciertas poblaciones, como la joven, población con bajos recursos económicos o con algún tipo de discapacidad, así como una brecha en el reconcomiendo de la diversidad de género y cultural. Las principales causas que se identificaron fueron la ausencia de infraestructura y acceso a servicios básicos que les permita ejercer efectivamente sus derechos.

Me parece que la ley de los más fuertes o de los que tienen más poder en el país, siento yo que esos son como los que tienen esa ventaja de poder participar en los ejes políticos, ¿verdad? Que no es lo mismo tal vez a veces que un agricultor quiera participar en la parte política, porque necesita medios económicos, yo siento que hay mucha desigualdad. (GF docentes)

La desigualdad, una política descontextualizada y la corrupción son temas que articulan la desconfianza en el sistema político y que en términos de participación política producen un desgaste cada vez mayor sobre cómo se define y percibe este fenómeno en lo colectivo y en la motivación para involucrarse en este tipo de espacios de forma individual. Además, respecto al distanciamiento y erosión de los vínculos políticos de las personas hay un factor transversal que tiene que ver con la representación. La idea de un poder político tomado por intereses personales y de los principales grupos económicos permea sobre la confianza en las personas elegidas para canalizar las demandas de la población. Por ejemplo:

Se han visto casos empíricamente, judicialmente, en personas del gobierno, casi tanto financiadas tanto por el crimen organizado como por intereses externos. Entonces, si el crimen organizado está fortalecido en ciertas zonas, comercios y demás cosas, es claro que el mundo de intereses estatales tiene conocimientos respecto de esto. (GF Huetar Atlántica, personas adultas)

Creo que la corrupción se la está relacionando con política general, y por eso [a los muchachos] no les gusta meterse en política, ni les gusta involucrarse en los problemas del país. (GF docentes)

Los gobiernos entienden que si fingimos que hay participación social, entonces las aguas se calman. Me refiero específicamente a lo sucedido en el gobierno de Carlos Alvarado con las huelgas y cómo se abrió un proceso de diálogo para detectar necesidades en distintos puntos del país. Se armó. Se trabajó mucho con las personas de las comunidades, de los sectores. Se hizo un documento. O sea, fue un proceso de sistematización súper grande. Y al final. Absolutamente nada

de lo que estaba, por lo menos en nuestra zona, de lo que se elaboró por acá nada de eso llegó a ningún punto. Fue una forma simplemente de este que pararan las huelgas. (GF docentes)

Finalmente, ante este escenario de distanciamiento, se consultó a los grupos focales sobre quiénes deberían proporcionar soluciones a las problemáticas que se han venido discutiendo en este capítulo. Y en este sentido las reflexiones se dirigen hacia solucionar las deficiencias que se encuentran en las instituciones del Estado, pero, también, de forma coherente con lo que se ha discutido en los párrafos anteriores, la referencia a una solución participativa de la población en general en conjunto con el Estado.

5. Conclusiones: retos y posibilidades en el estudio de la participación política en Costa Rica

Este capítulo ha explorado de forma general el tema de la participación política; como se ha podido observar, el interés por explicar y comprender por qué las personas se involucran en asuntos políticos ha sido ampliamente debatido e investigado desde diferentes perspectivas. Los cambios en los patrones de comportamiento electoral y la dinámica sociopolítica también han direccionado los estudios y la literatura hacia el entendimiento de estos cambios y sus efectos en la democracia. De ahí el interés por abordar este tema desde un enfoque cualitativo.

De acuerdo con la discusión que se ha presentado hasta este momento, se establece una relación evidente entre las problemáticas más apremiantes que afectan a los y las costarricenses, como la inseguridad y el desempleo (CIEP, 2023) y la distancia que manifiestan las personas hacia la política y los mecanismos formales de participación. En términos de los motivos e incentivos para involucrarse en la vida política, se identificó que a nivel local y nacional las problemáticas sociales están presionando las territorialidades, lo que a la vez produce un Estado e instituciones cada vez más extrañas.

De acuerdo con los grupos focales no se puede negar que la democracia está presente en el imaginario de las personas como mecanismo necesario para avanzar en los retos que enfrenta el país; sin embargo, las discusiones acá presentadas dan cuenta de que hay un malestar generalizado, también medido en los diferentes estudios de opinión, que genera críticas importantes hacia la representación política. Principalmente, se remarcan la efectividad de la participación de las personas que sí se están involucrando y una descontextualización de las realidades sociales de las comunidades por parte de quienes están tomando las decisiones.

Las brechas territoriales y el sentimiento de abandono por parte del Estado es un factor que en los últimos años ha venido creciendo y que permea muchos

otros aspectos de la vida política costarricense (Beltrán, 2021 y Camacho, 2021). La forma en que los y las costarricenses están concibiendo la participación política no es la excepción. Por otra parte, este acercamiento cualitativo ha evidenciado que aun teniendo en Costa Rica un imaginario fuerte sobre la democracia, los mecanismos institucionales para la participación política y el rol central del voto como articulador de estos mismos procesos, es la participación comunitaria lo que resulta más accesible a las realidades de la ciudadanía.

No solo se pudo observar cómo la participación comunitaria les resulta más cercana, sino que existe claridad sobre las consecuencias sociales que esto ha traído o podría traer a las comunidades. También se identifica una preocupación por la pérdida de la identidad de los lugares. Este aspecto llama la atención en términos de pensar las formas en que las personas pueden estarse involucrando para influir políticamente o en el desarrollo de sus lugares de residencia, en un ámbito de descontento y lejanía con el Estado o las referencias institucionales. Todo esto, en el marco de la discusión presentada por Nieto y Somuano (2021) cuando afirmaban que las personas pueden diferir sus patrones de participación, por lo que es importante no asumir que la falta de participación política responde a apatía por parte de la población.

6. Referencias

- Barnidge, M., Rojas, F., Beck, P. y Schimitt, R. (2019). Comparative corrective action: perceived media bias and political action in 17 countries. *International Journal of Public Opinion Research*, 32(4), 732-749. doi: 10.1093/ijpor/edz043
- Beltrán, V. (2021). (Des)vinculaciones vecinales con la política nacional: un análisis exploratorio de los casos de Jacó y Cahuita. En L. Álvarez (Ed.), *Imaginos, subjetividades y democracia. Estudios sobre el proceso electoral del 2018 en Costa Rica*. Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
- Bianchini, G. y Navia, P. (2018). El efecto de la percepción económica sobre la participación política no convencional en Chile, 2015. *Estudios Políticos*, (52), 57-81.
- Camacho, S. (2021). Volatilidad electoral rural en Costa Rica: el caso del distrito Cariari en las elecciones presidenciales del 2014 y 2018. *Revista Reflexiones*, 102(1), 1-27.
- Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). (2023). *Informe encuesta de opinión noviembre 2023*. Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
- Delfino, G. y Zubieta, E. (2010). Participación política: concepto y modalidades. *Anuario de Investigaciones*, (XVII), 211-20.
- Delfino, G., Zubieta, E. y Muratori, M. (2013). Tipos de participación política: análisis factorial confirmatorio con estudiantes de Argentina. *Psicología Política*, 13(27), 301-318.

- Guzmán, J. (2021). Participación ciudadana y democracia en Costa Rica 2018: entre activismo y apatía. En R. Alfaro (ed.), *Participación y política electoral: nuevas miradas a las elecciones 2018 en Costa Rica*. Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
- Hopmann, D., Mathes, J. y Nir, L. (2015). Informal political conversation across time and space: setting the research agenda. *International Journal of Public Opinion Research*, 27(4), 448-460. doi:10.1093/ijpor/edv043
- Lupu, N., Rodríguez, M. y Zechmeister, E. (Eds.). (2021). *El pulso de la democracia*. LAPOP.
- Mair, P. (2015). *Gobernando en el vacío*. Alianza Editorial.
- Monzón, C. (2001). Opinión e imagen pública, una sociedad "bajo control". *Palabra Clave*, 4, 9-25
- Nieto, F. y Somuano, F. (2020). Participar o no participar: análisis tipológico de la participación ciudadana de los mexicanos. *Revista de Ciencia Política*, 40(1), 49-72.
- Norris, P. (2001). Count every voice: democratic participation worldwide (manuscript). <http://www.pippanorris.com>
- Pignataro, A. y Cascante, M. J. (2017). *Los electorados de la democracia costarricense: percepciones ciudadanas y participación en torno a las elecciones nacionales de 2014*. Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
- Robinson, J. (2015). Gaps in political interest: following public affairs in surveys from Gallup, Pew, and the ANES. *International Journal of Public Opinion Research*, 27(3). doi:10.1093/ijpor/edu035
- Scherman, A., Arriagada, A. y Valenzuela, S. (2021). ¿Hacia una nueva ciudadanía multifuncional? Uso de medios digitales, redes sociales online y participación política. *Revista Latinoamericana de Opinión Pública*, (2). 159-191.
- Stern, M., Adams, A. y Boase, J. (2011). Rural community participation, social networks, and broadband use: examples from localized and national survey data. *Agricultural and Resource Economics Review*, 20(2), 158-171.
- Tintaya, M. y Cueto, R. (2021). Factores psicosociales asociados a la participación política no convencional en una muestra de jóvenes ciudadanos en Lima, Perú. *Revista de Psicología*, 39(2). 933-1004. doi.org/10.18800/psico.202102.015
- Verba, S., Schlozman, K. y Brady, H. (1995). *Voice and equality: civic voluntarism in american politics*. Harvard University Press.
- Vergara Lope, S. y Hevia, F. (2012). Para medir la participación. Construcción y validación del Cuestionario Conductas de Participación (CCP). *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (215). 35-67.

Capítulo III. La participación política contenciosa en la democracia costarricense

Elías Chavarría Mora

Introducción

¿Cuáles son los determinantes de la participación política de tipo protesta en Costa Rica en el 2023? En la literatura se han desarrollado cuatro vertientes de explicaciones con respecto a la movilización de la ciudadanía en participación de protesta y otras formas de lo que desde la teoría se conoce como participación política contenciosa. Estas cuatro vertientes se pueden denominar privación relativa, movilización de recursos, estructuras de oportunidades políticas y problemas de acción colectiva. En este capítulo, propongo hacer un breve repaso de cada una de estas vertientes para comprender el caso de Costa Rica actualmente con insumos de la investigación a nivel global. Esto permitirá identificar variables que han resultado relevantes para explicar la participación política contenciosa en diversos contextos.

Siguiendo la lógica previamente planteada, este capítulo procede con una revisión de la principal literatura sobre política contenciosa en Costa Rica, que se inscribe dentro de la tradición de estructuras de oportunidades políticas. Esta tradición se enfoca en variables contextuales, pero no individuales de la participación política, a diferencia de las otras tres. Para explorar esa otra

veta más microfundacional, continuo planteamientos de trabajos previos que han estudiado el aglutinamiento de formas de participación específicas en categorías más generales (Chavarría Mora, 2019 y Fournier, 2012). Más explícitamente, realice un análisis exploratorio de factores con los hallazgos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023* del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica de Costa Rica. Con este análisis de factores, identifiqué categorías de participación política, particularmente una relevante para la participación contenciosa.

Posterior a eso, utilice las puntuaciones de ese factor, que se pueden interpretar como una disposición positiva para llevar a cabo comportamiento de política contenciosa, tales como bloqueos o manifestaciones. Empleo estos puntajes como variable dependiente en una regresión lineal ponderada con errores estándar robustos, para conocer el efecto de varias preguntas de la encuesta identificadas como relevantes con base en la revisión de literatura.

Los resultados de la regresión indican que son pocas las variables a nivel individual que tienen un efecto significativo en la disposición a comportarse políticamente de forma contenciosa. Solo tres variables resultan significativas: el nivel educativo (relacionado con la tradición de movilización de recursos) y la creencia de que las manifestaciones y los bloqueos son formas eficientes de influenciar los procesos políticos (relacionadas con la tradición del dilema de acción colectiva). Concluyo el capítulo explorando potenciales significados de esto, su relación con la literatura sobre protestas en Costa Rica y potenciales estrategias a futuro para un estudio más detallado de estos fenómenos.

1. Los paradigmas del estudio de la política contenciosa

A grandes rasgos, se puede considerar que existen cuatro grandes corrientes en la literatura que tratan de explicar la movilización de ciudadanos en protestas y otras formas similares de comportamiento político contencioso. Estas pueden denominarse *privación relativa*, *movilización de recursos*, *estructuras de oportunidades políticas* y *explicaciones enfocadas en problemas de acción colectiva*. La primera explicación es del tipo psicológica, la segunda y la cuarta son elección racional, y la tercera sociológica. Dicho esto, debe considerarse que la primera, aunque psicológica, versa sobre percepciones de las condiciones materiales, mientras que la segunda pone atención importante a factores sociodemográficos.

La primera corriente que intenta explicar la participación de protesta sin connotaciones normativas negativas es la de privación negativa, la cual se desarrolla a partir del trabajo de Ted Gurr (1970). Esta teoría propone que los individuos protestan al percibir una brecha entre las condiciones

materiales del grupo al que pertenecen y las expectativas que tienen sobre esas condiciones, basados particularmente en comparación con otros grupos y en las tendencias históricas. Esto lleva a frustraciones psicológicas y eventualmente a protestas. Una debilidad histórica de esta explicación es que no puede explicar por qué, si existe históricamente una cantidad enorme de poblaciones con reclamos, al mismo tiempo se registran muchas menos movilizaciones. De hecho, es bien sabido que empíricamente no existen correlaciones fuertes entre presencia de reclamos¹ y participación de protesta (McCarthy y Zald, 1977), al menos al ver el promedio de ambas variables para un país. Por otro lado, si se considera la polarización entre el nivel de reclamos entre grupos sociales, en vez del promedio nacional, sí es posible encontrar una correlación positiva con la cantidad de protestas (Griffin *et al.*, 2020).

El segundo enfoque importante que explica las protestas se puede agrupar alrededor de la teoría de movilización de recursos. Esta teoría conceptualiza los movimientos de protestas como movimientos compuestos por individuos racionales, y dirigidos por emprendedores que crean organizaciones y reclutan miembros para estas (McCarthy y Zald, 1977). A su vez, para los individuos se vuelve más fácil participar (menos costo en un lenguaje aún más claro de elección racional) si tienen mayor cantidad de recursos, como dinero, tiempo, habilidades comunicacionales y organizativas; todos útiles para la participación de protesta (Brady *et al.*, 1995). Es decir, las personas protestan cuando tienen recursos para hacerlo, incluyendo suficiente dinero para poder faltar a su trabajo, tiempo libre para unirse a una movilización, y habilidades que son útiles para emprendedores de movimientos en la organización. Este ángulo es particularmente importante, pues ayuda a explicar por qué comúnmente se observa empíricamente que quienes protestan son quienes tienen más recursos, mientras la teoría de privación relativa esperaría justo lo contrario.

El tercer tipo de explicación son las estructuras de oportunidades políticas, y se enfoca en las aperturas en el contexto político dadas ciertas características estructurales que permiten a los movimientos florecer (o no). Estas oportunidades vienen ofrecidas por características institucionales del sistema político, las redes que conectan a diversos movimientos sociales y el espacio cultural en que las acciones están inscritas (Tarrow, 2011). Todas estas diferentes partes se conectan de forma dinámica, influyéndose unas a otras a través del tiempo (McAdam *et al.*, 2001). Es importante mencionar que mientras aplicaciones más antiguas de esta teoría (por ejemplo Kitschelt, 1986) se enfocaban netamente en el marco institucional, incluir las demás dimensiones mencionadas ayuda a explicar cambios importantes en la actividad de protesta aun cuando no hay cambios institucionales, por ejemplo, cuando un encuadre específico de los reclamos de un grupo social gana más apoyo.

¹ "Grievances" en el original. Utilizo "reclamos" como la traducción más cercana a lo largo de este texto, aunque "demandas" y "quejas" también son posibles traducciones.

La cuarta y última veta de literatura que se enfoca en explicar política contenciosa está inscrita dentro de la tradición de elección racional y pone primordialmente atención en el problema de la acción colectiva. Esta veta trata de comprender a nivel micro por qué las personas deciden unirse a una protesta cuando en la mayoría de los escenarios el costo individual supera los beneficios individuales. Esto es porque considera la acción colectiva como una forma generalizada del dilema del prisionero de teoría de juegos: dado un número de individuos, incluso si todos están de acuerdo en qué acción tomar, y todos se beneficiarían del resultado, aun así, a nivel individual existirían incentivos para dejar que otros carguen el peso y los costos de la acción que lleva a un bien común, y de todas formas disfrutar del bien común. Dado que todos los individuos tienen este incentivo, ninguno cooperará uniéndose a una movilización (Olson, 1971).

Las soluciones a este problema en el trabajo expuesto por Olson originalmente son pocas. Una es la existencia de incentivos selectivos, es decir, bienes privados que se obtienen de participar en la protesta, más allá de si esta alcanza algún objetivo de bien común. Olson (1971) los concibió primordialmente como económicos, pero reconoció la existencia de otros posibles, por ejemplo, se puede hablar de la satisfacción personal de participar en una causa en la que se cree (Tarrow, 2011) o de beneficios sociales como amistad y reconocimiento social (Chong, 1991).

Otra solución consiste en considerar el éxito esperado de la acción colectiva, es decir, considerar no la utilidad, sino la utilidad esperada. Estos términos son tomados de la literatura económica y de teoría de juegos, la idea aquí es que no es solo el potencial beneficio, sino más bien ese potencial beneficio multiplicado por la probabilidad de que una acción tenga éxito, lo que determina que un individuo decida unirse a una movilización. A esto se suman dos variables más, la percepción de la importancia esperada del individuo y las preferencias de este por el bien público. Un modelo que utiliza estas tres variables resulta mucho más eficiente para explicar movilizaciones en Alemania Occidental en los ochenta que modelos basados en diferentes formas de incentivos selectivos (Finkel y Muller, 1998), mientras que la percepción de que el gobierno dará respuesta a las demandas ha sido detectada como un predictor importante de protestas en África subsahariana (Harris y Hern, 2019).

De diversas formas, los cuatro paradigmas pueden alimentarse y beneficiarse de tomar elementos entre ellos para lidiar con sus propios puntos débiles. Un ejemplo de complementariedad entre los diferentes enfoques incluye la combinación de variables a nivel país como oportunidades políticas junto con características individuales como reclamos y recursos, mediante modelos multinivel con interacciones entre los diferentes niveles (Dalton *et al.*, 2010). Un caso más es combinar recursos provenientes de la participación en grupos

religiosos con las oportunidades políticas dadas en un país a los diferentes grupos religiosos (Arikan y Bloom, 2019).

Debe mencionarse, sin embargo, que el uso de características sistémicas en modelos cuantitativos requiere el empleo de datos de diversos países, para que exista variación a ese nivel de análisis. Es necesario, además, que existan diversos niveles de datos, es decir, que se tengan mediciones tanto a nivel de individuos como a nivel de los países y, de ser posible, también a nivel de organización o incluso de protesta.

Hasta este momento he presentado diferentes acercamientos al estudio de la protesta a partir del enfoque teórico. Una segunda forma de dividir los estudios de esta rama, al menos desde un enfoque cuantitativo, es mediante la unidad de observación: individuos o eventos de protesta. Es decir, es posible estudiar la participación individual mediante estudios de opinión pública como encuestas, que ligen opiniones y actitudes individuales con opiniones sobre protestas, o bien, con comportamiento como participar en protestas. Alternativamente, otro acercamiento es el análisis de eventos de protestas (ver Koopmans y Rucht, 2002) enfocado en las características de los eventos, así como otras mediciones circunstanciales y de sistema, como variables explicativas.

En el caso de bases de datos de eventos de protesta, no se puede hablar de por qué el individuo x o y en particular se unió a un movimiento, solo de las características del movimiento. En este sentido, existen mayores afinidades entre ciertos enfoques teóricos y ciertos abordajes metodológicos; por ejemplo, entre estructuras de oportunidades políticas y bases de eventos. Por otro lado, las bases de eventos no son muy útiles para estudios del costo de participar considerando el problema de acción colectiva, o para la movilización de recursos, dado que ambos tienen un enfoque fuerte en el individuo, no en la movilización como colectividad.

2. El estudio de la participación contenciosa en Costa Rica

El análisis de eventos de protesta ha sido el enfoque metodológico dominante para el estudio de política contenciosa en Costa Rica, particularmente gracias a dos importantes bases de datos de eventos, una mantenida por el Programa Estado de la Nación, la otra por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este tipo de bases usualmente se sustentan en la identificación de eventos de protesta a partir de sus reportes en periódicos. Es importante hacer la acotación de que las bases del Estado de la Nación y del Instituto de Investigaciones Sociales incluyen formas de participación que van más allá de la política contenciosa.

Desde el inicio del periodo en que se han mantenido bases de datos de eventos de protesta, se han identificado tres momentos en la protesta social: hasta el 2000, las movilizaciones son mayoritariamente de sindicatos y con un movimiento cíclico, con baja movilización a principios y finales de mandatos; un segundo periodo llega hasta el 2010, donde a sindicatos se unen (en tanto que se movilizan) grupos productivos y empresariales; y, finalmente, a partir de 2010 aparecen cada vez más actores relacionados con reclamos en torno a temas tales como medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, educación, vivienda y transporte (Gómez y Cerdas, 2019).

Una ventaja del análisis de eventos de protesta es que permite separar los eventos mediante objetivos o reclamos específicos. Esto posibilita estudiar diferencias entre movimientos sociales distintos. Por ejemplo, se ha podido enfocar la mirada en el grupo más relevante y que más movilizaciones ha llevado a cabo en el país, las organizaciones laborales como sindicatos. Este grupo ha recurrido poco a la participación contenciosa con preferencia por formas de participación más institucionales, y solo recurriendo a actividades como bloqueos como última opción frente a cierres en la estructura de oportunidades dentro de las vías más institucionales. Esto explica por qué hubo un crecimiento en las movilizaciones en el gobierno de Carlos Alvarado con respecto al de Luis Guillermo Solís, pues las oportunidades políticas relativas a canales institucionales estaban más abiertas en el gobierno del segundo, comparado con el primero (Alvarado *et al.*, 2021). Otros ejemplos de estudios de eventos de protesta alrededor de demandas específicas incluyen protestas en torno a temas de género (Cortés, 2022) y trabajadores migrantes (Voorend *et al.*, 2023).

Con respecto al gobierno de Chaves Robles, se han observado menos acciones; posibles explicaciones incluyen la alta popularidad de la que ha gozado Chaves hasta hace poco, así como el hecho de que la apertura al diálogo con diferentes sectores ha sido más grande, es decir, se ha presentado más apertura mediante canales institucionales, lo cual hace menos necesario recurrir a formas de participación contenciosas. También, debe notarse que esta disminución en movilizaciones se da de parte de grupos laborales, pero el decrecimiento no se presenta con respecto a otros grupos, como la ciudadanía en general y empresarios (Cortés *et al.*, 2023).

Sobre el último punto, también es importante notar que la disminución en movilizaciones en la actual administración es solo notable con respecto al gobierno de Carlos Alvarado y de Luis Guillermo Solís, sin embargo, no hay una diferencia con la tendencia general desde 1992. Además de esto, se ha dado un aumento porcentual en el comportamiento contencioso particularmente, por ejemplo, con invasiones a la propiedad, bloqueos, marchas y caravanas. Esta tendencia ha venido creciendo desde el gobierno de Luis Guillermo Solís. Otra tendencia notada es que se da poca respuesta de las autoridades a las movilizaciones (Moncada, 2023).

Aunque ha pasado relativamente poco tiempo desde que Rodrigo Chaves tomó el mando del Ejecutivo, y las dinámicas de la participación contenciosa pueden cambiar conforme nos adentramos más en su gobierno, es claro, basado en Cortés, Rojas y Chavarría (2023) y Moncada (2023), que existen cambios en las estructuras de oportunidades políticas: se da una apertura en las oportunidades de usar formas de participación institucionales, lo que hace menos necesario utilizar formas contenciosas.

Como queda claro, existe una larga tradición de por lo menos treinta años de estudios sobre participación política contenciosa en Costa Rica, teóricamente enmarcada dentro del enfoque de estructuras de oportunidades políticas, y metodológicamente enfocada en el análisis de eventos. Ambos, teoría y método, encajan a la perfección con el estudio a nivel de un movimiento o movilización, pero no esclarecen mucho a nivel del individuo. Es decir, dicen poco sobre qué tipo de persona participa, qué clase de características tienen en común las personas que se movilizan y qué factores las lleva a hacerlo.

Los otros tres enfoques teóricos que he presentado (privación relativa, movilización de recursos y problema de acción colectiva) pueden complementar a nivel individual el conocimiento que ya se tiene sobre los movimientos. De igual forma, los estudios de opinión pública pueden complementarse metodológicamente con las ventajas de validez externa que este tipo de estudios presentan frente a otros métodos (experimentos, entrevistas, grupos focales). Un paso en esa dirección es Chavarría Mora (2019), que estudia la relación entre ideología y diversas formas de participación, incluyendo la contenciosa.

3. Datos

En la sección de revisión de literatura, se detallaron cuatro enfoques teóricos que explican la participación política contenciosa a nivel individual: reclamos, recursos, oportunidades políticas y el cálculo racional de costos. Se mencionaron, además, dos enfoques empíricos para el estudio de la protesta: de opinión pública basada en individuos y de eventos de protesta. Dado que el presente texto se enmarca en el estudio sobre cultura política costarricense y las fuentes de malestar ciudadano del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica Costa Rica; y el principal insumo de datos de este capítulo es la *Encuesta sobre fuentes de malestar ciudadano 2023*, es claro que se seguirá el enfoque empírico centrado en los individuos. Consecuentemente, se usarán también los enfoques metodológicos más apropiados: privación relativa, movilización de recursos y dilema de acción colectiva.

Se deja de lado el enfoque de estructuras de oportunidades políticas, pues a) requerirían datos extra sobre movilizaciones, difíciles de recolectar; b) se

requeriría ligar estos datos con los datos a nivel individual para poder usar apropiadamente un modelo multinivel, es decir, se requeriría saber en qué protestas ha participado cada encuestado, la principal dificultad y c) se necesitaría un estudio de carácter comparativo entre unidades con diferencias sistémicas, algo que una encuesta en un solo país y en un solo momento en el tiempo no ofrece.

Ya que queda claro por qué tiene sentido enfocarse en privación relativa, movilización de recursos y dilema de acción colectiva, en la tabla 1 se indican las preguntas relevantes a movilización en la encuesta, así como el paradigma con el que se conecta cada pregunta². Se indica, también, el número de pregunta y el tipo de respuestas posibles. Incluyo, además, variables demográficas que pueden resultar relevantes. Dentro de las tres tradiciones, mediciones sobre reclamos y recursos son bastante comunes en encuestas de opinión pública y, por la misma razón, pueden tomarse varias preguntas de la *Encuesta sobre fuentes de malestar ciudadano*.

Con respecto a privación relativa, varias preguntas miden reclamos, específicamente en relación con economía personal, distribución de riqueza y satisfacción personal. Por su parte, también se incluyen en el análisis preguntas que capturan recursos disponibles para que los individuos se unan a movilizaciones, entre estos recursos se cuenta con el tipo de trabajo, nivel educativo y el involucramiento en la comunidad religiosa, lo cual es importante en este marco, pues puede capturar habilidades blandas de liderazgo y capacidad para socialización.

Por otra parte, mucha de la tradición del problema de acción colectiva está centrada en estudios de teoría formal en vez de empíricos, por lo que es difícil encontrar preguntas relevantes en encuestas, excepto en el caso de estudios hechos a la medida para eso, como por ejemplo, con preguntas sobre los costos específicos en los que incurren las personas al protestar. Dicho esto, otra parte importante de la ecuación de utilidad de unirse a un tipo de actividad con fines políticos es la confianza en que dicha actividad podrá alcanzar un objetivo, lo cual la vuelve una utilidad esperada basada en una probabilidad de obtener el beneficio. Formalmente, la ecuación de utilidad es $E[U]=B \cdot p - C$, donde p corresponde a la confianza en la efectividad de una actividad (esto es la probabilidad de que alcance el objetivo); es decir, las preguntas en la batería PA3. En cuanto a B , corresponde al beneficio (obtención de un bien público) y C es el costo de participar en la movilización (traslado, incomodidad, costo de oportunidad e incluso el potencial de represión).

² Originalmente se consideraron más variables para el análisis; sin embargo, una prueba de factor de inflación de la varianza indicó que la regresión preliminar presentaba problemas de multicolinealidad. Por lo tanto, se eliminaron algunas variables que presentaban correlaciones con variables que sí se incluyeron en el análisis.

Además de estas variables explicativas basadas en los enfoques expuestos anteriormente, se incluye una serie de variables de control sociodemográficas potencialmente relevantes, también descritas en la tabla 1.

Tabla 1

Variables de la “Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano” incluidas en el análisis

Paradigma	Número de pregunta	Pregunta	Tipo de respuesta
Privación relativa (reclamos)	CG2	¿Considera que su situación económica actual es mejor, igual o peor que hace un año?	Categórica
	CG4	En términos generales, ¿cuán satisfecho está usted con su vida?	Categórica
	CG7	¿Cuán justa es la distribución de la riqueza en nuestro país?	Categórica
Movilización de recursos	F6	En este momento ¿a qué se dedica usted?	Categórica
	F8	¿Cuál es el último nivel de estudios que usted aprobó?	Continua
	DM5	¿Con qué frecuencia asiste a servicios religiosos (misa, culto u otro)?	Continua
Problema de acción colectiva (análisis costo-beneficio)	PA1_6	La gente tiene opiniones diferentes sobre lo que es “política”. En su opinión, ¿cuáles de las siguientes actividades forman parte de lo que usted entiende por política: las luchas de la comunidad.	Dicotómica
	PA1_7	La gente tiene opiniones diferentes sobre lo que es “política”. En su opinión, ¿cuáles de las siguientes actividades forman parte de lo que usted entiende por política: Los bloqueos de calles.	Dicotómica
	PA3A_4	Hay distintas formas de participar en política. En su opinión ¿qué tanto cree usted que sirve para resolver un problema bloquear carreteras en protesta?	Continua

▼ Continuación

Paradigma	Número de pregunta	Pregunta	Tipo de respuesta
Problema de acción colectiva (análisis costo-beneficio)	PA3A_9	Hay distintas formas de participar en política. En su opinión ¿qué tanto cree usted que sirve para resolver un problema participar en manifestaciones?	Continua
Demográficas (controles)	F3	¿Con cuál género se identifica?	Categoría (recodificada como dicotómica, masculino y no-masculino)
	F5	Me gustaría saber su edad en años cumplidos.	Continua

La principal variable dependiente de este estudio es la participación en alguna forma de comportamiento político contencioso. Se usa en este sentido la batería de preguntas PA3B. Esta batería hace referencia a varias formas de participación política en la cual se pregunta específicamente a la persona si en los últimos 10 años ha llevado a cabo esa acción y si lo haría de nuevo. Con esta información, puede establecerse una escala ordinal de participación para cada actividad que se mueve entre 1 y 4. Se recodificaron las preguntas de forma tal que 4 corresponden a haber participado y estar dispuesta a hacerlo de nuevo, 3 a haber participado y no estar dispuesto a hacerlo de nuevo, 2 a no haber participado pero estar dispuesto a hacerlo, y finalmente 1 a no haber participado y no estar dispuesto a hacerlo. Esta escala es usada en la sección 4 para realizar un análisis de factores del cual se obtiene un puntaje factorial específico para la participación contenciosa.

4. Métodos³

Un análisis de factores es una técnica estadística de reducción de dimensionalidad, es decir, que permite pasar de un número elevado de variables a una cantidad más pequeña que, sin embargo, mantiene una cantidad similar de información con respecto a la variabilidad. Esto funciona al usar una matriz de correlaciones entre variables para descubrir variables latentes o no observadas, también llamadas factores. En la tabla 2 se presenta un análisis de factores de las formas de participación en la batería P3B. El objetivo de esto es identificar si existe un factor que corresponda a la participación de protesta.

³ Para todos los análisis del capítulo utilizo el lenguaje de programación R, incluyendo los paquetes Tidyverse, Car, Rio, Psych, GPArotation, lmtree y Sandwich.

Tabla 2*Análisis de factores exploratorio de forma de participación política*

Comportamiento	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Reunirse con un candidato a puesto electoral	0,88	-0,03	-0,14
Ayudar en la campaña de un candidato a puesto electoral	0,65	0,00	-0,12
Firmar una carta a políticos planteando el problema	0,38	-0,07	0,28
Bloquear carreteras en protesta	-0,06	0,78	-0,06
Presentar un recurso ante la Sala IV	-0,04	-0,04	0,63
Denunciar ante la Defensoría de los Habitantes	-0,12	0,01	0,70
Reunirse con una autoridad del Gobierno	0,41	0,02	0,24
Participar en manifestaciones	0,00	0,81	0,00
Expresar su opinión en redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter	0,14	0,20	0,13

Nota. Para el análisis de factores, sigo el procedimiento utilizado en Chavarría Mora (2019). Además de esto, previo al análisis, eliminé todos los casos de no respuesta, otros, o similares. En total, eso deja 911 casos en el análisis. El índice de Tucker-Lewis para el análisis de factores es de 0,98, lo cual indica que los factores son muy confiables.

Los resultados del análisis de factores muestran que en efecto existe una variable latente que se correlaciona fuertemente con formas de participación que son contenciosas. La tabla 2 muestra las correlaciones entre las variables en la batería de preguntas PA3B y los factores que el análisis detectó. Cada factor tiene una correlación con cada variable; si la correlación es fuerte (mayor a 0,7), puede considerarse que la información de esa variable está incluida dentro de ese factor. Como puede observarse, el primer factor resume una gran cantidad de acciones: reunirse con candidatos, ayudar en campañas, firmar cartas a políticos y reunirse con autoridades. El segundo factor es

el relevante para este trabajo, incluye bloquear carreteras y participar en manifestaciones. El último factor comprende apelar a la Sala Constitucional y a la Defensoría de los Habitantes. Con base en esto, puede considerarse que las tres formas de actividad son política tradicional, política contenciosa y procesos administrativos, consistente con los resultados en Chavarría Mora (2019). Nótese que la variable sobre redes sociales realmente no se correlaciona con ningún factor. Es decir, es un tipo de actividad totalmente diferente de los tres factores.

El análisis de factores calcula también un valor en cada factor para todas las observaciones, por tanto, la variable dependiente será ese valor para el caso del factor 2. Dado que el puntaje factorial es calculado para una variable continua, utilizo una regresión lineal para estudiar la relación entre las variables independientes y de control con la variable dependiente.

Tabla 3

Modelo de regresión lineal de mínimos cuadrados ponderados con errores estándar robustos

Variable	Coefficiente (error estándar)
Género	-0,027 (0,055)
Edad	0,0001 (0,001)
Empleo	-0,017(0,013)
Educación	0,035 (0,009) ***
Situación económica	-0,034 (0,032)
Satisfacción de vida	0,036 (0,042)
Distribución de riqueza	0,047 (0,034)
Las luchas de la comunidad son política	0,008 (0,058)
Los bloqueos de calles son política	-0,042 (0,056)
Asistencia a servicios religiosos	0,003 (0,016)
Bloquear carreteras sirve	0,112 (0,023)***
Participar en manifestaciones sirve	0,216 (0,021)***
Intercepto	-1,06 (0,203)***
R ² ajustado	0,29

Nota. Previo a la regresión, se eliminaron del análisis todas las variables independientes o de control que tengan valores perdidos, no respuesta o respondieron no sabe. Para el caso de la pregunta de asistencia a servicios religiosos, los valores perdidos, de no respuesta o donde respondieron no saber los recodifiqué como 0. Al final de esta limpieza de datos, el tamaño de muestra utilizado en el análisis es de 790. Realicé pruebas para comprobar que se cumplen los supuestos de linealidad. Las pruebas de Durbin-Watson y Breusch-Pagan sugieren que es necesario utilizar errores estándar robustos en la regresión.

*** indica significancia al nivel $p < 0,001$

El modelo muestra tres variables que son significativas; específicamente, el nivel educativo, la percepción de que bloquear carreteras “sirve” y la percepción de que participar en manifestaciones “sirve”. Estas tres variables tienen un efecto positivo sobre el puntaje de participación contenciosa, es decir, mayor nivel educativo, así como mayor confianza en que la participación contenciosa es eficiente para alcanzar objetivos aumentan la puntuación en la variable latente que captura la disposición a, y efectivamente, involucrarse en participación de protesta.

La interpretación sustantiva de los puntajes en una variable sintética producto de un análisis de factores no es intuitiva. Es útil recordar cómo se creó para poder interpretar los resultados de la regresión. Primeramente, para crear la variable sintética se utilizaron las dos preguntas PA3B. Estas dos baterías de preguntas juntas crean nuevas variables, una para cada una de las formas de participación política. En cada una de estas nuevas variables, existen cuatro categorías: Si ha utilizado una forma de participación política y lo haría de nuevo; si ha utilizado una forma de participación política y no lo haría de nuevo; no ha utilizado una forma de participación política y lo haría; no ha utilizado una forma de participación política y no lo haría. Estas variables son categóricas, e indican la magnitud de la disposición a utilizar una forma de participación política, desde haberla utilizado ya y querer hacerlo de nuevo, hasta no haberla utilizado y no querer hacerlo.

Del tipo de variables recién descritas, hay diez, pues el cuestionario de la encuesta pregunta por 10 formas de participación política. El análisis de factores nos indica que dos de estas forman un solo factor, que corresponde a participación política contenciosa: bloquear carreteras y participar en manifestaciones. El análisis calcula una puntuación en el factor de participación contenciosa para cada observación, basado en los valores de las variables de bloquear carreteras y participar en manifestaciones. Los puntajes de los factores tienen las características de estar estandarizados para tener una media de 0 y desviación estándar de 1. Esto hace que no se puedan interpretar exactamente igual que las magnitudes de la variable original. Teóricamente, lo que tiene sentido es decir que un valor más alto en el puntaje de participación contenciosa indica una disposición más positiva hacia la participación contenciosa.

Más específicamente, se puede interpretar que un aumento de un nivel en la escala de nivel educativo (por ejemplo, de primaria incompleta a primaria completa) indica un aumento de 0,035 en el puntaje de participación contenciosa. Dado que la escala de nivel educativo tiene diez niveles, la máxima diferencia posible, entre 0 y 10 (es decir, entre no tener estudios y tener un posgrado), representa un incremento en la diferencia de 0,35 en el puntaje de participación contenciosa.

De forma similar, un aumento de un nivel en la escala de creer que bloquear carreteras sirve representaría un aumento de 0,112 en el puntaje de participación contenciosa. La escala de creer que bloquear carreteras sirve se mueve entre 1 (nada) a 5 (mucho), por lo tanto, en promedio, personas que respondieron “mucho” tendrán un puntaje de participación contenciosa mayor en 0,56 que quienes respondieron “nada”.

Finalmente, un aumento de un nivel en la escala de creer que manifestarse sirve representaría un aumento de 0,216 en el puntaje de participación contenciosa. La escala de creer que movilizarse sirve también se mueve entre 1 (nada) a 5 (mucho), por lo tanto, en promedio, personas que respondieron “mucho” tendrán un puntaje de participación contenciosa mayor en 1,08 que quienes respondieron “nada”.

Como puede observarse, las tres variables significativas tienen también diferente magnitud en sus efectos: la creencia en la efectividad de las manifestaciones tiene la magnitud más alta, luego de esta sigue la magnitud de la confianza en que bloquear carreteras tiene un efecto. Finalmente, la magnitud más baja es la que corresponde al nivel educativo.

5. Discusión

En este trabajo, se han presentado cuatro enfoques dominantes para explicar la participación política contenciosa. Como variables explicativas, el primero se enfoca en reclamos, el segundo en recursos, el tercero en contexto y el cuarto en un análisis de utilidad sobre la participación contenciosa. Dado que este estudio está enfocado en datos a nivel individual, solo tres de estos cuatro enfoques pueden probarse, no hay forma de medir oportunidades políticas sistémicas con los datos dados. Ya se ha mencionado antes, pero una extensión de este trabajo que sí pudiera incluir ese marco requeriría una estructura de datos multinivel.

Para los tres enfoques que sí se estudian, se incluyeron las siguientes variables explicativas: opinión sobre la situación económica personal, satisfacción con la vida y opinión sobre la distribución de la riqueza para reclamos; tipo de trabajo, nivel educativo y participación en servicios religiosos para recursos; y opiniones sobre si es política y sobre la efectividad de varias formas de participación contenciosa para el cálculo de utilidad. De estas variables, solo tres resultaron significativas: el nivel educativo, las percepciones de efectividad de los bloqueos y las manifestaciones. Es decir, la disposición a participar de forma contenciosa aumenta con, primero, mayor nivel educativo, y segundo, que la persona tenga una mayor percepción de que la participación es efectiva para lograr cambios políticos.

Estos resultados tienen una serie de implicaciones interesantes. La primera y más notable está, por supuesto, relacionada con todas las variables no

significativas en la regresión. Ni una sola de las variables sobre reclamos es significativa. Es decir, ni cambios en la situación económica personal, ni la percepción sobre distribución de riqueza, ni satisfacción con la propia vida son significativas para explicar la disposición a participar en protestas y bloqueos. Esto no es del todo sorprendente, aunque primeramente lo parece. Privación relativa parece ser el marco teórico más obvio para explicar la participación contenciosa, casi sentido común. Paradójicamente, suele tener los peores resultados empíricos, y este estudio es un ejemplo más de esto.

La paradoja se da de esta forma: en una población suelen existir más reclamos que movilizaciones. Esto es una paradoja, pues si la gente se movilizara porque tiene reclamos, la teoría predice muchas más movilizaciones de las que realmente se dan. La chispa que dispara la movilización tiene que ser otra. El motivo final de la movilización puede ser subsanar un reclamo producto de alguna desigualdad, pero la movilización de una persona no se logra solo con tener el deseo de subsanar ese reclamo, sino que requiere recursos, oportunidades y una percepción positiva de las posibilidades de un buen resultado de la acción. El reclamo puede ser una condición tal vez necesaria, pero no suficiente para la movilización. Pero el análisis de regresión no es capaz de indicar esto.

Puede ser valioso aquí enfatizar que, aunque un análisis de regresión no puede indicar si los reclamos son condiciones necesarias, pero no suficientes, otro tipo de herramientas pueden ser utilizadas para esto, por ejemplo, probabilidades condicionadas, QCA o métodos cualitativos. Una aproximación cualitativa que muestra resultados sugerentes es el informe de los grupos focales sobre malestares sociales y democracia aportado por el IFED y FLACSO Costa Rica. Cabe mencionar que aparecen pocas referencias a la participación contenciosa propiamente; uno de los entrevistados considera que en Costa Rica está “satanizada” (p. 44), y otra persona propone pasar a otras formas de participación más institucionalizadas (p. 42). Sin embargo, en el caso más explícito de una movilización contenciosa, la huelga de estudiantes de secundaria en contra de que se les aplicaran pruebas estandarizadas, la investigación refiere exclusivamente a reclamos, no recursos, oportunidades, percepciones de éxito u otras variables relevantes (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano y grupos focales sobre Malestares sociales y democracia*).

Bajo esta misma línea, nótese que el análisis de regresión identifica correlaciones y cuánto de la variación en la variable dependiente es explicada por el modelo, pero no establece causalidad, esto requeriría otro tipo de métodos de inferencia causal, por ejemplo, diseños experimentales o cuasiexperimentales.

En la sección sobre los estudios previos de participación contenciosa en Costa Rica menciono cómo el análisis de eventos de protesta es útil para estudiar condiciones contextuales, pero no individuales, y que estudios observacionales

de opinión pública (el método más común para esto es el análisis de regresión) pueden suplir esa limitación. De la misma forma, como los dos párrafos anteriores muestran, el análisis de regresión también tiene limitaciones que pueden ser suplidas por otros métodos cuantitativos y cualitativos.

El punto sobre condiciones necesarias, pero no suficientes, puede extenderse para pensar, también, en otras de las variables no significativas, por ejemplo, el tipo de trabajo o la integración con una comunidad religiosa. La literatura sobre movilización de recursos nota que pertenecer a comunidades religiosas ayuda a las personas a desarrollar habilidades blandas y crea vínculos sociales, útiles a la hora de movilizarse. Esta variable, sin embargo, no es significativa. Esto puede pensarse de la siguiente forma: no es que los recursos no sean importantes para participar, sino que estos no hacen una diferencia a la hora de decidir participar: muchas personas tienen los recursos y no participan, y muchas tienen los recursos y sí participan.

Los resultados de la regresión sí identifican un recurso que hace la diferencia: el nivel educativo. Un mayor nivel educativo aumenta la disposición positiva a involucrarse en bloqueos y manifestaciones. Esto puede deberse, como ya se ha mencionado, a un mayor desarrollo de habilidades blandas de retórica y liderazgo, así como a redes sociales que facilitan la organización. Otro posible motivo es otro tipo de recursos, no interpersonales. Explícitamente, dinero y tiempo. Un mayor nivel educativo usualmente se correlaciona con ingresos más altos, y más tiempo de ocio, ambos bienes sumamente útiles para participar.

Tampoco es posible no mencionar la importancia histórica de movilizaciones por parte de estudiantes universitarios. Una frase clásica en movilización de recursos es que las personas no participan por tres motivos: porque no pueden, porque no quieren y porque nadie se los pidió (Brady *et al.*, 1995). Para cierta parte de la población, el ambiente mismo de la universidad puede ser propicio para que se les pida participar. Nótese que esta es una de las áreas donde estructuras de oportunidades y movilización de recursos se encuentran: son características contextuales que pueden ayudar a que se presenten los recursos.

Las dos variables significativas restantes pertenecen a la tradición de acción colectiva, y son la confianza en que las manifestaciones y los bloqueos "sirven". Ya Finkel y Muller (1998) habían presentado un modelo de intereses colectivos, en el cual parte fundamental del cálculo sobre participar o no de forma contenciosa es la creencia de que el movimiento puede llevar a que sucedan cambios políticos. Esta es una concepción racional e instrumental de la política contenciosa. Las personas tienen preferencias de política pública (tal vez informadas por sus reclamos), y buscan movilizar la situación política hacia sus preferencias. Los bloqueos y las manifestaciones son dos

estrategias posibles para mover la agenda de política pública más cerca de sus preferencias, pero involucrarse en un bloqueo o manifestación solo tiene sentido si la persona cree realmente que esta estrategia va a llevar al resultado deseado, es decir, “que sirve”. La implicación aquí es que la participación contenciosa en el país dependerá en parte de la percepción que se forme la población de qué tanto responda el gobierno a los intentos de influenciar política pública mediante acciones contenciosas.

6. Referencias

- Alvarado Alcázar, A., Cortés Sequeira, S. y Sáenz Leandro, R. (2021). La protesta laboral en Costa Rica (2013-2019): actores, repertorios y demandas. *Revista de Ciencias Sociales, IV*(174), 17-40.
- Arikan, G. y Bloom, P. B. N. (2019). Religion and political protest: a cross-country analysis. *Comparative Political Studies, 52*(2), 246-276. <https://doi.org/10.1177/0010414018774351>
- Brady, H. E., Verba, S. y Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: a resource model of political participation. *American Political Science Review, 89*(2), 271-294. <https://doi.org/10.2307/2082425>
- Chavarría Mora, E. (2019). Statism, emancipation and the left: understanding unconventional political participation in Costa Rica. *Revista Latinoamericana de Opinión Pública, 8*(1), 127-163. <https://doi.org/10.14201/rlop.22344>
- Chong, D. (1991). *Collective action and the civil rights movement*. University of Chicago Press.
- Cortés Sequeira, S. (2022). Protestas en torno al género en Costa Rica (2008-2020). *Anuario de Estudios Centroamericanos, 48*, 1-30.
- Cortés Sequeira, S., Rojas Lizano, M. y Chavarría Chinchilla, S. (2023). La “luna de miel” y las protestas en los primeros siete meses del gobierno de Rodrigo Chaves Robles (mayo-diciembre, 2022). *Anuario del Centro de Investigación Estudios Políticos, 14*, 1-35. <https://doi.org/10.15517/aciep.v0i14.54214>
- Dalton, R., Van Sickle, A. y Weldon, S. (2010). The individual-institutional nexus of protest behaviour. *British Journal of Political Science, 40*(1), 51-73. <https://doi.org/10.1017/S000712340999038X>
- Finkel, S. E. y Muller, E. N. (1998). Rational choice and the dynamics of collective political action: evaluating alternative models with panel data. *American Political Science Review, 92*(1), 37-49. <https://doi.org/10.2307/2585927>
- Fournier Facio, M. V. (2012). Participación más allá del voto. En C. Raventós, M. V. Fournier, D. Fernández y R. Alfaro (Eds.), *Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad* (pp. 81-100). Instituto de Formación y Estudios en Democracia.

- Gómez Campos, S. y Cerdas Piedra, M. (2019). *La voz social en Costa Rica entre enero de 1992 y agosto de 2019* (investigación de base para el *Informe estado de la nación en desarrollo humano sostenible 2019*). Programa Estado de la Nación. <http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7849>
- Griffin, J. D., Kiewiet De Jonge, C. y Velasco-Guachalla, V. X. (2020). Deprivation in the midst of plenty: citizen polarization and political protest. *British Journal of Political Science*, 51(3), 1080-1096. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000681>
- Gurr, T. (1970). *Why men rebel*. Princeton University Press.
- Harris, A. S. y Hern, E. (2019). Taking to the streets: protest as an expression of political preference in Africa. *Comparative Political Studies*, 52(8), 1169–1199. <https://doi.org/10.1177/0010414018806540>
- Kitschelt, H. P. (1986). Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracies. *British Journal of Political Science*, 16(1), 57-85. <http://www.jstor.org/stable/193981> Accessed : 11-03-2016 07 : 20
- Koopmans, R. y Rucht, D. (2002). Protest event analysis. En B. Klandermans y S. Staggenborg (Eds.), *Methods of social movement research* (pp. 231-259). University of Minnesota Press.
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805431>
- McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: a partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241. <https://doi.org/10.4324/9781315129648>
- Moncada Céspedes, J. (2023). *La acción colectiva en el primer año de gobierno de Rodrigo Chaves Robles: ¿disuasión o confrontación?* Programa Estado de la Nación.
- Olson, M. (1971). *The logic of collective action*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvj3f3ts>
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973529>
- Voorend, K., Alvarado Abarca, D. y Sáenz Leandro, R. (2023). A lost opportunity? Collective demands and migrant farmworkers in Costa Rica during the pandemic. *Studies in Social Justice*, 17(1), 48-67. <https://doi.org/10.26522/ssj.v17i1.4034>

Capítulo IV. **Violencia y participación electoral**

*Suráyabi Ramírez Varas
Alejandro Abarca Garro*

Introducción

La región latinoamericana registra numerosos episodios que ilustran cómo la criminalidad puede trascender el ámbito de la seguridad pública y socavar la integridad del proceso democrático. En 2021 México registró más de 782 ataques contra políticos y al menos 35 homicidios contra aspirantes de cargos públicos (Camhaji, 2024). El expresidente hondureño durante 2014-2022, Juan Orlando Hernández, fue encontrado culpable por tres cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos (BBC News, 2024). En 2007, en Guatemala, tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano fueron asesinados, y se acusó a cuatro policías guatemaltecos como responsables (Dalton, 2007 y El País, 2007). En Ecuador, a once días de las elecciones presidenciales de 2023, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado después de finalizar un mitin político (Mella, 2023).

Los ejemplos son abundantes, y se dan en una región bastante violenta, pues, según la Oficina de Naciones Unidas contras las Drogas y el Delito (UNODC), de los 20 países en el mundo con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes, 18 se encuentran en Latinoamérica y el Caribe (2023). Por su parte, en el ámbito nacional, el 2023 cerró como

el año con más homicidios en Costa Rica desde la Guerra Civil de 1948 (Universidad de Costa Rica [UCR], 2023). Estos hechos son relevantes para el sistema democrático, ya que la forma en que las sociedades y los gobiernos responden a la violencia puede erosionar libertades fundamentales y la confianza en las instituciones.

En este contexto, el presente artículo busca abordar el tema de la violencia y los procesos electorales respondiendo las siguientes preguntas: ¿cuál es la relación entre la criminalidad y la asistencia a las urnas?, ¿estimula a las personas para buscar soluciones a través de procesos electorales o desincentiva su participación en estos? y ¿qué conexión existe entre las características sociales y demográficas y la ocurrencia de delitos e intención de voto? Para contestar estas interrogantes, se emplean modelos de regresión y análisis de componentes principales, y se utilizan datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*, del Sistema de Estadísticas Policiales del Organismo de Investigación Judicial y de la base de datos de llamadas del Sistema de Emergencias 9-1-1.

1. La relación entre violencia e intención de voto

La relación entre la violencia y la participación electoral se ha abordado, principalmente, a través del estudio de las consecuencias de los conflictos armados en la participación política. En un metaanálisis que abarcó más de 16 artículos centrados en el efecto de los conflictos armados en países mayoritariamente de África y Asia, Bauer *et al.* (2016) resaltaron cómo se observa que las personas expuestas a una mayor violencia relacionada con la guerra tienden a aumentar su participación social. Este aumento se manifiesta a través de la incorporación a grupos cívicos locales o de la asunción de roles de liderazgo en sus comunidades.

En consonancia con lo anterior, Blattman (2009), al examinar el conflicto armado en Uganda, destaca el fenómeno del crecimiento postraumático en las víctimas, el cual está asociado con una mayor información y experiencia sobre los costos de la violencia. De manera similar, Bellows y Miguel (2009), al investigar la guerra civil en Sierra Leona de 1991 a 2002, encuentran que las personas más directamente afectadas por violencia de guerra muestran mayor propensión a asistir a reuniones comunitarias, a votar y a unirse a grupos políticos y a grupos comunitarios.

Ahora bien, estos resultados no son uniformes en la literatura. Cassar *et al.* (2013) encuentran que, en la guerra civil en Tayikistán, la violencia minó la confianza entre personas, redujo la disposición para participar en intercambios interpersonales y reforzó normas morales basadas en parentesco. Destacan que los efectos son más pronunciados en áreas con conflictos más intensos y mayor polarización política.

En el contexto de Bosnia y Herzegovina, y utilizando datos de elecciones desde 1990 hasta 2014, Alacevich y Zejcirovic (2020) examinan el impacto electoral de un conflicto civil étnico en el cual las víctimas son atacadas por integrantes de su propia comunidad y luego participan en el mismo sistema político que sus agresores. Los autores encuentran una relación negativa entre el conflicto civil y la participación electoral. En particular, resaltan una disminución del voto de aproximadamente 4 puntos porcentuales por cada aumento de una desviación estándar en la violencia hacia civiles, incluso hasta dos décadas después de la resolución del conflicto.

Ahora bien, cuando se analizan estudios no enfocados en guerras civiles o conflictos armados entre ejércitos, se observa también una diversidad amplia de resultados. Por ejemplo, al estudiar los atentados en escuelas y colegios de Estados Unidos durante el periodo 1980-2016, García *et al.* (2022) encuentran que, a nivel de condado, estos incidentes no aumentan la participación electoral, pero sí generan un aumento en la intención de voto entre los dos principales partidos. En los condados donde ocurre por lo menos un tiroteo en una escuela, el voto por el Partido Demócrata aumenta en cinco puntos porcentuales en las siguientes elecciones.

Por otro lado, en el caso de Dinamarca, Sønderskov *et al.* (2022) enlazan registros de participación individual en las elecciones municipales de 2009 y 2013 con registros de victimización por delitos violentos y no violentos. Los autores encuentran que la victimización por delitos violentos incrementa la participación en un 2 a 3%. Resultado que se alinea con la hipótesis de que la exposición a la violencia puede tener consecuencias prosociales y positivas en la participación de los individuos (Bauer *et al.*, 2016).

No obstante, la evidencia del efecto disuasor también ha sido encontrada. Para Latinoamérica, García (2009) muestra cómo en Colombia, a medida que las guerrillas y grupos paramilitares aumentan sus niveles de control sobre las municipalidades, la participación electoral sufre una reducción significativa. Para México, Trelles y Carreras (2012) encuentran que conforme aumenta la violencia, la participación electoral tiende a disminuir en los municipios mexicanos. Asimismo, la participación disminuye cuando la violencia criminal aumenta en municipios vecinos. Los investigadores señalan dos razones para explicar sus resultados: la primera es que la violencia criminal tiene un impacto negativo en la participación porque aumenta el número de ciudadanos desencantados y apáticos; la segunda es que niveles más altos de violencia criminal afectan negativamente la participación electoral al incrementar la percepción de inseguridad durante el proceso electoral.

2. Determinantes del voto: una breve mención

Si bien el presente capítulo se centra en violencia, para procurar que los resultados no se deban a otro factor, es importante considerar cómo otras

posibles variables afectan el voto. Entre estos factores, es conocido que, a nivel individual, la probabilidad de votar aumenta con la edad y la educación (Blais, 2006). Estudios han demostrado que las personas con niveles más altos de educación tienen más probabilidades de votar, unirse a organizaciones políticas y participar en debates políticos (Kulachai *et al.*, 2023).

Por otro lado, se ha encontrado una correlación positiva entre los niveles de ingresos y la participación política. Las personas con ingresos más altos tienden a estar más comprometidas políticamente y tienen más probabilidades de votar en comparación con aquellas de ingresos más bajos (Verba *et al.*, 1995).

Asimismo, la decisión de votar tiene un componente de formación de hábito. Es decir, las personas que han votado -o se abstuvieron de hacerlo- en el pasado son más propensas a repetir esta acción en futuras elecciones (Plutzer, 2002 y Gerber *et al.*, 2003). Esto es especialmente probable cuando los individuos son reforzados por el resultado de su acción, es decir, a través de la victoria (o derrota) de su candidato favorito.

De estas investigaciones, se obtuvo información para definir algunas de las variables utilizadas en el análisis, tal como se verá en la sección “Metodología y datos”.

3. Metodología y datos

Para estimar la relación entre la criminalidad y la intención de voto, se emplea un modelo de regresión lineal con una variable dependiente dicotómica que toma un valor de 1 si la persona votó en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2022 y de 0 en caso contrario. Este tipo de modelo -también conocido como modelo de probabilidad lineal- compara personas con características similares para estimar cómo el cambio en una variable afecta la probabilidad de votar¹.

La variable independiente principal en cada modelo es la que captura violencia y criminalidad. Para ello se utiliza: 1) el número de homicidios registrados por el OIJ por cantón y 2) la cantidad de llamadas sobre presunto uso de armas de fuego reportadas al Sistema de Emergencias 9-1-1. Ambas variables son afines al estándar en la literatura y ofrecen complementariedad: la primera proporciona una medida más “objetiva” de los niveles de violencia, mientras que la segunda captura mejor la percepción de violencia, ya que se registra solo si hay llamadas al Sistema de Emergencias. Además, la variable del 9-1-1 permite que un solo evento

¹ En lenguaje un poco más formal, este análisis de regresión estima el efecto condicional de variaciones de las variables independientes sobre la probabilidad de votar.

tenga varias llamadas asociadas, lo que proporciona información sobre el nivel de atención pública que reciben los delitos².

Asimismo, ambas variables ofrecen complementariedad. Por un lado, capturan expresiones distintas de violencia, dado que no todas las llamadas relacionadas con armas de fuego son por homicidios. Por el otro, existen delitos o usos ilícitos de armas de fuego que no se denuncian ante el OIJ, dado que no todo registro o denuncia tiene como antecedente una llamada al 9-1-1. El modelo en su versión completa se expresa en la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \text{Votó2022}_i = & \beta_0 + \beta_1 \text{Mujer}_i + \beta_2 \text{Edad}_i + \beta_3 \text{InterésPolítica}_i \\ & + \beta_4 \text{PuntajeDemocracia}_i + \beta_5 \text{PIBCantonal}_i + \beta_6 \text{Criminalidad}_i \\ & + \beta_7 \text{Votó 2018} + \theta_1 \text{EstadoOcupacional}_i + \theta_2 \text{NivelEducativo}_i \\ & + \theta_3 \text{Provincia}_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

Las demás variables independientes incluidas en la ecuación 1 son las siguientes:

- **Mujer:** toma un valor de 1 si la persona reporta su género como mujer, 0 en caso contrario.
- **Edad:** son los años cumplidos de la persona.
- **Votó en 2018:** asume un valor de 1 si votó en la primera ronda de la elección presidencial de 2018 y 0 si no lo hizo.
- **Interés en la política:** Es la respuesta a la pregunta sobre el nivel de interés de la persona en la política, valorado en una escala del 1 al 5, donde 5 indica mucho interés y 1 refiere a ningún interés.
- **Producto interno bruto (PIB) cantonal:** equivale al producto interno bruto del cantón donde resida la persona entrevistada para el año 2021.
- **Nivel educativo:** en el modelo ingresa como un conjunto de variables dicotómicas que indican el último año educativo aprobado por cada persona. Se agrupan en las siguientes categorías: sin educación o con primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, educación parauniversitaria, educación universitaria incompleta y educación universitaria completa (incluyendo posgrados).
- **Provincia:** corresponde a siete variables dicotómicas que asumen un valor de 1 si la persona vive en esa provincia y 0 en caso contrario.
- **Estado ocupacional:** se compone de nueve variables dicotómicas que representan diferentes respuestas a la pregunta “¿a qué se dedica usted?”, incluyendo trabajo remunerado a tiempo completo, trabajo remunerado a tiempo parcial, desempleo, estudiante, pensionado, entre otros.

² Esto se basa en la premisa de que cuantas más llamadas recibe un incidente, mayor conocimiento tiene la población sobre este, y mayor es la probabilidad de que se difunda la información del suceso, ya sea entre la comunidad o en los medios de comunicación. En este sentido, esta variable también puede entenderse como una forma de aproximar el nivel de percepción de criminalidad.

- **Puntaje de democracia:** es una suma de los puntajes a la pregunta “¿para que un país sea democrático debe existir...?”, para lo cual debía responderse sí o no sobre componentes como partidos políticos, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, autoridades locales, partidos políticos con alternancia en el poder, elecciones periódicas, independencia de poder, entre otras. En total son diez categorías, por cada respuesta afirmativa a uno de los elementos anteriores se suma 1. Es así como la variable de puntaje de democracia tiene un rango de valores de 1 a 10.

Por otro lado, se realiza un análisis de componentes principales, técnica que busca resumir información estadística de muchas variables, con el objeto de simplificar el análisis e identificar las principales tendencias que explican la variabilidad en los datos. Este método toma todas estas variables y las combina para encontrar patrones subyacentes -o estructuras- en los datos. Luego, muestra cuáles variables están más relacionadas entre sí y cómo pueden resumirse en pocos “componentes principales”. Estos “componentes principales” son nuevas variables que representan la mayor parte de la información en los datos originales, lo que facilita su comprensión y análisis. En pocas palabras, el análisis de componentes principales ayuda a simplificar datos complejos. Los resultados de esta técnica se muestran en la sección 4.

De igual forma, cabe resaltar que este capítulo ofrece un primer acercamiento a la comprensión de la relación entre la violencia y la participación política. Asimismo, el estudio no pretende ser un análisis exhaustivo sobre las variables que determinan el voto. Hay otros factores que pueden afectar la decisión de votar, como la religión (Layman, 2001 y Pignataro y Treminio, 2019), gastos en campaña (Geys, 2006) o estrategias de movilización electoral (Green y Gerber, 2008), que no fueron considerados en el estudio. El enfoque principal de este capítulo se centra en la relación entre delitos violentos y la participación electoral.

4. Resultados del modelo de componentes principales

En la figura 1 se muestra el resultado del análisis de componentes principales (ACP), que ofrece una primera aproximación a posibles patrones en los datos. Cada punto representa una observación de la encuesta, es decir, una persona entrevistada. Las figuras o colores agrupan a estos individuos en categorías donde comparten varias características entre sí. Por otro lado, las flechas en la imagen muestran las variables estadísticamente más significativas en el análisis. Cuanto más extensa sea la flecha (u oscuro el nombre de la variable), más estadísticamente significativa y relevante es la variable para explicar la variabilidad en los datos. Asimismo, cuanto más cercana sea una flecha de otra (ángulos agudos entre las flechas) esto representa una correlación positiva más fuerte entre las variables.

Por ejemplo, las variables “votó en 2022”, “votó en 2018” y “votó en 2014” tienen una correlación positiva muy fuerte entre sí. Como se mencionó anteriormente, dado el elemento de costumbre o hábito que se forma alrededor del ejercicio del voto, si una persona votó en la elección anterior, es más probable que lo haga en la presente, en comparación con alguien que no lo hizo. Asimismo, como es razonable esperar, la correlación entre el voto en 2022 es mayor con la decisión de votar en 2018 que en 2014.

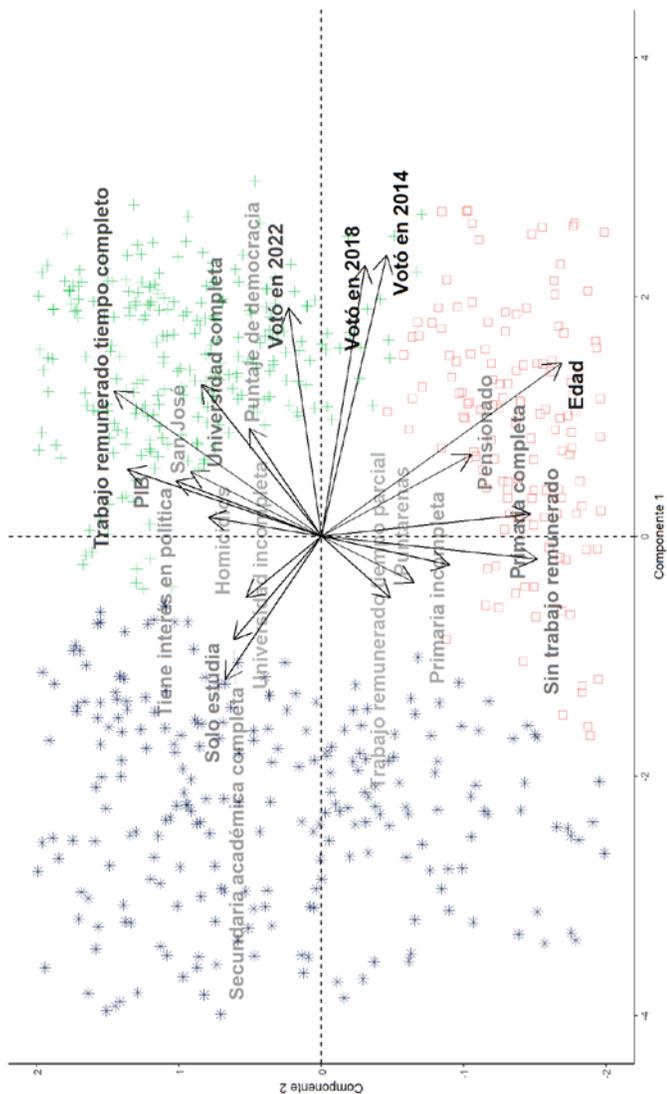
Cuando las flechas de dos variables forman un ángulo mayor de 90 grados, esto indica una correlación negativa entre las variables. Es así como la variable “trabajo remunerado en tiempo parcial” está correlacionada negativamente con haber votado en cualquiera de las tres elecciones. Por otro lado, si el ángulo entre dos flechas es cercano a 90 grados, esto representa que las variables no están correlacionadas. Este es el caso de “votó en 2022”, con “edad” y “primaria completa”.

Por otro lado, cuando se usa la combinación de variables empleadas en este estudio, la estimación identifica tres grandes grupos de perfil de votantes, los cuales se muestran en la figura 1. El grupo 1 corresponde a las observaciones identificadas con cruces verdes y se caracteriza por reunir a personas con trabajo remunerado de tiempo completo, viven en la provincia de San José, tienen niveles altos de educación, interés en política, otorgan un alto puntaje a la democracia y viven en cantones cuyo producto interno bruto es alto. Estos individuos también muestran, en general, una correlación positiva con la participación en las elecciones de 2014, 2018 y 2022.

El grupo 2, representado por cuadros rojos, se compone de personas con edades avanzadas, pensionadas, en condición de desempleo o con niveles educativos más bajos. Una parte de este grupo muestra una correlación positiva leve con la participación en las elecciones, pero la mayoría de estas personas no muestra correlación alguna con los procesos electorales (particularmente aquellas en situación de desempleo o niveles educativos de primaria).

Figura 1

Análisis de componentes principales y decisión de voto



Nota. Elaboración con base en los datos de la Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

Por último, el tercer grupo de observaciones -ilustrado con asteriscos azules- se caracteriza por personas que solo estudian o cuyo último nivel educativo adquirido es secundaria académica completa. Asimismo, son personas jóvenes y que tienden a no haber votado -o votado muy poco- en las elecciones.

Los patrones aquí encontrados son explorados con más rigurosidad en la siguiente sección a través de modelos de regresión. Destaca la relación entre niveles educativos y la decisión de votar, así como la correlación leve pero positiva entre los homicidios cantonales y la decisión de votar en 2022. Similar es el caso de la correlación positiva entre el voto en elecciones anteriores y la participación en las elecciones del 2022. Todos estos fenómenos y variables son explorados a continuación.

5. Resultados de modelos de regresión

A continuación, se presentan en la tabla 1 los resultados de los modelos de regresión. El modelo 1 ofrece una primera aproximación acerca de los factores asociados a la decisión de votar y, como punto de partida, se halla que las tres variables incluidas son estadísticamente significativas a un 1%. Como es común en la literatura sobre decisión de voto, se encuentra una relación positiva entre los años cumplidos y la probabilidad de votar. Los resultados indican que si las demás variables se mantienen constantes, la probabilidad de votar se incrementa en 0,3 puntos porcentuales, por cada año cumplido. De forma equivalente, cada 10 años, aumenta en 3 puntos porcentuales.

Por otro lado, el modelo 1 muestra que la probabilidad de asistir a las urnas aumenta 3 puntos porcentuales por cada punto adicional expresado de interés en la política. Por último, la variable de puntaje democrático también muestra significancia estadística. Como se mencionó anteriormente, la variable recoge diez características propias de sistemas democráticos y se le asignaba una nota de 1 a 10 según la cantidad de estas características que las personas consideran importantes para que exista democracia. De esta forma, cuanto mayor es la calidad democrática que consideren las personas como necesaria, más asisten a votar.

Por último, cabe señalar que aun cuando las razones están fuera del ámbito de este capítulo, que el interés en política y calidad democrática sean en simultáneo estadísticamente significativos es un hecho relevante: sugiere que, para Costa Rica, el interés por la política y el interés por la democracia se entienden como dos hechos o posturas separadas.

El modelo 2 adiciona el efecto que tiene la provincia de residencia de cada persona en la decisión de votar en la elección de 2022. Los coeficientes de las provincias se deben interpretar en relación con San José. Así, quienes residen en Cartago y Heredia tienen una propensión a votar mayor que San José, de 4,6 y 8,4 puntos porcentuales adicionales, respectivamente.

En todas las demás provincias se muestra una probabilidad menor de votar. Particularmente, Guanacaste resalta como la provincia con la brecha más profunda, dado que las personas guanacastecas tienen una propensión a votar de 11 puntos porcentuales menor respecto a una persona de San José.

Tabla 1

Factores asociados al voto: resultados de modelos de regresión

Variable	Modelo		
	(1)	(2)	(3)
Edad	0,0036*** (0,0006)	0,0036*** (0,0006)	0,0006 (0,0011)
Puntaje de democracia	0,0537*** (0,0105)	0,0536*** (0,0109)	0,0255** (0,0075)
Interés en política	0,0369*** (0,0070)	0,0356*** (0,0072)	0,0148 (0,0081)
Mujer			-0,0248 (0,0224)
Votó en 2018			0,4900*** (0,0297)
Provincia			
Alajuela		-0,0378*** (0,0009)	0,0053 (0,0061)
Cartago		0,0455*** (0,0027)	0,0133* (0,0066)
Heredia		0,0838*** (0,0008)	0,0959*** (0,0073)
Guanacaste		-0,1111*** (0,0010)	-0,0599*** (0,0046)
Puntarenas		-0,1082*** (0,0042)	-0,0590*** (0,0096)
Limón		-0,0280*** (0,0022)	0,0400*** (0,0081)
Situación de empleo			
Remunerado t/ parcial			-0,0683* (0,0313)
Desempleado			-0,0338 (0,0329)

▼ Continuación

Variable	Modelo		
	(1)	(2)	(3)
Situación de empleo			
Sin trabajo remunerado			-0,0650 (0,0390)
Solo estudia			0,1233*** (0,0240)
Último nivel educativo			
Secundaria completa			0,1220 (0,0713)
Parauniversitaria			0,1855** (0,0726)
Universitaria incompleta			0,1592** (0,0465)
Universitaria completa y posgrado			0,1665** (0,0522)
Número de observaciones	945	982	982

Nota. Los errores estándar están agrupados a nivel de provincia. Se omite por espacio los coeficientes de las variables dicotómicas de “estudiar y tener trabajo de tiempo completo”, “estudiar y tener trabajo de tiempo parcial”, “pensionado”, “primaria completa” y “secundaria incompleta”. Esas cuatro variables no son estadísticamente significativas en ninguna especificación.

*** Representa significancia estadística al 1%, ** representa significancia estadística al 5% y * representa significancia estadística al 10%.

El tercer modelo incluye variables adicionales: sexo, si la persona votó en la primera ronda en el 2018, su situación de empleo y el nivel educativo. Lo primero que resalta es que ya la variable de edad e interés en política deja de ser estadísticamente significativa. Es decir, las características de las personas que hacían que votaran más en función de su edad o interés en la política están correlacionadas con las nuevas variables incluidas en el modelo 3.

En cuanto a las variables sobre situación de empleo del modelo 3, los coeficientes deben interpretarse en relación con las personas que están empleadas a tiempo completo. La mayoría de estas variables no muestran diferencia estadísticamente significativa. Una de las excepciones es la categoría de las personas que solo estudian, las cuales revelan una probabilidad de votar 12 puntos porcentuales adicionales respecto de las personas empleadas a tiempo completo.

En cuanto al nivel educativo, los coeficientes se deben interpretar en función de las personas con primaria incompleta o menos. Las variables educativas

que resultan con diferencias estadísticamente significativas son aquellas de personas que tienen educación parauniversitaria o superior. Es así como -si todas las demás variables se mantienen constantes- una persona con educación universitaria completa tiene una probabilidad de votar de 17% más que alguien con primaria incompleta.

Por último, un fenómeno que resalta respecto al modelo 2 es que el signo del coeficiente de Limón se torna positivo. Esto sugiere que el hecho de que Limón -como provincia- vote menos respecto de San José encuentra su razón en los niveles educativos y la situación de empleo de la provincia. Según los resultados, si se tomaran dos personas con las mismas características de situación de empleo, educación, historial de voto, edad, preferencias democráticas e interés por política, pero una fuese de Limón y la otra de San José, la persona promedio de Limón tendría una probabilidad de votar 4 puntos porcentuales mayor que la de San José.

6. Resultados incluyendo nivel de criminalidad

A continuación, se presentan los modelos que incluyen la variable de criminalidad para medir su efecto en la decisión de votar. Afín a otras investigaciones sobre este tema, el énfasis se hace en los crímenes violentos, usando la variable de homicidios a nivel cantonal del OIJ y el número de llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1. Se emplean dos variables provenientes de fuentes diferentes, que capturan distintas formas de violencia criminal, con el fin de brindar robustez a los resultados.

Ambas variables se incluyen tanto en el total acumulado entre enero de 2019 y enero de 2022 como en su valor promedio mensual durante ese mismo periodo. Es importante destacar que las variables de criminalidad deben tener una perspectiva de mediano o largo plazo. Tal como se señaló en la primera sección, los legados de violencia pueden tener efectos sobre la participación en procesos democráticos durante décadas (Blattman, 2009; Bellows y Miguel, 2009; Cassar *et al.*, 2013 y Alacevich y Zejcirovic, 2020).

Es así como el modelo 4 incluye el acumulado de homicidios por cantón, registrados por el OIJ entre enero de 2019 y enero de 2022. El modelo 5 presenta el promedio mensual de homicidios durante ese mismo periodo. El modelo 6 incluye el acumulado de llamadas al 9-1-1 por presuntos delitos con armas de fuego entre enero de 2019 y enero de 2022, y el modelo 7 presenta el promedio cantonal diario de llamadas por estos delitos, durante ese mismo periodo.

La tabla 2 muestra cómo las cuatro opciones de variables de violencia criminal son estadísticamente significativas. En el primer modelo, se observa que el incremento histórico de un delito en todo el periodo de estudio está asociado a la reducción de un 0,1 punto porcentual en la probabilidad de

votar. Es decir, por cada incremento en 10 homicidios, la probabilidad de votar en puntos porcentuales se reduce en 1; por cada 100, en un 10. Considérese, a modo de referencia, que durante ese período el cantón central de Puntarenas experimentó 173 homicidios y Limón 136.

Tabla 2

Crímenes violentos y decisión de votar: resultados de modelos de regresión

Variable	Modelos según variable de criminalidad			
	(4) Acumulado de homicidios	(5) Promedio mensual de homicidios	(6) Acumulado de llamadas con armas de fuego	(7) Promedio mensual de llamadas con armas de fuego
Criminalidad	-0,0010*** (0,0002)	-0,0372*** (0,0057)	-0,0001** (0,0000)	-0,0015** (0,0005)
Mujer	-0,0243 (0,0226)	-0,0243 (0,0226)	-0,0264 (0,0228)	-0,0266 (0,0227)
Votó en 2018	0,4901*** (0,0289)	0,4901*** (0,0289)	0,4904*** (0,0296)	0,4903*** (0,0296)
Edad	0,0005 (0,0012)	0,0005 (0,0012)	0,0005 (0,0012)	0,0005 (0,0012)
Puntaje de democracia	0,0258** (0,0075)	0,0258** (0,0075)	0,0262** (0,0077)	0,0261** (0,0077)
Interés en política	0,0144 (0,0079)	0,0144 (0,0079)	0,0141 (0,0079)	0,0141 (0,0079)
PIB cantonal	0,0307** (0,0120)	0,0307** (0,0120)	0,0208 (0,0138)	0,0188 (0,0132)
VARIABLES CONTROL				
Educación	Sí	Sí	Sí	Sí
Situación de empleo	Sí	Sí	Sí	Sí
Provincia	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de observaciones	941	941	941	941

Nota. Los errores estándar están agrupados a nivel de provincia.

*** Representa significancia estadística al 1%, ** representa significancia estadística al 5% y * representa significancia estadística al 10%.

Cuando cambiamos la tasa de homicidios de un acumulado total a una tasa promedio en el modelo 5, la variable se mantiene estadísticamente significativa. El valor del coeficiente indica que el incremento en un homicidio

mensual a nivel cantonal está asociado a una reducción de 3,7 puntos porcentuales en la probabilidad de votar.

El modelo sexto utiliza llamadas al 9-1-1 sobre presuntos delitos cometidos con armas de fuego, y arroja que cada llamada del cantón durante esos casi 3 años previos a las elecciones presidenciales está asociada a un aumento de probabilidad de 0,005 puntos porcentuales de no votar. Para poner estos números en perspectiva, por cada 100 llamadas que se realizan en un cantón, aumenta en 0,5 puntos porcentuales la probabilidad de no votar. Considérese como referencia que, para el cantón Central de Limón fueron 805 llamadas y para Puntarenas, 700.

En último lugar se encuentra el modelo 7, el cual arroja que cada llamada adicional mensual que se recibe sobre un evento ocurrido con armas de fuego está relacionada con una reducción de 0,1 puntos porcentuales en la probabilidad de votar. Tómese como ejemplo que en un cantón como Zarcero el promedio mensual de llamadas de esta categoría representa un 0,16, mientras que en Matina alcanzan unas 10,56 llamadas.

Por último, cabe señalar que el PIB cantonal muestra un efecto positivo y estadísticamente significativo, pues indica que su incremento de un 1% está asociado a un incremento de 3% en la probabilidad de voto. Esto es notable, dado que ya se considera el nivel educativo y la situación de empleo de las personas. Están fuera de los objetivos del capítulo las razones de tal fenómeno, pero este es compatible con un mayor dinero de campaña invertido en los cantones con más ingresos, lo que puede incrementar el acceso a información y así el interés de votar. Por otro lado, podría deberse a que mayores niveles de PIB cantonal estén asociados a mejor infraestructura pública que facilita el desplazamiento hacia los centros de votación, entre otros factores.

Sin embargo, es relevante mencionar que esta variable deja de ser significativa en los modelos 5 y 6. Esto podría explicarse por la correlación entre el PIB cantonal y actividades con armas de fuego como los asaltos, que tienden a ocurrir con mayor frecuencia en áreas con mayores ingresos. Estas relaciones ofrecen áreas de interés para futuras investigaciones y análisis más detallados.

7. Discusión y conclusión

Este capítulo estudia la relación entre crímenes violentos en Costa Rica y el ejercicio del voto el día de las elecciones presidenciales, para lo cual se utiliza la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*, junto con bases de datos del Organismo de Investigación Judicial y del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Se encuentra que la violencia delictiva está vinculada con una reducción en la decisión de ejercer el voto. En particular, el aumento en un homicidio mensual

está asociado a una reducción de 3,7 puntos porcentuales en la probabilidad de votar a nivel cantonal. Asimismo, cada llamada adicional sobre presuntos eventos con armas de fuego en un cantón está asociada con una disminución en la probabilidad de votar de 0,1 puntos porcentuales.

Esto es consistente con literatura que asocia la violencia de grupos criminales con el aumento de ciudadanía desencantada y apática (Trelles y Carreras, 2012). En esta misma línea, los procesos electorales en zonas afectadas por la violencia criminal pueden dejar en las personas una percepción de fracaso respecto a las instituciones democráticas y gobiernos de turno en su capacidad de prevenir y reducir estos delitos (Alacevich y Zejcirovic, 2020). Este sentimiento de desilusión puede generar una disminución en la confianza de los ciudadanos en el sistema político y sus líderes gubernamentales, lo que a su vez desmotiva su participación en las elecciones.

En cuanto a otros factores relacionados con la decisión de acudir a las urnas, existe una relación positiva entre la edad y la probabilidad de votar; sin embargo, esta relación deja de ser estadísticamente significativa cuando en el análisis se incorporan el nivel educativo y la situación laboral de la persona. Eso sugiere que la edad por sí misma no es una variable particularmente determinante en relación con la probabilidad de votar, sino que son otros factores sociodemográficos con los que está asociada que influyen en la probabilidad de asistir a las urnas. Por otra parte, el sexo tampoco es una variable estadísticamente significativa como factor en la decisión de votar³.

Destaca la variable denominada “puntaje de democracia”, la cual se construyó con base en una pregunta sobre los componentes que debe tener un país para ser considerado democrático. Esta variable suma los puntajes asignados a una serie de componentes que según la persona entrevistada son necesarios para que un país sea considerado democrático. Estos componentes incluyen partidos políticos, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, autoridades locales, elecciones periódicas, independencia de poder, entre otros. Cada respuesta afirmativa a uno de estos elementos suma un punto, lo que resulta en un puntaje que va de 1 a 10.

En todas las estimaciones, esta variable resultó estadísticamente significativa: cada punto adicional que incrementa esta variable está asociado a un aumento en 2,5 puntos porcentuales de la probabilidad de votar. Esto indica que las personas que valoran más la calidad de la democracia tienden a votar con mayor frecuencia. Este hallazgo subraya la importancia de fomentar una educación que promueva los valores democráticos, así como la importancia de garantizar el acceso equitativo y de calidad a la educación cívica en todos

³ Si bien estas variables dejan de ser significativas explicando la decisión de votar, no se descarta que pudieran tener relevancia en la preferencia por un tipo de partido político sobre otro. No obstante, la base de datos utilizada no preguntaba por la preferencia de voto.

los niveles educativos. Además, destaca la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la conciencia cívica y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones democráticas.

Por otro lado, y en línea con lo que señala la literatura sobre experiencias internacionales, las personas con empleo de tiempo completo tienden a votar más que aquellas en condición de desempleo. Lo mismo ocurre con aquellas que poseen educación universitaria, quienes tienen una probabilidad de votar de 15 puntos porcentuales más alta en comparación con aquellas que tienen primaria incompleta o ninguna educación formal.

Lo anterior indica cómo la estabilidad económica y la educación superior están relacionadas con un mayor interés en asuntos políticos y sociales. Asimismo, puede ser indicativo de cómo brindan mayor nivel de empoderamiento sobre la capacidad de influencia a través del voto y en el acceso a más recursos, tanto económicos como educativos, para obtener información sobre el proceso electoral.

Este capítulo ofrece un primer acercamiento para comprender la relación entre la violencia y la participación política, y muestra una imagen representativa de la realidad costarricense. Futuras investigaciones pueden tomar estos resultados como base para responder preguntas tales como: ¿existen diferencias en la intención de voto entre las personas víctimas de crímenes y quienes no lo han sido?, ¿tiene la violencia un efecto diferenciado sobre el voto de los partidos políticos?, ¿qué impacto tienen las políticas públicas que afectan la intención de voto?

Esencialmente, este capítulo muestra que si se comparan personas de la misma edad, sexo, nivel de ocupación, nivel educativo, posturas sobre la democracia e interés en política, un aumento en los crímenes violentos en un cantón está asociado a una reducción en la probabilidad de votar de sus habitantes.

Los resultados encontrados sugieren que las políticas de seguridad tienen un impacto significativo en los procesos democráticos y la participación ciudadana en la elección de gobiernos nacionales. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar la violencia criminal como un componente de la salud democrática de una nación, y enfatizan la necesidad de políticas que aborden tanto la seguridad ciudadana como la participación política para promover sociedades más seguras y democráticas.

8. Referencias

Alacevich, C. y Zejcirovic, D. (2020). Does violence against civilians depress voter turnout? Evidence from Bosnia and Herzegovina. *Journal of Comparative Economics*, 48(4), 841-865.

- BBC News. (8 de marzo de 2024). Radiografía de un “narcoestado”: así funcionaba Honduras bajo el poder de Juan Orlando Hernández, según las pruebas por las que lo declararon culpable en EE. UU. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/articulos/c6pe6wv721lo>
- Bellows, J. y Miguel, E. (2009). War and local collective action in Sierra Leone. *Journal of Public Economics*, 93(11-12), 1144-1157.
- Blais, A. (2006). What affects voter turnout? *Annual Reviews of Political Science*, 9, 111-125.
- Blattman, C. (2009). From violence to voting: war and political participation in Uganda. *American Political Science Review*, 103(2), 231-247.
- Camhaji, E. (14 de febrero de 2024). Urnas y tumbas: la delgada línea entre la política y el narco en las elecciones de 2024. *El País*. <https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2024-02-14/urnas-y-tumbas-la-delgada-linea-entre-la-politica-y-el-narco-en-las-elecciones-de-2024.html>
- Cassar, A., Grosjean, P. y Whitt, S. (2013). Legacies of violence: trust and market development. *Journal of Economic Growth*, 18, 285-318.
- Dalton, J. (21 de febrero de 2007). Tres diputados salvadoreños mueren asesinados en Guatemala. *El País*. https://elpais.com/diario/2007/02/21/internacional/1172012410_850215.html
- El País. (26 de febrero de 2007). Asesinados los policías guatemaltecos acusados de la muerte de tres diputados salvadoreños. *El País*. https://elpais.com/internacional/2007/02/26/actualidad/1172444403_850215.html
- García, M. (2009). *Political violence and electoral democracy in Colombia. Participation and voting behavior in violent contexts* (doctoral dissertation, University of Pittsburgh).
- García Montoya, L., Arjona, A. y Lacombe, M. (2022). Violence and voting in the United States: how school shootings affect elections. *American Political Science Review*, 116(3), 807-826.
- Gerber, A. S., Green, D. P. y Shachar, R. (2003). Voting may be habit-forming: evidence from a randomized field experiment. *American Journal of Political Science*, 47(3), 540-550.
- Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: a review of aggregate-level research. *Electoral Studies*, 25(4), 637-663.
- González, F. y Miguel, E. (2015). War and local collective action in Sierra Leone: a comment on the use of coefficient stability approaches. *Journal of Public Economics*, 128, 30-33.
- Green, D. P. y Gerber, A. S. (2019). *Get out the vote: how to increase voter turnout*. Brookings Institution Press.

- Kulachai, W., Lerdomornsakul, U. y Homyamyen, P. (2023). Factors influencing voting decision: a comprehensive literature review. *Social Sciences*, 12(9), 1-16.
- Layman, G. C. (1997). Religion and political behavior in the United States: the impact of beliefs, affiliations, and commitment from 1980 to 1994. *Public Opinion Quarterly*, 288-316.
- Mella, C. (10 de agosto de 2023). Asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2023-08-10/asesinado-el-candidato-presidencial-fernando-villavicencio-en-ecuador.html#>
- Pignataro, A. y Treminio, I. (2019). Reto económico, valores y religión en las elecciones nacionales de Costa Rica 2018. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 39(2), 239-263.
- Plutzer, E. (2002). Becoming a habitual voter: inertia, resources, and growth in young adulthood. *American Political Science Review*, 96(1), 41-56.
- Sønderskov, K. M., Dinesen, P. T., Finkel, S. E. y Hansen, K. M. (2022). Crime victimization increases turnout: evidence from individual-level administrative panel data. *British Journal of Political Science*, 52(1), 399-407.
- Trelles, A. y Carreras, M. (2012). Bullets and votes: violence and electoral participation in Mexico. *Journal of Politics in Latin America*, 4(2), 89-123.
- Universidad de Costa Rica. (1 de diciembre de 2023). 2023: En Costa Rica no nos matábamos tanto... desde la Guerra Civil de 1948. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/12/01/2023-en-costa-rica-no-nos-matabamos-tanto-desde-la-guerra-civil-de-1948.html>
- Verba, S., Schlozman, K. L. y Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: civic voluntarism in american politics*. Harvard University Press.

Capítulo V. **Cinco elecciones municipales: ¿construimos una cultura política democrática orientada a lo local?**

Eugenia Aguirre Raftacco

Mario Cortés Vásquez

Carolina Ovares Sánchez

Introducción

Costa Rica constituye un caso interesante para estudiar la cultura política democrática y su vínculo con los gobiernos locales. Aunque las elecciones nacionales tienen una larga tradición desde 1953, las elecciones municipales son relativamente recientes, con la consolidación del sistema presidencial a nivel municipal en 1998 y la realización de elecciones directas para todos los niveles de gobierno local hasta principios del siglo XXI, con la primera elección municipal separada parcialmente de la elección nacional en 2002.

El Código Municipal de 1998 estableció la figura de alcaldía municipal de elección popular, que sería elegida con su respectivo concejo municipal para ejercer su mandato por cuatro años, junto con otras reformas que consolidaron la instancia local de gobierno. Esta reforma de 1998 constituyó una apuesta inicial a la ampliación de la democracia participativa y representativa, en el marco de un incremento de la actividad legislativa

tendiente a descentralizar el poder público y el perfilamiento de una política general del Estado encaminada a fortalecer los municipios como un factor clave para la profundización democrática (Zeledón, 2003 y Fernández, 2019).

La promesa democrática local iniciada en 1998 con la creación de una instancia de gobierno local representativa y participativa (Zeledón y Rodríguez, 2003) completa su diseño en 2009, año en que se reforma el Código Electoral. Esta reforma estableció la elección de todos los cargos municipales de manera simultánea a medio periodo del mandato presidencial, con lo que separó totalmente las elecciones locales de las nacionales. Este ejercicio democrático se llevó a cabo por primera vez en 2016.

Las elecciones municipales adquieren relevancia por la expectativa de que estos representantes, al ser originarios de las comunidades, posean un conocimiento vital sobre los intereses de la comunidad que deben administrar, según mandato constitucional y que dicen representar. Una de las aspiraciones de la separación de los comicios consistía en un posible mayor interés de la ciudadanía, dado que los partidos políticos tendrían dos años después de las elecciones presidenciales para prepararse para las municipales y se reduciría el “agotamiento electoral” de los comicios que se realizaron en 2002, 2006 y 2010 en diciembre (Sobrado, 2011). Dicho interés ciudadano supone un vínculo y posible alineación de la gestión gubernamental local con las expectativas de la sociedad, de manera que se fortalece la conexión entre la toma de decisiones políticas y las necesidades expresadas por las y los munícipes de cada cantón.

Adicionalmente, la construcción de una cultura política, con características democráticas, constituía un elemento integral de la promesa democrática que justificaba el cambio en las reglas del juego electoral municipal. Después de cinco ciclos electorales municipales, la consolidación de las autoridades locales como parte del gobierno local y ajustes de diseño electoral e institucional, se esperaba que la promesa democrática se tradujera en la formación de patrones de orientaciones políticas y actitudes hacia un objeto local, es decir, hacia los gobiernos locales con atributos democráticos.

La promesa que impulsó la reforma y, en consecuencia, la separación de los comicios nacionales y subnacionales era fortalecer la dimensión electoral y el componente participativo de la democracia a nivel local. Sin embargo, más de veinte años desde el inicio de estos procesos se han destacado, particularmente, por una baja participación de la ciudadanía en las elecciones y con una participación electoral promedio inferior en las elecciones municipales en comparación con las nacionales.

Debido a lo anterior, planteamos, como pregunta de discusión en este trabajo, lo siguiente: tras dos décadas de realizar elecciones municipales,

¿construimos una cultura política democrática orientada a lo local? Nuestra hipótesis de trabajo es que persiste un déficit de vínculo del gobierno local con la ciudadanía, y una parte de la explicación es que creamos una instancia de gobierno local políticamente descentralizada en términos del diseño electoral. Empero, la persistencia de deficiencias y pocos avances respecto de la descentralización administrativa y fiscal del Estado se ha trasladado a que el gobierno ve limitadas sus capacidades institucionales y esto repercute en la satisfacción de la ciudadanía con su municipio.

Para responder de manera exploratoria la pregunta, en el apartado 1 realizamos un recorrido histórico sobre el estado de la descentralización en el país y las reformas electorales atinentes al régimen municipal. De seguido, desarrollamos la conceptualización del estudio de la cultura política. En un tercer apartado conceptualizamos la ‘cultura política orientada a lo local’, para dar cuenta de su estado actual. Con la finalidad de alcanzar este objetivo, proporcionamos, en una cuarta sección, evidencia parcial debido a la limitada literatura nacional, relacionada con la pregunta en cuestión, así como a las limitaciones metodológicas para abordar la cultura política local sin disponer de datos desagregados a nivel cantonal. Finalmente, presentamos las conclusiones alrededor de la pregunta de investigación.

1. Descentralización y construcción de culturas políticas locales

La descentralización es definida por Falleti (2010) citada por Dosek, Quiñón y Elías (2022) como un conjunto de reformas que buscan transferir funciones, recursos y poder desde un nivel superior de gobierno a los niveles subnacionales. Estos autores establecen tres dimensiones para la descentralización: administrativa, fiscal y política, las cuales se describen en la tabla 1.

Tabla 1

Dimensiones del proceso de descentralización y sus características

Dimensión	Definición
Descentralización administrativa	Conjunto de políticas que transfieren a los gobiernos subnacionales la administración y prestación de servicios sociales tales como educación, salud, asistencia social o vivienda. La descentralización administrativa puede implicar la delegación de autoridad decisoria en estas áreas. Si los recursos fiscales son transferidos para mantener estos servicios, la descentralización administrativa está financiada.

▼ Continuación

Dimensión	Definición
Descentralización fiscal	Conjunto de políticas destinadas a aumentar los ingresos o la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. Estas políticas pueden aplicarse a través del aumento de las transferencias del gobierno central, la creación de nuevos impuestos subnacionales o la delegación por parte del gobierno nacional de autoridad impositiva a los gobiernos subnacionales.
Descentralización política	Conjunto de reformas constitucionales y electorales destinadas a abrir o reactivar espacios de representación subnacional. Las medidas de este tipo están destinadas a delegar autoridad política o posibilidades electorales a actores subnacionales.

Nota. Dosek, Quiñón y Elías (2022, p. 24) a partir de Falletti (2010).

Costa Rica establece el marco de descentralización del Estado a partir de la aprobación de la reforma al artículo 170 de la Constitución Política en el año 2001. La reforma a dicho numeral definió un proceso de traslado de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades con los respectivos recursos, por medio de siete leyes especiales que al aprobarse una por año asignarían un 1,5% de los ingresos ordinarios del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales para financiar cada competencia trasladada, hasta alcanzar un 10% como tope de transferencia presupuestaria anual. Esto implicaría cubrir el componente de descentralización administrativa con el financiamiento correspondiente.

Al respecto, diversos autores como Rivera (2001) y Espinosa *et al.* (2003) indican que en Costa Rica el proceso de descentralización se encontraba lejos de ser una realidad, en comparación con las transformaciones sobre la descentralización que acontecieron hacia finales del siglo veinte en la mayoría de los países de América Latina (Selee, 2004)¹. Un factor explicativo planteado por los autores es el mismo centralismo arraigado en la cultura política del país -una cultura político-administrativa centralista- que limita la fiscalización de las prácticas municipales, debilita la legitimidad de los gobiernos locales y reduce la participación democrática; como lo demuestran estudios de opinión pública realizados antes del proceso electoral municipal de 2002.

En el año 2010 se estableció la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades², cuyo objetivo es determinar los principios y las disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 constitucional. Ello supuso un lapso de nueve años sin avances en la

¹ El espíritu de los esfuerzos descentralizadores del Estado de los años 80 y 90 en el mundo se fundaba en la aspiración de hacer al Estado más accesible y eficiente para las ciudadanías y asegurar un contrapeso de poder frente a posibles abusos de los líderes nacionales (Selee, 2004).

² Ley 8801.

aplicación del mandato constitucional. Dentro del marco de dicha normativa y en el cumplimiento de sus propósitos y parámetros, se ha aprobado la transferencia de una única competencia del Poder Ejecutivo a las municipalidades: la gestión plena y exclusiva de la red vial cantonal. El Poder Ejecutivo transfirió esta competencia en cumplimiento de los parámetros de la Ley 8801.

El país requirió un lapso de quince años para poder transferir una competencia a las municipalidades con una normativa que cumpliera con los parámetros del proceso formal de descentralización. Las razones que explican por qué no se ha logrado descentralizar, según el mandato constitucional, no han sido investigadas en profundidad y escapan de los objetivos de este trabajo.

Empero, se puede poner en evidencia en el plano jurídico que la ampliación de las potestades municipales se ha dado en un proceso 'paralelo' de transferencias 'incompletas' de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, que ha contribuido a una descentralización administrativa vaciada de contenido económico. Lo planteamos como un proceso 'paralelo' en el tanto escapa del marco formal desarrollado por el país para llevar adelante la descentralización del Estado y como 'incompletas' por profundizar responsabilidades municipales y ampliarlas en distintas materias con la supervisión o rectoría técnica del Poder Ejecutivo, es decir, sin transferir exclusivamente las competencias a las municipalidades.

Entre las piezas de legislación que ilustran la descentralización administrativa paralela e incompleta, se observa cómo las municipalidades asumen competencias que las hacen más relevantes para la población por el vínculo que tienen dichos servicios con la calidad de vida de las personas. Entre esos ejemplos, destaca la legislación sobre residuos sólidos³ y policía municipal⁴; también, las leyes de movilidad ciclística y peatonal⁵. En el mismo caso recaen leyes con un componente social significativo en temas como vivienda municipal⁶ y atención a población en situación de abandono y condición de calle⁷.

Este recuento no es taxativo, pero cada ejemplo constituye un caso donde las municipalidades asumieron nuevas responsabilidades tomando recursos de las fuentes de financiamiento establecidas con anterioridad. Ello provoca que se perpetúen desigualdades territoriales en la atención de los objetivos de política pública.

³ Ley 8839 y Ley 9542.

⁴ A este respecto se recomienda la revisión de Aguirre, Araya y Paz (2023).

⁵ Ley 9660 y Ley 9976.

⁶ Ley 10199.

⁷ Ley 10009, pese a la existencia de una política nacional que involucra a todas las instituciones del sector social, la ley sin fuentes de financiamiento atribuye a las municipalidades la obligación de crear albergues.

Según Aguilar y Pallavicini (2019), el periodo más importante de descentralización fiscal en el caso costarricense es el decenio de los años noventa e inicios de la década siguiente. Posteriormente, los avances en descentralización fiscal a partir del establecimiento del marco general de descentralización del país en 2010 son mínimos, puesto que el marco tributario municipal no ha sufrido cambios significativos que favorezcan el aumento de ingresos que sustenten las nuevas obligaciones de política pública⁸. Esto se pone en evidencia en la evolución de los presupuestos municipales, expuesta en los siguientes párrafos⁹.

Los gobiernos locales en el país representaron entre 2011 y 2021 en promedio un 1,96% del total de presupuestos públicos y el 27,7% de las instituciones públicas costarricenses (figura 1). En su conjunto, por naturaleza jurídica, son el grupo de instituciones que menos recursos ostentan al compararlo con el total (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN] y Contraloría General de la República [CGR]). Asimismo, Aguilar y Pallavicini (2019), al comparar datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) afirman que el país es de baja tributación municipal.

En términos netos los presupuestos municipales iniciales para cada año se muestran en la figura 1. El crecimiento sostenido desde 2012 encuentra potenciales explicaciones en las reformas al modelo de cobro de patentes municipales de licores¹⁰. Adicionalmente, el gráfico de la figura 1 muestra una curva de crecimiento significativa entre 2016 y 2020 que responde al inicio de la transferencia de recursos provenientes de la primera ley de descentralización¹¹.

⁸ Ello, haciendo la excepción de la primera ley de descentralización, explicada anteriormente.

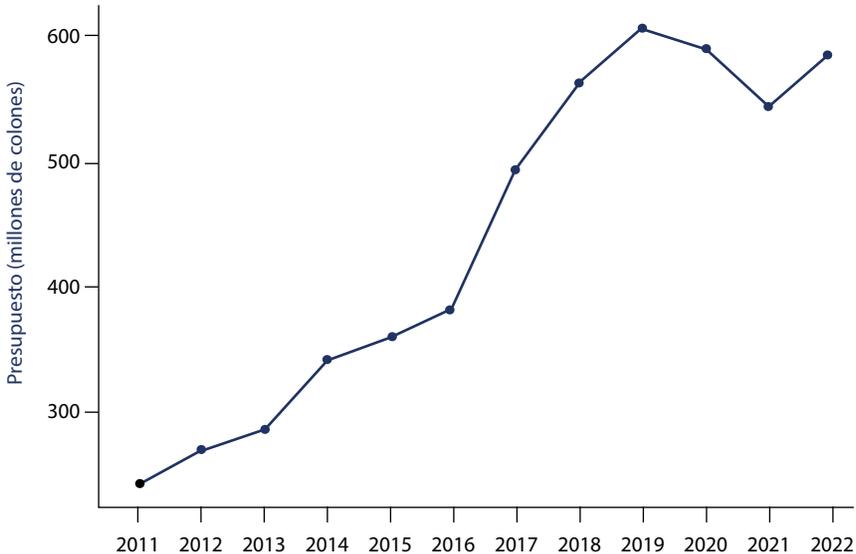
⁹ Para conocer el desarrollo histórico y poner en valor el proceso de evolución fiscal de los gobiernos locales entre 1950 y 2002, se recomienda la lectura detallada de Aguilar y Pallavicini (2019).

¹⁰ Ley 9047. La reforma aprobada en 2012 actualizó los valores nominales contenidos en la ley establecida desde 1936 y pasó a un cobro porcentual indexado que permite su actualización anual.

¹¹ La transferencia fue gradualmente trasladada hasta alcanzar el porcentaje total de transferencia en 2020.

Figura 1

Presupuestos iniciales aprobados al sector municipal por la Contraloría General de la República 2011-2022, en millones de colones



Nota. Elaboración con base en los informes anuales de situación de presupuestos públicos de la CGR (2011-2022).

Según la Unión Nacional de Gobiernos Locales ([UNGL], 2020, p. 23) al revisar las transferencias de capital y corrientes del Poder Ejecutivo a las municipalidades, realizadas entre 2015 y 2020, un promedio del 89,9% de los montos transferidos responden a obligaciones normativas y tienen un destino específico. Estos recursos corresponden a la primera ley de descentralización y a la normativa sobre partidas específicas, destinadas a proyectos comunales. Lo anterior pone en evidencia una baja dependencia de los gobiernos locales respecto a las transferencias del Ejecutivo y un nivel de ingresos bajo en relación con el resto de la institucionalidad pública.

Por su parte, la descentralización política se ha profundizado de manera significativa, al consolidarse con la reforma al Código Municipal de 1998 y completarse con la reforma al Código Electoral de 2009. Según Cascante (2016), dicha descentralización aporta a la calidad democrática: “ya que fomenta el desarrollo de los espacios subnacionales, una mayor cercanía de los electores con los candidatos y ganadores de los puestos municipales, mayor transparencia y rendición de cuentas” (p. 178).

La reforma al Código Municipal de 1998 conformó una instancia de gobierno autónoma y de elección popular en cada uno de sus espacios de toma de

decisión. En dicha reforma la figura ejecutiva constitucional pasó a ser una autoridad de elección popular y se le denominó alcaldía. Según Rodríguez y Zeledón (2003), los cambios de tal reforma también incluyeron una apuesta a consolidar la democracia participativa y representativa en el espacio local, dado que 1) las candidaturas a las alcaldías debían presentar a la ciudadanía un programa de gobierno local, 2) las alcaldías serían electas por voto popular y en fechas distintas a las elecciones nacionales y 3) una vez electos/as podrían ser removidos del cargo al introducirse la figura del plebiscito revocatorio de mandato. Posteriormente, vía reforma legal se incluyeron las dos vicealcaldías dentro de la fórmula de la alcaldía (Aguirre, 2024).

Durante el período analizado, la conformación de los concejos municipales se ha mantenido estable, aunque la elección de las autoridades que los componen permaneció separada de la elección de las alcaldías en las primeras tres elecciones municipales. En los procesos electorales nacionales de 2002, 2006 y 2010 se escogió también a las regidurías de cada concejo municipal y en diciembre del mismo año se eligió a los alcaldes y alcaldesas. A partir de 2016, las elecciones municipales se realizan a medio periodo del mandato presidencial y se escogen simultáneamente todos los cargos; el mismo ejercicio se realizó en 2020. En el periodo constitucional 2018-2022 se realizaron reformas electorales relacionadas con paridad de género y limitaciones a la reelección (Aguirre, 2024).

Ahora bien, a pesar de las reformas electorales detalladas, después de más de dos décadas desde la consolidación del sistema de autoridades municipales por elección directa, la democracia representativa a nivel local se enfrenta a importantes desafíos para fomentar una cultura política democrática orientada a lo local. A continuación, lo analizamos.

2. Aproximaciones en la literatura sobre la cultura política y lo local en Costa Rica

El corpus de investigaciones sobre la cultura política local en Costa Rica, y en general en la región latinoamericana, ha sido notablemente menos extenso en proporción a los estudios de alcance nacional. Los estudios especializados sobre lo local han constituido en términos generales “una materia ausente” o al menos se registra en la literatura una menor atención sistemática sobre la política local (González, 2009; Méndez y Loza 2013; Loza y Méndez, 2016 y Suárez *et al.* 2017).

Los trabajos centrados en la cultura política tienden a abordar la relación de las y los ciudadanos con la legitimidad del sistema democrático, confianza y apoyo a las instituciones del gobierno central (presidente, legisladores,

ministerios, etc.¹²). Estos estudios se han desarrollado a escala nacional y han dejado de lado -en gran medida- el análisis detallado del vínculo y participación de la ciudadanía en contextos y espacios locales (Rodríguez, 2016), a pesar de que estos constituyen un primer nivel en la construcción de la realidad social más inmediata de los individuos.

En el contexto de la literatura costarricense, la investigación sobre cultura política local es limitada. La mayoría de los trabajos se centran en el proceso electoral y en la participación electoral, los resultados de las elecciones y la configuración de los partidos políticos (Zamora, 2016; Alfaro, 2002, 2006 y 2019; Calvo *et al.*, 2018; Cascante, 2016 y Cascante y Camacho, 2019).

Uno de los principales aportes al estudio de la cultura política y el ámbito local se encuentra en los estudios de Córdova y Seligson (2001) y en particular el aporte de Rivera (2001), ya analizado. Estos autores llevaron a cabo un estudio comparativo sobre las relaciones entre ciudadanos y gobiernos central y locales, en el que abordaron aspectos como la interacción entre ambos niveles, la satisfacción con los servicios públicos, las actitudes hacia la participación ciudadana, el conocimiento sobre descentralización, los valores hacia instituciones políticas y las representaciones sobre el poder estatal.

En línea con lo investigado por Rivera (2001), trabajos como el de Vargas, Rosero y Seligson (2006) y Montalvo (2008) -citado en Alfaro y Seligson (2012)- han establecido la relación entre la descentralización fiscal y el fortalecimiento de la conexión entre los ciudadanos y sus gobiernos locales. Estos estudios señalan que Costa Rica tiene un sistema político altamente centralizado, donde las municipalidades han perdido atribuciones a favor del gobierno central desde temprano en su historia republicana y el avance hacia la descentralización es limitado.

A nivel subnacional, se encuentran también informes que han abordado las tendencias de participación electoral y las percepciones ciudadanas, la intención de voto, la evaluación de los servicios públicos, los cuales hasta cierto punto están vinculados a las responsabilidades del gobierno local y la percepción de la población sobre ese gobierno, por medio principalmente de encuestas nacionales por muestreo. Ejemplos incluyen el Programa Estado de la Nación ([PEN], 2008 y 2020), estudios de Alfaro y Gómez (2016), Guzmán (2020), el Instituto de Estudios Sociales en Población ([IDESPO], 2020), así como los informes del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos ([CIEP], 2015 y 2019).

¹² Una corriente importante en ciencia política sobre estudios en cultura política sigue el enfoque iniciado por Almond y Verba (1989), quienes definen la cultura política como el conjunto de conocimientos, creencias, opiniones, juicios y actitudes -orientaciones- que una sociedad tiene hacia el sistema y la vida políticos.

De manera reciente, sobresale el estudio de Díaz (2020). El autor, a partir de los datos recopilados en la encuesta de IDESPO, formula un modelo de “sociabilidad política”. Los hallazgos del estudio indican que aquellas personas con alta sociabilidad política tienen mayor probabilidad de votar en elecciones municipales, esto sugiere que quienes se informan y discuten más sobre política en diferentes espacios de sus comunidades tienden a participar más en estos comicios. Del mismo modo, conocer personalmente a la persona candidata por el municipio y tener cierta cercanía es un factor significativo y positivamente asociado con la participación.

Es importante señalar que la mayoría de estos estudios se centran en la dimensión de la participación electoral o datan de hace más de una década, lo que resalta la necesidad de investigaciones más actualizadas y exhaustivas en el campo que estamos explorando en este trabajo. Dado el estado actual de la literatura en el país, para abordar nuestra pregunta de investigación consideramos que es necesario realizar un esfuerzo conceptual para definir la cultura política y su conexión con lo local.

3. Conceptualizando la cultura política orientada a lo local

El estudio de las culturas políticas puede realizarse desde una perspectiva ‘de lo local’. La política se desenvuelve en un contexto cultural, donde las personas comparten patrones de orientaciones frente a diversos aspectos de la vida política y del sistema político y justamente uno de los aspectos del sistema político consiste en “lo local”. Lo anterior implica entender a las culturas políticas locales en sus propios contextos y características.

En este capítulo, siguiendo lo propuesto por Almond y Verba (1989), empleamos para el estudio el concepto de *cultura política orientada a lo local*. Esta constituye el conjunto de orientaciones cognitivas (conocimientos y creencias), evaluaciones (opiniones y juicios) y actitudes (tendencias psicológicas que interfieren en las valoraciones de los individuos hacia objetos sociales) que una población manifiesta hacia los ‘espacios locales’. Por “orientaciones” nos referimos a las actitudes, creencias o valores que las personas tienen hacia cuestiones políticas, sociales o culturales (Almond y Verba, 1989 y 1990 y Azpuru, 2017) y en particular a las orientaciones cognitivas, valorativas y afectivas de lo local.

En línea con lo propuesto por González *et al.* (2009), consideramos que los ‘espacios locales’ constituyen una producción social cuya dinámica es el resultado de la interacción de múltiples agentes, en diversas escalas de la realidad (local, regional, nacional y global). En otras palabras, los espacios locales son aquellos que se encuentran en construcción por los individuos,

pero que del mismo modo están determinados por las limitaciones geográficas, en donde se reproducen las interacciones sociales.

Una 'cultura política orientada a lo local' no debe limitarse a la relación del sujeto con los espacios de participación formales como elecciones del gobierno local o los propios municipios, sino también los espacios informales de participación que permiten la construcción de comunidad. Es decir, abarca un espectro más amplio que incluye instituciones formales e informales. Debido a los alcances y limitaciones de la presente investigación, solo se abordaron los primeros de estos espacios.

Los estudios recopilados subrayan la complejidad de las interacciones políticas a nivel local y su influencia en la percepción ciudadana sobre la gestión municipal. A pesar de los esfuerzos de producción académica reseñados en la sección de aproximaciones en la literatura, la falta de focalización en lo local ha dejado vacíos de conocimiento en la comprensión de las dinámicas políticas en los contextos locales. Es debido a esto que para una mayor comprensión de las dinámicas locales y en lo particular de la cultura política orientada a lo local, se requiere prestar atención a algunas de las consideraciones que han sido tratadas en este apartado, junto al análisis que presentamos en la sección siguiente (4).

4. Tendencias de la cultura política orientada a lo local

El propósito de esta sección es destacar algunos de los hallazgos clave que contribuyan al debate sobre la cultura política local en Costa Rica. Para efectos de analizar la cultura política orientada a lo local y dar cuenta de su estado en el país, proponemos dos dimensiones para su estudio¹³: *apoyo al sistema* e *integración en los procesos políticos*. Se lleva a cabo un análisis estadístico multivariado en cada una de estas áreas para examinar la distribución de actitudes, creencias y comportamientos de los ciudadanos, orientada a lo local.

La primera dimensión *apoyo al sistema* suele expresarse mediante la legitimidad que un individuo concede a los principios, prácticas e instituciones democráticas (Azpuru, 2019). Cuando se pregunta a los ciudadanos sobre su apoyo a la democracia, se busca evaluar la legitimidad que este ideal posee en la sociedad. La legitimidad democrática implica la aceptación de las normas del juego político, y se considera esencial el respaldo público para el funcionamiento efectivo de la democracia (Norris, 1999 y Booth y Seligson, 2009), o al menos para su supervivencia, incluso en entornos autoritarios, donde la persistencia de los valores democráticos puede ser crucial para fortalecer los procesos democráticos (Meléndez, 2023).

¹³ Para estas dimensiones seguimos parcialmente a Azpuru (2019).

Para nuestro análisis, esta dimensión se refiere a las orientaciones políticas que tiene la ciudadanía hacia su gobierno local, evaluada principalmente a través de la confianza como indicador de legitimidad, y complementada con medidas de satisfacción destinadas a evaluar el desempeño del gobierno local. Confiar en las instituciones expresa un compromiso a largo plazo de la población con las instituciones democráticas y los procesos políticos (Inglehart, 1988).

En relación con la segunda dimensión denominada *integración en los procesos políticos*, la dividimos en dos: el grado de interés en la política y el componente de participación electoral. La idea base consiste en que la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones políticas es un componente clave de las democracias representativas (Dahl, 2012).

A continuación, desarrollamos un análisis de las tendencias de la cultura política orientada a lo local con base en las dimensiones señaladas previamente.

4.1 Apoyo al sistema

Para conocer más en detalle las percepciones de la población costarricense con respecto a lo local, se empleó la encuesta LAPOP del Barómetro de las Américas 2023¹⁴. Una cuestión inicial que surge es la medida en que los ciudadanos costarricenses depositan confianza en sus gobiernos locales y cómo esta confianza varía con el tiempo. Las respuestas a esta interrogante pueden ofrecer una visión sobre las actitudes arraigadas hacia los gobiernos locales a lo largo del tiempo. Para responder estas interrogantes, se realizó una serie de análisis estadísticos multivariados.

Siguiendo las metodologías de análisis utilizadas en informes previos sobre cultura política en Costa Rica (Alfaro y Seligson, 2012), se procedió a recalculiar el indicador utilizando una escala de 0 a 10, con el propósito de facilitar su comprensión y comparación con otros indicadores. A partir de este ajuste, se calcularon los valores promedio de las respuestas por año. Los datos muestran escasas variaciones a lo largo del tiempo, y la evaluación promedio otorgada por la población costarricense en estos asuntos indica un nivel de apoyo que puede ser caracterizado como medio-bajo.

Para el año 2006, 8 años después de las reformas al régimen municipal iniciadas en 1998, se reportó un promedio de confianza menor al reportado

¹⁴ El uso de esta herramienta es ventajoso por varios motivos. El cuestionario ha incluido de forma reiterada, en prácticamente todas las rondas de encuesta, temas sobre la confianza en diferentes instituciones, en lo particular sobre los gobiernos locales. Segundo, la encuesta incluye un amplio despliegue de temáticas que permiten el cruce y correlaciones entre variables, lo cual enriquece el análisis. Por último, es un instrumento aceptado ampliamente en el ámbito académico para investigación por su confiabilidad metodológica, lo que también permite realizar inferencias estadísticas a partir de una muestra de la población.

en 2004. Como hipótesis, puede plantearse que en términos generales la promesa democrática local no cumplió las expectativas de la población y esto se ha traducido en una menor confianza en sus gobiernos locales. Como se mencionó anteriormente, las últimas mediciones han capturado aumentos paulatinos y sostenidos, cuando se detalla en los valores promedios se aprecia que es hasta en el año 2023 cuando el promedio supera ligeramente la puntuación de hace 19 años.

Figura 2

Valores promedio confianza en la municipalidad, según el Barómetro de las Américas (escala de 0-10), 2004-2023



Nota. Elaboración con datos del Barómetro de las Américas (Lupu *et al.*, 2023).

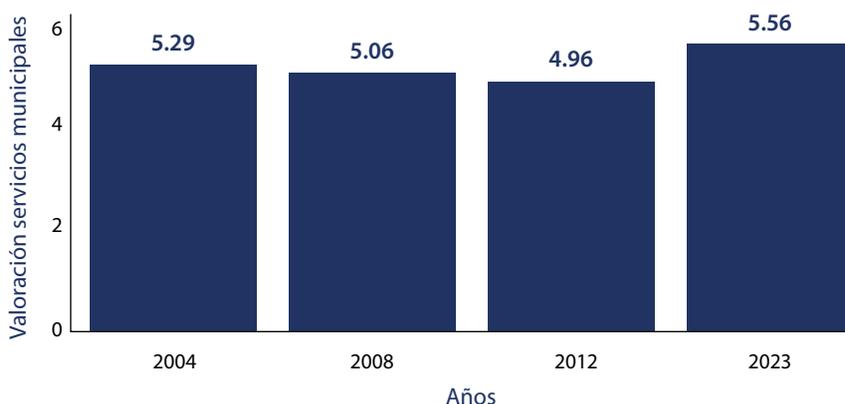
Otra dimensión de interés es la satisfacción con respecto a los servicios que ofrece la municipalidad; esta no consiste en una medida de legitimidad, sino de desempeño. Para nuestro análisis es de utilidad, ya que consideramos que la relación de los servicios locales y la confianza en la municipalidad podrían estar estrechamente vinculadas. Una mayor capacidad de los gobiernos locales para satisfacer las demandas y solucionar los problemas de la comunidad da como resultado una mayor confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.

La valoración de los servicios municipales no se ha preguntado de forma tan reiterada para todos los años, a diferencia de la confianza en la municipalidad.

Para efectos comparativos, se seleccionaron cuatro puntos en el tiempo que fueran lo suficientemente distantes entre ellos para tener la mirada en el largo plazo. En la figura 3 se visualiza que no se identifican variaciones sustanciales en el tiempo, en general la población asigna una nota de 5 a sus servicios municipales, es decir una valoración regular.

Figura 3

Evaluación promedio satisfacción con servicios locales (escala de 0-10)^a, 2004-2023



Nota. Elaboración con datos del Barómetro de las Américas (Lupu *et al.*, 2023).

^a Intervalo de confianza de la muestra al 95% incorporado.

A partir de este análisis, examinamos los factores asociados a la evaluación de la ciudadanía con respecto a sus gobiernos locales. Un municipio con mayor capacidad fiscal y administrativa para atender los problemas locales tendería a una mejor valoración y confianza en su gestión (Seligson y Alfaro, 2012) y es crucial prestar atención a este tema, ya que el fomento de una cultura política democrática está atravesado -necesariamente- por lo local.

Para contribuir al debate, empleamos un modelo de regresión lineal con el objetivo de analizar la confianza en la municipalidad como variable dependiente¹⁵. Desarrollamos dos modelos de regresión distintos: el primero incorpora factores a nivel individual y el segundo considera la percepción de la persona en relación con diversas dimensiones del sistema político.

Como se aprecia en la figura 4, para el primer modelo, con la única excepción de vivir en zona urbana, las características sociodemográficas no funcionan como predictor de mayor confianza en su municipio. Caso contrario sucede

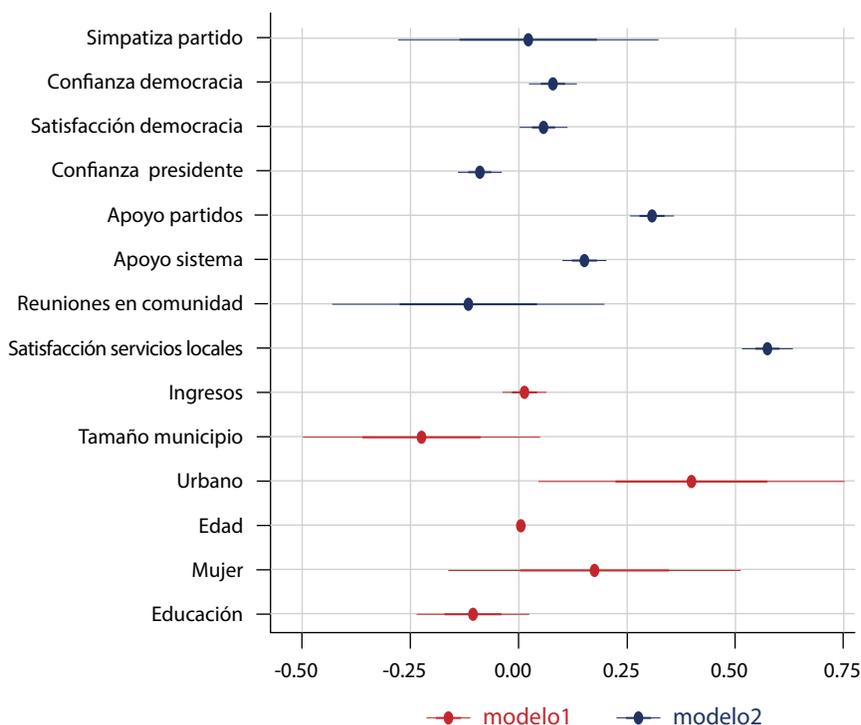
¹⁵ Según la literatura econométrica, este tipo de análisis se considera el más apropiado dados los datos disponibles, ya que la variable dependiente consiste en valores numéricos continuos.

cuando se observan los coeficientes estimados del segundo modelo. Un mayor apoyo a los partidos políticos, respaldo al sistema y una mayor satisfacción con los servicios locales predicen positiva y fuertemente la mayor confianza en la municipalidad. De igual forma, cuando se consulta a la población acerca de su apego a la democracia y satisfacción con el sistema, se obtienen resultados similares, aunque con niveles de confianza apenas por encima del umbral requerido. Un aspecto por considerar es el respaldo al presidente que, contrario a lo que dicta la intuición, se relaciona negativamente con la confianza en el gobierno local.

Este fenómeno puede entenderse como un indicador de desconexión entre la valoración de lo local y lo nacional, es decir, no necesariamente una buena evaluación de los aspectos nacionales se traduce en apoyo a lo local y viceversa. Como hemos señalado en diversas partes del documento, la cultura política enfocada en lo local justifica un análisis específico e independiente del nivel nacional.

Figura 4

Determinantes de la confianza en el gobierno local (modelo de regresión lineal), encuesta del Barómetro de las Américas 2023



Nota. Elaboración con datos del Barómetro de las Américas (Lupu et al., 2023).

La figura 4 muestra los resultados de dos modelos de regresión lineal, donde la variable principal es la decisión del voto en elecciones municipales (seguridad/inseguridad de participar en elecciones municipales). En la figura, hay una línea vertical ubicada en el punto "0". Si el coeficiente estimado de una variable se encuentra a la izquierda de esta línea, sugiere una relación negativa con la variable dependiente; por el contrario, si está a la derecha, indica una relación positiva. Se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que esta relación es estadísticamente significativa cuando el coeficiente no atraviesa la línea vertical.

Otro elemento que destacamos es que uno de los mejores predictores de confianza en la municipalidad es la satisfacción con los servicios locales. Conforme los gobiernos locales atiendan las necesidades y las demandas específicas de la comunidad de manera eficiente y efectiva, la confianza en la administración local tiende a crecer de manera significativa. Cuando los ciudadanos experimentan una respuesta rápida y adecuada a sus problemas y preocupaciones a nivel local, se fortalece el sentido de pertenencia y compromiso con su entorno.

Del mismo modo, al igual que en el análisis de Alfaro y Seligson (2012), hace ya poco más de dos décadas, la satisfacción con servicios locales y su vinculación con el apoyo al sistema sigue siendo relevante para los y las costarricenses. Esta cercanía entre los servicios locales, la municipalidad y el apoyo a la democracia es central en términos de promover una participación cívica más activa y una mayor colaboración en la construcción de una cultura política democrática.

4.2 Integración en los procesos políticos

Esta segunda dimensión versa sobre la integración de las y los ciudadanos en los procesos políticos. Se evalúa tanto el nivel de interés en la política a través de la percepción sobre diversos componentes, así como la participación electoral. Con base en la encuesta realizada por el IFED y FLACSO Costa Rica en mayo de 2023 sobre cultura política, se consultó a la población costarricense su percepción de la política, así como sobre diversos aspectos relacionados con la política de su comunidad y su participación en las elecciones municipales.

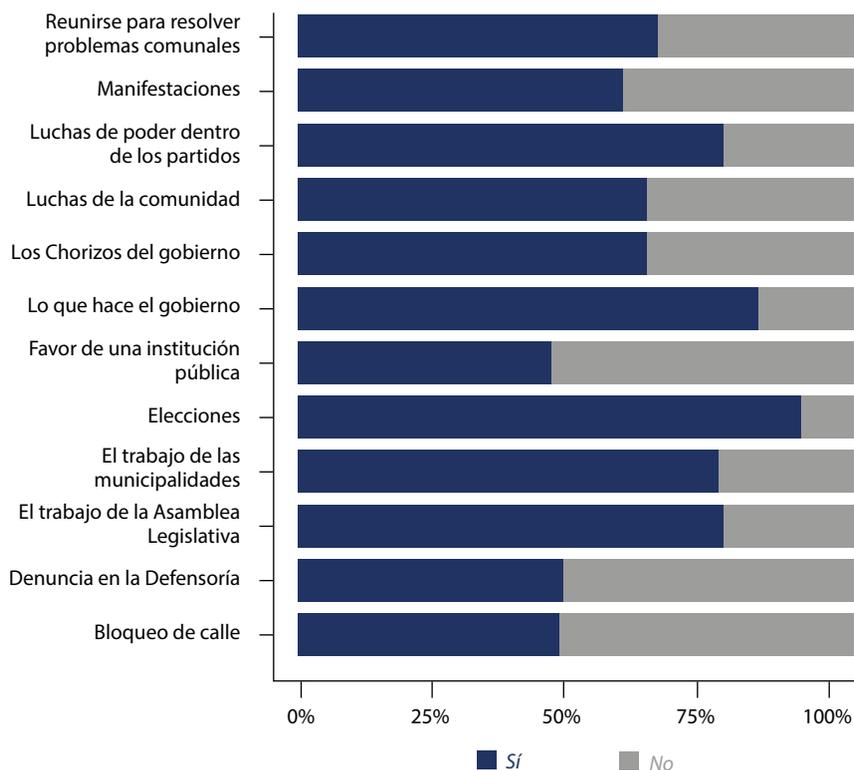
Al explorar los elementos que la población considera esenciales en su concepción de la política, se revelan datos interesantes. Según la figura 5, el 94% de los encuestados relaciona las elecciones con la política, concepto con mayor porcentaje de asociación, seguido por el Gobierno y los partidos políticos. Estos resultados reflejan una tendencia hacia aspectos tradicionales y visibles de un estilo de política formal.

En cuanto a lo local, el 79% de los encuestados percibe el trabajo de la municipalidad como parte de la política. Una vez más, el gobierno local se

configura como una esfera institucional política, lo que implica una mayor facilidad para la vinculación de la población con la esfera política en general. Sin embargo, al considerar aspectos menos institucionalizados a nivel formal, como reunirse para la resolución de problemas comunales y las luchas propias de la comunidad, las respuestas descienden a un 67% y 65% respectivamente.

Figura 5

Opinión sobre los conceptos que más se relacionan con la política, 2023



Nota. Elaboración con datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

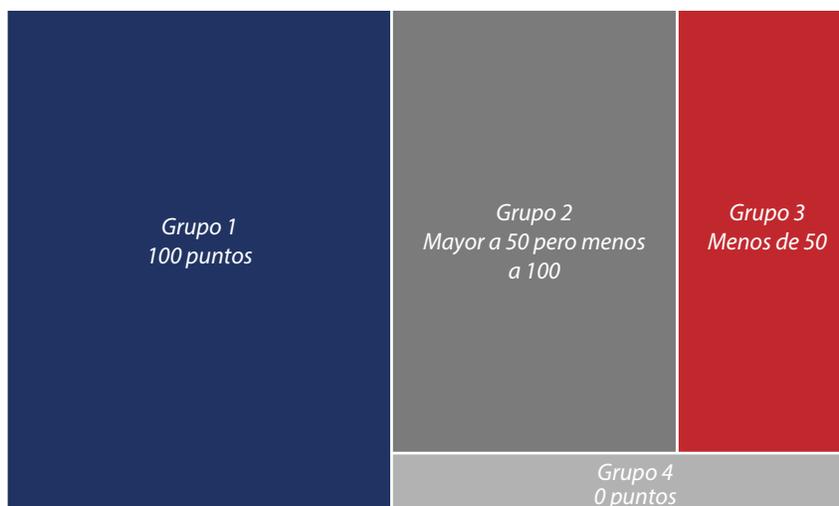
Para explorar más a fondo lo señalado en párrafos previos, establecimos una tipología de grupos para considerar las respuestas de tres ítems específicos, que responden a qué tanto valora la población su municipalidad, los problemas locales y las reuniones de la comunidad en su conceptualización de lo que significa política. Esta medida es construida sumando los tipos de respuestas y sus diferentes combinaciones, y se recalculó en una escala de 0-100.

En perspectiva, el indicador calculado desglosa los porcentajes de los diferentes grupos reunidos en cada categoría. El primer grupo comprende a

aquellos individuos que muestran una conexión más estrecha entre los temas locales y la esfera política, como se evidencia en su respuesta afirmativa a los tres ítems del cuestionario relacionados con estos temas. Este grupo, el más numeroso, representa el 45,5% de las observaciones. Por otro lado, el segundo grupo se caracteriza por tener valoraciones mixtas, es decir, personas que presentan un nivel intermedio y difuso de vinculación entre la política y lo local. Finalmente, los dos últimos grupos muestran niveles más bajos o nulos de percepción de estas conexiones, con una composición del 18% y 7%, respectivamente. Estos datos se visualizan claramente en la figura 6.

Figura 6

Encuesta sobre fuentes de malestar ciudadano 2023: distribución de grupos según tipología por puntajes



Nota. Elaboración con datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.*

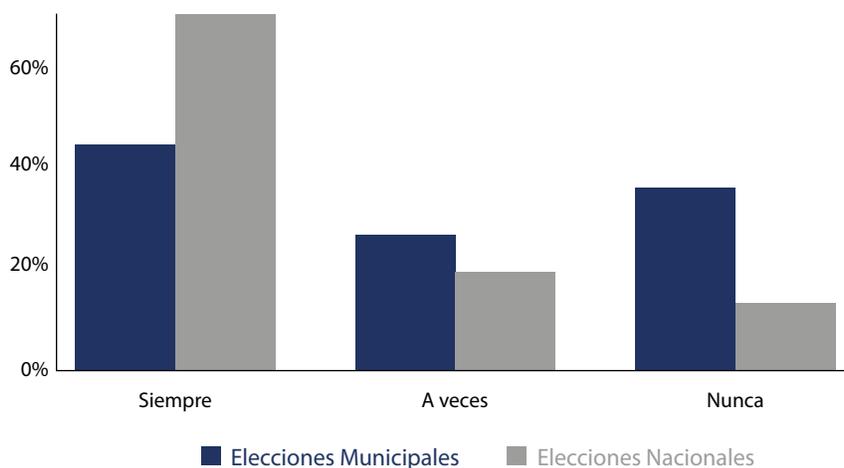
La encuesta también exploró diversos aspectos del comportamiento electoral de la población. Se compararon las frecuencias de voto en elecciones nacionales y municipales, como se detalla en la figura 7. En general, se observa que la participación electoral tiende a ser más alta en las elecciones nacionales, con un porcentaje del 68% de las personas que aseguran siempre salir a votar. En contraste, la participación en elecciones municipales desciende aproximadamente un 40%. Por otro lado, al considerar la falta de participación, el 32% de la población declaró nunca haber votado en elecciones locales, una cifra considerablemente mayor que el 12% que no participa en las nacionales.

La población percibe en menor medida la importancia de la elección de sus autoridades locales. Esto constituye un indicador de cómo el votar en elecciones

subnacionales aún no ha sido interiorizado como relevante en la cultura política de los y las costarricenses, pese a los cinco ejercicios electorales locales.

Figura 7

Frecuencia en la participación electoral para elecciones nacionales y municipales



Nota. Elaboración con datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano*, 2023.

Al explorar sobre la decisión del voto, se encontró que el 47% de las personas encuestadas afirmaron tener seguridad en salir a votar para las elecciones municipales de 2024, un 34% y un 15% mostraron algún grado de inseguridad o certeza de no salir a votar, respectivamente. Estos resultados coinciden con la encuesta aplicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en noviembre de 2023, donde se detalló que el 51% de la gente estaba “algo o muy” interesada por salir a votar, mientras el 48% mostraba cierta apatía por dicho proceso electoral.

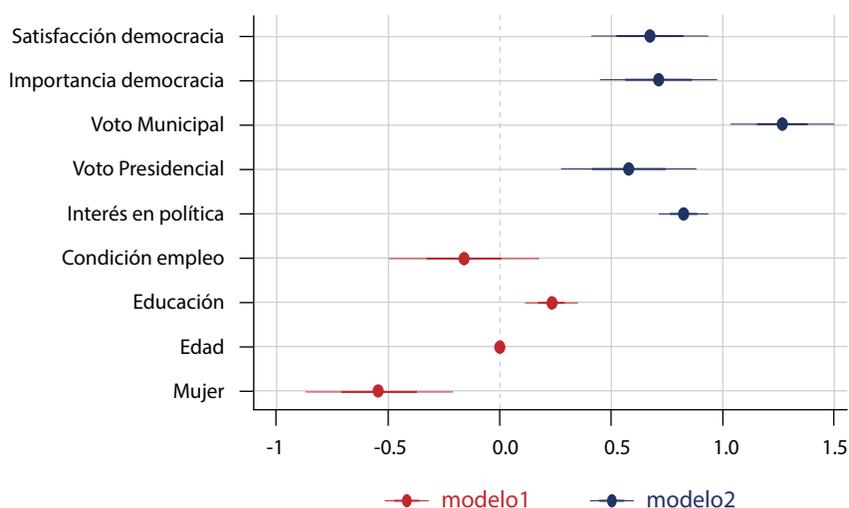
Con el propósito de profundizar en estas cuestiones, se estimó un modelo de regresión logística, tomando como variable de interés la certeza de ir a votar¹⁶. Para efectos analíticos estimamos dos modelos distintos. El primero adopta el nivel “micro” de la participación de los factores individuales, típicamente medidos como variables de corte sociodemográfico. El segundo modelo incorpora variables del comportamiento en un nivel “macro” de la participación, estas son aquellas variables que se relacionan con aspectos del régimen político, como el funcionamiento de la democracia o su interés en los asuntos públicos.

¹⁶ Codificamos la variable como categórica binaria en la que 1 se refiere a la seguridad de ir a votar en las municipales y 0 cuando manifestó indecisión/certeza de no salir a votar.

Según estos modelos, la frecuencia en el voto municipal y un mayor interés por la política están asociados positiva y significativamente con la seguridad de ir a votar en las elecciones de febrero de 2024. Otro hallazgo de este análisis es que las variables sociodemográficas inciden en la seguridad para salir a votar, mayores niveles educativos están asociados positivamente con la certeza de votar en las próximas elecciones. Por el contrario, las mujeres tienen una probabilidad más baja de pertenecer a la categoría de respuesta en comparación con los hombres. Para el resto de los factores analizados, los resultados no son estadísticamente significativos, por lo tanto no se puede afirmar que se relacione con la decisión de salir a votar en las elecciones municipales de 2024.

Figura 8

Determinantes de la decisión de participar del proceso electoral municipal de 2024 (modelo de regresión logística)



Nota. Elaboración con datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano*, 2023.

La dimensión sobre integración en los procesos políticos también toma en cuenta la participación electoral. En el periodo comprendido entre 2002 y 2020 (nuestra investigación abarca ese plazo) se han llevado a cabo cinco elecciones municipales. Estas se caracterizan por una disminución del abstencionismo en buena parte del país, que posiblemente puede ser atribuida a la descentralización de las elecciones cantonales, que tuvo lugar con su separación de las elecciones nacionales en el año 2016.

Otra característica de estos procesos electorales ha sido sus cambios en cuanto a territorios se refiere. La evidencia señala que se pueden encontrar

cantones con una participación aún mayor que en las elecciones nacionales y viceversa, esta misma dinámica se encuentra fuertemente arraigada a patrones territoriales; esto se denomina ‘distintos ecosistemas de la participación’ para el caso de Costa Rica (PEN, 2020).

Con el fin de obtener datos desagregados sobre la participación en cada cantón, empleamos un análisis para medir la diferencia con respecto a la participación en elecciones nacionales. Analizamos los procesos electorales tanto municipales como nacionales para los años 2020 y 2022, respectivamente¹⁷.

El análisis comparativo de la participación electoral en elecciones nacionales y municipales refleja patrones de interés sobre la relación entre el votante y los niveles de gobierno. Al observar los resultados por cantón, sobresale una clara tendencia de mayor participación en las elecciones nacionales, con diferencias notables en casi todo el territorio. Sin embargo, ciertos cantones rurales presentan dinámicas locales particulares que no coinciden con este patrón.

En cantones urbanos como San José, Desamparados y Goicoechea, la diferencia entre la participación en elecciones nacionales y municipales supera los 30 puntos porcentuales. En San José, por ejemplo, la participación en las nacionales alcanza un 61.2%, mientras que en las municipales se sitúa en apenas 25.3%. Este fenómeno no es exclusivo de la capital, cantones urbanos como Heredia y Cartago también presentan diferencias significativas, donde el electorado muestra un mayor interés en las elecciones nacionales.

La participación promedio en primera vuelta de las elecciones generales del 2022 fue del 60%; sin embargo, como exponemos a partir del análisis propuesto, poco menos de la mitad de los cantones lograron superar este umbral de participación en las votaciones de gobiernos locales dos años antes. En este contexto, de los 82 cantones donde se llevaron a cabo elecciones municipales en 2020, solo 8 lograron mantener o superar su nivel de participación respecto a las elecciones generales de 2022. Estos cantones son Turrubares, San Mateo, Río Cuarto, Nandayure, Hojancha, Parrita, La Cruz y Talamanca.

Esas regiones del país se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y se encuentran ubicadas en zonas costeras. La centralización de la institucionalidad en las zonas urbanas, puede ser un factor explicativo a los disonancias territoriales en la participación ciudadana. En contextos de territorios más alejados de los centros urbanos del país las políticas

¹⁷ El resultado del cálculo es entonces la diferencia entre ambas elecciones. De este ejercicio se obtienen para esos años todos los cantones que tuvieron resultados por encima o por debajo de la elección nacional y permite clasificar aquellos con mayor y menor participación con respecto al total nacional.

locales adquieren un peso más importante, donde los desafíos cotidianos –infraestructura, servicios básicos, y ordenamiento territorial– son gestionados directamente por los gobiernos municipales.

5. Conclusiones

La promesa democrática construida en 1998 al descentralizar políticamente al país quedó relegada por el lento avance en la descentralización administrativa y fiscal. Esta situación trae como consecuencia que los gobiernos locales se mantienen con niveles bajos de recursos respecto del resto de la Administración pública, pese al aumento paulatino de funciones y responsabilidades administrativas, tal y como dimos cuenta en la sección sobre descentralización.

Lo anterior genera una brecha en el cumplimiento de la promesa democrática, por las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos locales para asegurar la entrega de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. Proponemos que ello tiene posibles afectaciones en la consolidación de una cultura política -democrática- orientada a lo local, tras cinco procesos electorales, que se traduzca en más apoyo al sistema local y la integración de los procesos políticos.

Esto se pone en evidencia con un proceso de descentralización política avanzado que en los datos no se traduce a las categorías revisadas. Al evaluar el concepto de política que tiene la población, se revela que los temas locales están vigentes en el imaginario colectivo del costarricense. No obstante, esto no se ha traducido en una mayor participación en los espacios comunales, ni tampoco en una mejor valoración de sus propios municipios. Es decir, la descentralización política de los gobiernos locales no atrajo mayor interés por participar en estos espacios.

Uno de los aportes principales de este texto radica en la revisión actualizada de la literatura teórica y de recopilación de datos empíricos de Costa Rica como primera aproximación sobre las orientaciones cognitivas, evaluativas y actitudinales de las personas hacia la instancia local de gobierno. A su vez, esto permitirá explorar nuevas hipótesis y preguntas alrededor de la evolución de la cultura política democrática respecto de lo local, a la vez que se valoran los avances en descentralización con mayor detalle.

La revisión de literatura y recopilación de datos del presente capítulo nos permite confirmar la necesidad de afianzar una agenda de investigación a futuro que considere la ‘cultura política orientada a lo local’ como foco de atención para comprender en mayor profundidad los malestares de la ciudadanía. Para los efectos se requerirá la elaboración de estudios de opinión pública adaptados a la realidad de cada territorio, que puedan

ser empatados con las capacidades institucionales y políticas que se construyan desde la descentralización administrativa y fiscal, considerando que la descentralización política es la dimensión con más avances hacia el cumplimiento de la promesa democrática.

6. Referencias

- Aguirre Raftacco, E. C. (2024). Reformas a la figura ejecutiva municipal en Costa Rica: hacia las elecciones municipales de 2024. *Revista de Derecho Electoral*, 37, 165-183.
- Aguirre Raftacco, E. C., Araya, C. y Paz, A. (2023). *Sistematización de intervenciones de prevención de la violencia y el delito en las municipalidades de Mora y Moravia, desde el enfoque de capacidades institucionales*. Red de Conocimiento en Seguridad Ciudadana. <https://redconose.org/2023/12/31/sistematizacion-intervenciones-de-prevencion-de-la-violencia-y-el-delito-en-las-municipalidades-de-mora-y-moravia-desde-el-enfoque-de-capacidades-institucionales/>
- Alfaro Redondo, R. (2002). Elecciones municipales y debilitamiento del respaldo electoral bipartidista en Costa Rica. Periodo 1986-2002. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 89-135.
- Alfaro Redondo, R. (2006). Participación en las elecciones municipales en Costa Rica: perspectiva histórica. *Revista de Derecho Electoral*, 225-246.
- Alfaro Redondo, R. (2019). Resultados electorales municipales más recientes. *Revista de Derecho Electoral*, 28, 14, 247-259.
- Alfaro Redondo, R. y Gómez Campos, S. (2016). *Análisis del proceso electoral municipal 2016*. [Investigación de base. Informe Estado de la nación en desarrollo humano sostenible 2016]. Programa Estado de la Nación.
- Alfaro Redondo, R. y Seligson, M. (2012). *Cultura política de la democracia en Costa Rica, 2012: La erosión de los pilares de la estabilidad política*. Programa Estado de la Nación.
- Alfaro Redondo, R., y Zeledón, F. (2003). Tendencias en la historia electoral municipal costarricense 1953-2002. *Revista Parlamentaria*, 1(1).
- Almond, G. y Verba, S. (1989). *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. SAGE.
- Almond, G. y Verba, S. (1990). The study of political culture. En *A discipline divided: schools and sects in political science*. Sage Publications.
- Azpuru, D. (2017). Cultura política. En *Diccionario Electoral*. Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- Azpuru, D. (2019). Cultura política en América Central. En J. Castellanos y S. R. Romero (Eds.), *Encrucijadas de la democracia en Honduras y América central* (pp. 43-76). Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH).

- Booth, J. A. y Seligson, M. A. (2009). *The legitimacy puzzle in Latin America: political support and democracy in eight nations*. Cambridge University Press.
- Calvo Bonilla, G., Gutiérrez Fernández, Ó., Pérez Meneses, M., Sáenz Leandro, R., Valverde Sánchez, K. y Vargas Mayorga, J. (2018). Partidos políticos locales: ¿legitimadores o perdedores de la democracia? *Revista de Derecho Electoral*, 25 (5), 83-104
- Cascante Matamoros, M. J. (2016). Elecciones municipales 2016: datos para el análisis del sistema de partidos multinivel. *Revista Derecho Electoral*, 22, 174-190.
- Cascante Matamoros, M. J. y Camacho Sánchez, S. (2019). El sistema de partidos en los cantones: análisis de la distribución territorial de los apoyos (1953-2016). *Revista de Derecho Electoral*, 28 (11), 195-216.
- Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR). (2015). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica* <https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-resultados-del-Estudio-de-Opinio%CC%81n-Sociopoli%CC%81tica-agosto-2015.pdf>
- Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR). (2019). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica* <https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Resultados-del-Estudio-de-Opinio%CC%81n-Sociopoli%CC%81tica-noviembre-2019.pdf>
- Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR). (2023). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica* <https://ciep.ucr.ac.cr/informe-del-estudio-de-opinion-publica-del-ciep-noviembre-2023/>
- Contraloría General de la República (CGR). *Presupuestos públicos. Situación y perspectivas* (informes anuales 2011-2022).
- Córdova, R. y Seligson, M. A. (2001). *Cultura política, gobierno local y descentralización. I. América Central*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Programa El Salvador.
- Dahl, R. (2012). *La democracia*. Editorial Ariel.
- Díaz González, J. A. (2020). Socialización política y participación electoral en las elecciones municipales en Costa Rica, 2020. *Revista de Derecho Electoral*, 153-170.
- Dosek, T., Quiñón, A. y Elías Pineda, M. B. (2022). *Descentralización por inercia: un diagnóstico tras dos décadas de la reforma en Perú (2002-2022)*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA).
- Espinosa, R., Víctor, E., Gómez, S. y Jiménez, L. E. (2003). Las elecciones de alcalde y el sistema democrático: percepciones y expectativas de la población costarricense. En F. Zeledón y F. Rodríguez (Eds.), *Elección en las alcaldías 2002: ¿una nueva esperanza democrática?* (pp. 25-58), Universidad de Costa Rica, Friedrich Ebert Stiftung, PROCESOS.

- González Meyer, R. (2009). Lo local en la teoría y en la política. *Polis (Santiago)*, 8(22), 67-80.
- Guzmán Castillo, J. (2020). *Configuración de las élites locales en las elecciones municipales 2020* [Investigación de base. Informe Estado de la nación en desarrollo humano sostenible 2020]. Programa Estado de la Nación.
- Inglehart, R. (1988). Cultura política y democracia estable. *Reis*, 45-65.
- Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA). (2020). *Informe de encuesta: Cultura política e intención de voto en las elecciones municipales 2020*. https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/17241/informe_encuesta_cultura_politica_e_intencion_voto_elecciones_municipales_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Loza Otero, N. y Méndez de Hoyos, I. (Eds.). (2016). *Poderes y democracias: la política subnacional en México* (1.ª ed.). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO México.
- Lupu, N., Rodríguez, M., Wilson, C. y Zechmeister, E. (Eds.). 2023. *Pulse of democracy*. LAPOP.
- Meléndez, C. (2023). The resilience of democratic values under difficult conditions. The case of Guatemala 2012-2021. *Revista Latinoamericana de Opinión Pública*, 1-27.
- Méndez de Hoyos, I. y Loza Otero, N. (Eds.). (2013). *Instituciones electorales: opinión pública y poderes políticos locales en México*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO México.
- Norris, P. (Ed.). (1999). *Critical citizens: global support for democratic government*. Oxford University Press.
- Pallavicini, V. y Aguilar, J. (2019). *El régimen municipal en Costa Rica. Un análisis económico y político*. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica.
- Programa Estado de la Nación, PEN. (2008). *Capítulo 9: El desafío regional de fortalecer los gobiernos locales*. [Informe Estado de la nación de la región 2016]. Programa Estado de la Nación.
- Programa Estado de la Nación, PEN. (2020). *Capítulo 05: Miradas a profundidad en fortalecimiento de la democracia: desafíos de la democracia electoral municipal en Costa Rica*. [Informe Estado de la nación en desarrollo humano sostenible 2020]. Programa Estado de la Nación.
- Rivera, R. (2001). *Cultura política, gobierno local y descentralización, en Costa Rica*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Programa El Salvador.
- Rodríguez Alvarado, J. (2016). Gobierno local y cultura política en Centroamérica: un análisis a partir de los datos de LAPOP 2004-2012. *Anuario Centro de Investigación y Estudios Políticos*, 6, 130-154.

- Selee, A. (2004). Exploring the link between decentralization and democratic governance. En J. S. Tulchin y A. Selee (Eds.), *Decentralization and democratic governance in Latin America* (pp. 3-36). Woodrow Wilson International Center for Scholar. <https://www.wilsoncenter.org/publication/decentralization-and-democratic-governance-latin-america-no-12>
- Sobrado González, L. A. (2011). Descentralización y reforma electoral. En *Ideario sobre la descentralización en Costa Rica* (pp. 144-147). Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y Universidad Estatal a Distancia (UNED).
- Suárez-Cao, J., Batlle, M. y Wills-Otero, L. (2017). El auge de los estudios sobre la política subnacional latinoamericana. *Colombia Internacional*, 90, 15-34.
- Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). (2020). *Informe sobre localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Unión Nacional de Gobiernos Locales. <https://ods.cr/sites/default/files/documentos/guia-ods-gestion-gobiernos-locales.pdf>
- Vargas Cullell, J., Rosero Bixby, L. y Seligson, M. (2006). *Cultura política de la democracia en Costa Rica: 2006*. LAPOP, Centro Centroamericano de Población.
- Zamora Chavarría, E. M. (2016). De 1813 a 2016: 202 años de elecciones municipales. *Revista de Derecho Electoral*, 21 (3), 36-71.
- Zeledón, F. (2003). Sombras vientos: las primeras elecciones directas de alcaldes en Costa Rica, lo municipal y las tendencias en la cultura político local. En F. Zeledón y F. Rodríguez (Eds.), *Elección en las alcaldías 2002: ¿una nueva esperanza democrática?* (pp. 59-82) Universidad de Costa Rica, Friedrich Ebert Stiftung, PROCESOS.
- Zeledón, F. y Rodríguez, F. (Eds.). (2003). *Elección en las alcaldías 2002: ¿una nueva esperanza democrática?* Universidad de Costa Rica, Friedrich Ebert Stiftung, PROCESOS.

SECCIÓN 3.

CULTURA POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Capítulo I. Conectadas y apáticas: las nuevas generaciones y su cultura política en Costa Rica

*Cathalina García Santamaría
Ilka Treminio Sánchez*

Introducción

La población joven adulta en Costa Rica ha recibido especial atención en los estudios de comportamiento y cultura política en la última década debido a que, entre algunas razones, en el año 2020 se estimó la finalización del *boom* demográfico que les otorgó un peso importante, en la composición del padrón electoral, a sus niveles comparativamente menores de compromiso con la política, y a la transformación del sistema de partidos políticos y el interés por analizar prospectivamente hacia dónde se encamina el sistema político nacional (Alfaro, 2019; Treminio y Pignataro 2015 y 2019 y Quesada, 2023).

En las últimas elecciones generales de 2022, el registro electoral contaba con cerca del 45% de personas menores de 35 años y aproximadamente la mitad del padrón lo constituyeron electores menores de 40 años, de manera que el censo electoral está dominado por la presencia de personas de las generaciones conocidas como *millennials* y *centennials*. Dado que en Costa Rica se requiere superar el umbral del 40% de los votos para ganar la presidencia de la república, este segmento etario es significativo en el desarrollo de las campañas electorales, pues con tan solo captar una porción

de este, aumenta la posibilidad de ingresar a la segunda vuelta electoral, lo que podría explicar, en parte, las estrategias electorales tendientes a bajar el nivel de abstencionismo juvenil para favorecer a determinadas candidaturas¹. No obstante, es importante aclarar que el segmento joven es un grupo heterogéneo constituido por diferentes generaciones y que refleja las diversas realidades y desigualdades que experimenta la sociedad costarricense y, por tanto, hay disparidades en su comportamiento en relación con sus determinantes sociales. En este estudio se refleja que uno de los principales determinantes de sus actitudes hacia la democracia es la educación.

En la generalidad la ciencia política sugiere, a partir de los estudios más recientes del mundo democrático, que la población joven muestra una tendencia al debilitamiento de su vínculo con la política democrática que se ha ido profundizando en el tiempo (Della Porta, 2019 y Weiss, 2020). Por ejemplo, en sociedades europeas se observa una menor participación política en espacios tradicionales (partidos políticos, sindicatos y organizaciones comunitarias), el desenvolvimiento en nuevas formas de participación especialmente en medios virtuales; la indiferencia hacia la política, una menor confianza en las instituciones políticas y su baja percepción de eficacia externa, es decir, que consideran que sus opiniones o ideas no tienen relevancia entre tomadores de decisión (Quintelier, 2007, p. 177). Pero sus actitudes hacia la política tienen relación con el desempeño del sistema político en la provisión de bienes y servicios para esta población que sufre de altos niveles de desempleo y precarización laboral, que encuentran obstáculos en el acceso al crédito y la formalización de las actividades económicas que emprenden, y experimentan recortes en los servicios sociales en sus países, a lo que se suma una fuerte presión cultural por los cambios en los patrones y hábitos de consumo (Fournier, 2022; Pérez y Hernández, 2022 y Della Porta, 2019).

1. Cultura política democrática juvenil desde el enfoque generacional

Este estudio se enmarca en el ámbito de la ciencia política denominado cultura política. Según Almond y Verba (1963, p. 15), este campo de análisis consiste en “la distribución particular de patrones de orientación hacia objetos políticos entre los miembros de la nación”. Los autores identificaron tres subculturas políticas: la de individuos con una orientación positiva hacia el sistema político que ejercen roles activos (cultura participativa); la de

¹ Se debe considerar que los porcentajes de votos con los que pasaron la primera vuelta electoral los candidatos que ganaron los comicios de 2018 y 2022 representan una quinta y una sexta parte del total de los votos válidos, Carlos Alvarado obtuvo el 21,6% y Rodrigo Chaves el 16,70%. También es importante resaltar que una diferencia entre ambas elecciones fue que en 2018 de cara a la segunda vuelta hubo un efecto de movilización electoral que ocasionó un incremento de la participación entre la primera y segunda vuelta, de ahí que se pasara del 65,7% al 66,4%; mientras que en 2022 hubo, más bien, una contracción al bajar del 59,7% al 56,8%.

individuos que tienen una orientación positiva, pero tienen una actitud pasiva frente a la política (cultura del sujeto) y la de individuos que son indiferentes hacia el sistema político y tienen actitud pasiva ante la política (cultura parroquial). Los autores establecieron la existencia de un vínculo entre la cultura política y la estabilidad democrática, en el que la preeminencia de la cultura participativa promueve la estabilidad democrática.

Numerosos estudios han reformulado los postulados clásicos de Almond y Verba (1963), dentro de los cuales ha sido muy influyente el trabajo de Inglehart y Welzel (2006, p. 336), quienes desarrollaron análisis tomando en cuenta distintos modelos de cultura política identificados en las sociedades desde la posguerra a la actualidad, con el objetivo de analizar su influencia en la calidad democrática. En sus resultados encuentran una mayor fortaleza de esta relación cuando se prueba el modelo con la perspectiva del desarrollo humano, que contiene una serie de variables que resaltan valores de autoexpresión, libertad humana y aspiraciones posmaterialistas. La perspectiva de desarrollo humano plantea que las sociedades que se modernizaron como producto de la industrialización hasta los primeros años de la década del 2000 mostraron un cambio intergeneracional hacia valores denominados posmateriales mayoritariamente entre personas jóvenes que componían la generación X (Sloam y Henn, 2019 y Della Porta, 2019). Estos valores se expresan en la defensa de la paz, la protección del ambiente, la equidad de género, la secularización de la sociedad, la tolerancia a los migrantes y otros grupos minoritarios, la libertad de expresión y participación en la toma de decisiones políticas que impulsaron la democratización de la sociedad desde abajo (Inglehart, 2018). Sin embargo, encuentran que, como respuesta al auge de este modelo de cultura política, los grupos conservadores impulsaron una contrarreacción cultural que promueve el mito del retorno de los valores tradicionales, lo que produjo la aparición de la política populista de extrema derecha en la década del 2000 (Inglehart y Norris, 2016 y Mudde, 2021) y que ha impactado fuertemente el contexto de socialización política de las generaciones de *millennials* (gen y) y *centennials* (gen z).

En este sentido, se puede justificar la relevancia del campo de estudio en la transición demográfica y las transformaciones culturales de las actuales sociedades democráticas y sus repercusiones sobre los sistemas políticos desde un enfoque generacional (Grasso, 2014), que concentra su mirada en el proceso de socialización mediante el cual las personas que nacen en un momento determinado moldean su forma de convivir con la realidad política y cómo se fijan las actitudes y orientaciones de su comportamiento político a partir de esas experiencias.

Así, mientras que en las décadas de 1980 y 1990 las tasas de natalidad más elevadas posicionaron el rol de la juventud en un campo de espera o en largos períodos de formación para la vida adulta (Rodríguez, 2002), en las décadas posteriores al 2000, con la entrada en la era de la digitalización, marcada por

el desarrollo sin parangón de las tecnologías de información o de *Big Tech*, la presión por trayectorias más cortas de formación y la expectativa del éxito económico en edades tempranas colocaron a las personas jóvenes en el núcleo del desarrollo capitalista y, por tanto, como abanderadas de la modernización. Algunos autores llaman generación digital a la generación *centennial*; no obstante, la desigualdad en la que se desarrollan como producto de una economía más precarizada y la presencia de amplios sectores marginalizados, hace preferible referirse a “generación conectada” (Pérez, 2024).

La digitalización también está relacionada con la acción política juvenil, debido a que una parte importante de sus nuevas formas de participación se desarrolla a través del internet. Esto supone una contraposición entre la pérdida de compromiso de los jóvenes con la política tradicional y la participación a través de nuevas formas de involucramiento político en espacios virtuales (Grasso, 2014; Melo y Stockemer, 2014 y Quintelier, 2007). En el primer caso, el alejamiento de las personas jóvenes trae como consecuencia el envejecimiento de los miembros de los partidos políticos y mayores tasas de abstención electoral (Sloam, 2007, p. 549), así como una mayor oportunidad de éxito a partidos emergentes y coyunturales y nuevos tipos de movimientos sociales.

Esta tendencia es desafiante para la supervivencia política de las organizaciones tradicionales, al estancarse el dinamismo del relevo generacional, que paradójicamente convive con la actitud adultocentrista de los actores tradicionales que ponen barreras para impedir el ascenso de las nuevas generaciones y el desplazamiento de los viejos cuadros, de manera que más allá del discurso, no hay suficientes actores organizacionales que potencien el involucramiento activo de las juventudes (Rodríguez, 2002, p. 260). En este contexto es esperable que ante la marginación política que les impide la “voz” las juventudes opten por la “salida” (Hirschman, 1977). Por otro lado, las organizaciones emergentes desinstitucionalizadas y de carácter personalista instrumentalizan el descontento y la “salida” de jóvenes en su beneficio con la creación de mecanismos más expeditos para la incorporación de nuevos cuadros (López, 2005).

2. Nuevas generaciones y cultura política democrática

Para Denk, Christensen y Bergh (2015), la ciudadanía con actitudes negativas hacia la política ha ido reemplazando a la ciudadanía cívica (Almond y Verba, 1963) y esto tiene efectos sobre la estabilidad democrática, pues las personas pueden optar por opciones autoritarias que respondan y atiendan el sentimiento de abandono y desafección con la política provocado por los actores tradicionales y la incertidumbre por el futuro que esto produce.

Las democracias más longevas, como es el caso de la costarricense, muestran reservorios importantes de cultura cívica (Seligson, 2002, p. 163), pero con el tiempo se observa un deterioro en las actitudes y el apoyo al sistema político, especialmente entre las cohortes más jóvenes (Treminio y Pignataro, 2021). Estos cambios se observan, también, en otras sociedades democráticas del mundo y, tal como lo explican Inglehart y Welzel (2006, p. 3), en parte la cultura política se transmite de una generación a otra, pero los valores de las personas son también un reflejo de sus propias experiencias. En este sentido, se debe tomar en cuenta que hay variaciones en la cultura cívica debido al efecto que ejerce sobre las actitudes políticas el contexto en el que se socializa cada generación, así como los efectos relacionados con el ciclo de la vida y la composición demográfica en el comportamiento de las sociedades (Nie, *et al.*, 1974). Para las personas jóvenes el interés y la participación política podrían entrar en competencia con proyectos personales urgentes, como la búsqueda de empleo, la independencia económica y la formación profesional, lo que ocasiona que el involucramiento político sea altamente costoso en un momento en el que se está organizando la vida (Weiss, 2020, p. 4). Para los grupos de menor edad esta presión se enfrenta junto a múltiples crisis simultáneas como la pandémica, la climática, la crisis democrática y los focos de crisis militar y guerras.

En una mirada realista, como la denomina Pickard (2019, p. 92), las nuevas generaciones van extendiendo las fases en el ciclo de la vida, por sus dificultades para independizarse y poner en marcha sus proyectos personales, dado que las políticas públicas no destinan suficientes recursos para mejorar sus condiciones de vida, al punto de encontrarse en circunstancias de sobrevivencia o precarización y, por lo tanto, es probable que no dediquen tiempo para el involucramiento político (Monticelli y Bassoli, 2018, p. 12). Esta alienación afecta la cultura política de la sociedad como un todo y es un predictor del largo plazo, dado que las actitudes y los valores políticos intrageneracionales se fijan en el tiempo y nos encontramos en momentos de decrecimiento en la tasa de natalidad.

El actual escenario global ofrece muestras de un creciente autoritarismo. La sostenibilidad de las instituciones democráticas se encuentra amenazada por liderazgos personalistas que promueven la agitación entre sus simpatizantes con la intención de resquebrajar la confianza hacia los partidos y líderes predecesores y las propias instituciones de control, cuando estas no favorecen sus políticas (Weyland, 2024, p. 45). Frente a la hipótesis de la revolución contracultural antes mencionada, se esgrime también el argumento del estrés económico, que plantea que las personas expresan preocupación por la economía, debido a la situación de carencia o privación en la que se encuentran (Mudde, 2021) y que esta angustia económica también estimula el voto hacia candidaturas radicales o antisistema, de ahí que sea importante explorar la percepción económica de la juventud en relación con su comportamiento político.

3. Las generaciones X, Y y Z en Costa Rica

En la última década se han producido cambios en la cultura política de las cohortes juveniles en Costa Rica que son quienes se encuentran entre los 18 y 35 años. Este segmento se caracteriza por simpatizar menos con los partidos políticos, mostrar menos apoyo al sistema político, expresar menor confianza en las instituciones, votar menos en las elecciones, acceder a información mayoritariamente por medios digitales e involucrarse políticamente a través de formas de participación distintas al voto en términos generales. No obstante, se encuentran diferencias cuando la variable etaria interactúa con variables socioeconómicas como la educación, el ingreso, la ubicación geográfica, entre otras; lo que constata la presencia de heterogeneidad dentro del segmento juvenil (Treminio y Pignataro, 2021 y Pérez, 2024).

Las generaciones se distinguen por las características que unen el crecimiento y socialización de un grupo etario, así como por los eventos nacionales y mundiales que moldearon sus vidas de manera significativa. Al explorar el apoyo al sistema democrático, es crucial entender estas diferencias generacionales e identificar factores que permitan explicarlas. Los llamados *baby boomers* que constituyen la generación nacida en el notable “*baby boom*” que siguió a la Segunda Guerra Mundial, superan hoy los 60 años de edad. Esta generación, criada en un período de reconstrucción, inversión social y crecimiento económico, ha sido testigo de la evolución de la democracia en un contexto muy diferente al actual y experimentaron las secuelas de los traumas de guerra de sus padres, lo que posiblemente influya en su perspectiva más tradicional del apoyo al sistema democrático.

La generación X está constituida por las personas que ya salieron de la etapa de la juventud, con edades comprendidas entre los 44 y los 59 años. Este grupo etario transitó su juventud en un mundo aún dominado por el desarrollo de medios como la televisión, la radio y la prensa escrita, pero son testigos directos de las transformaciones digitales y su adaptación. En lo político es una generación marcada por la era del bipartidismo y atravesó su juventud en medio de la Guerra Fría. Podría decirse que esta posición les otorga una perspectiva única sobre la democracia que equilibra, además, elementos tanto tradicionales como digitales.

Los *millennials* o generación Y contienen al grupo etario que se ubica entre los 28 y 43 años. Una parte del segmento son pioneros en el crecimiento con acceso a Internet, mientras otra parte fue adoptándola en su niñez o juventud. Esta generación está marcada por el fin de la Guerra Fría tras la caída del muro de Berlín y se socializó en una era de expansión democrática, de aumento de la influencia neoliberal y, en el caso costarricense, vivió parte importante de la era bipartidista, aunque enfrentaron sus primeras elecciones en la crisis de esta (1998 en adelante). Esta exposición temprana

a la tecnología y al mundo globalizado no solo ha influido en sus hábitos y preferencias, sino que también ha fomentado una visión de la democracia que valora la participación digital y las expresiones sociales a través de plataformas en línea.

Finalmente, la generación Z o *centennials*, con edades entre 18 y 27 años, son jóvenes nacidos en la era de la digitalización. Desde su nacimiento, han estado inmersos en un entorno altamente conectado, lo que les confiere una perspectiva distintivamente digital sobre casi todos los aspectos de la vida, incluida su visión de la democracia, pero con accesos desiguales. Para ellos, el apoyo al sistema democrático se entrelaza intrínsecamente con el uso de herramientas digitales para la información, la movilización y la expresión. A partir de 2014 la llamada generación Z o *centennials* hizo su ingreso en el censo electoral. Esta generación desarrolló su socialización política en condiciones distintas a las de las generaciones anteriores que vivieron en una era de alternancia bipartidista, designaciones presidenciales en primera vuelta, alta participación electoral y marcada simpatía partidista. Por el contrario, los nuevos empadronados experimentaron la fragmentación electoral, la volatilidad, el desalineamiento del sistema de partidos; pero también una mayor participación de las mujeres en cargos de representación política, cuotas juveniles en algunas estructuras partidistas, la adopción del referéndum y la consulta popular y una robusta red de instituciones de control creadas desde la década de 1990.

4. Análisis de datos

Para esta investigación se han empleado los datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano 2023* del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y FLACSO Costa Rica, así como con la sistematización de los aportes de grupos focales consultados sobre malestares sociales y democracia. En el abordaje de los datos se desarrolla una metodología mixta de análisis secuencial en la que primero se prueban los modelos teóricos con la encuesta para explicar las características generacionales de la cultura política en Costa Rica, a través de regresiones logísticas binarias² y, posteriormente, se profundiza en aquellos resultados contraintuitivos empleando las percepciones expresadas por las personas jóvenes participantes de los grupos focales a través del análisis cualitativo.

De acuerdo con la revisión teórica anteriormente esbozada, se construyeron pruebas para seis modelos sobre el comportamiento político juvenil a través de la segmentación por generaciones. El primero caracteriza el

² En los modelos de regresión logística se incluye el coeficiente exponenciado para medir la razón de riesgo sobre la variable dependiente. Si este coeficiente es mayor que 1, aumenta la probabilidad de “éxito” en esa variable, mientras que si es menor que 1 disminuye esa probabilidad entendiéndola como una relación negativa o inversa.

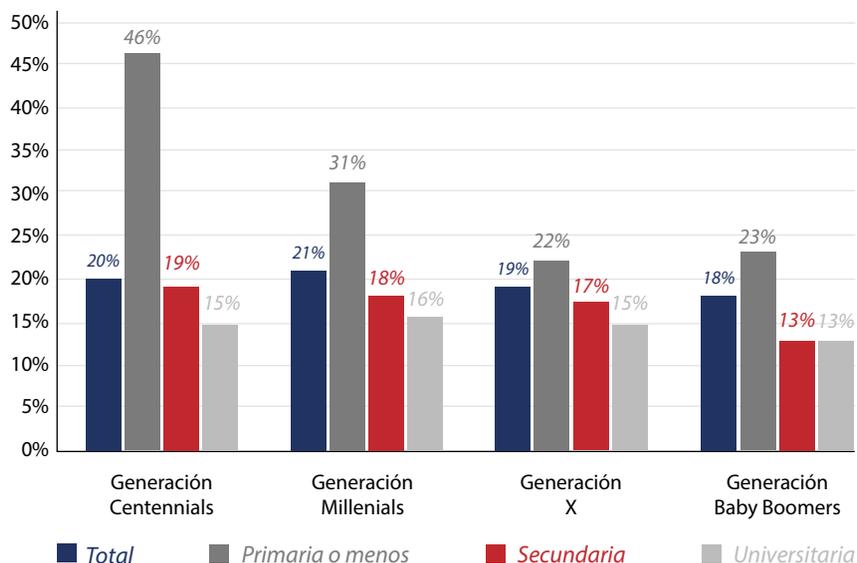
posicionamiento ideológico hacia la derecha económica de las generaciones a través de las actitudes promercado de las personas encuestadas. El segundo determina los niveles de participación política en un sentido amplio, es decir, en acciones que trascienden el ejercicio del voto entre las generaciones. Un tercer modelo se centra en explicar las actitudes hacia la participación electoral en estos segmentos generacionales. El cuarto modelo identifica la predisposición de los grupos generacionales a informarse por medios digitales versus tradicionales. El quinto modelo establece las tendencias de las generaciones a manifestar sus opiniones en las redes sociales y, finalmente, el sexto examina la importancia que las generaciones le otorgan a la democracia como régimen político.

En el caso del primer modelo, se prueba la hipótesis de que las personas jóvenes se inclinan más hacia la derecha económica (Treminio y Pignataro, 2021). Se sintetiza la inclinación de las generaciones más jóvenes hacia la privatización de empresas públicas y la gestión del país por parte de principales grupos empresariales; revela una fascinante dinámica sobre las percepciones económicas y políticas en la sociedad estudiada. El hecho de que casi una de cada cinco personas en la muestra favorezca estas posiciones es significativo, donde se destaca una considerable propensión hacia enfoques de mercado dentro de las generaciones más jóvenes y, de manera especialmente notable entre quienes cuentan solo con educación primaria de la generación Z, la de menor edad del conjunto.

La distinción generacional añade otra capa de complejidad a esta interpretación. El mayor apoyo a la variable denominada “promercado” entre las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas con educación primaria o menos, podría reflejar un cambio cultural o un desencanto con las instituciones públicas tradicionales y una mayor apertura a soluciones alternativas para la gestión estatal. Estos grupos más jóvenes podrían percibir que el Estado ha sido ineficaz en proporcionar servicios y oportunidades, por lo que se inclinan hacia modelos que creen que podrían ofrecer mejoras tangibles en la eficiencia y la calidad de vida.

Figura 1

Porcentaje de personas con actitudes promercado según generación y nivel educativo alcanzado, 2023



Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

El análisis más detallado, proporcionado por un modelo de regresión logística binaria, arroja luz sobre quiénes son los proponentes de estas ideas. Específicamente, la evidencia de que las personas con educación primaria son casi dos veces más propensas a apoyar estas afirmaciones promercado que aquellos sin este nivel de educación sugiere una correlación entre el nivel educativo y la preferencia por soluciones orientadas al mercado en la gestión estatal. Este hallazgo podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría reflejar una percepción entre las personas con educación primaria de que la eficiencia y la efectividad, atributos a menudo asociados con el sector privado, son cualidades faltantes en el sector público. Por otro lado, podría indicar una confianza en que los grupos empresariales, por su experiencia y competencia en el manejo de organizaciones, podrían aportar una gestión más efectiva al gobierno del país. No obstante, en este caso, no hay una relación de significancia entre la generación y las actitudes promercado.

Esta interpretación, sin embargo, debe considerarse con cautela. La preferencia por soluciones de mercado y la gestión del país por grupos empresariales no está exenta de críticas ni preocupaciones. Temas como la equidad, la responsabilidad social y la potencial concentración del poder en manos de unos pocos son aspectos críticos que deben ser evaluados en cualquier debate sobre el papel del Estado versus el mercado.

Tabla 1

Modelo logístico binario para la variable independiente “promercado” según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Coefficiente exponenciado	Significancia
Generación <i>centennials</i>	1,573	0,105
Generación <i>millennials</i>	1,396	0,149
Generación X	1,069	0,783
Sexo femenino	0,998	0,990
Reside en GAM	0,787	0,147
Con educación primaria	2,380	0,000
Con educación secundaria	1,220	0,376
Intercepto	0,148	0,000
Pseudo R cuadrado	0,030	
Número de observaciones	1000	

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

El segundo modelo por probar en esta investigación se enfoca en la dimensión de la cultura política referida a la participación. A través del análisis de 10 diferentes formas de involucramiento en la última década, se develan patrones en cuanto a quiénes participan más activamente en la política y cómo lo hacen. La creación de una variable dicotómica basada en la cantidad de actividades realizadas, que distinga entre aquellos con participación mayor que el promedio (más de 2 actividades) y participación baja (2 o menos actividades), ofrece una base cuantitativa para explorar dichos patrones.

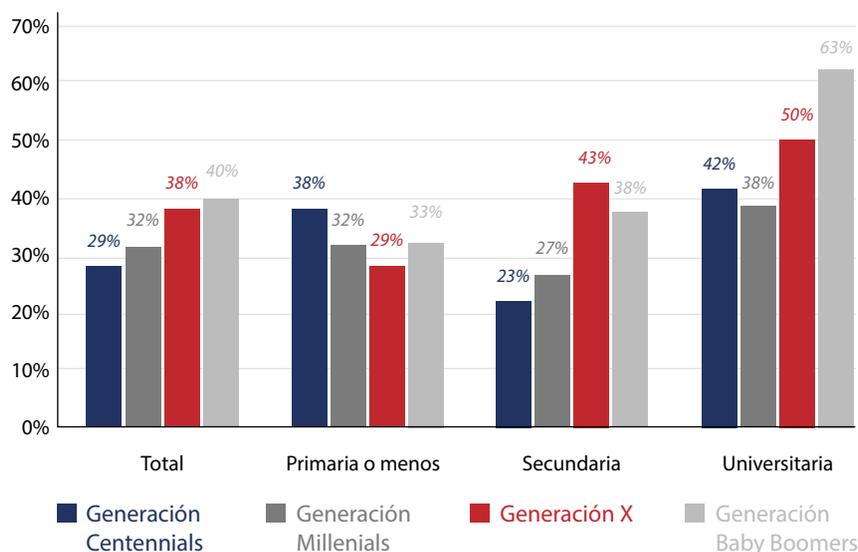
La influencia de la edad y la educación en la participación política es significativa y reveladora y es congruente con lo expuesto en la literatura politológica. La tendencia identificada muestra que personas más jóvenes tienen menor propensión a participar, junto con aquellos de menor nivel educativo. Esto sugiere que la experiencia de vida y el acceso a la educación juegan roles cruciales en el fomento de la participación política. Es notable que sean las personas de 60 años y más, así como aquellas con educación universitaria, quienes lideran en términos de participación. Este hallazgo resalta el mayor peso de la madurez y la educación en la predisposición hacia la participación política, sea esta tradicional o digital.

El que un 35% de las personas encuestadas muestre un nivel de participación superior al promedio recalca la existencia de un núcleo significativo de la

población activamente comprometido con la política, es decir, que tienen un comportamiento de ciudadanía cívica (Almond y Verba, 1963).

Figura 2

Porcentaje de personas con mayor participación según generación y nivel educativo alcanzado, 2023



Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

La correlación entre el aumento de la edad y la participación política es un fenómeno que merece atención. En el presente parece estar sostenida fundamentalmente por las generaciones X y *baby boomers*, y es un predictor importante para el deterioro de la cultura cívica en el mediano plazo. Este patrón está reflejando una mayor conciencia de los asuntos políticos y un sentido de responsabilidad cívica desarrollado a lo largo de la vida. Además, el impacto amplificado de la educación en este comportamiento sugiere que el conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la educación pueden empoderar a los individuos para involucrarse más efectivamente en la política.

Sin embargo, el comportamiento de las personas con educación secundaria, cuya participación es incluso menor que la de aquellas con educación primaria plantea interrogantes importantes. Este fenómeno podría reflejar la existencia de barreras específicas o desencantos que afectan a este grupo particular, lo que subraya la necesidad de investigaciones más detalladas para comprender las dinámicas subyacentes y cómo fomentar una participación más amplia y representativa en todos los niveles educativos.

Tabla 2

Modelo logístico binario para la variable independiente participación política, según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Coefficiente exponenciado	Significancia
Generación <i>centennials</i>	0,555	0,011
Generación <i>millennials</i>	0,635	0,016
Generación X	0,909	0,621
Sexo femenino	1,134	0,357
Reside en GAM	1,146	0,328
Con educación primaria	0,457	0,000
Con educación secundaria	0,534	0,000
Intercepto	1,025	0,908
Pseudo R cuadrado	0,039	
Número de observaciones	1000	

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

El tercer modelo que se construye tiene el objetivo de analizar la participación electoral y el abstencionismo en las generaciones costarricenses. El estudio sobre la participación en las elecciones nacionales revela un panorama complejo y multifacético de cómo diversos factores sociodemográficos influyen en la probabilidad de votar. Con un notable 68% de los encuestados que declaran que siempre participan en elecciones nacionales, emerge una imagen de compromiso cívico relativamente alto en general, aunque se encuentra por encima del dato oficial. Sin embargo, la regresión logística desentraña una realidad más matizada, en la que destacan la influencia significativa de la edad, la ubicación geográfica y el nivel educativo en la participación electoral, tal como predice la teoría.

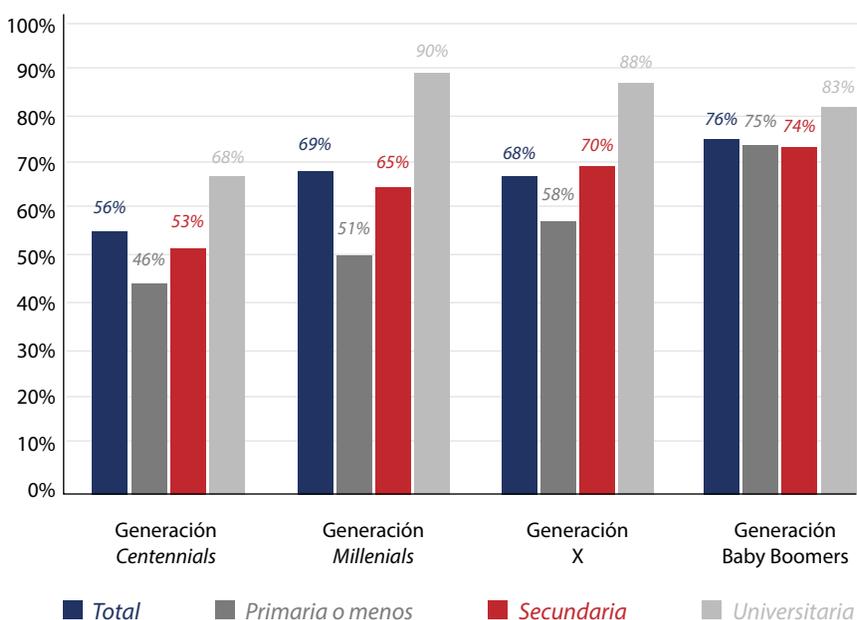
La tendencia observada, en la que la probabilidad de participación disminuye con la menor edad, es decir, que la juventud es más abstencionista, resalta una preocupación creciente en muchas democracias contemporáneas: la desafección política de las nuevas generaciones. Este fenómeno podría atribuirse a varios factores, incluyendo una posible percepción de ineficacia en las respuestas del sistema político a sus carencias y necesidades, la falta de representación o la irrelevancia en los temas políticos que se posicionan en el debate público.

En cuanto al nivel educativo, los datos indican que aquellos con educación universitaria tienen tasas más altas de participación electoral, mientras que los individuos con educación primaria presentan los niveles más bajos,

especialmente en el grupo de edad de 28 a 59 años. Este patrón subraya la importancia de la educación no solo como un medio para mejorar el conocimiento y la comprensión de los procesos políticos, sino también como un factor que influye en la sensación de responsabilidad cívica o sentido del deber en el ejercicio del voto (Blais y Achen, 2019)³. La educación superior puede fomentar una mayor conciencia de la importancia del voto y una mayor confianza en la capacidad de influir en los resultados políticos.

Figura 3

Porcentaje de personas que siempre participan en elecciones nacionales según generación y nivel educativo alcanzado, 2023



Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

La distribución de la participación por edad apunta que mientras existe una participación más uniforme entre los mayores de 60 años, la generación más joven muestra niveles significativamente más bajos de participación. Este hallazgo es particularmente preocupante, ya que indica no solo un desapego actual de los procesos democráticos entre los jóvenes, sino también potenciales desafíos futuros para la salud de la democracia si esta tendencia no se revierte.

³ Blais y Achen (2019) explican que el factor que determina de manera más contundente la participación electoral es el sentido del deber (que no es igual que el voto obligatorio), se refiere al deber deontológico, es decir, al sentido ético o imperativo del ejercicio del voto.

Tabla 3

Modelo logístico binario para la variable independiente “participación en elecciones nacionales”, según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Coefficiente exponenciado	Significancia
Generación <i>centennials</i>	0,303	0,000
Generación <i>millennials</i>	0,532	0,003
Generación X	0,611	0,022
Sexo femenino	1,002	0,986
Reside en GAM	0,708	0,017
Con educación primaria	0,255	0,000
Con educación secundaria	0,364	0,000
Intercepto	11,599	0,000
Pseudo R cuadrado	0,102	
Número de observaciones	1001	

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

El cuarto modelo plantea cómo las personas se informan sobre los eventos en Costa Rica para lo cual emplea una variable dicotómica de prensa tradicional (televisión, prensa escrita, radio) o redes sociales. Las pruebas revelan tendencias significativas influenciadas por la edad, el género y el nivel educativo, con un marcado 48% de los encuestados que recurren a las redes sociales, prensa digital o Internet para obtener noticias. Esta preferencia por los medios digitales subraya un cambio de paradigma en el consumo de noticias, que se aleja de los medios tradicionales hacia plataformas más accesibles y en tiempo real.

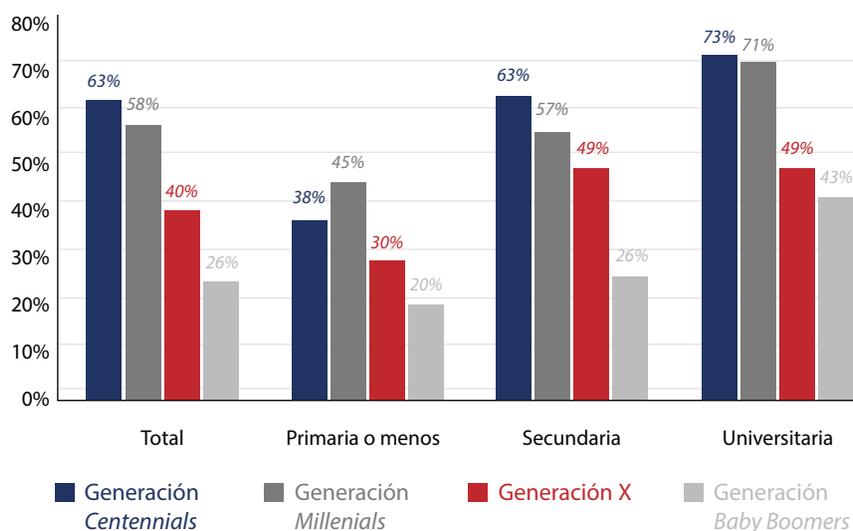
La división generacional en cuanto a medios de información sí se cumple según la teoría, dado que es particularmente pronunciada en este contexto: las personas menores de 44 años utilizan medios digitales casi tres veces más que aquellos de 60 años o más. Este dato refleja no solo diferencias en la familiaridad y comodidad con la tecnología entre esas generaciones, sino también en cómo las preferencias de consumo de medios están evolucionando. Las generaciones más jóvenes, habiendo crecido en la era digital, muestran una inclinación natural hacia fuentes de información que se alinean con su uso diario de la tecnología y las redes sociales.

No obstante, es de preocupación que las personas mayores de 60 años con menor nivel educativo muestran una brecha importante en el hábito de información por medios digitales. Al estar correlacionado con el nivel educativo,

se plantea el problema del acceso, la desigualdad y la alfabetización digital. Esta brecha se hace evidente también entre los *centennials* con educación primaria o menor, lo que es aún más alarmante, dadas las implicaciones de marginación social que esto conlleva y es coherente con la alerta que se ha planteado sobre la heterogeneidad de la inserción social de esta generación. Los *millennials*, por su parte, tienen una distribución más homogénea entre nivel educativo; sin embargo, en el caso de los que cuentan con menor educación no alcanza el 50%.

Figura 4

Porcentaje de personas que se informan por medios digitales según generación y nivel educativo alcanzado, 2023



Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

En síntesis, la correlación entre el nivel educativo y el uso de medios digitales para informarse destaca otra dimensión de este fenómeno. Aunque el uso de medios digitales disminuye con el nivel educativo, y es menor entre aquellos con educación secundaria o menos, este patrón sugiere que el acceso a la tecnología y la capacidad para navegar por la vasta información en línea pueden ser más limitados para este grupo. Sin embargo, es notable que, dentro de cada nivel educativo, la edad sigue siendo un determinante clave en la preferencia por los medios digitales, con una tendencia decreciente en el uso a medida que aumenta la edad de los individuos.

Tabla 4

Modelo logístico binario para la variable independiente informarse por medios digitales de lo que ocurren en el país según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Coefficiente exponenciado	Significancia
Generación <i>centennials</i>	3,994	0,000
Generación <i>millennials</i>	3,531	0,000
Generación X	1,926	0,002
Sexo femenino	1,366	0,023
Reside en GAM	1,136	0,362
Con educación primaria	0,350	0,000
Con educación secundaria	0,625	0,007
Intercepto	0,520	0,004
Pseudo R cuadrado	0,152	
Número de observaciones	1000	

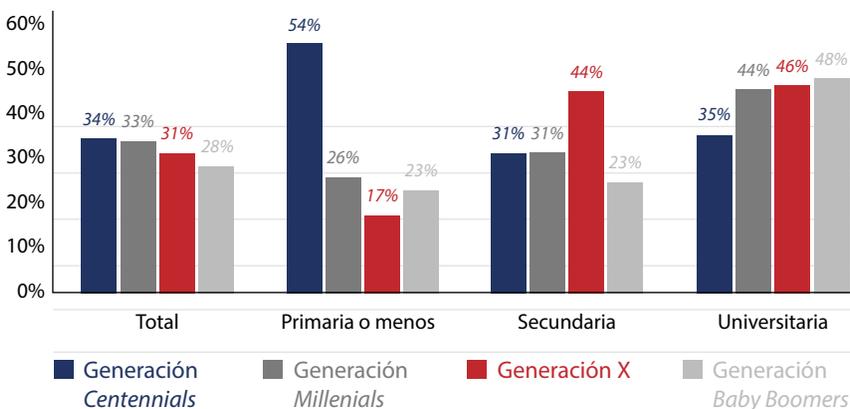
Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

El quinto modelo explora cómo el uso de redes sociales, por ejemplo, plataformas para la expresión de opiniones políticas y sociales, es un fenómeno creciente. Un 33% de las personas reporta haber compartido sus puntos de vista en sitios como Facebook, Twitter e Instagram. Sin embargo, la percepción de la utilidad de estas acciones es considerablemente más baja, con solo un 17% de las personas encuestadas que consideran efectiva esta forma de expresión. Este desajuste entre la participación y la percepción de su impacto subraya una posible desconexión entre las expectativas de los usuarios y la realidad de cómo se traducen las opiniones en línea en cambios o influencias tangibles.

Es revelador examinar el efecto combinado de la educación y la generación. Se destaca que individuos con educación universitaria, incluidos desde los *millennials* hasta la generación X y los *baby boomers*, son más propensos a utilizar las redes sociales para comentar sobre la situación del país en comparación con aquellos de otros niveles educativos. Este hallazgo podría indicar una mayor confianza o habilidad para articular y compartir opiniones públicamente entre aquellos con mayor educación, así como un mayor sentido de responsabilidad o urgencia para participar en discusiones sociopolíticas. Pero, por otro lado, el segmento que mayoritariamente dice expresarse a través de redes sociales son los *centennials* con educación primaria o menor. Esto trae a la reflexión el tipo de discusiones que se producen en las redes sociales entre grupos con una amplia distancia generacional y ubicados en los extremos educativos.

Figura 5

Porcentaje de personas que se expresan en redes sociales según generación y nivel educativo alcanzado, 2023



Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano*, 2023.

Estos hallazgos subrayan la complejidad del papel de las redes sociales en la política moderna. Aunque estas plataformas se han convertido en un medio importante para la expresión de opiniones, la variabilidad en la percepción de su utilidad y las diferencias en la participación según el género, la educación y la generación señalan desafíos importantes en cuanto a la equidad y la efectividad de la comunicación digital como herramienta para el cambio social y político. En este contexto, es crucial continuar explorando cómo se pueden mejorar las estrategias de participación en línea para asegurar que todos los segmentos de la sociedad puedan participar de manera significativa y efectiva y que se fomente el diálogo intergeneracional.

Tabla 5

Modelo logístico binario para la variable independiente "expresar sus opiniones en redes sociales" según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Coficiente exponenciado	Significancia
Generación <i>centennials</i>	1,182	0,479
Generación <i>millennials</i>	1,108	0,606
Generación X	1,150	0,503
Sexo femenino	1,320	0,047
Reside en GAM	0,663	0,004

▼ Continuación

Variable independiente	Coficiente exponenciado	Significancia
Con educación primaria	0,452	0,000
Con educación secundaria	0,663	0,015
Intercepto	0,684	0,090
Pseudo R cuadrado	0,055	
Número de observaciones	1000	

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano*, 2023.

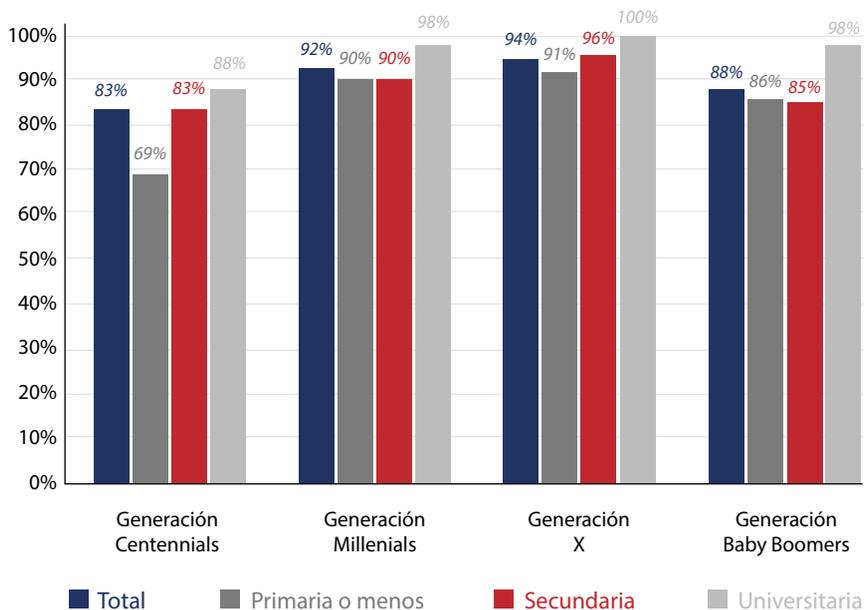
Finalmente, el sexto modelo analiza la valoración de la democracia como pilar fundamental para la convivencia en sociedad, y los resultados obtenidos de la encuesta ofrecen una perspectiva crítica sobre las actitudes contemporáneas hacia este sistema de gobierno. Se observa que un amplio 90% de los encuestados otorgan los puntajes más altos a la importancia de vivir en un país democrático, lo que evidencia un fuerte respaldo generalizado a los principios democráticos. Sin embargo, la distribución de este apoyo varía significativamente cuando se desglosa por generaciones y niveles educativos.

Las generaciones X y *baby boomers* destacan por su firme apoyo a la democracia, con una probabilidad doble de respaldarla en comparación con otras cohortes generacionales. Este hallazgo sugiere que los individuos de esta generación, habiendo vivido transformaciones políticas y económicas significativas durante su formación, pueden tener una apreciación más profunda de los valores y estabildades que ofrece un sistema democrático.

Por otro lado, la generación Z muestra un menor apoyo a la democracia, especialmente aquellos con niveles de educación primaria o secundaria. Este resultado podría indicar una disonancia entre las expectativas de esta generación más joven y su percepción de cómo la democracia se manifiesta en la realidad. Las causas de esta brecha pueden ser múltiples, incluyendo el desencanto con las instituciones políticas tradicionales o la exposición a narrativas alternativas sobre la gobernanza.

Figura 6

Porcentaje de personas que valoran la democracia según generación y nivel educativo alcanzado, 2023

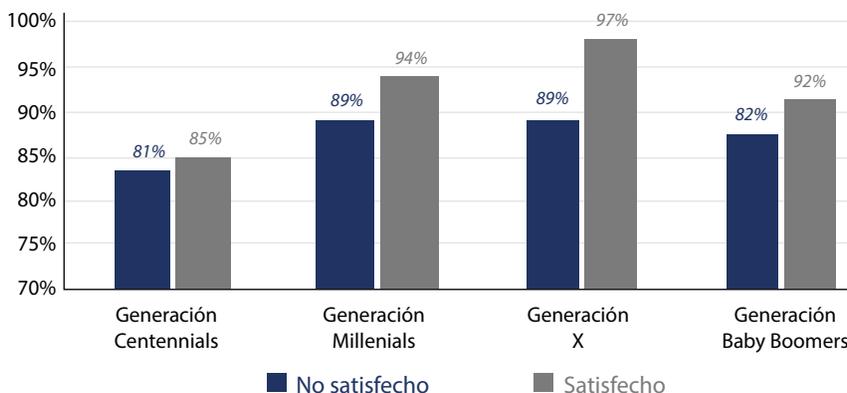


Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

Entre quienes se sienten insatisfechos con la democracia no se observan diferencias significativas en el apoyo a la democracia a través de las generaciones. Esto podría sugerir que la insatisfacción con la democracia, cuando ya existe, actúa como un gran igualador entre las edades, posiblemente debido a experiencias compartidas de desilusión o críticas hacia el sistema. Sin embargo, entre los satisfechos con la democracia, el apoyo es significativamente mayor en las generaciones Y y X. Este patrón refuerza la idea de que una experiencia positiva o satisfactoria con la democracia robustece su valoración, lo que a su vez podría estar vinculado a la estabilidad política, beneficios sociales o avances económicos percibidos durante los periodos formativos de estas generaciones.

Figura 7

Porcentaje de personas que valoran la democracia según generación y nivel de satisfacción con la democracia, 2023



Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

Las pruebas estadísticas no arrojan una relación significativa entre la valoración democrática y la pertenencia a una generación específica, pero el coeficiente de la generación de *centennials* es menor que cero, es decir, muestra que su actitud es más crítica con la democracia y es un elemento central de preocupación. Por otro lado, lo que sí se refleja de manera estadísticamente significativa en los datos es que la mayor educación explica la importancia otorgada a vivir en un régimen democrático. Personas con educación primaria y quienes poseen solo educación secundaria no consideran importante vivir en un país democrático.

Tabla 6

Modelo logístico binario para la variable independiente importancia de vivir en un país democrático según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Coefficiente exponenciado	Significancia
Generación <i>centennials</i>	0,530	0,052
Generación <i>millennials</i>	1,381	0,291
Generación X	2,205	0,022
Sexo femenino	0,882	0,572
Reside en GAM	1,174	0,472
Con educación primaria	0,205	0,000
Con educación secundaria	0,297	0,002

▼ Continuación

Variable independiente	Coefficiente exponenciado	Significancia
Intercepto	25,716	0,000
Pseudo R cuadrado	0,078	
Número de observaciones	992	

Nota. Elaboración a partir de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

En la tabla 7 se reúnen los datos de los coeficientes para las seis variables exploradas en los modelos estadísticos. Se muestran resaltados en negrita los coeficientes cuya relación estadística era significativa. La información muestra diferencias significativas respecto de cómo las distintas generaciones, el género, el lugar de residencia y el nivel educativo afectan la actitud hacia el mercado, la participación política y electoral y la valoración de vivir en democracia. Los hallazgos sugieren las siguientes características en el comportamiento político:

- La generación de *centennials* tiende a un uso de moderado a alto en el acceso a la información por medios digitales y a una baja participación en elecciones nacionales, en participación política y a una baja valoración de la importancia de vivir en un país democrático.
- La generación de *millennials*, de manera similar a los *centennials*, muestra una tendencia de moderada a alta en el uso de información por medios digitales y una mayor, aunque no significativa estadísticamente, actitud positiva a la importancia de vivir en un país democrático.
- La generación X, cuya composición es de adultos, destaca por su alta valoración de la importancia de vivir en un país democrático y una tendencia moderada a informarse por medios digitales
- Si se analiza el comportamiento por variables sociodemográficas, se puede hallar que el sexo femenino presenta una tendencia moderada a informarse por medios digitales y a expresar opiniones en redes sociales, con una baja valoración de la importancia de vivir en un país democrático.
- En términos territoriales quienes residen en la Gran Área Metropolitana muestran una actitud moderada en la participación política y en la importancia de vivir en un país democrático, con una baja preferencia por expresar opiniones en redes sociales.
- Con respecto al grado de educación, las personas con educación primaria valoran altamente promover el mercado y presentan una actitud muy baja ante la importancia de vivir en un país democrático. Mientras que las personas que cuentan con educación secundaria muestran una actitud moderada para promover el mercado, pero mantienen baja su valoración de la importancia de vivir en un país democrático.

Tabla 7

Modelo logístico binario según variables sociodemográficas, 2023

Variable independiente	Promercado	Participación política	Participación en elecciones nacionales	Información por medios digitales	Expresar opiniones en redes sociales	Importancia de vivir en país democrático
Generación centennials	1,57	0,56	0,30	3,99	1,18	0,53
Generación millennials	1,40	0,64	0,53	3,53	1,11	1,38
Generación X	1,07	0,91	0,61	1,93	1,15	2,21
Sexo femenino	1,00	1,13	1,00	1,37	1,32	0,88
Reside en GAM	0,79	1,15	0,71	1,14	0,66	1,17
Con educación primaria	2,38	0,46	0,26	0,35	0,45	0,21
Con educación secundaria	1,22	0,53	0,36	0,63	0,66	0,30
Intercepto	0,15	1,03	11,60	0,52	0,68	25,72
Pseudo R cuadrado	0,03	0,04	0,10	0,15	0,06	0,08
Número de observaciones	1000	1000	1001	1000	1000	992

Nota. Elaboración a partir de la Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023.

5. Análisis cualitativo de la cultura política juvenil

La cuestión generacional plantea importantes desafíos en la cultura política democrática. Las personas jóvenes tienden a expresar su desmotivación hacia la participación política debido a que encuentran bloqueado el acceso a participar, no consiguen que haya información oportuna y eficaz para involucrarse y tampoco consiguen canalizar adecuadamente sus demandas. Este fenómeno lo identifican tanto en espacios institucionales como en espacios informales comunitarios. Uno de los mayores bloqueos es el adultocentrismo que acapara tanto los cargos como el discurso en los distintos espacios. Algunas de las reflexiones que ofrecen son claras en estos aspectos:

Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, el tema de la función juvenil en los comités cantonales de las personas jóvenes, yo estaba interesado en formar parte de, postularme para formar parte del Comité de la Persona Joven. Pero conseguir información fue un dolor, en la Muni, en el centro cívico, en todos lados. Y nadie sabía nada, principalmente sobre ese CPJ. Me mandaban de un lado para otro. (GF Huetar Atlántica, personas jóvenes y adultas)

A mí sí me encantaría involucrarme más en la política comunitaria, aquí en el cantón donde yo vivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esa percepción de que ya muchos de esos puestos, no sé si se podría decir puestos o ya la organización de incidencia ya uno sabe quiénes son, o sea, y van también en esa misma línea partidaria, que no está mal, pero realmente no conocen. (GF región central, personas jóvenes)

Se encuentra, en los grupos focales, consciencia de que la menor participación tiene efectos sobre las habilidades y experiencia para su involucramiento político futuro y les resulta claro el problema de la ausencia del relevo generacional en las instancias tradicionales; además, identifican los problemas de la desigualdad económica y social en la participación. Muy importante en la visión de las personas jóvenes es que hay un reconocimiento a la importancia de la institucionalidad y las consecuencias irreparables de su deterioro:

Los adultos mayores ya empiezan a morir, por ejemplo, y vienen otras nuevas generaciones y qué va a pasar con esas generaciones que no tienen crítica, que no saben decir nada, no saben opinar, porque es que qué pereza, que opine el de al lado yo no quiero opinar. (GF Huetar Norte, jóvenes)

Las de escasos recursos también, porque hay personas que tal vez quieren participar, pero les queda lejos y no tienen recursos ni siquiera para movilizarse en este momento. (GF Chorotega, personas jóvenes)

En mi criterio, sí hay muchos aspectos que se tienen que mejorar: la inclusión, el darles el espacio a las personas con discapacidad y con capacidades diferentes, que también son personas pensantes y que también tienen actualmente derecho

a participar y que se les debe de poner y empezar a visualizar para realmente tener una política inclusiva. (GF Huetar Norte, jóvenes)

... la institucionalidad costarricense debe ser la imagen de la democracia costarricense y de la identidad costarricense. Si se pierde la institucionalidad pública a través de esa falta de civismo que tenemos, vamos a ir perdiendo todo. Porque qué sucede si no tenemos instituciones que sean nuestras y sean públicas, o sea, que sean de todos los costarricenses y que sabemos que están brindando el aporte necesario para que no solo yo me he vea beneficiado, sino mi vecina de al lado, la muchacha de allá que no conozco, puedan acceder a los mismos servicios, puedan acceder a las mismas facilidades que yo tengo en este momento y espero poder seguir teniendo. Si eso lo perdemos y perdemos nuestras instituciones públicas, vamos a perder todo y vamos a perder nuestra identidad y nuestra imagen. (Huetar Norte, jóvenes)

Es interesante que esta es una idea compartida por las personas mayores, quienes perciben la responsabilidad de formar para la participación ciudadana en una era marcada por el envejecimiento de la población; no obstante, los programas y recursos educativos no les permiten dar esos pasos adelante y se mantiene una concepción limitada de la participación, no es de extrañar, en este escenario, la pasividad encontrada en las generaciones más jóvenes:

...desafortunadamente tenemos el concepto que la democracia se construye y solamente a través del voto. Por eso es que digo que es a un nivel muy básico y también se tiene una idea muy cortoplacista de que es cada cuatro años para elecciones presidenciales y ahí termina. (GF región central, personas adultas)

Creo que aquí en Costa Rica el problema de la democracia es que no es una democracia participativa, sino, como dicen en términos muy teórico, una democracia representativa, una democracia que no ha terminado y creando una casta de mandarines, de burócratas políticos que son los que saben el teje y maneje de todas las instituciones y es de lo que ha alejado a la gente de poder asumir esas responsabilidades políticas que tienen todos los ciudadanos. (GF docentes)

Siento que habría que tener un espacio también en los centros educativos para nuestros jóvenes, porque hay mucha frustración entre ellos. ¿Y la razón viene por qué? Porque desde el hogar, desde la misma institucionalidad, no se están abordando temas que se deben abordar. Nosotros nos vamos a morir y vemos que la juventud de ahora ya no quiere tener hijos, entonces vamos a tener un país de viejos. Entonces nosotros necesitamos que estos jóvenes aprendan, los que están ahorita, que son el futuro, es cómo defender la base de este país y solamente lo va a defender si yo lo educo bien a los suyos y así si es importante. (GF Huetar Atlántica, personas adultas)

Pero eso ahora, en la mano con la falta de alfabetización ciudadana, de que la gente no se involucra. Y eso empieza pues desde las escuelas, desde los kínder, ¿verdad? Cuando este el mismo Tribunal Supremo de Elecciones indica que es una fiesta electoral. Sí, cierto, es una fiesta electoral, pero después se va disminuyendo

cuando los mismos estudiantes llegan al colegio y ya ni les interesa. Entonces todo eso hay que volver a recuperar. (GF región central, personas adultas)

Las personas en los grupos focales hablan con pleno conocimiento de las redes sociales independientemente de su edad o región y son capaces de identificarlas de acuerdo con la generación de pertenencia. Así, clasifican a Instagram y TikTok como principalmente utilizadas por personas jóvenes y adolescentes, mientras que el Facebook lo identifican con personas mayores. La herramienta de uso generalizado es el WhatsApp:

Nosotros hicimos un estudio sobre redes y la que gobierna es WhatsApp. Que sea la más utilizada por toda la población. Los muchachos tienden más hacia Instagram y los que no somos muchachos, tendemos más a Facebook (GF Huetar Atlántica, personas adultas y jóvenes)

En parte, las redes sociales les permiten llenar el vacío que deja en las regiones el enfoque vallecentralista de los medios de comunicación tradicionales y hay una pérdida de confianza en la información que transmiten:

Los medios tradicionales centran su atención en la GAM y dejan de lado a las comunidades. (GF Chorotega, personas jóvenes)

Los medios solo nos vuelven a ver cuando hay un suceso y no es un suceso que nos favorece. (GF Chorotega, personas jóvenes)

Medios grandes, ok, hablamos de canal seis, canal siete, el canal 13, medios populares, antes decíamos para saber si usted que está diciendo la verdad hay que ver canal siete o hay que ver canal seis, porque ellos son los medios de comunicación. Ahora uno dice no, ya no puedo ver las noticias porque no sabemos si se está informando la verdad. (GF Huetar Norte, personas jóvenes)

Siento que mucha gente metida en la política ya está entendiendo este concepto, entonces, los hace como más accesibles, simplifica la información. Ya no tenés que leer un libro gigante para entender tal cosa. Si tal vez no te interesa la lectura. Tenés un video, una imagen, tenés muchas cosas interactivas y al mismo tiempo te estás educando y te lo están explicando. Estás entendiendo y no te estás saliendo de tu zona de confort. (GF Pacífico Central, personas jóvenes)

La exploración cualitativa da cuenta de un escenario en el que las personas visualizan grandes transformaciones en el presente y en el horizonte cercano en la cultura política costarricense. Expresan preocupaciones por el estado de la participación política juvenil, el malestar y la desconfianza con la política tradicional y el espacio que van ganando, a través de los medios no convencionales y digitales, la circulación de información y el diseño de nuevos y alternativos discursos, sobre todo, en los territorios. Hay una visión crítica de política y un notorio malestar con el desempeño de las instituciones públicas.

Las personas jóvenes expresan las distintas brechas de inclusión social y política que enfrentan, pero no parece que logren encontrar una alternativa para el desarrollo de opciones propias de canalización de sus demandas y de influencia sobre la acción política.

6. Reflexiones finales

Este estudio parte de una serie de hipótesis y teorías sobre la cultura política y las actitudes de las personas jóvenes en el mundo democrático desde un enfoque generacional. Con el objetivo de separar en partes más representativas el largo segmento que constituye el conjunto de la ciudadanía joven, se incorporaron las categorías generacionales de *baby boomers*, generación X, generación Y o *millennials* y generación Z o *centennials*. Las presunciones teóricas expuestas en algunos casos se cumplieron de manera estadísticamente significativa y en otros solo reflejaron tendencias a aumentar o disminuir entre generaciones; no obstante, la dirección del comportamiento observado siempre funcionó como lo esperado, de manera que no se identificaron hallazgos que contradigan las hipótesis planteadas.

En primer lugar, se destaca que la generación *centennial* tiende a ser promercado, es decir, se ubica a la derecha económica con respecto a las generaciones mayores; este comportamiento, no obstante, solo muestra un resultado significativo cuando se prueba con la variable educación primaria, es decir, lo que realmente explica las actitudes promercado es la ubicación en este segmento educativo. En segundo lugar, la participación política a través de distintas expresiones se muestra sostenida mayoritariamente por la generación de los *baby boomers*, particularmente dentro de esa generación entre quienes tienen formación universitaria, pero al igual que en el primer modelo, la generación no es un predictor significativo estadísticamente de la participación política, como sí lo es para explicar la no participación o pasividad política el contar solo con educación primaria o secundaria; en este caso, la variable educativa también es la que predice correctamente la participación.

Si se observa el tercer modelo, construido para explicar la participación electoral, sí es posible afirmar que ser *centennial* o *millennial* es un predictor para la no participación electoral o abstencionismo. A la vez, también se explica la no participación electoral por tener bajo nivel educativo. Pertenecer a la generación *centennial* y *millennial* también tiene relación estadísticamente significativa con informarse por medios digitales. En el primer caso, el de los *centennials*, es cuatro veces más probable que se informen por estos medios que la generación mayor o *baby boomers*. La relación es inversa cuando solo se cuenta con educación primaria. Este hallazgo muestra una brecha central en los desafíos educativos y de inclusión social y política en el país. Asimismo, al examinar quiénes expresan sus opiniones a través de redes sociales, se encuentra que no hay diferencias estadísticamente significativas por

generación, pero porcentualmente los *centennials* con educación primaria muestran mucha mayor tendencia a hacerlo; a la vez, residir en la GAM y contar con educación primaria son variables que también predicen la propensión a expresar opiniones en las redes sociales. Finalmente, hay un amplio consenso con respecto a la valoración de vivir en un país democrático entre *baby bommers* y generación X, esta valoración disminuye en las siguientes generaciones; sin embargo, la diferencia es significativa solo a partir del nivel educativo, lo que demuestra cómo este factor interactúa con la construcción del vínculo democrático en la sociedad costarricense.

En síntesis, las personas jóvenes participan menos en elecciones nacionales y se informan por medios digitales; pero es la baja educación la que explica que no se participe en política en general, las actitudes promercado, el alienamiento de la información digital, el uso de las redes sociales como medio de expresión de opiniones y no valorar vivir en un país democrático.

Los grupos focales como herramienta de investigación permitieron explorar las percepciones y preocupaciones sobre la transformación del sistema político y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de una ciudadanía cívica. Se ponen de manifiesto las brechas territoriales y económicas que contribuyen a la desmotivación política de las juventudes, así como el acaparamiento y el adultocentrismo de los espacios políticos tradicionales.

7. Referencias

- Alfaro Redondo, R. (2019). 2018: elecciones inéditas en tiempos extraordinarios. En M. Rojas e I. Treminio (Eds.), *Tiempos de Travesía. Análisis de las elecciones del 2018 en Costa Rica*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Costa Rica.
- Almond, G. y Verba, S. (1963). *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. Ariel.
- Blais, A. y Achen, C. (2019). Civic duty and voter turnout. *Political Behavior*, 41, 473-497.
- Cascante, M. y Guzmán, J. (2022). Reconfiguraciones políticas en Costa Rica. *Nueva Sociedad*, 300, 127-139.
- Della Porta, D. (2019). Deconstructing generations in movements: introduction. *American Behavioral Scientist*, 63(10), 1407-1426. doi: 10.1177/0002764219831739
- Denk, T., Christensen, H. y Bergh, D. (2015). The composition of political culture. A study of 25 european democracies. *Studies in Comparative International Development*, 50(3), 358-377. doi:10.1007/s12116-015-9174-6
- Fournier, M. (2022). Estudio cualitativo del impacto de la pandemia en mujeres jóvenes del cantón de Desamparados, Costa Rica. En J. P. Pérez Sáinz y M. F. Hernández Salas (Eds.), *Ser mujer y joven ante la pandemia. Seis estudios latinoamericanos* (pp. 37-53). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Costa Rica.

- Grasso, M. T. (2014). Age, period and cohort analysis in a comparative context: political generations and political participation repertoires in Western Europe. *Electoral Studies*, 33, 63-76. doi: 10.1016/j.electstud.2013.06.003
- Hirschman, A. O. (1977). *Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados*. Fondo de Cultura Económica.
- Inglehart, R. y Welzel, C. (2005). *Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo humano*. CIS.
- López, S. (2005). Partidos desafiantes en América Latina: Representación política y estrategias de competencia de las nuevas oposiciones. *Revista de Ciencia Política*, 25(2), 37-64.
- Melo, D. y Stockemer, D. (2014). Age and political participation in Germany, France and the UK: A carative analysis. *Comparative European Politics*, 12(1), 33-53.
- Monticelli, L. y Bassoli, M. (2018). Precariousness, youth and political participation: the emergence of a new political cleavage. *Rivista italiana di Scienza Política*, 1-15. doi:10.1017/ipo.2018.11
- Mudde, C. (2021). *La ultraderecha hoy*. Paidós.
- Nie, N., Verba, S. y Jae-on, K. (1974). Political Participation and the Life Cycle. *Comparative Politics*, 6(3), 319-340.
- Nohlen, D. (2008). Instituciones y cultura política. *PostData*, 13, 27-47.
- Nohlen, D. (2013). *¿Cómo estudiar ciencia política? Una introducción en trece lecciones*. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
- Norris, P. e Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit and Autoritharian Populism*. Cambridge University Press.
- O'Donnell, G. (1996). Illusions about consolidation. *Journal of Democracy* 7(2), 34-51. Doi: 10.1353/jod.1996.0034
- Pérez Sáinz, J. P. (2024). *Digitalización y nuevas desigualdades. Evidencia e interrogantes para América Latina*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Costa Rica.
- Pérez Sáinz, J. P. y Hernández Salas, M. F. (2022). Mujeres jóvenes de sectores populares ante la pandemia. Un estudio exploratorio del cantón de la Unión en Costa Rica. En J. P. Pérez Sáinz y M. F. Hernández Salas (Eds.), *Ser mujer y joven ante la pandemia. Seis estudios latinoamericanos* (pp. 55-72). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Costa Rica.
- Pickard, S. (2019). The political life cycle, period effect, generational effects and the youth vote. En *Politics, Protest and Young People*. Palgrave Macmillan.

- Pignataro, A., Treminio, I. y Chavarría, E. (2021). Democracia, apoyo ciudadano y nuevas generaciones frente al retroceso democrático en Centroamérica. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 47, 1-30. DOI: <https://doi.org/10.15517/aeca.v47i0.49734>
- Quesada, N. (2023). Inscripción automática de electores en el padrón electoral: un reto que el Tribunal Supremo de Elecciones debe resolver frente al primero voto de las personas jóvenes. *Revista de Derecho Electoral*, 36, 88-101.
- Quintilier, E. (2007). Differences in political participation between young and old people. *Contemporary Politics*, 13(2), 165-180.
- Rodríguez, E. (2002). Juventud, desarrollo social y políticas públicas en América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos. En C. Sojo (Ed.), *Desarrollo social en América Latina: temas y desafíos para las políticas públicas* (pp. 217-305). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Costa Rica.
- Seligson, M. A. (2002). Trouble in paradise. The erosion of system support in Costa Rica 1978-1999. *Latin America Research Review*, 37(1), 160-185. doi: DOI: <https://doi.org/10.15517/aeca.v47i0.49734>
- Sloam, J. y Henn, M. (2019). *Youthquake 2017. The rise of young cosmopolitans in Britain*. Palgrave. doi:10.1007/978-3-319-97469-9
- Treminio, I. y Pignataro A. (2015). Jóvenes y democracia: comportamiento electoral y actitudes políticas en Costa Rica. *Revista de Derecho Electoral*, 20, 309-343.
- Treminio, I. y Pignataro, A. (2019). El mito del voto joven: valores, religión y comportamiento electoral en Costa Rica. En M. Rojas e I. Treminio (Eds.), *Tiempos de Travesía. Análisis de las elecciones del 2018 en Costa Rica*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Costa Rica.
- Treminio, I. y Pignataro, A. (2021). Jóvenes y el voto por la derecha radical. El caso de Costa Rica. *Población & Sociedad*, 28 (2), 101-126. Doi: <http://dx.doi.org/10.19137/pys-2021-280206>
- Weiss, J. (2020). What is political participation? Literature review on youth political participation and political attitudes. *Frontiers in Political Science*, 2-1. Doi: 10.3389/fpos.2020.00001
- Weyland, K. (2024). Why democracy survives populism? *Journal of Democracy*, 35 (1), 43-58. Doi:10.1353/jod.2024.a915348

Capítulo II. La educación y el desarrollo de la cultura política costarricense

*María Amalia Amador Fournier
Ana Catalina Benavides Fonseca*

Introducción

A nivel latinoamericano, en años recientes se observa una significativa transformación en las actitudes de la población hacia la democracia, donde destaca particularmente el cambio en las percepciones de la población joven. Este fenómeno se encuentra respaldado por datos del Latinobarómetro de 2023, el cual revela que únicamente el 43% del segmento juvenil encuestado (16-25 años) en Latinoamérica manifiesta respaldo hacia el sistema democrático. Costa Rica, por su parte, no escapa a esta dinámica, pues experimenta, durante un período considerable, una disminución en el apoyo democrático por parte de la población joven (18-35 años), especialmente jóvenes con menores ingresos, quienes también muestran una reducción en los niveles de confianza hacia las instituciones (Treminio y Pignataro, 2015 y 2021).

La posible vinculación entre esta transformación en la cultura política costarricense y el deterioro en la calidad de la educación en el país constituye un aspecto central de análisis. A pesar de la narrativa histórica de Costa Rica, construida en las últimas siete décadas bajo el lema “no tenemos ejército porque invertimos en educación”, se han presentado desafíos estructurales significativos en cuanto a la calidad educativa en las últimas décadas.

El último quinquenio, en particular, ha sido testigo de lo que expertos califican como un “apagón educativo”, fenómeno evidente en el *Informe del estado de la educación de 2023*. Aunque las repercusiones de este “apagón educativo” en la cultura política aún no se han dilucidado completamente, sus efectos podrían ser considerablemente significativos.

Este capítulo parte de la premisa fundamental acerca de la importancia de la educación en la formación cultural de una sociedad, interpretando este concepto en su sentido más amplio. No obstante, se realiza también un análisis enfocado en el ámbito escolar, perspectiva que se respalda con la afirmación de López (2005), quien citando a Fainholc sostiene que “la clase escolar es el lugar donde el sujeto internaliza una serie de lealtades para el desempeño exitoso de futuros roles adultos” (p. 25). Estas lealtades, que pueden traducirse en participación ciudadana, patriotismo, compromiso colectivo, entre otras, son influenciadas por la educación formal, la cual posee el poder de contribuir a una cultura política en favor o en detrimento de la democracia.

El propósito de este texto es analizar la relación entre la educación y el desarrollo de la cultura política en Costa Rica. Para lograr este objetivo, resulta esencial comprender, en primer lugar, el concepto de cultura política, centrándonos especialmente en su aplicación en el contexto costarricense. Asimismo, se examina la situación actual de la educación para entender su conexión con la cultura política y su incidencia en la participación política y las actitudes democráticas de la población joven. Este análisis también contempla la relevancia de la enseñanza de la materia de Educación Cívica en los centros educativos.

En el proceso de análisis se consideraron fuentes primarias y secundarias. Entre ellas, documentos como el *Informe del estado de la educación*, el Latinobarómetro y, principalmente, los insumos proporcionados por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede académica Costa Rica, provenientes del estudio cuantitativo y cualitativo realizado en agosto y septiembre de 2023 para identificar los principales malestares sociales desde la perspectiva de la democracia en diversos grupos etarios. Los grupos focales involucraron a personas adultas mayores de 35 años, personas menores de 35 años y personal docente.

1. Cultura política costarricense

Gabriel Almond y Sidney Verba (1963) concibieron que la cultura política de un país se representa a través de todas las actitudes, valores y percepciones que hay de parte de la población hacia el sistema político, así como el rol del individuo dentro de este sistema. Este enfoque ofrecido por Almond y Verba ha servido de base para diversos estudios que analizan el vínculo entre

cultura política y democracia; en Latinoamérica, particularmente a partir de la “transición democrática” de los ochenta, estos análisis han tomado relevancia, principalmente en estudios como el Barómetro de las Américas de LAPOP y, a nivel nacional, en los estudios realizados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) o el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), que han servido de base para comprender la evolución de la cultura política.

Es indiscutible que la cultura política es un concepto complejo no solo por la diversidad de interpretaciones de un Estado a otro, sino también dentro de cada país; además, porque es un concepto que evoluciona y se modifica junto con las sociedades y no es estático. Aunado a la complejidad de su definición, la tendencia a su evolución y constantes cambios complejizan su estudio y monitoreo por lo que es menester su constante observación y análisis¹.

De manera más puntual, en el caso de la cultura política costarricense², esta se ha caracterizado por tener uno de los más altos y constantes niveles de apoyo al sistema democrático en comparación con la región latinoamericana, además de una significativa tolerancia política (Lupu *et al.*, 2023). Ser un país de paz, que prioriza la educación, se encuentra entre los primeros elementos de identidad de las personas costarricenses.

Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. De acuerdo con el Latinobarómetro de 2023, Costa Rica es uno de los países que presenta mayor regresión en el apoyo a la democracia con 11% y también es uno de los que muestra mayor aumento ante la pregunta “¿da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático?” con un 10%. Además, ha habido un aumento del 5% de apoyo hacia el autoritarismo. Por su parte, la participación electoral ha caído considerablemente desde los años noventa, incluso en las elecciones municipales de 2024, por primera vez se mostró un aumento en el abstencionismo desde que se instaló la elección directa para estos puestos.

Las razones para que se presente este cambio en las actitudes de la población hacia el sistema político no son monocausales: el aumento en la brecha de desigualdad, los casos de corrupción, la polarización, desinformación y el uso inadecuado de las redes sociales, los problemas causados por la falta de infraestructura de calidad, el aumento de la inseguridad³ y homicidios, así

¹ Aquí cabe recordar el concepto de “bloque histórico” de Gramsci, que hace referencia a la compleja interacción de dinámicas políticas, económicas y fuerzas sociales que se articulan a través del consenso cultural e instituciones para el sostenimiento del orden social en función de los grupos dominantes o hegemónicos (Betancourt, 1990).

² Entendida como las características generales acerca de la percepción y legitimidad del sistema de gobierno o sistema político.

³ Según el Informe de resultados de la *Encuesta de opinión pública* del CIEP, el 73% de las personas consultadas consideró que la seguridad está peor en enero de 2024 que hace 12 meses (Alfaro *et al.*, 2024).

como la penetración del narcotráfico en diferentes áreas del país complejizan el fenómeno. No obstante, una de las causas directas de este cambio puede encontrarse en el deterioro del acceso a la educación⁴ de calidad por parte de la mayoría de la población costarricense.

2. Educación y cultura política en Costa Rica

Históricamente, las políticas y prácticas educativas en Costa Rica han respondido al proyecto económico y político de cada periodo. De este modo, han variado para atender objetivos que van desde la formación de la identidad ciudadana hasta la promoción de mano de obra para responder a las demandas del mercado laboral y las necesidades económicas del país.

De acuerdo con López (2005), para Durkheim la sociedad forma a un determinado ideal de persona y es la educación la que contribuye a su desarrollo. Independientemente de la ocupación y rol que se vaya a desempeñar en la sociedad, se necesita establecer una base educativa común para todos los individuos a fin de garantizar la cohesión social, y es el Estado, por su función colectiva, quien debe responsabilizarse y asumir tal labor. Por tanto, los valores, creencias, costumbres y bases democráticas son parte fundamental en la educación formal para generar individuos de acuerdo con el ideal de persona que propone y actúa en una sociedad con principios democráticos más allá de los ideales meramente económicos.

A partir de diversos estudios, se ha identificado que en los Estados democráticos existe una estrecha relación entre participación política y altos niveles educativos (Verba, 1995); mientras que se reconoce que una educación de poca calidad y limitada a ciertos sectores, o incluso de índole adoctrinadora, es importante para el mantenimiento de autocracias (Carnevale, Smith, Dražanová, Gulish y Peltier, 2020).

Si bien los altos niveles de educación formal no son necesariamente un aspecto para garantizar que existan actitudes más democráticas de parte de la población (Carnevale *et al.*, 2020), sí son importantes para determinar procesos de socialización, relaciones con autoridades, sistemas de valores, respeto a las reglas; además del contenido básico correspondiente al currículo educativo que debe incluir historia y cívica, entre otros. En otras palabras, garantizar el acceso a la educación formal y de calidad es la base para adquirir las nociones más básicas de vivir en democracia.

En los últimos años la calidad de la educación a nivel global ha decrecido. Esto es relevante, pues como lo ha señalado Bobbio (1986), esta incapacidad

⁴ De acuerdo con el mismo informe, un 43% de las personas consultadas considera que la educación está peor que hace 12 meses, en contraste con el 31% que indica que está mejor (Alfaro *et al.*, 2024).

para responder a la demanda de una educación de calidad puede llevar a una sensación de insatisfacción con la democracia. Esto puede significar un importante cambio en las actitudes hacia la democracia que tienen las nuevas generaciones que, además, se encuentran más influenciadas por las redes sociales.

Como ya se ha hecho énfasis, Costa Rica está rezagada en este aspecto. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas (95%) que opinaron en la encuesta de cultura política del IFED y FLACSO Costa Rica de 2023, creen que el Estado debe garantizar el acceso gratuito a la salud y la educación pública; y de ellas, alrededor del 24% opina que la calidad de la educación pública es mala o muy mala. Además, 48% de las personas encuestadas consideran que solo algunas o muy pocas personas tienen acceso a la educación pública de calidad.

Este problema a nivel educativo se encuentra reflejado en las últimas ediciones del *Informe del estado de la educación*, especialmente, en la edición de 2023. El país se encuentra ante una crisis educativa de gran envergadura, solamente comparable con lo visto en la crisis de los años ochenta que llevó a la denominada “generación perdida”.

Desde 2018 el país se encuentra ante un “apagón educativo” en el que existen generaciones de estudiantes que han tenido un pobre acceso a la educación, generado, entre otras cosas, por huelgas y la interrupción de las clases presenciales causada por la pandemia del covid-19. No obstante, como lo señala el *Informe del estado de la educación*, los problemas de rezago educativo vienen desde antes de 2018 y se han generado “por el bajo rendimiento de las personas estudiantes; la falta de infraestructura y ambientes de aprendizaje adecuados; una gestión educativa centralizada e ineficiente y problemas de calidad en la formación inicial de los docentes que se egresan de carreras con bajos controles de calidad” (Programa Estado de la Nación, 2023, pág. 78).

En los grupos focales realizados entre agosto y setiembre de 2023 sobre los malestares de la democracia, se identificó que uno de los elementos que más está afectando la convivencia democrática es la falta de educación de calidad, especialmente la carencia de una educación cívica que retome los principios democráticos del Estado costarricense, sobre este particular nos referiremos más adelante.

Los efectos que el deterioro educativo puede tener son múltiples. Por un lado, si la educación no es atractiva para las personas jóvenes, preferirán salir del sistema educativo o buscar otro tipo de oportunidades u opciones que les lleve a (lo que consideran) una gratificación más inmediata y concreta, como el narcotráfico. A futuro, además, una mala educación pública que incentive

al abandono puede llevar a falta de oportunidades laborales⁵ y ensanchar así la brecha de desigualdad existente.

Asimismo, ante el deterioro educativo, se pierden conocimientos básicos de la democracia como derechos y deberes, el funcionamiento de las instituciones públicas, o respecto de cómo se elige a los representantes ante la Asamblea Legislativa, lo que lleva a que las personas no valoren la importancia de tener un sistema democrático que les permita expresarse, denunciar, y elegir, entre otras prácticas.

Pero si desde el mismo Ministerio de Educación no viene un buen contenido, van a haber muchas falencias. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo aprendí hasta que llevé mi curso de Derecho constitucional sobre la Constitución? Sobre cómo funciona, aprendí qué son derechos fundamentales, aprendí cómo funcionan las instituciones públicas, cómo se mueve el gobierno. Hasta que llevé ese curso aprendí cómo se eligen los diputados, cómo se reparten los votos, cómo se crea un proyecto de ley. (GF Puntarenas, personas menores de 35 años)

Precisamente, en este punto se destaca un elemento fundamental: la educación no está respondiendo al desarrollo del sistema democrático. Se pierde, entonces, la importancia del rol de la educación en la construcción de valores cívicos y en la formación de personas con pensamiento crítico. Sin mencionar que la ausencia de clases presenciales (ya sea por huelgas extendidas, por pandemia o por ausencia de docentes) complica los procesos de socialización que son básicos en la niñez y adolescencia para la generación de convivencia ciudadana.

3. Aprendizaje y educación cívica en los centros educativos

Si bien la educación no puede reducirse a una materia específica del currículo escolar y debe entenderse como un proceso colectivo complejo, la materia de Educación Cívica responde de manera directa a esa necesidad de formación de valores y conocimientos de la ciudadanía, que busca generar personas participativas en la construcción de la sociedad democrática, solidaria y crítica (Quesada, 2000). Así se conceptualiza esta materia desde el espíritu y origen de su creación.

Como es sabido, los ideales franceses de libertad tuvieron gran influencia en la construcción identitaria de la cultura costarricense que incipiente debía afianzarse en la población del momento; por tanto, la creación de un material educativo fue parte de la estrategia que se implementó para lograrlo. Al

⁵ Considerando que las oportunidades laborales en gran medida están atadas a tener como mínimo el título de bachiller de educación secundaria, además de un buen nivel de inglés.

respecto, De la Cruz (2003) señala que las libertades reconocidas en los textos constitucionales desde 1824 encauzaron el desarrollo del país en ideales liberales que buscaron el progreso material, cultural, social y la exaltación de las virtudes ciudadanas del costarricense “lo cual culminó con la obra de don Ricardo Jiménez en 1888, llamada *Curso de instrucción cívica para uso de las escuelas de Costa Rica*” (p. 17).

Por tanto, la educación cívica se inició como respuesta a la necesidad de la formación de ciudadanos informados que fueran parte de una identidad colectiva en una nación emergente. Este ideal de libertad sigue siendo un referente identitario en las personas adultas que reconocen su preocupación por heredar a las futuras generaciones un país igual de libre, tal como fue identificado a partir de los grupos focales y como se menciona en el informe cualitativo de Flacso Costa Rica: “Una diferencia importante por grupo etario es la preocupación que muestran las personas adultas por dejar a las siguientes generaciones un país igual de libre al que ellos tuvieron, además se muestran preocupados por el desinterés que sienten en las personas jóvenes y su apatía por el bienestar común y la responsabilidad colectiva” (Informe de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* y grupos focales sobre *Malestares sociales y democracia*).

Existe preocupación por las nuevas generaciones en las cuales se identifica apatía, falta de comunidad y pertenencia, de manera que la identidad de lo que se considera ser costarricense podría estar modificándose, o deconstruyéndose lo que, hasta ahora se percibe, ha caracterizado a la sociedad costarricense desde su gestación poscolonial. Se observa, entonces, una desconexión entre la vida cotidiana y los intereses colectivos, los cuales están vinculados y no deberían desligarse de la política: “al joven no le interesa, simplemente no le interesa que le hablen de política, eso no es algo que les esté afectando, según ellos, directamente” (GF docentes).

Esta identidad que está estrechamente ligada con una cultura política de ideales democráticos se forma a partir de la socialización primaria y secundaria, con gran peso en la familia y el sistema educativo. Si bien es cierto la materia de educación cívica debe responder como una formación acotada y puntual del tema, el aprendizaje es integral y vivencial a partir de las experiencias cotidianas, por lo que los valores democráticos deben estar presentes en la resolución situacional diaria para que haya una interiorización por parte de la niñez y adolescencia en formación.

Los docentes señalan la apatía del estudiantado para participar en procesos estudiantiles; entre otras razones, identifican la conducción política que se tiene desde los hogares y, además, el acceso a medios tecnológicos sin tener la educación propicia para saber disponer de esta información a la que se accede.

Es una situación que viene desde el seno familiar. El pesimismo que se vive en las familias con respecto a la elección de los legisladores se transmite a los estudiantes.

Tenemos más tecnología y eso también influye mucho en un estudiante, en el no querer ya participar... los padres en lugar de ayudar a progresar a la educación, somos destructivos, nos quejamos de todo, empezando desde los maestros, los profesores y hasta el sistema educativo y de todo el gobierno. Entonces, yo creo que desde ahí empezamos mal, desde nuestros hogares. (GF docentes)

No es de extrañar que en los hogares se carezca de interés en los asuntos políticos, lo que lleva a que el descontento se transmita a las nuevas generaciones, dado que de acuerdo con el Latinobarómetro (2023), “la política se transformó en un botín para los corruptos en América Latina y eso ha debilitado la democracia” (p. 14).

Ahora bien, respecto del sistema educativo, se debe comprender que más allá de la materia de cívica, el clima en los centros educativos, las actividades, los enfoques, entre otros, como el abordaje desde la docencia, pueden generar o reforzar una cultura de desinterés, o de compromiso y, además, es relevante la concientización del papel que juega el cuerpo docente más allá de las falencias del diseño de los procesos educativos.

El papel del educador ha sido fundamental para la obtención de los objetivos planteados en el proyecto país, y ha sido distinto dependiendo del momento histórico que se analice; por ejemplo, en el proyecto liberal, el maestro cumplía un papel de mucho involucramiento en la sociedad y era visto como un gran formador de valores, así López (2005) explica que:

es posible que las ideas de este sociólogo [Durkheim] hayan influido en el concepto de “maestro apóstol” que predominó en América Latina hasta la década de los cincuenta. También incidió en la importancia dada, por parte del Estado, a la educación...los educadores eran formados y se comportaban guiados por ideas similares a las planteadas por Durkheim. De la misma forma, el respeto y la autoridad del maestro era reconocida por la familia y la sociedad en general. (p. 41)

Históricamente el papel del educador se fue transformando y moldeando de acuerdo con las expectativas de su papel en el gran cuadro del proyecto país, de esta manera pasó de ser considerado “como un elemento transformador de las comunidades” (López, 2005, pág. 119) en el periodo liberal a un capacitador técnico que respondiera a las necesidades formativas del mercado, según las políticas neoliberales que se fueron adoptando en la segunda mitad del siglo anterior.

López explica respecto de este tema que, en el caso de Costa Rica, es difícil determinar en qué momento se llevó a cabo el cambio de mentalidades de un modelo más durkheimiano, es decir, de una educación más enfocada en los valores y la formación de un ciudadano ideal con una función clave en

la cohesión social, a un modelo como el de Parsons que responde más a la formación enfocada en las competencias laborales de los individuos. Agrega, además, que esto “pudo ser resultado, no pretendido, de una formación de carácter más técnica y que deja de profundizar en el compromiso y otros aspectos de carácter valorativo, para enfatizar aspectos de carácter académico” (López, 2005, pág. 43).

El papel del docente sigue teniendo gran relevancia, aunque el diseño formativo dista de los esfuerzos iniciales en la Costa Rica de la última década del siglo XIX; el papel del docente se fue limitando puramente al aula y su involucramiento en la comunidad y en la formación desde una perspectiva más integral se fue modificando y desvaneciendo. En el siguiente extracto del grupo focal realizado en setiembre, uno de los docentes afirmó que la generación de una educación más enfocada en el pensamiento crítico y en una formación desde la participación recae en el estilo del docente más que en el diseño del currículo como tal: “se busca que usted [estudiante] sepa nada más cuáles son los mecanismos, pero nunca se aboca a otro tipo de formación un poco más crítica o activa, y ya eso recae mucho desde nuestro foco [del educador] de lo que queremos dirigir en esa práctica” (GF docentes).

Esta postura coincide con el rol que Gramsci asigna al maestro. López (2005) señala que para Gramsci el papel del maestro en la sociedad debe ser dignificado como un intelectual, es decir, una persona que puede producir ideología, interpretar las ideologías dominantes, que puede legitimar o no la ideología del grupo hegemónico y que guía al niño a la autodisciplina y conocimiento para saber elegir y tomar posturas futuras. El maestro puede elegir ser o no un instrumento del Estado y, por lo tanto, tomar posiciones de liderazgo (para lo cual debe tener claridad política), de manera que trasciende la función de simple seleccionador técnico para la estratificación social, que le asigna Parsons. “Este tipo de educador sería capaz de asumir posiciones de liderazgo, y contribuir a la consolidación de sociedades más democráticas en América Latina” (López, 2005, pág. 47).

Pero este rol del educador de Gramsci aún está por utilizarse en Latinoamérica, y va de la mano con el desarrollo del pensamiento crítico y con la calidad de la formación que reciban los educadores. Por otra parte, no pueden obviarse las limitaciones que el cuerpo docente enfrenta a partir de las directrices, e indicaciones que deben cumplir desde las posibilidades dadas en el diseño curricular; de hecho, uno de los obstáculos mencionados en los grupos focales para que la enseñanza y formación contribuyan positivamente con la democracia costarricense, es la imposición gubernamental de una formación limitada. Mencionan poca libertad para enseñar más allá de lo establecido en la malla curricular y que incluso puede llevarles a consecuencias laborales como la amonestación.

La democracia se enseña a como el Estado quiere que se enseñe y le sirva, es parte de su enfoque. El Estado es también una figura política de poder y responde al

enfoque también de quien está en el gobierno en su momento. No va a enseñar una cosa aparte a lo que necesita. Entonces esa instrumentalización que hay funciona porque es lo que el Estado necesita que funcione. (GF docentes)

El proceso de enseñanza y formación es, por tanto, complejo, e involucra factores variados que demandan un proyecto país/Estado que supere los intereses políticos del momento y un cuerpo docente capacitado, involucrado y crítico. La educación tiene gran impacto en la formación de las futuras generaciones y la manera de solventar los problemas sociales, sobre todo en un contexto de mayor violencia, desigualdades y narcotráfico.

La enseñanza en los centros educativos debe considerar la integralidad del proceso como una oportunidad para la formación de una ciudadanía consciente, informada y participativa. Por ejemplo, el proceso electoral que se lleva a cabo en los centros educativos es una oportunidad para el aprendizaje correcto del proceso, a fin de superar los vicios que se pueden identificar en las elecciones a nivel nacional.

Los docentes consideran las elecciones estudiantiles un reflejo de las elecciones nacionales, los motivos de elección están lejos de centrarse en las propuestas de las candidaturas y partidos, no son decisiones informadas, y las personas docentes mencionan reiteradamente que este proceso electoral estudiantil es una oportunidad, si es bien guiada, para que se formen ciudadanos comprometidos con valores que contribuyan con la democracia y la participación ciudadana.

En una plaza pública, en un colegio donde yo trabajo, este candidato llegó y dijo *Yo, igual que todos los demás presidentes de colegio, no voy a hacer nada, pero voten por mí*. Y casualmente quedó presidente y, a gran escala eso es lo que vienen haciendo con nosotros a nivel país.

Lastimosamente esos procesos que deberían ser pedagógicos y educativos y que deberían enseñarnos cómo ejercer el derecho al voto y en qué consiste la política, por lo demás, más bien se convierten en todo lo contrario y al final terminan enseñándonos cómo es la corrupción y cómo es dejarse llevar por la parte populista. (GF docentes)

En el informe cualitativo se señala que incluso “algunas personas mencionan que perdieron esa inocencia o noción de la fiesta democrática una vez que llegaron a la adolescencia, especialmente viendo los procesos electorales de sus centros educativos donde se prometían cosas, pero no se cumplían” (Informe de *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* y grupos focales sobre *Malestares sociales y democracia*).

De manera que la enseñanza en los centros educativos debe integrar, conectar y articular para que el aprendizaje sea coherente y practicado desde lo vivencial.

Una de las debilidades que señalan las personas docentes respecto de la materia de Educación Cívica, está relacionada con el divorcio que existe entre el contenido y la práctica, ya que consideran que está diseñada para que sea tediosa y aburrida. Además, consideran que el tiempo destinado a esa materia es muy limitado, pues se reduce a la enseñanza de conceptos y deja por fuera el análisis y la discusión, elementos básicos para generar una cultura de participación, involucramiento y pensamiento crítico.

El diseño no permite que haya profundización en la enseñanza, y las metodologías no se adaptan al fomento de la importancia de la participación ciudadana y de la responsabilidad colectiva.

Pero creo que el problema era ese, que era una información muy estática, muy cuadrada, muy tradicionalista hasta cierto punto, también conservadora en la que básicamente recordás aprenderte artículo por artículo, pero no sabés cómo utilizarlo, no sabés en qué contexto se desarrolla el por qué existe y cuál es la naturaleza del por qué se implementa. (GF docentes)

De manera que resaltan varios temas por mencionar, uno de ellos es el papel del Ministerio de Educación Pública como generador de política educativa visionaria que supere las presiones inmediatas, liderando programas educativos que consideren la experiencia del cuerpo docente y, a través de metodologías pedagógicas pertinentes, interactivas y en constante evaluación para su mejoramiento; “modificando la política educativa del país, porque nos podemos dar cuenta que a base de cada una de estas es que se van manejando y formando las generaciones, porque a final de cuentas quien tiene el control sobre las mentes va siendo el Ministerio de Educación Pública” (GF docentes).

Como lo mencionan FLACSO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2021), en su estudio sobre cultura política en personas jóvenes, diversos autores recientemente han señalado que la incertidumbre actual condiciona a la población joven a ser más vulnerable a grupos y partidos políticos más extremistas, lo cual da campo para que diferentes actores antidemocráticos se aprovechen de las condiciones y expongan su narrativa en contra de la cultura democrática y cívica predominante. Por ello se torna relevante que el proyecto educativo considere al estudiantado desde las edades más tempranas y atienda las falencias políticas de los hogares, para reforzar y superar estas carencias en las futuras generaciones.

4. Conclusiones

Uno de los retos actuales de la educación costarricense es el de la imperante necesidad de contar con personal docente profesional, calificado y debidamente preparado para la enseñanza. No obstante, es plausible

reconocer que esta exigencia persiste como una carencia no resuelta, por lo que constituye una tarea históricamente pendiente. La relevancia e impacto del cuerpo docente en la sociedad demandan un reconocimiento enaltecedor y una participación activa en los procesos comunitarios.

La experiencia educativa, desde las aulas hasta las instancias de toma de decisiones, como las elecciones en el ámbito escolar y más ampliamente en el centro educativo, ejerce una influencia, ya sea positiva o negativa, en la formación de los estudiantes. Esta influencia se traduce, posteriormente, en patrones de comportamiento y actitudes en la etapa adulta. Es imperativo que la planificación estatal trascienda los intereses políticos y oriente la educación hacia valores alineados con la ciudadanía costarricense, con la aspiración de contribuir a la formación de una sociedad cohesionada, proactiva, comprometida y participativa; elementos esenciales para el sostenimiento de la democracia en el país. Resulta crucial que la niñez y la adolescencia comprendan el impacto directo que las decisiones políticas tienen en sus vidas, entorno y sociedad.

A pesar de que el presupuesto educativo tiende a fluctuar de acuerdo con las necesidades económicas del momento, es imperativo reconocer que sus efectos pueden desencadenar consecuencias de largo alcance que impactan las estructuras y la configuración de la sociedad en el futuro. Ante esta realidad, es fundamental establecer claridad en los objetivos y garantizar el acceso a una educación de calidad para toda la población del territorio. Este enfoque debe superar las contingencias momentáneas y priorizar la construcción de una base educativa sólida y equitativa.

La educación debe conformarse según el “modelo de país” y la orientación estratégica del Estado, independientemente de las dinámicas políticas del momento. Este enfoque permitirá superar la alienación del sistema educativo respecto al sistema democrático, fomentando una colaboración vinculada y coherente. Tal alineación contribuirá a la promoción de valores esenciales para el desarrollo de una sociedad más democrática, participativa y caracterizada por el pensamiento crítico.

5. Referencias

- Alfaro, R., Camacho, S., Chacón, D., Ruiz, F. y Villalobos, D. (2024). *Informe de resultados de la encuesta de opinión pública*. Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), Universidad de Costa Rica (UCR). <https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-Pre-Muni-2024.html>
- Almond, G. y Verba, S. (1963). *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Betancourt, C. E. (1990). Gramsci y el concepto del bloque histórico. *Historia crítica*, (4), 113-125.

- Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. Fondo de Cultura Económica, S. A. de C.V. <https://fundamentoscpuba.files.wordpress.com/2020/04/bobbio-norberto.-2012-1984.-el-futuro-de-la-democracia.pdf>
- Carnevale, A., Smith, N., Dražanová, L., Gulish, A. y Peltier, K. (2020). *The role of education in taming authoritarian attitudes*. Georgetown University. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED609008.pdf>
- De la Cruz, V. (2003). La educación y la cultura costarricense en el siglo XIX: de las Cortes de Cádiz a las reformas educativas. En J. M. Salazar (Ed.), *Historia de la educación costarricense*. EUNED. https://books.google.co.cr/books?hl=es&lr=&id=2AGqoEw3VwWC&oi=fnd&pg=PA2&dq=historia+de+la+educaci%C3%B3n+en+Costa+Rica&ots=oEZtSQD-mty&sig=KRzi_WNCqz8vimUWKPVRSqDal&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Costa Rica (FLACSO) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (s. f.). *Cultura política de las personas jóvenes frente al proceso electoral costarricense de 2022: orientaciones hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás*. <https://www.flacso.ac.cr/images/proyectos/cultura-politica-01.pdf>
- Latinobarómetro (2023). *Informe 2023: La recesión democrática en América Latina*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- López Avendaño, O. (2005). *Sociología de la educación*. EUNED.
- Lupu, N., Rodríguez, M., Wilson, C. y Zechmeister, E. (Eds.). (2023). *Pulse of Democracy*. LAPOP. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2023/AB2023-Pulse-of-Democracy-final-20231127.pdf>
- Molina Jiménez, I. (2007). *Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no autorizada)*. *Diálogos Revista Electrónica de Historia*, 8(2). Informe especial. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/18349>
- Programa Estado de la Nación. (2023). *Noveno estado de la educación*. Programa Estado de la Nación. <https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2023/08/EE-2023-Book-DIGITAL.pdf>
- Quesada Camacho, J. (segundo semestre, 2000). Educación Cívica ¿por qué y para qué? *Revista Umbral* (edición especial), 62-65.
- Reporteros sin fronteras. *Clasificación mundial de la libertad de prensa 2023: los peligros de la industria del engaño*. <https://rsf.org/es/clasificaci%C3%B3n-mundial-de-la-libertad-de-prensa-2023-los-peligros-de-la-industria-del-enga%C3%B1o>
- Treminio, I. y Pignataro, A. (2015). Jóvenes y democracia: comportamiento electoral y actitudes políticas en Costa Rica. *Revista de Derecho Electoral*, 20, 309-343.
- Treminio, I. y Pignataro, A. (2021). Jóvenes y el voto por la derecha radical en Costa Rica. *Revista Población y Sociedad*, 28 (2), 101-126. <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/5640/6928?fbclid=IwAR07KWchnzPkhewSzc0xXbFBDixvpEBqxBalKbn3h53lkzvXDeW36Z7ox2M>

Capítulo III. La relación entre educación y participación política en Costa Rica

Juan Manuel Muñoz Portillo

Resumen

Este capítulo analiza la relación entre educación, medida como niveles educativos completados, y participación política, usando los datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023 (EFMC-2023). La participación política involucra desde el ejercicio del voto hasta manifestaciones más complejas, como la deliberación y la protesta. En la ciencia política se ha encontrado bastante evidencia de una relación directa e indirecta entre niveles altos de educación y mayor participación política. Varias razones explicarían este vínculo. Por una parte, se cree que el sistema educativo formal provee de conocimiento esencial sobre cómo funciona el sistema político y cuáles son los derechos y roles de las personas que viven en una sociedad. El sistema educativo de forma directa e indirecta también provee de habilidades cognitivas y contribuye a la formación de valores que brindarían herramientas para evaluar el rendimiento de los actores políticos y las instituciones democráticas. De este modo, las personas con más niveles educativos, entre otras, tendrían más interés en la política, estarían más pendientes de los procesos políticos y participarían más de las discusiones que involucran.

A partir de ese marco teórico, se formulan varias hipótesis que se contrastan contra los datos de la EFMC-2023. Se encuentra que cuanto más alto el nivel educativo es más probable que las personas estén dispuestas a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional o hacer una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes. Otro hallazgo es que cuando las personas alcanzan un nivel educativo suficientemente alto es más probable que tengan interés en la política. Aunque es muy probable ejercer el voto en elecciones presidenciales cuando se cuenta con educación universitaria de grado y posgrado en comparación con no tener estudios, no hay evidencia de que el efecto sea lineal; es decir, después de cierto punto el efecto no aumenta cuanto más alto es el nivel educativo. Sin embargo, en lo que respecta a elecciones municipales, las personas con educación universitaria tienen una mayor probabilidad de votar. Finalmente, se encuentra que las personas con niveles educativos inferiores tienen una probabilidad de no votar debido a que manifiestan sentirse decepcionadas con la democracia, mientras que las que poseen niveles educativos más altos consideran que la principal razón por la que no votan es porque no se sienten representadas por los partidos políticos.

Se concluye que existe una asociación entre más escolaridad y participación en política, que es consistente con la literatura. Si bien no se pueden demostrar los mecanismos causales que estarían involucrados, parece que las personas con niveles educativos más altos tendrían una mejor noción del impacto de las instituciones como la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes en el proceso político. Además, más educación estaría vinculada con un mayor interés en participar en la política tanto electoral como de otras manifestaciones, que podría deberse a los efectos directos e indirectos de la educación. Finalmente, es llamativo que quienes cuentan con menores niveles de escolaridad consideran que las personas no votan porque se sienten decepcionadas con la democracia. Es un aspecto que debería investigarse más, especialmente, por potenciales vínculos, sugeridos en la literatura, con fenómenos como la polarización afectiva y el apoyo al autoritarismo. La investigación termina reflexionando sobre la importancia de la educación para la calidad de la democracia y cómo ambos aspectos se relacionan con el desarrollo humano.

Introducción

En Costa Rica, ¿participa la ciudadanía en la política o estaría dispuesta a hacerlo? ¿Es una participación que se restringe a las elecciones o se manifiesta de otras formas? ¿Explica el nivel educativo de la población su participación en política? La participación es un componente esencial de las democracias y esto no se reduce a ejercer el sufragio de forma periódica o integrar un partido político. De hecho, este derecho se puede manifestar de diversas formas; por ejemplo, contactar a una persona representante electa, recurrir a instituciones para hacer cumplir sus derechos, como las defensorías del

pueblo (*ombudsman*) y tribunales de justicia especializados. También se participa ejerciendo influencia en el proceso de política pública a través de la acción colectiva, como las protestas. El nivel y los tipos de participación en política en las democracias contemporáneas son variables que dependen de otros factores. Uno de ellos, de acuerdo con una amplia literatura en ciencia política, es la educación que reciben las personas. La relación es compleja y varios mecanismos podrían estar involucrados.

Existe evidencia en otros países de la relación entre educación y participación política. Al respecto, algunos autores han encontrado que más años de escolaridad influyen en un mayor ejercicio del sufragio, lo que reduce la probabilidad de abstención electoral (Burden, 2009; Smets y Van Ham, 2013 y Sondheimer y Green, 2010). Otros autores encuentran que más escolaridad de una persona influye en su interés en política y fomenta valores esenciales para la democracia (Larreguy y Liu, 2024; Mauk, 2021; Monsiváis-Carrillo y Cantú, 2022 y Stubager, 2008). No obstante, no son del todo claros los mecanismos a través de los cuales más educación incidiría en el comportamiento y el tipo de participación política¹. A pesar de esto, la evidencia tiende a apoyar la hipótesis de que más educación es un predictor de más participación política, como de varios indicadores que miden la calidad de la democracia (Emler y Frazer, 1999; Mayer, 2011; Persson, 2015 y Willeck y Mendelberg, 2022).

En Costa Rica, anteriormente, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones (IFED) en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP) han descrito varias formas comunes de participación política comparando su variación a lo largo de estudios sucesivos en 2003, 2007 y 2011 (Fournier, 2012). El Programa Estado de la Nación ha abordado el tema en su estudio de *Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia* (2001, capítulo 11). Asimismo, periódicamente esta organización da seguimiento a la evolución de algunos indicadores de participación en sus informes anuales del *Estado de la nación en desarrollo humano sostenible*. Sin embargo, hasta donde se tiene conocimiento, para este trabajo no se encuentran estudios que analicen en Costa Rica la relación entre nivel de educación alcanzado y los tipos de participación política. El presente trabajo busca llenar este vacío de conocimiento por medio del uso de datos de la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023, realizada por el IFED y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Costa Rica).

El capítulo está organizado en cuatro secciones. En el primer apartado, marco teórico, se explica el potencial vínculo entre esos dos factores y se derivan

¹ El principal problema es cómo aislar el efecto de la educación de otras variables que influyen tanto en educación como en participación política. Por ejemplo, ciertas habilidades cognitivas de una persona podrían producir que esta tenga mejor rendimiento educativo y también más interés en política y, por consiguiente, probabilidad de participar en esta (Emler y Frazer, 1999).

hipótesis. En el segundo, se describen los datos que serán utilizados para el análisis. En el acápite de resultados, se presenta la evidencia para las hipótesis a partir de una serie de análisis de regresión logística. En la cuarta y última sección se presentan conclusiones.

1. Marco teórico e hipótesis

En este capítulo nos interesa conocer si existe una asociación entre escolaridad y participación. En adelante, se entenderá por escolaridad el nivel de educación formal alcanzado, donde “sin escolaridad” es el nivel más bajo y “posgrado” el nivel más alto. Esta definición está anclada a elementos claramente observables². No se puede decir lo mismo del concepto participación política. Por ejemplo, Dahl (1993) define participar como tener voz en el debate público (p. 15). Dado que existe desigualdad política en la mayoría de democracias del mundo, él argumenta que en lo mínimo para la manifestación de esa voz se debe cumplir con el respeto de libertades individuales que le permiten a la ciudadanía formular y manifestar preferencias como también condiciones que le dan igualdad de trato por parte de las autoridades gubernamentales. Entre otras, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, derecho a competir; elecciones periódicas libres, limpias y justas, la existencia de instituciones que hagan que la política de gobierno dependa del voto y demás formas de expresión de las preferencias (Dahl, 1993, capítulo 1).

Algunas expresiones de participación en esta línea son el uso de las instituciones representativas. Por ejemplo, acudir a las personas que ocupan la diputación de la circunscripción electoral o provincia, o a los alcaldes y regidores, para que los intereses de los habitantes del territorio sean representados. También, utilizar los mecanismos de control social, como los *ombudsman* (defensorías del pueblo) y la expresión de la opinión en medios de comunicación. Asimismo, los mecanismos de control constitucional, tal es el caso del recurso de amparo.

Pero la mayoría de democracias liberales manifiestan más expresiones de participación que las arriba enumeradas (Della Porta, 2017, p. 48). Por ejemplo, en años recientes, parte del descontento hacia la política se revela en lo que el economista Albert Hirschmann denominó “la voz”. Es decir, manifestaciones de protesta y la lucha por el cambio (Hirschmann, 1970, citado por Raventós, 2012). Asimismo, la acción colectiva de grupos de interés y movimientos sociales son otras formas de participación. La acción colectiva puede implicar la utilización de mecanismos formales como los descritos arriba, y también

² El problema de esta definición, o el número de años de permanencia en el sistema educativo, es que no aporta información sobre la calidad de la educación recibida, que podría ser tan o, inclusive, más determinante en la participación política (Willeck y Mendelberg, 2022). Sin embargo, datos para esta variable no están disponibles para el análisis presentado en este capítulo.

las protestas públicas, entre otras. Lamentablemente, la encuesta no da información para indagar sobre participación directa de las personas en estos grupos, por lo que nos enfocamos en otras manifestaciones que sí mide.

Desde hace varias décadas una amplia literatura en ciencia política se ha dedicado a estudiar la posible influencia causal de la educación sobre la participación política. Esta influencia sería de dos tipos: directa e indirecta. Bajo el primer tipo, la educación tiene una relación directa en la participación; a saber, entre otros mecanismos, mediante la educación cívica o el conocimiento que se transmite en otras materias sobre el funcionamiento del sistema político. En cambio, la educación incidiría indirectamente en la participación influyendo en otras variables que tienen afectación directa en la participación política. Por ejemplo, mayor escolaridad aumenta las oportunidades de ingreso económico y estatus social. Estos factores facilitan la integración de las personas en organizaciones sociales que participan en la política, como partidos, movimientos sociales o grupos de interés (Huang *et al.*, 2009). En función de los datos disponibles, discutidos más adelante, la teoría sobre educación y participación política se puede agrupar en dos vertientes: 1) la función que tiene la educación formal para transmitir conocimiento sobre el funcionamiento del sistema político y 2) la función de la educación en la formación de valores y el efecto que estos tienen en el sistema político.

1.1 Relación entre educación formal y participación: conocimiento del funcionamiento del sistema político

De acuerdo con Willeck y Mendelberg (2022), los efectos directos de la educación formal sobre la participación política se darían a través de socialización:

La escuela imparte conocimientos políticos y habilidades específicas necesarias para poder participar. La “capacidad de autogobierno” incluye saber cómo funciona el sistema político, cuáles son los derechos y roles de los ciudadanos, cómo emitir un voto y facilidad verbal. Se cree que la escolarización, y especialmente la educación cívica, aumenta la participación política al aumentar estas habilidades y comprensiones. (p. 91)

Como amplían estas autoras, el sistema educativo les da a las personas herramientas para que sepan acceder a información de interés público e interpretarla. También brinda conocimientos sobre el mecanismo básico de funcionamiento de la Administración pública. El conocimiento sobre el sistema político también implica conocimiento de sus derechos, más allá de los derechos electorales y las instituciones encargadas de hacerlos efectivos. La primera hipótesis que se plantea es: Hipótesis 1. Cuanto más alto el grado de escolaridad alcanzado, mejor conocimiento de las instituciones a través de las cuales se ejerce la participación política.

Se cree que también mayores niveles de escolarización alcanzados aumentan el interés en la política. Esto se correlaciona al mismo tiempo con conocimiento de política. Las personas al tener un mejor entendimiento de cómo funciona el sistema político desarrollarían interés en participar (Emler y Frazer, 1999). En este sentido, el sufragio es tal vez una de las más claras manifestaciones. Varias investigaciones, que aplican diseños de investigación muy rigurosos, constatan que mayores niveles educativos se asocian causalmente con mayor probabilidad de ejercer el voto (Burden, 2009, Mayer, 2011 y Smets y van Ham, 2013). De esta discusión se someten a prueba dos hipótesis:

- Hipótesis 2. Cuanto más alto el grado de escolaridad alcanzado, el interés en la política es mayor.
- Hipótesis 3. Cuanto más alto el grado de escolaridad alcanzado, la probabilidad de que se ejerza el voto es mayor.

1.2 Relación entre educación formal y participación: satisfacción con la democracia

Se ha sugerido que más y mejor educación formal contribuye indirectamente a la confianza interpersonal y a la confianza hacia el funcionamiento de las instituciones democráticas (Hakhverdian y Mayne, 2012; Mauk, 2021 y Monsiváis-Carrillo y Cantú, 2022). Distintos procesos estarían involucrados en esta relación. Aunque los mecanismos causales no están del todo claros, algunas teorías sugieren un efecto psicológico: las personas se forman con creencias que fomentan la autoestima y debido a esto se sienten menos amenazadas por quienes son diferentes o que piensan diferente. De este modo, ciertos valores, denominados posmateriales o libertarios, estarían relacionados con mayor tolerancia y confianza en otros (Brooks, 2006). En cambio, otras teorías plantean que las instituciones educativas son espacios de socialización donde formal e informalmente se aprenden y reproducen valores que contribuyen a la tolerancia y el respeto hacia sí mismas y hacia otras personas que se ven y piensan diferente (Stubager, 2008).

Otras teorías enfatizan las habilidades cognitivas que se desarrollan a lo largo del ciclo educativo formal. Estas dan herramientas para poder evaluar más adecuadamente el funcionamiento de la democracia. De este modo, se ha encontrado que la información de los procesos políticos, como el de formación de políticas públicas, es interpretada de manera distinta por las personas en función de su nivel educativo (Hakhverdian y Mayne, 2012). Coffé y Michels (2014) encuentran que las personas con mayores niveles educativos se sienten más interesadas en el proceso de política representativa, en el debate de los partidos políticos y la influencia de sus programas en la política pública. En cambio, las que cuentan con menores niveles educativos tienden a sentirse menos representadas por los partidos políticos y, en consecuencia, prefieren procesos de democracia directa. Una explicación a esta actitud

sería que las personas con menores niveles educativos, quienes tienden a pertenecer al grupo de menores ingresos económicos, percibirían que las políticas públicas no se hacen para ellas. Esto se trasladaría en insatisfacción hacia la democracia representativa (Coffé y Michels, 2014; Hakhverdian y Mayne, 2012 y Raventós, 2012).

Como se ha observado notoriamente en otros países, a veces la insatisfacción hacia la democracia representativa se vislumbra como un proceso polarizador y, en ocasiones, hasta violento (por ejemplo, Gidron *et al.*, 2020). De un lado se encuentran grupos de personas que se identifican con valores políticos y culturales posmateriales y los que se identifican con valores autoritarios y tradicionales³. Especialmente, en años recientes, esto se manifiesta en la política, con el apoyo a lo que algunos denominan “populismo autoritario”⁴, del cual en Costa Rica, aparentemente, también hay manifestaciones (Cascante y Muñoz, 2023 y Pignataro y Treminio, 2019). Se ha identificado, efectivamente, el nivel educativo como un fuerte predictor de este fenómeno (Coffé y Michels, 2014; Sances, 2019 y Spruyt *et al.*, 2016). La *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023 no contiene datos pormenorizados para estudiar en detalle las distintas facetas a través de las cuales educación y satisfacción con la democracia están conectadas. Sin embargo, sí nos ofrece la oportunidad de estudiar si existe una asociación significativa entre ambas variables. La última hipótesis que se plantea es: Hipótesis 4. Cuanto más alto el grado de escolaridad alcanzado, mayor es la satisfacción con la democracia.

2. Datos

En referencia a educación, la EFMC-2023 les preguntó a las personas entrevistadas “¿Cuál es el último nivel de estudios que usted aprobó?”. Estas podían responder escogiendo una de doce opciones, según su condición: 1) sin estudios, 2) primaria incompleta, 3) primaria completa, 4) secundaria (académica) incompleta, 5) secundaria (técnica) incompleta, 6) secundaria (académica) completa, 7) parauniversitaria, 8) universitaria incompleta,

³ Las personas que se acercan a la dimensión autoritaria/tradicional: en su visión favorecen la jerarquía social, el ordenamiento de los individuos en un sistema entre los que son superiores y los que son inferiores. Para los autoritarios las jerarquías son al mismo tiempo naturales y correctas. Los libertarios, por su parte, detestan las jerarquías sociales y valoran en cambio la interacción libre y equitativa de la gente, sin consideración de posición social de algún tipo. (Stubager, 2008, pp. 228-229)

⁴ Norris e Inglehart (2019) definen “populismo”, en primer lugar, como una retórica que desafía la autoridad moral y política de lo institucionalmente aceptado (el establishment). En segundo lugar, se trata de una retórica utilizada por líderes que reclaman que la legitimidad de esa autoridad moral y política descansa en “el pueblo”, pero que sería abusado por élites políticas e intelectuales (pp. 4-5). El adjetivo autoritario tiene que ver con valores y creencias que comúnmente se manifiestan en algunos casos de populismo; entre otros, la obediencia hacia la autoridad y la creencia de que se requiere un líder fuerte, que concentre autoridad política, para dirigir un país (Norris e Inglehart, 2019, p. 7).

9) universitaria completa, 10) postgrado y 11) no sabe o no responde (NS/NR). La distribución de esta pregunta se describe en la tabla 1. Solamente se cuenta con una persona que respondió NS/NR, por lo que esa observación se eliminó. Por otra parte, para la mayoría de los análisis se recurrió a un tratamiento categórico de esta variable, pero algunas de las categorías no tienen suficientes observaciones. Debido a esto, se procedió a recodificar esta variable en menos categorías, como se aprecia en las tres columnas de la derecha.

Tabla 1

Distribución de las personas encuestadas, por nivel educativo

Variable original	Casos	%	Variable recodificada	Casos	%
Sin estudios	9	0,9	Sin estudios y primaria incompleta	75	7,5
Primaria incompleta	66	6,6			
Primaria completa	160	16,0	Primaria completa	160	16,0
Secundaria (académica) incompleta	172	17,0			
Secundaria (técnica) incompleta	44	4,4	Secundaria incompleta	216	21,6
Secundaria (académica) completa	174	17,4			
Secundaria (técnica) completa	57	5,7	Secundaria completa	231	23,1
Parauniversitaria	15	1,5			
Universitaria incompleta	86	8,6	Parauniversitaria y universitaria incompleta	101	10,1
Universitaria completa	191	19,1			
Posgrado	26	2,6	Universitaria completa y postgrado	217	21,7
No sabe/no responde	1	0,0			
Total	1001	100,0		1000	100,0

Nota. Elaboración con base en la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

En lo que respecta a formas de participación política diferentes al voto, para evaluar la hipótesis 1 se recurre a la pregunta PA3a de la EFMC-2023. En esta primero se le explica a la persona entrevistada que hay distintas formas de participar en política. Luego se le pide opinión sobre cuál forma cree que sirve más para resolver un problema de entre las opciones siguientes: 1) reunirse con un candidato a puesto electoral, 2) ayudar en la campaña de un candidato a puesto electoral, 3) firmar una carta a políticos planteando el problema, 4) bloquear carreteras en protesta, 5) llamar a los medios de comunicación para quejarse, 6) presentar un recurso ante la Sala IV (Sala Constitucional), 7) denunciar ante la Defensoría de los Habitantes, 8) reunirse con una autoridad del gobierno, 9) participar en manifestaciones y 10) expresar su opinión en redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter. Las personas entrevistadas tuvieron que valorar cada una de esas opciones en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “sirve para nada” y 5 “sirve mucho”.

La segunda parte de esta pregunta (PA3b) también es de interés para el análisis. Para cada una de esas categorías, se les consultó a las personas encuestadas si alguna vez habían participado en política a través de esas actividades. En caso de que no hubiesen participado, se les preguntó si lo harían. Esta pregunta es importante porque nos puede revelar si las personas tienen conocimiento de lo que hacen las instituciones políticas y cómo pueden participar a través de estas. Para contrastar la hipótesis 2 contra los datos, educación e interés en política, se recurrió a la pregunta PA2: “Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es mucho y 1 es nada, ¿cuánto diría usted que le interesa la política?”. Para la hipótesis 3 se utilizan datos de la pregunta PA4: “Cuando hay elecciones para presidente, ¿usted vota siempre, a veces o nunca? Y, cuando son las elecciones municipales, ¿usted vota siempre, a veces o nunca?”.

Por último, para analizar la hipótesis 4, sobre educación y satisfacción con la democracia, se recurrió, en primer lugar, a la pregunta DEM4: “En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que funciona la democracia costarricense?”. Las opciones a esta pregunta varían en una escala de 1 a 4, donde 1 es “muy satisfecho(a)” y 4 “muy insatisfecho(a)”. En segundo lugar, se utilizaron las respuestas a la pregunta PA10: “Son varias las razones que pueden llevar a una persona a la decisión de no votar, en su caso ¿cuál es la razón más importante?”. La persona tendría que responder una entre varias opciones, como se describe en la tabla 2. Más adelante, se hará referencia a las cifras por categoría de respuesta.

Tabla 2*Razones por las que las personas manifiestan no votar*

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada
Algunas elecciones son poco importantes	15	1,5	1,5
La política no me interesa	59	5,9	7,4
Me da igual quién gane	38	3,8	11,2
Mi voto no sirve para nada	24	2,4	13,6
No me siento representado por ningún partido	137	13,7	27,3
Estoy decepcionado de la democracia	128	12,8	40,1
Lo hago como protesta o para demostrar	18	1,8	41,9
Los partidos se preocupan solamente por	64	6,4	48,3
Desconfío de los políticos	190	19,0	67,2
No me gustó ningún partido o candidatura	75	7,5	74,7
Tenía la cédula vencida	15	1,5	76,2
No tenía cómo llegar al centro de votación	43	4,3	80,5
Tenía que trabajar	41	4,1	84,6
Otra: especifique	78	7,8	92,4
No sabe/no responde	76	7,6	100,0

Nota. Elaboración con base en *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano, 2023*.

En la sección 3 se presentan resultados de varios análisis de regresión logística, ordinal y nominal. En todos los casos, se incluye la actividad económica como variable de control. Esta varía de acuerdo con las categorías de si no se tiene trabajo remunerado; si se trabaja en el sector público, en el privado, o por cuenta propia. Se trata de un factor que se relaciona tanto con estatus social como con ingresos, lo que podría afectar las actitudes sobre participar. También se controla por la provincia, ya que el tipo de participación podría estar marcada por el territorio donde se vive. Finalmente, se incluye la variable de edad en años cumplidos y el cuadrado de esa misma variable, pues se cree que la participación alcanza su cenit a cierta edad adulta para luego decrecer avanzada la tercera edad (Nie *et al.*, 1974).

3. Resultados

En la tabla 3 se presentan resultados de un análisis de regresión logística ordinal a la pregunta ¿cuál forma cree que sirve más para resolver un problema? (véase descripción de la pregunta en la sección 2). La categoría base de nuestra variable de interés, escolaridad, es “sin educación formal y primaria incompleta”. Se esperaría que la magnitud del efecto de las otras categorías en comparación con esta categoría sea mayor; es decir, un efecto que aumenta más o menos linealmente con niveles más altos de educación. Sin embargo, los resultados no son particularmente reveladores.

Se pueden observar resultados estadísticamente significativos, únicamente, en las columnas 1 y 2. Una interpretación sería que, en comparación con la categoría “sin educación formal y primaria incompleta”, en todos los demás niveles educativos es menos probable que las personas consideren que reunirse con una persona candidata o ayudar en una campaña electoral ayude mucho a resolver un problema. Empero, no se observa evidencia de que la probabilidad disminuya con más escolaridad. Vale la pena notar que el signo positivo en las categorías educación terciaria (parauniversitaria y universitaria incompleta y universitaria completa y posgrado), en el modelo 6 se relaciona con una razón de probabilidad mayor de considerar que presentar un recurso ante la Sala IV ayuda mucho a resolver problemas. Algo similar se observa en las columnas 8, 9 y 10, que presentan resultados para las variables reunirse con alguien de gobierno, participar en manifestaciones y expresar opiniones en redes sociales. No obstante, en ningún caso los resultados son estadísticamente significativos.

Las estimaciones de la tabla 4 parecen aportar más información. En esta se presentan resultados de varias regresiones logísticas de la probabilidad de que las personas participen de alguna actividad política para resolver un problema. Se tiene que, como se observó en el análisis anterior, si bien las personas con escolaridad más baja, en comparación con otros niveles, consideran que reunirse con una persona candidata o participar en una campaña electoral ayuda mucho a resolver problemas, eso no significa que estas personas vayan a participar (columnas 1 y 2 de la tabla 4). El modelo 6 revela que, cuando otros factores permanecen constantes, quienes cuentan con educación terciaria tienen una alta probabilidad de presentar un recurso de amparo ante la Sala IV. En el caso de personas con educación universitaria completa y posgrado completo, estas tienen una razón de probabilidad de hacerlo tres veces mayor que una sin educación formal o primaria incompleta ($p < 0.01$)⁵.

⁵ En la regresión logística los coeficientes son estimaciones de una relación lineal cuando están expresados en logaritmos naturales. Sin embargo, se interpretan como razones de probabilidad al aplicar una función exponencial. En este caso específico, el coeficiente de la categoría universitaria completa y posgrado en logaritmos naturales es 1.082. Al transformarlo a su forma exponencial se obtiene una razón de probabilidad de 2.9. Es decir, tres veces más que la categoría base.

Tabla 3

Relación de nivel de escolaridad con qué tanto creen las personas que sirven distintas actividades de participación política para resolver un problema

Nivel de escolaridad	Tipo de actividades de participación política para resolver un problema									
	(1) Reunirse con candidato (a)	(2) Ayudar en la campaña de un candidato (a)	(3) Firmar una carta a políticos	(4) Bloquear carreteras	(5) Llamar a medios de comunicación	(6) Presentar un recurso ante la Sala IV	(7) Denunciar ante DH	(8) Reunirse con una autoridad del gobierno	(9) Participar en manifestaciones	(10) Expresar su opinión en redes sociales
Escolaridad (base: sin educación formal y primaria incompleta)										
Primaria completa	-0.650* (0.296)	-0.593* (0.301)	-0.363 (0.282)	0.128 (0.325)	-0.431 (0.310)	-0.215 (0.311)	-0.266 (0.331)	-0.180 (0.345)	-0.358 (0.321)	-0.0463 (0.301)
Secundaria incompleta	-0.749** (0.281)	-0.536 (0.292)	-0.271 (0.282)	0.513 (0.307)	-0.246 (0.289)	0.0327 (0.289)	-0.271 (0.323)	-0.263 (0.333)	-0.236 (0.306)	0.168 (0.289)
Secundaria completa	-0.790** (0.288)	-0.621* (0.301)	-0.113 (0.290)	0.406 (0.312)	-0.285 (0.296)	-0.0421 (0.298)	-0.308 (0.324)	-0.0852 (0.338)	-0.0791 (0.316)	0.231 (0.296)
Parauniversitaria y universitaria incompleta	-0.555 (0.303)	-0.501 (0.319)	-0.0528 (0.308)	0.475 (0.334)	-0.239 (0.302)	0.328 (0.331)	-0.293 (0.342)	0.159 (0.357)	0.184 (0.350)	0.354 (0.322)
Universitaria completa y postgrado	-0.722* (0.281)	-0.360 (0.295)	-0.0758 (0.286)	0.470 (0.313)	-0.209 (0.282)	0.359 (0.296)	-0.255 (0.315)	0.168 (0.325)	0.180 (0.312)	0.170 (0.287)

▼ Continuación

Tipo de actividades de participación política para resolver un problema										
Nivel de escolaridad	(1) Reunirse con candidato (a)	(2) Ayudar en la campaña de un candidato (a)	(3) Firmar una carta a políticos	(4) Bloquear carreteras	(5) Llamar a medios de comunicación	(6) Presentar un recurso ante la Sala IV	(7) Denunciar ante DH	(8) Reunirse con una autoridad del gobierno	(9) Participar en manifestaciones	(10) Expresar su opinión en redes sociales
Actividad económica (base: sin trabajo remunerado)										
Cuenta propia	-0.00219 (0.202)	0.138 (0.191)	-0.147 (0.191)	-0.114 (0.195)	-0.279 (0.180)	-0.0157 (0.192)	-0.258 (0.202)	0.134 (0.188)	-0.146 (0.182)	0.142 (0.192)
Asalariado privado	-0.0822 (0.153)	0.0326 (0.156)	-0.268 (0.155)	-0.277 (0.149)	-0.444** (0.153)	-0.270 (0.169)	-0.0770 (0.160)	-0.0565 (0.158)	-0.123 (0.154)	0.0468 (0.162)
Asalariado público	-0.242 (0.222)	-0.0211 (0.223)	0.172 (0.235)	-0.0779 (0.252)	-0.325 (0.241)	-0.0741 (0.235)	0.137 (0.216)	-0.0281 (0.226)	0.650* (0.266)	-0.131 (0.257)
Otra	-0.228 (0.271)	-0.117 (0.299)	-0.0390 (0.265)	-0.212 (0.292)	-0.371 (0.334)	0.000144 (0.342)	-0.0658 (0.321)	0.114 (0.323)	-0.151 (0.310)	-0.104 (0.293)
Provincia (base: San José)										
Alejuela	0.248 (0.174)	0.385* (0.177)	0.216 (0.165)	0.152 (0.175)	-0.00751 (0.172)	0.282 (0.175)	0.324 (0.170)	0.399* (0.164)	0.221 (0.175)	-0.292 (0.171)
Cartago	-0.242 (0.199)	-0.0401 (0.191)	0.157 (0.209)	0.128 (0.193)	-0.261 (0.203)	0.267 (0.231)	0.212 (0.214)	0.230 (0.201)	0.162 (0.197)	0.127 (0.207)
Heredia	-0.309 (0.230)	-0.0560 (0.231)	-0.353 (0.229)	0.0605 (0.255)	0.0362 (0.220)	0.106 (0.216)	0.344 (0.223)	-0.426 (0.230)	0.122 (0.267)	-0.347 (0.228)

▼ Continuación

Nivel de escolaridad	Tipo de actividades de participación política para resolver un problema									
	(1) Reunirse con candidato (a)	(2) Ayudar en la campaña de un candidato (a)	(3) Firmar una carta a políticos	(4) Bloquear carreteras	(5) Llamar a medios de comunicación	(6) Presentar un recurso ante la Sala IV	(7) Denunciar ante DH	(8) Reunirse con una autoridad del gobierno	(9) Participar en manifestaciones	(10) Expresar su opinión en redes sociales
Guanacaste	0.135 (0.215)	0.0899 (0.241)	0.372 (0.246)	0.0463 (0.244)	-0.174 (0.243)	-0.369 (0.255)	0.346 (0.263)	0.448 (0.258)	0.168 (0.230)	0.155 (0.243)
Puntarenas	-0.0245 (0.250)	0.163 (0.261)	-0.0482 (0.246)	-0.0335 (0.261)	-0.250 (0.266)	-0.0388 (0.268)	-0.112 (0.275)	0.271 (0.242)	-0.0752 (0.246)	0.0891 (0.279)
Limón	0.147 (0.254)	0.0743 (0.245)	0.307 (0.250)	0.190 (0.231)	-0.246 (0.238)	-0.404 (0.238)	0.0622 (0.247)	-0.0455 (0.262)	0.0535 (0.234)	-0.504* (0.246)
Edad en años cumplidos	-0.0314 (0.0238)	-0.0319 (0.0226)	0.0132 (0.0234)	-0.0429 (0.0240)	0.0286 (0.0259)	0.083*** (0.0243)	-0.0259 (0.0290)	0.00749 (0.0273)	-0.0272 (0.0234)	-0.0320 (0.0253)
Edad en años cumplidos ²	0.000196 (0.00026)	0.000298 (0.00024)	-0.000250 (0.00025)	0.000242 (0.00026)	-0.000248 (0.00029)	-0.000*** (0.00026)	0.000122 (0.00032)	-0.000151 (0.00030)	0.000102 (0.00025)	0.000306 (0.00027)
Constante	-2.531*** (0.582)	-1.813** (0.570)	-1.315* (0.566)	-1.257* (0.566)	-1.097 (0.589)	-0.470 (0.574)	-2.834*** (0.659)	-1.403* (0.647)	-1.630** (0.564)	-0.921 (0.589)
Observaciones	979	959	976	982	985	939	966	963	974	963

Nota. Los resultados corresponden a modelos de regresión logística ordinal, donde cada variable dependiente tiene un rango de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho. Niveles de significancia estadística * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

Tabla 4

Relación de nivel de escolaridad y probabilidad de que las personas participen de alguna actividad política para resolver un problema, según tipo de actividad

Nivel de escolaridad	Tipo de actividades de participación política para resolver un problema									
	(1) Reunirse con candidato (a)	(2) Ayudar en la campaña de un candidato (a)	(3) Firmar una carta a políticos	(4) Bloquear carreteras	(5) Llamar a medios de comunicación	(6) Presentar un recurso ante la Sala IV	(7) Denunciar ante DH	(8) Reunirse con una autoridad del gobierno	(9) Participar en manifestaciones	(10) Expresar su opinión en redes sociales
Escolaridad (base: sin educación formal y primaria incompleta)										
Primaria completa	-0.135 (0.302)	-0.433 (0.333)	-0.458 (0.305)	-0.228 (0.358)	0.0144 (0.290)	0.237 (0.287)	0.283 (0.294)	0.385 (0.293)	-0.197 (0.330)	0.656 (0.456)
Secundaria incompleta	-0.157 (0.296)	-0.575 (0.320)	-0.413 (0.303)	-0.0357 (0.343)	0.0185 (0.288)	0.547 (0.287)	0.157 (0.291)	0.244 (0.293)	-0.244 (0.323)	0.842 (0.449)
Secundaria completa	0.136 (0.297)	-0.335 (0.327)	-0.401 (0.306)	-0.236 (0.349)	0.128 (0.293)	0.406 (0.293)	0.452 (0.300)	0.415 (0.298)	-0.263 (0.329)	0.573 (0.452)
Parauniversitaria y universitaria incompleta	0.0302 (0.326)	-0.430 (0.358)	-0.286 (0.343)	-0.725 (0.411)	0.0681 (0.328)	0.835* (0.342)	0.305 (0.337)	0.761* (0.333)	-0.417 (0.371)	-0.230 (0.549)

► Continuación

Tipo de actividades de participación política para resolver un problema

Nivel de escolaridad	(1) Reunirse con candidato (a)	(2) Ayudar en la campaña de un candidato (a)	(3) Firmar una carta a políticos	(4) Bloquear carreteras	(5) Llamar a medios de comunicación	(6) Presentar un recurso ante la Sala IV	(7) Denunciar ante DH	(8) Reunirse con una autoridad del gobierno	(9) Participar en manifestaciones	(10) Expresar su opinión en redes sociales
Constante	-0.129 (0.637)	-0.967 (0.744)	1.388* (0.628)	0.519 (0.725)	0.318 (0.612)	-1.043 (0.618)	0.295 (0.631)	-1.215 (0.625)	-0.121 (0.706)	-0.312 (0.810)
Observaciones	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Nota. Los resultados corresponden a modelos de regresión logística, donde cada variable adopta valores de 1 y 0, siendo 1 la presencia de la condición y 0 su ausencia. No se reportan resultados de variables de control.

Niveles de significancia estadística * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

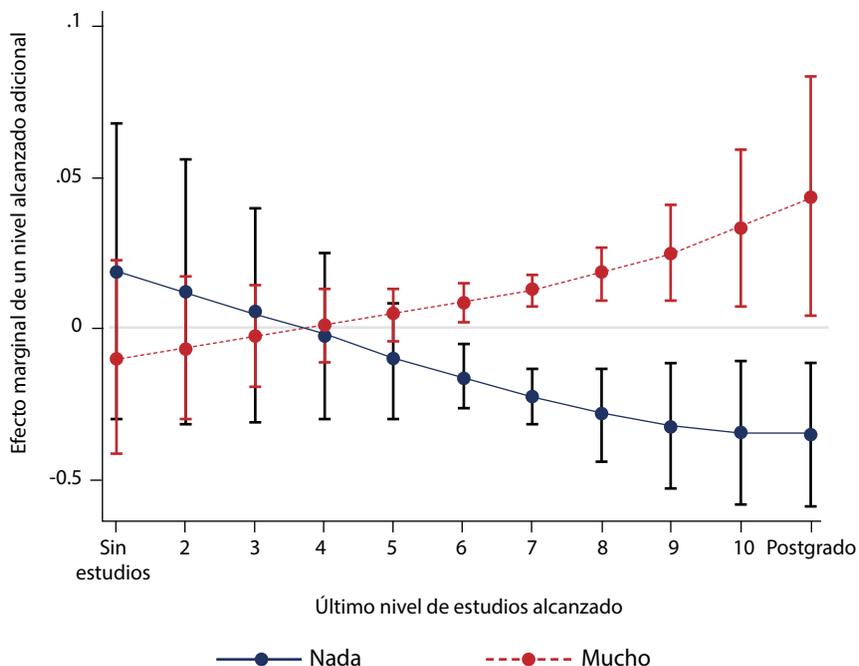
En el modelo 7 se ve algo similar cuando se trata de interponer una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes. Empero, la probabilidad es menor: las personas con educación universitaria completa y posgrado completo tienen una razón de probabilidad dos veces mayor a las personas sin estudios o primaria incompleta de presentar una denuncia ante este órgano de control social ($p < .05$). Esto parece ser evidencia de la hipótesis 1. Sin embargo, no se puede tener seguridad sobre el mecanismo. Tal vez quienes cuentan con más escolaridad tienen un mejor conocimiento del funcionamiento de instituciones de control constitucional y social. Pero, entre otros factores, podría también ser probable que las personas con escolaridad más alta consuman más noticias y, por lo tanto, estén más informadas de la efectividad de estos organismos de control. Por otra parte, no se encuentra evidencia de que la escolaridad se asocie con mayor probabilidad de involucramiento en otras potenciales formas de participación para resolver problemas.

Para analizar la relación entre escolaridad e interés en la política, se recurre nuevamente a un análisis de regresión logística ordinal, donde la variable dependiente es la pregunta “¿cuánto diría usted que le interesa la política?”. En este caso parece existir algún grado de linealidad: el interés en la política aumenta gradualmente hasta llegar a la educación universitaria completa. Sin embargo, alcanzar el nivel de posgrado no lo aumenta con respecto a esa última etapa. Visualmente, en la figura 1 se presentan resultados de un análisis del efecto marginal que tienen los aumentos en el nivel educativo alcanzado sobre el grado de interés en la política. Para una estimación más natural y facilitar la interpretación, se utilizó la variable escolaridad en su escala ordinal original (véase tabla 1) y se trató como si fuera una variable continua.

Dada la superposición entre niveles de confianza, se puede apreciar que, prácticamente, no hay efecto alguno entre “le interesa nada” y “le interesa mucho” cuando los niveles educativos alcanzados son bajos. En cambio, cuando el nivel educativo alcanzado es suficientemente alto, más o menos en secundaria académica completa y secundaria técnica completa (niveles 6 y 7 del eje horizontal), hay diferencias marcadas entre “le interesa nada” y “le interesa mucho”. El efecto parece aumentar un poco en los siguientes niveles educativos, aunque no hay mayor diferencia entre el grupo que tiene solo educación universitaria completa y el que ha completado algún posgrado. Entonces, la evidencia parece apoyar la hipótesis 2: la probabilidad de tener mucho interés en la política aumenta cuando se tiene una escolaridad suficientemente alta, mientras que la probabilidad de no tener interés decrece, más o menos, al mismo ritmo.

Figura 1

Efecto marginal del aumento en el nivel de escolaridad alcanzado sobre el interés en la política

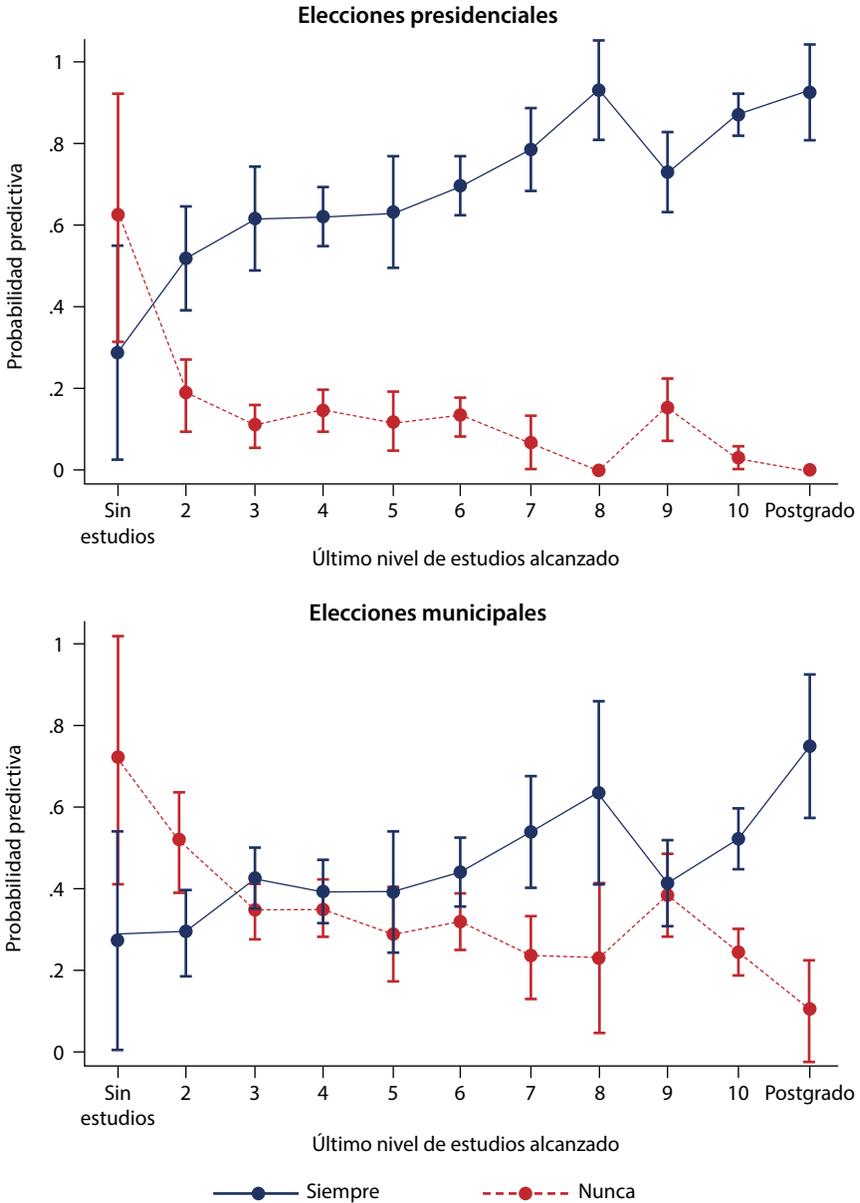


Nota. Los resultados corresponden a los efectos marginales estimados a partir de una regresión logística ordinal. Solamente se reportan resultados para las categorías “nada” y “mucho”; se estimaron efectos de las otras categorías pero no se incluyeron en el gráfico. Intervalos de confianza de 95% denotados con barras verticales.

En lo que respecta al grado de escolaridad y participación en elecciones (hipótesis 3), también se realizaron dos análisis de regresión logística ordinal, uno para estudiar la relación en elecciones presidenciales y otro para las municipales. Se reportan los resultados de probabilidades predictivas de forma gráfica. Como se aprecia en la figura 2, si bien hay diferencias claras, especialmente en elecciones presidenciales, respecto a las personas que no tienen estudios, la variación es relativamente estable hasta que se alcanza la educación universitaria completa. Si bien la educación parauniversitaria (nivel 8 en el eje horizontal) parece asociarse con una alta probabilidad de votar en elecciones presidenciales, con solo 15 personas entrevistadas bajo esa categoría podría tratarse de un sesgo de medición.

Figura 2

Probabilidad predictiva de votar en elecciones presidenciales y elecciones municipales



Nota. Los resultados corresponden a las probabilidades predictivas estimadas a partir de una regresión logística ordinal. Solamente se reportan resultados para las categorías “siempre” y “nunca”; se estimaron efectos de la categoría intermedia “a veces” pero no se incluyó en el gráfico. Intervalos de confianza de 95% denotados con barras verticales.

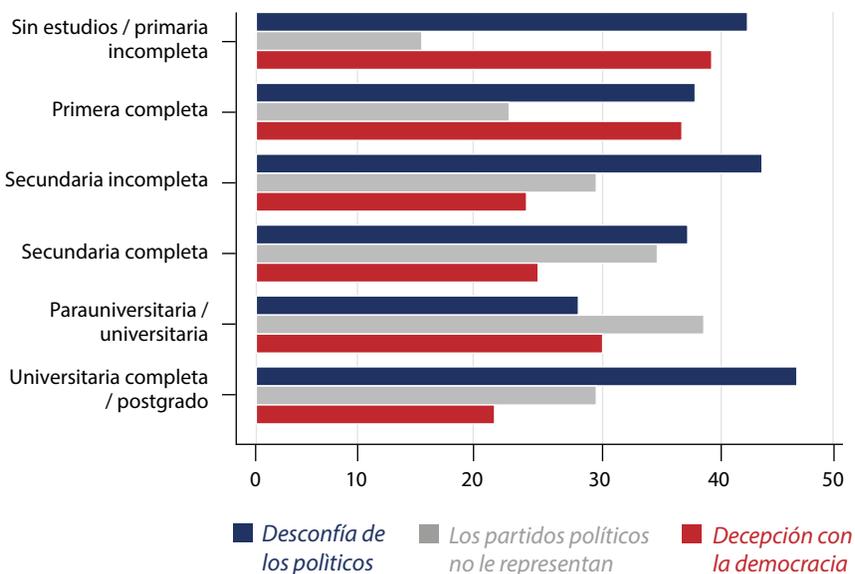
En todo caso, hay claras diferencias entre las categorías “siempre vota” y “nunca vota” en elecciones presidenciales. No se puede decir lo mismo en el caso de las elecciones municipales. A pesar de que, en comparación con las presidenciales, la probabilidad de votar en estas elecciones es menor para todos los niveles educativos, es en las categorías de universitaria completa y posgrado que se aprecia una clara diferenciación entre “siempre vota” y “nunca vota”. En otras palabras, la probabilidad de votar en elecciones municipales es más alta cuando el nivel de escolaridad es universitaria completa y, especialmente, posgrado.

Con respecto al vínculo entre escolaridad y satisfacción con la democracia (hipótesis 4), los resultados no son significativos para el análisis de regresión logística ordinal, donde la variable dependiente es el grado de satisfacción con la democracia. En otras palabras, no se encontró un efecto estadísticamente significativo entre nivel de escolaridad y las respuestas a la pregunta “en general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que funciona la democracia costarricense?” (los resultados no se reportan). Pero es interesante notar que sí parece observarse una relación con las respuestas a la pregunta “son varias las razones que pueden llevar a una persona a la decisión de no votar, en su caso ¿cuál es la razón más importante?”. Como se aprecia en la tabla 2 (sección 2), las respuestas más frecuentes son tres “No me siento representado por ningún partido” (137 respuestas), “Estoy decepcionado de la democracia” (128) y “Desconfío de los políticos” (190).

En la figura 3 se observa que la “decepción con la democracia” y “desconfía de los políticos” son las razones más importantes señaladas por las personas que no cuentan con estudios formales o tienen primaria incompleta. La proporción de respuestas de esta razón parece descender de forma escalonada conforme aumentan los niveles educativos. Pero no sucede lo mismo con la desconfianza hacia los políticos. En cambio, sí parecen correlacionarse la proporción de la razón de “los partidos políticos no le representan” con niveles educativos más altos, por lo menos hasta que se llega a los de educación parauniversitaria y universitaria incompleta. Para explorar si esta relación se sostiene frente a potenciales explicaciones alternativas, se recurrió a un análisis multivariable de regresión logística multinomial, que estima probabilidades simultáneamente para cada una de las opciones (principales razones) escogidas por las personas, contra una categoría base. Se escogió como categoría base “los partidos políticos no le representan”, ya que cuenta con suficientes observaciones y, además, es relevante, según lo expuesto. Los resultados se presentan en la tabla 5, para ahorrar espacio se omiten los resultados de las variables de control.

Figura 3

Porcentaje de respuestas a tres razones más importantes por las que las personas no votan



En la columna 1 de la tabla 5 se observa que, cuando se mantiene la influencia de otros factores constante, cuanto más alto el nivel educativo, menos probable es que la persona manifieste que la razón por la que no vota es que se siente decepcionada de la democracia, en oposición a no sentirse representada por los partidos políticos. La desconfianza en los políticos no parece asociarse a nivel educativo (columna 2).

Tabla 5

Relación de escolaridad con las razones que llevan a una persona a tomar la decisión de no votar

Nivel de escolaridad	(1) Decepción con la democracia	(2) Desconfianza de los políticos
Escolaridad (base: sin educación formal y primaria incompleta)		
Primaria completa	-0.611 (0.599)	-0.692 (0.591)
Secundaria incompleta	-1.420* (0.604)	-0.587 (0.569)

▼ Continuación

Nivel de escolaridad	(1) Decepción con la democracia	(2) Desconfía de los políticos
Secundaria completa	-1.587** (0.608)	-1.030 (0.584)
Parauniversitaria/universitaria incompleta	-1.480* (0.660)	-1.364* (0.650)
Universitaria completa/postgrado	-1.754** (0.630)	-0.755 (0.584)
Constante	-0.614 (1.305)	-1.482 (2.135)
Observaciones	1000	1000

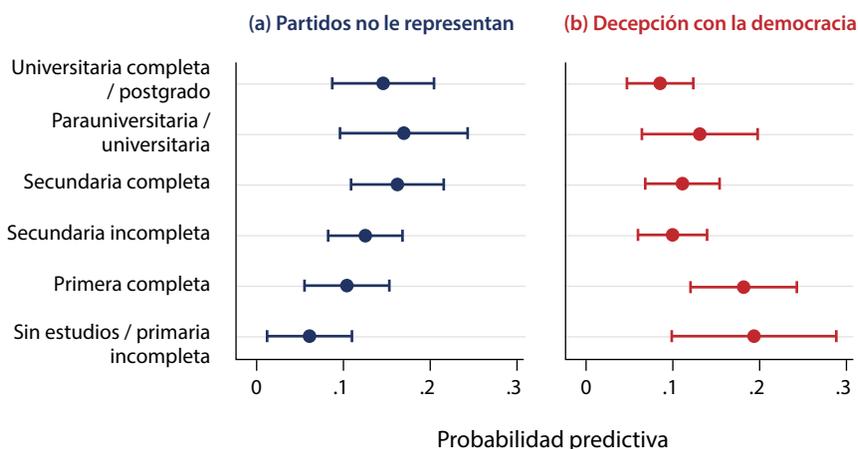
Nota. Los resultados corresponden a modelos de regresión logística multinomial, solo se reportan resultados de dos de las 15 categorías de la variable dependiente incluidas en el modelo. La categoría base es "Los partidos políticos no le representan". Se omiten los resultados de las variables de control.

Niveles de significancia estadística * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

Estos resultados se pueden apreciar mejor gráficamente. En el panel (a) de la figura 4, se observa que la probabilidad de que las personas respondan que la principal razón por la que no votan es que los partidos no les representan tiende a ser inferior cuanto más bajo el nivel de escolaridad. A pesar de eso, no hay diferencias significativas entre personas de niveles de secundaria completa, parauniversitaria/universitaria incompleta y universitaria completa/postgrado. Sí parece existir diferencias significativas entre esos niveles en lo que respecta a decepción con la democracia; especialmente, al comparar el nivel más alto de escolaridad (universitaria completa/postgrado) con los más bajos (primaria completa y sin estudios/primaria incompleta) (véase el panel b).

Figura 4

Probabilidad predictiva del efecto de los niveles de escolaridad sobre dos razones principales por las que las personas no votan: decepción con la democracia y representación de los partidos



Nota. Los resultados corresponden a modelos de regresión logística multinomial, solo se reportan resultados de dos de las 15 categorías de la variable dependiente incluidas en el modelo. Se omiten los resultados de las variables de control. Intervalos de confianza de 95%.

A la luz de la teoría, si bien los contrastes no son muy marcados, las personas con mayor nivel de escolaridad completada parecen valorar más la influencia de la democracia representativa. Es decir, parecen estar atraídas a la información sobre los partidos políticos y, algunas de ellas, al considerar que las opciones de partidos existentes no les representan decidirían abstenerse de votar. En cambio, para quienes tienen niveles inferiores de escolaridad completada ese no sería el principal motivo para no votar. Uno de los motivos más fuertes de abstención para estas personas sería sentirse decepcionadas con la democracia. Específicamente, qué significa el concepto de “decepción con la democracia” y qué factores lo generan es difícil saberlo. Una hipótesis, como se ha sugerido teóricamente, es que las personas con menor escolaridad sienten que la democracia representativa no funciona para ellas y por eso simpatizarían más con opciones de populismo autoritario (por ejemplo, Spruyt *et al.*, 2016). Otra hipótesis tendría que ver con que estas personas preferirían más democracia directa, sin intermediación de partidos (Coffé y Michels, 2014). De tratarse de estos fenómenos, sería preocupante por los riesgos que traen para la democracia (por ejemplo, Gidron *et al.*, 2020). En cualquier caso, el estudio de estas y probablemente otras hipótesis requiere de más investigación.

4. Conclusiones

Los resultados de los análisis estadísticos sugieren que existe una relación entre niveles educativos más altos y participación política en algunos ámbitos. Empero, no se encuentra una relación estadísticamente significativa entre nivel de escolaridad completada y la creencia de que ciertas actividades sirven para solucionar problemas. Tampoco se encontró una relación entre esa variable de educación y grado de satisfacción con la democracia. No obstante, estos resultados nulos podrían deberse a los datos que obtiene la *Encuesta sobre fuentes del malestar ciudadano* de 2023. Por ejemplo, no se indaga sobre participación de las personas en grupos que participan en la política, como partidos políticos, grupos de interés y movimientos sociales.

A pesar de lo anterior sí hay evidencia de una relación entre educación y participación política medida de otras maneras. Cuanto más alto el nivel educativo alcanzado, es más probable que las personas se sientan inclinadas a interponer un recurso de amparo o una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes. Esto podría ser indicador de que las personas tienen mejor conocimiento del funcionamiento de estas instituciones de control y de los mecanismos a través de los cuales pueden hacer valer sus derechos, frente a potenciales arbitrariedades. Es probable que ese conocimiento lo adquieran, en parte, directamente a través de lo que aprenden durante sus años en el sistema educativo formal. Pero también, podría ser que el sistema educativo les socializa y les da herramientas para buscar y evaluar información, por ejemplo, en medios de comunicación. Esto también explicaría por qué quienes tienen niveles educativos más altos manifiestan mayor interés en la política, que fue otro de los hallazgos de este estudio.

Las personas con niveles de escolaridad más altos parecen tener una mayor probabilidad de votar tanto en elecciones presidenciales como municipales. Este resultado se complementa con que este grupo poblacional, en los casos que se abstiene de votar, lo haría principalmente porque no se siente representado por los partidos políticos. En cambio, las personas con niveles de escolaridad completados inferiores, no votarían porque se sienten decepcionadas con la democracia. Una teoría sugiere que quienes poseen niveles más altos de escolaridad privilegian la democracia representativa, mientras que las personas con menor escolaridad manifiestan más insatisfacción con la democracia (Coffé y Michels, 2014). Tal vez estos resultados son manifestación de este fenómeno, pero más investigación se requiere para concluirlo. Si ese es el caso, sería preocupante porque en la literatura comparada se observa que en otros países ha habido cierta asociación entre el apoyo de personas con bajos niveles de escolaridad, con el voto hacia políticos y partidos con tendencias autoritarias; en otras palabras, opciones antidemocráticas. Es un aspecto que en este trabajo se recomienda investigar más a fondo.

En términos generales, la educación es importante tanto para la calidad de la democracia como para el desarrollo humano. Estos tres elementos están intrínsecamente conectados. Una forma de concebir el desarrollo es como expansión de las libertades que las personas deciden disfrutar (Sen, 2000, p. 3). En los gobiernos autoritarios las libertades se restringen, para dar campo a las decisiones arbitrarias, a menudo en beneficio de algunos sectores. Esto perjudica el desarrollo económico y la paz social (Sen, 2000, p. 31). Pero aun en democracia, no todas las personas tienen las mismas libertades; estas, de acuerdo con Amartya Sen, están en función de sus capacidades. La educación como también el acceso a salud son factores que aumentan las capacidades de las personas para decidir cómo quieren vivir mejor sus vidas y alcanzar oportunidades que, de lo contrario, no tendrían (Sen, 2000, p. 90).

La educación también contribuiría a mejorar la calidad de la democracia (Mauk, 2021). Una democracia de calidad aspira tanto a la igualdad política, la deliberación y a la participación (Diamond y Morlino, 2004 y Munck, 2016) como también al reconocimiento legítimo de las diferencias (Mouffe, 1999). Por lo tanto, también contribuye a la paz social. Todo esto requiere de una ciudadanía con capacidad de razonar y ejercer su autonomía (para Amartya Sen, sus capacidades), con pleno conocimiento de sus derechos y las formas de cómo ejercerlos (Held, 2001, p. 338). En este sentido, en Costa Rica es importante alentar los esfuerzos tendientes a mejorar la igualdad en el sistema educativo. Con esto, más personas podrían alcanzar niveles de escolaridad suficientes para aumentar sus capacidades y, de ese modo, tener más oportunidades en la vida y también participar en los procesos políticos. Hacerlo significa invertir en la economía de un país, como también en la calidad de la democracia y la paz social.

5. Referencias

- Brooks, C. (2006). Voters, satisficing, and policymaking: recent directions in the study of electoral politics. *Annual Review of Sociology*, 32(1), 191-211. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123142>
- Burden, B. C. (2009). The dynamic effects of education on voter turnout. *Electoral Studies*, 28(4), 540-549. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2009.05.027>
- Cascante Matamoros, M. J. y Muñoz Portillo, J. (2023). Costa Rica: el multipartidismo y su efecto en el crecimiento de discursos populistas. En M. E. Casullo y H. Brown (Eds.), *El populismo en América Central: la pieza que falta para comprender un fenómeno global* (pp. 67-94). Siglo XXI Editores.
- Coffé, H. y Michels, A. (2014). Education and support for representative, direct and stealth democracy. *Electoral Studies*, 35, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.03.006>
- Dahl, R. A. (1993). *Poliarquía: participación y oposición*. Tecnos.

- Della Porta, D. (2017). *Democracias: participación, deliberación y movimientos sociales*. Prometeo Libros.
- Diamond, L. y Morlino, L. (2004). The quality of democracy: an overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20-31.
- Emler, N. y Frazer, E. (1999). Politics: the education effect. *Oxford Review of Education*, 25(1-2), 251-273. <https://doi.org/10.1080/030549899104242>
- Fournier Facio, M.V. (2012). Participación más allá del voto. En C. Raventós, D. Fernández y R. Alfaro (Eds.), *Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad* (pp. 81-100). Universidad de Costa Rica y Tribunal Supremo de Elecciones.
- Gidron, N., Adams, J. y Horne, W. (2020). *American affective polarization in comparative perspective*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/9781108914123>
- Hakhverdian, A. y Mayne, Q. (2012). Institutional trust, education, and corruption: a micro-macro interactive approach. *The Journal of Politics*, 74(3), 739-750. <https://doi.org/10.1017/S0022381612000412>
- Held, D. (2001). *Modelos de democracia* (2.ª ed.) (Trad.T. Alberó). Alianza Editorial.
- Huang, J., Maassen van den Brink, H. y Groot, W. (2009). A meta-analysis of the effect of education on social capital. *Economics of Education Review*, 28(4), 454-464. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2008.03.004>
- Larreguy, H. y Liu, S. X. (2024). When does education increase political participation? Evidence from Senegal. *Political Science Research and Methods*, 12(2), 354-371. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.37>
- Mauk, M. (6 de mayo de 2021). Quality of democracy makes a difference, but not for everyone: how political interest, education, and conceptions of democracy condition the relationship between democratic quality and political trust. *Frontiers in Political Science*, 3, 1-14.
- Mayer, A. K. (2011). Does Education Increase Political Participation? *The Journal of Politics*, 73(3), 633-645. <https://doi.org/10.1017/S002238161100034X>
- Monsiváis Carrillo, A. y Cantú Ramos, G. (2022). Education, democratic governance, and satisfaction with democracy: multilevel evidence from Latin America. *International Political Science Review*, 43(5), 662-679. <https://doi.org/10.1177/0192512120952878>
- Mouffe, C. (1999). Deliberative democracy or agonistic pluralism? *Social Research*, 66(3), 745-758.
- Munck, G.L. (2016). What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy. *Democratization*, 23(1), 1-26. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.918104>

- Nie, N. H., Verba, S. y Kim, J. (1974). Political participation and the life cycle. *Comparative Politics*, 6(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/421518>
- Norris, P. e Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Persson, M. (2015). Education and political participation. *British Journal of Political Science*, 45(3), 689-703. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000409>
- Pignataro, A. y Treminio, I. (2019). Reto económico, valores y religión en las elecciones nacionales de Costa Rica 2018. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 39(2), 239-264.
- Programa Estado de la Nación. (2001). *Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia* (volumen II). Programa Estado de la Nación.
- Raventós Vorst, C. (2012). Planteamiento del problema y aspectos conceptuales. En C. Raventós Vorst, D. Fernández Montero y R. Alfaro Redondo (Eds.), *Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: Salida, voz y lealtad* (pp. 21-30). Universidad de Costa Rica y Tribunal Supremo de Elecciones.
- Sances, M. W. (2019). How unusual was 2016? Flipping counties, flipping voters, and the education-party correlation since 1952. *Perspectives on Politics*, 17(3), 666-678. <https://doi.org/10.1017/S1537592719000768>
- Sen, A. (2000). *Development as freedom*. Anchor Books.
- Smets, K. y van Ham, C. (2013). The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout. *Electoral Studies*, 32(2), 344-359. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.12.006>
- Sondheimer, R. M. y Green, D. P. (2010). Using experiments to estimate the effects of education on voter turnout. *American Journal of Political Science*, 54(1), 174-189.
- Spruyt, B., Keppens, G. y Van Droogenbroeck, F. (2016). Who supports populism and what attracts people to it? *Political Research Quarterly*, 69(2), 335-346. <https://doi.org/10.1177/1065912916639138>
- Stubager, R. (2008). Education effects on authoritarian-libertarian values: a question of socialization. *The British Journal of Sociology*, 59(2), 327-350. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2008.00196.x>
- Willeck, C. y Mendelberg, T. (2022). Education and political participation. *Annual Review of Political Science*, 25(1), 89-110. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-014235>

Sobre las autorías

Alejandro Abarca Garro. Costarricense. Doctor en Economía Aplicada de Oregon State University, máster en Economía de la University of British Columbia y licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR). Se ha desempeñado como economista en la Dirección de Asignaciones Familiares, consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo e investigador en la UCR y para FLACSO Costa Rica. Ha sido profesor de economía en la UCR, en Lead University y Western Oregon University. Áreas de estudio: economía del crimen, evaluación de políticas públicas y econometría aplicada.
Correo: abarcaa@oregonstate.edu.

Eugenia Aguirre Raftacco. Costarricense. Politóloga por la Universidad de Costa Rica y máster en Gerencia de Políticas y Programas Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica e Investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, de la misma casa de estudios. Presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (2020-2024). Integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.
Correo: eagui91@gmail.com.

Ronald Alfaro Redondo. Costarricense. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh y máster en Métodos Cuantitativos en las Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Coordinador de la Unidad de Opinión Pública y Cultura Política del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR); investigador del Programa Estado de la Nación; profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y profesor en Texas Tech University, campus Costa Rica. Autor y editor de libros relacionados con democracia y elecciones. Áreas de estudio: política comparada, elecciones y sistemas electorales, partidos políticos, participación política, opinión pública y cultura política. Correo: ralfaror@estadonacion.or.cr.

María Amalia Amador Fournier. Costarricense. Politóloga de la Universidad de Costa Rica. Investigadora y gestora de proyectos en FLACSO Costa Rica. Coautora, editora y colaboradora en publicaciones relacionadas con migración, elecciones y democracia. Áreas de estudio: democracia, derechos humanos y migraciones a nivel nacional y centroamericano. Correo: aamador@flacso.ac.cr.

Ana Catalina Benavides Fonseca. Costarricense. Socióloga de la Universidad de Costa Rica. Investigadora y gestora de proyectos en FLACSO Costa Rica. Ha publicado en autoría y coautoría textos sobre migraciones. Áreas de estudio: migraciones, políticas públicas y educación, entre otros. Correo: abenavides@flacso.ac.cr.

Carlos Brenes Peralta. Costarricense. Licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica (UCR), máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Libre de Amsterdam y doctor en Comunicación Política por la Universidad de Amsterdam. Docente en la Universidad de Amsterdam e investigador posdoctorante en opinión pública en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR y labora en FLACSO Costa Rica. Áreas de estudio: psicología de las tecnologías digitales, comunicación política, redes sociales y medios de comunicación, opinión pública y desinformación. Correo: brenesc@gmail.com.

Sharon Camacho Sánchez. Costarricense. Licenciada en Geografía por la Universidad de Costa Rica (UCR). Egresada de la Maestría Académica en Ciencias Políticas por la UCR, y docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía de la misma universidad. Investigadora del Proyecto Cultura Política y Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Áreas de estudio: geografía electoral, estudios territoriales, género y participación política. Correo: sharon.camacho@ucr.ac.cr.

Carolina Carazo Barrantes. Costarricense. Doctora en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. Profesora catedrática en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y directora e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene una maestría en Comunicación Política por Emerson College, Boston y una licenciatura en Comunicación con énfasis en Periodismo por la UCR. Ha publicado artículos sobre las relaciones entre periodismo, comunicación y política; recientemente con énfasis en redes sociales, procesos electorales y desinformación.
Correo: carolina.carazo@ucr.ac.cr.

Elías Chavarría Mora. Costarricense. Máster y candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh. Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha sido asistente de investigación en el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores y en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Área de estudio: cultura política democrática. ORCID: 0000-0001-6424-3915.
Correo: elc117@pitt.edu.

Mario Cortés Vásquez. Costarricense. Politólogo por la Universidad de Costa Rica. Investigador asociado del Programa Estado de la Nación, Informe Estado de la Región. Asistente de investigación del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Áreas de estudio: análisis de datos y estadística.
Correo: mariocortes009@gmail.com.

Marco Vinicio Fournier Facio. Costarricense. Psicólogo social y profesor catedrático retirado de la Universidad de Costa Rica. Actualmente ejerce como presidente de Investigaciones Psicosociales S. A.
Correo: marco.fournier@gmail.com.

Cathalina García Santamaría. Costarricense. Estadística de la Universidad de Costa Rica. Máster en Estadística de la Universidad de Iowa. Investigadora en FLACSO Costa Rica. Ha participado en equipos de evaluación de políticas públicas en diversos temas como migraciones, género, violencia, cuidados, educación. Investigadora del Estado de la Nación.
Correo: cgarcia@flacso.ac.cr.

Juan Manuel Muñoz Portillo. Costarricense. Politólogo. Doctor en Política y Relaciones Internacionales por Dublin City University. Fue investigador posdoctoral en la Escuela de Leyes y Gobierno de Dublin City University y en el Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ambos de la Universidad de Costa Rica.
Correo: juanmanuelmp@gmail.com.

Carolina Ovares Sánchez. Costarricense. Politóloga y socióloga por la Universidad de Costa Rica. Magíster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, y candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.
Correo: carolinaovares@gmail.com.

Adrián Pignataro López. Costarricense. Doctor en Ciencia Política por la Scuola Superiore Sant'Anna y la Universidad de Siena, Italia. Es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Estadística, en la Universidad de Costa Rica.
Correo: adrian.pignataro@ucr.ac.cr.

Suráyabi Ramírez Varas. Costarricense. Candidato a doctor en Política Social de London School of Economics (LSE). Magister en Administración Pública de LSE y licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha trabajado como investigador en FLACSO Costa Rica, así como en el Observatorio del Desarrollo y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR. Ha sido profesor de la Escuela de Administración Pública en la UCR y de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Áreas de estudio: política social, desarrollo económico, y evaluación de políticas públicas.
Correo: s.a.ramirez-varas@lse.ac.uk.

Ilka Treminio Sánchez. Costarricense. Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca. Profesora catedrática y coordinadora de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica. Directora de FLACSO sede Costa Rica (2016-2024). Áreas de estudio: comportamiento político y política comparada de Centroamérica.
Correo: ilka.treminio@ucr.ac.cr.

Larissa Tristán Jiménez. Costarricense. Doctora en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica (UCR). Profesora asociada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), ambos de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado artículos sobre desinformación, comunicación política, discursos de odio y de la discriminación.
Correo: laratristan@gmail.com.

A pesar de la resiliencia de la legitimidad democrática en Costa Rica, actualmente se observan desgastes que amenazan su sostenibilidad, por ello se requieren respuestas institucionales que procuren el bienestar de la sociedad con equidad, justicia y prontitud, que son fundamentales para cualquier democracia.

Con el objetivo de comprender los factores de la cultura política costarricense que inciden en ese desgaste, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones decidimos indagar, desde los espacios educativos y de socialización política, cómo vive la ciudadanía los valores y principios democráticos, la participación política, el ejercicio de sus derechos y el conocimiento de la institucionalidad pública. Para ello se diseñó un proyecto de investigación que se ejecutó durante 2023, y cuyos resultados se presentan en esta publicación.

Esta obra identifica, a partir de los hallazgos de la investigación, las opiniones, creencias y valores que tienen las personas costarricenses sobre el funcionamiento de la democracia. Con la participación de autorías de diversas disciplinas, como ciencia política, sociología, estadística, economía y comunicación, se ofrece un análisis oportuno sobre las raíces del malestar ciudadano y la cultura política contemporánea en Costa Rica.

